

T
460

2748

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

**UNIDAD XOCHIMILCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES**



MOVIMIENTO SOCIAL, PODER Y POLÍTICA NEOLIBERAL EN LA FRAILESCA, CHIAPAS

ÁLVARO MARTÍNEZ QUEZADA

TESIS

**Para optar por el grado
de Doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Desarrollo Rural**

TUTOR DE TESIS: DR. CARLOS CORTÉS RUIZ

México, Distrito Federal

Abril de 2005

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a mis padres, Lorenzo Martínez[†] y Celia Quezada, por darme la vida.

También a mis hermanos (as) y sus familias, a quienes agradezco su respaldo moral para salir adelante ante los retos que la vida nos pone enfrente.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo sin duda es el resultado de la participación directa o indirecta de muchas personas. Quiero agradecer a todos los que de una u otra forma contribuyeron en su realización, en particular a los campesinos de la región Frailesca y sus organizaciones, quienes durante la fase de trabajo de campo, amablemente me dedicaron parte de su valioso tiempo abriéndome las puertas de sus asambleas, casas u oficinas. Especialmente agradezco a Nabor Estrada y César Chávez dirigentes de la Unión de productores de maíz (Upromaiz), a Berlán Nigenda y Alfredo Corzo de la Coalición de Organizaciones Productivas del estado de Chiapas (Copdech), a Héctor Narcia y Eneas Brindis de la organización Productores Asociados de Chiapas, así como a Amaury Sesma de la organización Campesinos Unidos a la Producción (Cuprocen) por proporcionarme, todos ellos, valiosa información de sus respectivos procesos organizativos. Va también mi gratitud para los señores ejidatarios Ariosto Molina, Milton Fernández y Francisco Nucamendi del ejido Jesús M. Garza, Gustavo Pereyra y Adolfo Velásquez del ejido Francisco Villa y a Manuel Nandayapa, Adelín Vázquez y Adolfo García del ejido San Pedro Buenavista, por permitirme estar en sus asambleas y proporcionarme de manera desinteresada información sobre la situación de sus ejidos.

Mi reconocimiento es también para mis compañeros del doctorado (estudiantes y profesores) quienes con sus orientaciones y opiniones diversas, contribuyeron a moldear este trabajo. En particular mi reconocimiento al doctor Carlos Cortes Ruiz asesor de la tesis quien siempre mantuvo la disposición de orientarme en mis dudas, así como para los doctores Arturo León, Beatriz Caníbal, Guillermo Almeyra y Roberto Diego cuyos comentarios y sugerencias sin duda me permitieron mejorar el documento. De igual forma agradezco los comentarios de profesores e investigadores de diferentes instituciones académicas de Chiapas, que al participar en el Seminario Interno de Investigación de la Maestría en Desarrollo Rural Regional de la Universidad Autónoma Chapingo pudieron conocer la orientación y avances de la tesis y hacer sugerencias a la misma.

Agradezco también a las instituciones que me apoyaron para realizar mis estudios de doctorado, en particular a la Universidad Autónoma Metropolitana, institución que me abrió sus puertas para que pudiera continuar mi formación académica, al Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnología por la beca que se me otorgó para realizar mis estudios, como también a la Universidad Autónoma Chapingo por dispensarme el tiempo necesario para esta tarea.

La lista no estaría completa si no expresara también mi reconocimiento al personal del archivo de la Reforma Agraria en la Ciudad de México, al del archivo histórico de Chiapas, así como al del Congreso del Estado en Tuxtla Gutiérrez, sin cuya esmerada atención no me hubiera sido posible acceder a la valiosa información histórica de que disponen sobre la zona de estudio. Agradezco también el apoyo del Centro de Información y Análisis de Chiapas (CIACH), en particular a Adolfo Ocampo Guzmán por proporcionarme diversos materiales sobre la situación económica y social reciente de las diferentes regiones en la entidad.

Finalmente mi gratitud también para Tere Olvera, esposa y compañera sin cuyo apoyo y respaldo incondicional no hubiera podido emprender el reto de mi formación doctoral, quien además tiene el mérito de haber leído y corregido el borrador de esta tesis en mas de una ocasión. Mi reconocimiento es también para mis hijos, Jacinto y Ariadna, quienes en diferentes momentos tuvieron que soportar mis ausencias y desatenciones. Agradezco también a Luis Zuñiga, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales por su invaluable apoyo en la elaboración de los mapas, así como de José Cano por su apoyo en el diseño de figuras y el formato final de la tesis.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	3
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	9
ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS	12
I. POLÍTICA NEOLIBERAL Y RECONFIGURACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL EN EL MEDIO RURAL	23
1.1. POLÍTICA NEOLIBERAL Y REDEFINICIÓN DE LA RELACIÓN ESTADO–SOCIEDAD	24
1.1.1. <i>Origen y fundamentos de la política neoliberal</i>	26
1.1.2. <i>El nuevo rol del Estado</i>	29
1.2. ENFOQUES ACTUALES EN EL ESTUDIO DE LA ACCIÓN COLECTIVA	34
1.2.1. <i>Los actores y el sistema acción social</i>	36
1.2.2. <i>Los movimientos sociales y la cultura</i>	38
1.2.3. <i>El enfoque de los movimientos populares</i>	41
1.3. LA REFORMA RURAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL	45
1.3.1. <i>De los programas de ajuste a las reformas estructurales</i>	46
1.3.2. <i>La reforma rural en la perspectiva neoliberal</i>	50
1.3.3. <i>El fin de la alianza Estado–campesinos</i>	53
1.3.4. <i>Las organizaciones campesinas frente a la crisis</i>	57
II. MODERNIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN TERRITORIAL: LOS SALDOS DEL MODELO CORPORATIVO ESTATISTA.....	61
2.1. DE LA FINCA SEÑORIAL A LA CONSTITUCIÓN DE LOS EJIDOS	62
2.1.1. <i>Algunas claves de la configuración regional</i>	63
2.1.2. <i>La demanda agraria y el origen del corporativismo</i>	66
2.1.3. <i>Recomposición de la estructura de poder territorial</i>	73
2.1.4. <i>La “tecnificación” de la agricultura campesina</i>	77
2.2. MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA E INTERVENCIONISMO ESTATAL	81
2.2.1. <i>La “revolución verde” como estilo de desarrollo</i>	82
2.2.2. <i>La ganadería y el surgimiento de Nestlé</i>	85
2.2.3. <i>Antidemocracia y control político</i>	89
2.2.4. <i>Nueva fase de la disputa agraria</i>	93
2.2.5. <i>El granero de Chiapas</i>	98
2.2.6. <i>La construcción de un liderazgo</i>	104
III. AJUSTE ESTRUCTURAL, MOVIMIENTO SOCIAL Y CONFLICTO: ¿FIN DEL CORPORATIVISMO?	111
3.1. UN GOBERNADOR MILITAR PARA UNA SOCIEDAD EN TRANSICIÓN	112
3.1.1. <i>El conflicto por la sucesión</i>	113
3.1.2. <i>La Frailesca y las políticas de ajuste</i>	115

3.1.3. <i>El movimiento maicero de 1985: ¿Manipulación o demanda legítima?</i>	117
3.1.4. <i>La disputa por la representación campesina</i>	125
3.1.5. <i>La CNC frente a las demandas agrarias</i>	128
3.1.6 <i>La política de compra de tierras.</i>	134
3.1.7. <i>Fragmentación y conflicto: ¿Fin de las lealtades políticas?</i>	136
3.2. MANO DURA Y MODERNIZACIÓN: LAS DOS CARAS DE LA ERA “PATROCINISTA” ...	140
3.2.1. <i>Un agrarismo concertador</i>	141
3.2.2. <i>Reestructuración institucional y abandono</i>	143
3.2.3. <i>La batalla por las carteras vencidas</i>	146
3.2.4. <i>En lo político: autoritarismo y subordinación</i>	149
3.2.5. <i>La perspectiva anticampesina del proyecto modernizador</i>	153
IV. MOVIMIENTO SOCIAL Y ACTORES POLÍTICOS EN LA COYUNTURA ZAPATISTA	160
4.1. LOS ACTORES SOCIALES Y SU LUCHA POR LA INCLUSIÓN	161
4.1.1. <i>El movimiento civil municipalista</i>	165
4.1.2. <i>La demanda agraria y el viejo sistema de relaciones</i>	171
4.1.3. <i>Nueva fase del movimiento maicero</i>	177
4.1.4. <i>Un balance de las movilizaciones</i>	182
4.2. LAS VIEJAS PRÁCTICAS POLÍTICAS Y LA RECOMPOSICIÓN DE LOS ACTORES	187
4.2.1. <i>El germanismo frente al conflicto chiapaneco</i>	189
4.2.2. <i>Nuevo mapa de las organizaciones sociales y productivas</i>	193
4.2.3. <i>Organizaciones campesinas y alianzas</i>	197
V. PROYECTO EMPRESARIAL Y CONTENCIÓN SOCIAL: LAS PRIORIDADES DE LA POLÍTICA ESTATAL	202
5.1.1. <i>La desarticulación de los ejidos y el Procede</i>	204
5.1.2. <i>La centralidad de la empresa trasnacional</i>	207
5.1.3. <i>Los nuevos agentes del cambio técnico</i>	210
5.1.4. <i>La flexibilidad como paradigma</i>	212
5.2. LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS FRENTE AL PROYECTO EMPRESARIAL	215
5.2.1. <i>Política estatal y fragmentación comunitaria</i>	216
5.2.2. <i>La lucha por el precio del maíz: ¿Un sinsentido?</i>	222
5.2.3. <i>Los campesinos como “empresarios”</i>	225
5.2.4. <i>El reto de construir un proyecto alternativo</i>	229
CONCLUSIONES	237
BIBLIOGRAFÍA	249
ÍNDICE DE CUADROS, MAPAS Y FIGURAS	262
GLOSARIO DE TÉRMINOS	263

INTRODUCCIÓN

A lo largo del siglo XX la región de la Frailesca sirvió de escenario para que diferentes actores sociales protagonizaran diversas formas de acción colectiva que mostraban la existencia de una región en constante ebullición social. Al temprano despertar social en las luchas agrarias de los años veinte y treinta bajo la influencia de ideologías libertarias de la época, le antecedió el movimiento político armado que se gestó en la región encabezado por dueños de fincas y haciendas en contra de las medidas revolucionarias que los enviados del gobierno de Carranza pretendían imponer en Chiapas.

Los acontecimientos políticos y sociales de las primeras décadas del siglo pasado vinieron a trastocar parcialmente el orden social que se vivía hasta entonces en Chiapas. De hecho, los habitantes de la Frailesca fueron de los primeros que, al calor de la efervescencia agrarista de los años treinta, muy pronto plantearon y consiguieron que se iniciara el proceso de reparto agrario. Así, muchos de los peones que dos décadas atrás habían estado luchando como soldados de ‘la tropa mapache’, en los años posteriores radicalizaron sus posturas y visiones y se transformaron en demandantes de tierras o en líderes del movimiento agrario regional.¹

Como resultado de la lucha agraria local, emergió en la región un sistema de ejidos que se construyó sobre la base de muchas de las antiguas fincas propiedad de terratenientes. No obstante la consolidación de la vía ejidal como forma de propiedad social, la propiedad privada siguió siendo muy importante en la región. Así, la disputa desarrollada entre ambas formas de propiedad definió la tónica de muchos los conflictos sociales abiertos y soterrados que se sucedieron durante las últimas cinco décadas en la región.

Paralelamente, al final de la década de los cuarenta se inicia en la región un intenso proceso de transformación de los sistemas productivos locales -basados en el uso de tecnología tradicional-, mediante la incorporación paulatina de métodos de cultivo basados en las novedosas tecnologías que ya se difundían. Así, a partir de ese momento, las formas

¹ Al estudiar La Frailesca y sus procesos, resulta difícil no hacer referencia al “mapachismo”, movimiento político militar durante la revolución encabezado por los finqueros de la región, que se opuso a las iniciativas agraristas que impulsaría en Chiapas el grupo que se perfilaba como la facción triunfante.

de agricultura que practicaban los campesinos de la región participaron de las políticas modernizadoras que se impulsaban en las regiones más productivas del país.

Entre 1950 y 1982, es decir, por espacio de mas de treinta años, la región encajó perfectamente en el modelo económico de desarrollo que se implantó en el país, como una región productora de alimentos para el abasto nacional lo que cumplió con creces. Ello implicó, por supuesto, la anuencia y disposición de los campesinos frailescanos de participar en tal propósito, no obstante ello se dio en un marco de subordinación a los proyectos e iniciativas estatales. El mecanismo que garantizó la participación campesina fue su inserción en las organizaciones corporativas creadas por el Estado, para dar forma a lo que eufemísticamente, funcionarios y políticos del momento denominaron la “alianza de los campesinos con el Estado”. Con ello la región se configuró como una de las zonas maiceras más importantes del país, forjando con ello una identidad productiva en un momento en el que se abogaba por la soberanía alimentaria.

Esta condición productiva tuvo como eje, ciertamente, la acción desarrollada por el Estado que sobre la base de impulsar una política orientada a la producción de alimentos permitiera satisfacer la demanda de una creciente población urbana, se apoyó en el sistema de ejidos que tendió a consolidarse en las diferentes fases que conoció el reparto agrario, a los que se canalizaron importantes recursos técnicos y crediticios. De estas acciones también se benefició el sector de propietarios privados que en todo momento recibió el respaldo económico y financiero para la tecnificación de sus ranchos y estancias ganaderas, así como el respaldo jurídico que les garantizó la seguridad en la tenencia de sus propiedades.

Para mediados de la década de los setenta, a diferencia de la actividad productiva de otras regiones de Chiapas, La Frailesca semejaba en mucho a los emporios de desarrollo agrícola del norte del país, donde se logró concretar con amplitud el programa de “revolución verde” que impulsó el gobierno mexicano. Esta transformación, que tuvo entre sus principales protagonistas a los campesinos poseedores de tierras ejidales por un lado, y por otro, la acción desarrollada por el Estado y sus diversas instituciones de fomento, no hubiera sido posible sin el aparato corporativo que a lo largo de por lo menos cincuenta años, mantuvo una activa interlocución entre ambos. Esto se logró mediante la organización que en lo formal y lo real hegemonizó la representación de los campesinos: la CNC. La

importancia de esta organización fue fundamental pues fue utilizada por caciques para garantizar la hegemonía estatal y consolidar un poder personal como resultado del trabajo de mediación realizado por éstos.

Así, el peso que tenía el Estado mexicano y sus instituciones en la orientación política y productiva de la región y la preponderancia que seguían manteniendo los propietarios privados, herederos de la vieja clase finquera, quienes a menudo acaparaban los sistemas de gestión al controlar los espacios de poder y de intermediación local como las presidencias municipales, los comisariados ejidales, o la representación campesina, no impedía que se presentaran diversas formas de descontento y conflictos que sacaban a relucir las contradicciones sociales fundamentales en la zona, mismas que evidenciaban los elementos que, bajo esas condiciones, constituían las bases del poder local: la propiedad territorial y el control de los espacios de poder político. No es casual que a lo largo de los últimos cincuenta años, y aún en los más recientes conflictos, normalmente la estructura de poder local se cimbrara cuando, en el marco de una movilización social generalmente protagonizada por campesinos, se demandara acceso a la tierra y la participación en los espacios de poder representados por las presidencias municipales.

Podría aducirse entonces, que garantizar el éxito de la región en términos productivos, implicó la completa subordinación de los campesinos a las políticas estatales, es decir, la pérdida de capacidad del sujeto para decidir sus propias opciones y proyectos de futuro. Esta afirmación es en todo caso parcialmente verdadera, pues un rápido reconocimiento de la dinámica de la vida social en la región nos permite aseverar que –junto a ese proceso– en el periodo de referencia existía también en La Frailesca una importante efervescencia social y política que pugnaba por destrabar las formas de relación y poder propias de una estructura social que se creía superada con el reparto agrario, pero que mantenía y reproducía –de hecho– formas de dominación y opresión en las que los personajes o actores aparentemente seguían siendo los mismos de otras épocas.

La permanencia, por tanto, de caciques y líderes que basaron su poder sobre la base del control territorial, estuvo presente por mucho tiempo como una sombra en la política local. La lucha social de los campesinos por rehacer desde una perspectiva democrática las relaciones políticas imperantes, a lo largo de por lo menos tres décadas, fue una constante como lo mostraremos en este trabajo. Sin embargo, es hasta mediados de la década de

1970, con el impulso de un movimiento social agrario y político, que se lograron destrabar en parte, las sistemáticas imposiciones que por muchos años realizaron los grupos de poder tradicional, al menos en el municipio más importante de la región, Villaflores. Con ello emerge un nuevo grupo de poder ligado a las posturas oficialistas que en nuestro trabajo identificaremos como “germanismo” y que, manejando un lenguaje procampesino y antifinquero, logra generar un amplio consenso en los ejidos mediante la recuperación de las principales demandas campesinas, tanto en el ámbito agrario como en el productivo y el político.²

A principios de la década de 1980, la capacidad de convocatoria y el grado de consenso social de este grupo de poder era prácticamente total. Las escasas voces opositoras se mandaban acallar con los mismos métodos que antes habían utilizado los finqueros y caciques de “horca y cuchillo” y que se ejercían al amparo del poder estatal, pues a menudo los conflictos sociales o políticos se resolvían por la vía de la ejecución o eliminación física de los opositores. Ello habla de que, pese a la constante lucha de los campesinos y pobladores en contra de las formas de dominación tradicional caracterizadas por su verticalismo, los actores sociales y políticos desarrollaron una pobre experiencia en la construcción de formas democráticas de convivencia y gestión, imponiéndose una cultura política vertical y autoritaria como forma de resolver las contradicciones de la sociedad. El poder regional de los grupos de poder tradicional se mantuvo hasta bien entrada la década, pese a los conflictos y disputas que para este momento, algunos de sus representantes mantenían con el gobierno del Estado.

A mediados de los ochenta las condiciones bajo las cuales se operaba la reproducción económica y social en la región empiezan a cambiar. Se inicia en el país una serie de transformaciones en diferentes ordenes que inciden de manera directa o indirecta, no sólo en las formas de inserción de la zona en la economía estatal y nacional sino también en la trama de relaciones sociales y políticas bajo las cuales se daba esa participación, cambios que mostraban las limitaciones de un modelo de desarrollo y de un sistema político que ya no resultaba adecuado para el crecimiento económico ni para las exigencias sociales y políticas de una sociedad cada vez más madura.

² Por “germanismo” nos estamos refiriendo a la corriente política construida en torno a la figura del carismático líder local, Germán Jiménez, quien influyó con sus prácticas en la conducta de funcionarios gubernamentales, así como en dirigentes y grupos campesinos que en diferentes coyunturas lo apoyaron.

Ello quedaba claro a raíz del movimiento social desarrollado en la región de Valles Centrales³ allá por mayo de 1985, el cual planteaba como eje de movilización el aumento al precio de garantía del maíz, actividad productiva en la que se basan en gran medida los procesos económicos de la zona. Esta protesta no era más que la continuación de otras luchas producidas años atrás, en las que —en muchas de ellas—, habían participado los mismos actores, aunque en otros contextos y con demandas diferentes.⁴ El movimiento era encabezado por conocidas figuras del grupo político que desde ocho años antes emergiera en La Frailesca y que había consolidado su poder regional, combinando su capacidad de liderazgo y gestión y recreando sus relaciones políticas con funcionarios gubernamentales y líderes políticos ligados al oficialismo priísta.

A pesar de lo legítimo que pudieran ser las demandas planteadas, del amplio consenso de que gozaba el movimiento entre la base social participante, y de que éste fuera conducido en los marcos de una perspectiva de no ruptura con el sistema político, el resultado de esta justa protesta fue la derrota del movimiento y el encarcelamiento de sus principales líderes durante casi dos años. Aun cuando en los saldos de esta movilización tuvieron mucho que ver las contradicciones y conflictos de sus dirigentes con la élite gobernante local, el desenlace del movimiento en aquel entonces mostró claramente que las condiciones bajo las cuales operaría en adelante la relación Estado-campesinos, ya no serían las mismas a las que se habían acostumbrado durante los treinta o cuarenta años anteriores.

El cambio de política económica que las élites en el país anunciaban, era que el modelo económico impulsado y que había resultado funcional a La Frailesca, se había agotado después de 1984, con lo que se agotaba también la relación de interdependencia que los actores sociales y políticos frailescanos habían mantenido con el Estado. A partir de ese momento las formas bajo las cuales habría de operar la región en términos sociales, económicos y políticos no podrían ser las mismas, y en adelante desencadenarían un conjunto de desequilibrios en las relaciones sociales y políticas que los diferentes actores

³ La región de Valles Centrales refiere a la gran región fisiográfica de Chiapas, también conocida como Depresión Central, que abarca desde el Valle de Cintalapa hasta la zona de Chicomuselo, la cual incorpora a la zona de la Frailesca, el Valle de Pujilic, entre otras.

⁴ Algunas de estas movilizaciones se habían expresado, como lo abordaremos con amplitud en los capítulos posteriores, en el plano de la lucha social y política demandando la apertura de espacios políticos a los grupos sociales emergentes, urbanos y rurales.

sociales habían mantenido entre sí, y que en lo inmediato se manifestaba como una pugna entre grupos de poder, tanto al interior de la zona como en relación con quienes hegemonizaban el control del gobierno de Chiapas.

Al mismo tiempo que esto sucedía en el ámbito de las relaciones políticas locales, avanzaba la concreción del modelo económico por la vía de negar posibilidades a las formas de reproducción económica de los campesinos de la región, mediante el abaratamiento del precio del maíz y la conducción de sus actividades productivas a una situación endémica de crisis que se expresaba en la incapacidad de cubrir adeudos y financiamientos. Daba la impresión de que el modelo económico y las políticas hacia el sector rural de las que se hacía acompañar, eran una avalancha que caía encima a los campesinos que, hasta hacía muy poco, habían sido beneficiarios privilegiados de los diversos programas de fomento productivo. El desconcierto y la incertidumbre por la nueva situación, provocó que entre los diversos actores sociales y políticos se iniciara un cuestionamiento a las formas bajo las cuales se habían producido en la región los equilibrios políticos, así como su reposicionamiento, alimentado por el rechazo que se produjo al sistema político autoritario en el país en el marco del proceso electoral de 1988.

A partir de ese año empiezan a emerger, en el sistema de relaciones sociales, diversas expresiones políticas que buscan un lugar en un espacio político definido hasta ese momento por una práctica corporativa y unipartidista. La región empezaba a abrirse a la pluralidad –no sin fuertes reticencias de los grupos de poder tradicional–, lo cual mostraba un proceso de recomposición silenciosa de los consensos en la sociedad regional, muy a tono con lo que en esos años sucedía a escala nacional. La añeja demanda del movimiento popular, planteada a veces de manera no explícita, por buscar democratizar las relaciones locales, parecía que empezaba a convertirse en realidad, pues la sociedad local seguía mostrando la necesidad de acceder a otras formas de expresión social y política, mas allá del clásico caudillismo que hasta ese momento había imperado.

Los acontecimientos sociales y políticos de Chiapas de mediados de la década de 1990 vinieron a consolidar este proceso, generando nuevas formas de expresión del movimiento popular al tiempo que se replanteaban las viejas demandas. La irrupción del zapatismo y la efervescencia social que generó en prácticamente todo el estado durante buena parte de la segunda mitad de la década, actualizó la vieja demanda agraria hasta ese momento no

resuelta en la región, misma que fue retomada localmente por un abanico de organizaciones sociales y políticas. Es así como en un contexto de ebullición, surgen nuevas expresiones de lucha social, buscando nuevamente la democratización de los espacios de poder local en los ejidos y municipios, o actualizando también las añejas demandas de tierra o de un mejor precio para el maíz.

El auge mostrado por el movimiento popular frailescano en este periodo mostraba en parte continuidades pero también rupturas en relación con la visión de los actores y protagonistas de la anterior fase de movilización, así como por su relación con los procesos de organización campesina e indígena que se sucedían en ese mismo momento en las otras regiones de Chiapas. En el caso de La Frailesca, junto a la calma aparente que en ocasiones se percibía, emerge una abigarrada realidad en la que se manifiesta una multiplicidad de problemas y contradicciones, entre los cuales podemos destacar: el desdibujamiento de la tradicional relación de carácter corporativo, sostenida por años; el sistemático cuestionamiento a las formas tradicionales de ejercicio del poder regional configurada por cacicazgos de vieja y nueva naturaleza que se veían obligados a redefinir sus formas de mediación e inserción ante una sociedad civil cada vez más exigente; la transformación de la naturaleza legal de la figura del ejido frente a los sistemáticos señalamientos de constituir la base de la ineficiencia y la corrupción; la presencia cada vez mayor de agentes económicos de corte empresarial a la par de la retirada estratégica de las instituciones e instrumentos que durante varias décadas permitieron la apabullante presencia del Estado en los procesos económicos.

Así, las diferentes formas de organización adoptadas por la sociedad rural frailescana, mostraban la existencia de un entramado social atravesado por múltiples contradicciones, pugnas e intereses entre los actores y protagonistas que las impulsaban y les daban vida. Junto a las formas corporativas de gestión, el surgimiento de formas autogestivas de organización entre los campesinos se desarrollaba como un proceso lento y contradictorio, atendiendo a las exigencias de un movimiento popular que pugnaba por la democratización de las relaciones sociales, al mismo tiempo que atendía las exigencias de buscar insertarse en las estrategias de orden económico que impulsaban los agentes involucrados en la concreción del modelo económico neoliberal.

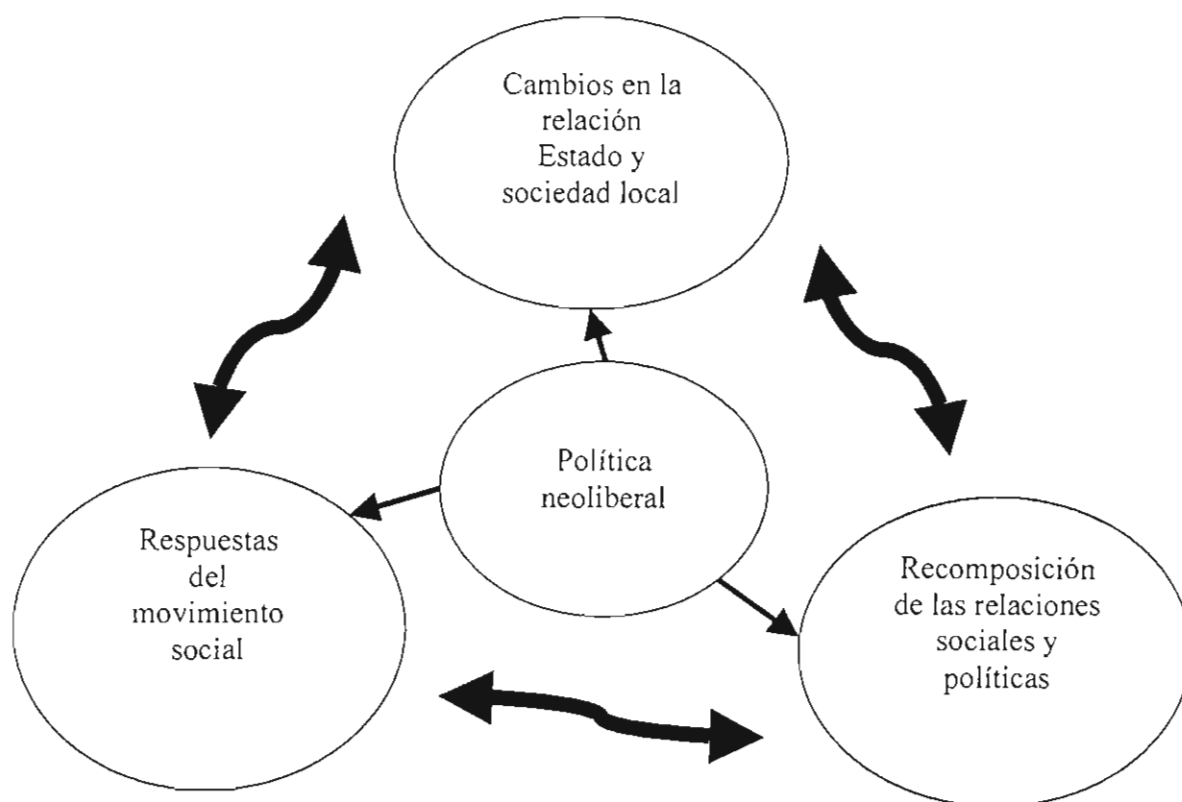
El problema de investigación

Uno de los propósitos que orientan este trabajo es la reflexión de los procesos y condiciones bajo las cuales se produjeron, en la década de 1990, diferentes formas de acción colectiva considerando no solamente las implicaciones del cambio de modelo económico que se imponía en el país y que significaba adoptar una nueva dinámica de la relación Estado–campesinos que se había construido por años, lo que a su vez incidía en el proceso de construcción histórica de la sociedad regional, atravesado por las contradicciones y conflictos en el entramado de las relaciones sociales preexistentes.⁵ Estas contradicciones eran definidas por las modalidades de apropiación de los recursos, particularmente del acceso a la tierra y por las disputas que se generaban entre diversos grupos por el acceso al poder, configurando así en razón de cada coyuntura y momento, correlaciones de fuerza e identidades sociales diferenciada entre los actores en conflicto.

El reconocimiento y reflexión acerca de las características del proceso de transformación regional que en los últimos veinte años se viene operando en La Frailesca la abordamos desde tres dimensiones diferentes, no obstante que estas refieren a una misma realidad regional: en primer lugar, la señalada por las implicaciones de la puesta en marcha de un modelo de desarrollo para la región definido por el interés de buscar eficientar los procesos productivos en los que ésta participa y en el que se ha fortalecido la presencia de actores definidos por la empresa privada; en segundo, la establecida por la dinámica de un movimiento social en la región que, en el contexto de las transformaciones económicas y políticas en el país, se ha posicionado y demandado el cambio y democratización de las relaciones sociales y políticas en la zona hasta ahora hegemonizadas por las élites regionales de poder y, en tercero, la definida por la dinámica de confrontación y conflicto reconocida por la participación de los actores sociales que sistemáticamente han cuestionado la estructura del poder político regional, así como las formas de ejercicio de ese poder. De este modo, en el trabajo interesa seguirle el paso a las formas de acción que, en el marco de las transformaciones y políticas nacionales, definen las modalidades de cambio de las estructuras y de las relaciones sociales y políticas en la región de acuerdo con las vertientes analíticas expresadas en la Figura 1.

⁵ Por “sistema de relaciones sociales” estamos entendiendo, a la manera de Alberto Melucci, 1999, p. 45, las fronteras que constriñen la acción colectiva y las decisiones adoptadas por un grupo u organización, sin que

Figura 1 Vertientes analíticas



Algunas de las principales preguntas de investigación que orientaron este trabajo, fueron las siguientes: ¿Cuál es el carácter y sentido de la estrategia económico productiva que se impulsa para la región y por tanto, cuáles son las características de la nueva relación que establecen los actores sociales con el Estado a la luz del nuevo modelo de desarrollo? ¿Qué importancia tuvieron las diferentes expresiones del movimiento campesino regional y los esfuerzos sociales por la democratización de las relaciones políticas en los últimos veinte años, en la recomposición de la relación corporativa en la región? y finalmente, ¿Cómo se han transformado las formas de ejercicio del poder en la región asumiendo la exigencia de democratización protagonizada por diversos actores políticos locales y la mayor preponderancia que tiende a adquirir la participación individual en los espacios de

decisión frente a las formas corporativas de gestión que definieron a las organizaciones sociales?.

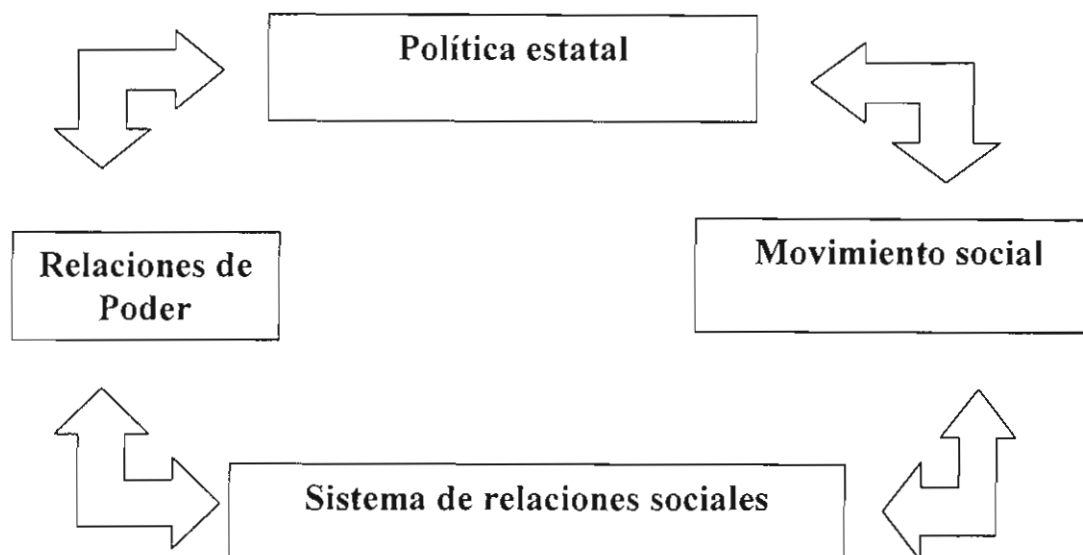
Elementos teórico-metodológicos

Para responder estas interrogantes, propusimos utilizar las dimensiones definidas por los conceptos de política estatal, poder, movimiento social y sistema de relaciones sociales regionales (Figura 2). Con el término de política estatal recuperamos el planteamiento de que muchas de las transformaciones que se han operado en la región tienen como base el cambio de modelo económico en el país a mediados de la década de 1980, y aunque éste no es precisamente un concepto, el término nos permite hacer referencia a los cambios legales e institucionales que en el plano del ejercicio de gobierno se han operado en los últimos veinte años. Asimismo nos ayuda a reconocer las orientaciones que en el sistema político fueron redefiniendo una nueva relación del Estado con la sociedad tendiente a superar la condición de Estado benefactor que distinguió al *leviatán* mexicano durante un importante periodo. El concepto nos pareció lo suficientemente ilustrativo para mostrar las adecuaciones que en el marco de una nueva propuesta de desarrollo, definieron las élites políticas en el país en un momento en que, dadas las características que adquiría la economía mundial, se hizo imposible mantener los elementos sobre los que se había sostenido y desarrollado la dinámica económica en el país, con lo que se impuso una reorientación del modelo adoptándose un conjunto de medidas de política económica de corte neoliberal.

Con el concepto de movimiento social intentamos recuperar las formas de acción colectiva que desde la región y muy a tono con las expresiones del movimiento democrático y popular que se dieron en el país, antes, durante y después de la puesta en práctica de este modelo económico, cuestionaban no solamente el carácter de las relaciones sociales autoritarias basadas en una estructura territorial que favorecía a propietarios y exfinqueros quienes durante muchos años mantuvieron el privilegio de las políticas estatales aplicadas, sobre todo en el plano agrario, sino que a menudo cuestionaron también las formas de control autoritario que el Estado ejercía en el plano local mediante líderes políticos que participaban del sistema de intermediación, hegemonizando la dirección de las

organizaciones campesinas, los que a menudo provenían de o estaban de acuerdo con los propietarios.

Figura 2. Dimensiones conceptuales



Las diversas expresiones del movimiento social en la región conllevaron a menudo el cuestionamiento del sistema de relaciones sociales autoritario, mediante el impulso de concepciones como la reivindicación del derecho a la tierra, la exigencia de democracia, la reivindicación de la ciudadanía de hombres y mujeres, lo que cuestionaba las formas de poder y las prácticas culturales sobre las que se asentaba y las posibilidades de construcción de una política cultural alternativa.⁶

Una breve identificación de los elementos básicos que define y expresa el concepto de movimiento social, tomando en cuenta lo complicado de establecer una definición por el carácter escurridizo y elusivo del término, es la siguiente. A partir de lo que no es, para Touraine por ejemplo, un movimiento social solamente puede ser tal si “pone en cuestión una forma de dominación social e invoca contra ella valores, orientaciones generales que comparte con su adversario para privarlo de tal modo de legitimidad”, razón por la cual

⁶ Respecto de la relación entre política y cultura ver Arturo Escobar, *et al*, 2001, p.10

señala que “un movimiento social es mucho mas que un grupo de interés o un instrumento de presión política”. Melucci por su parte cuestiona la tendencia de los analistas a reconocer los movimientos sociales como personajes, es decir como sujetos homogéneos que se mueven hacia metas determinadas y establece la necesidad de reconocerlos como “el resultado de complejos procesos que favorecen o impiden la formación y el mantenimiento de vínculos de solidaridad, cultura compartida y organización, todos los cuales hacen posible la acción”.⁷

También por lo que no es, Foweraker, señala que un movimiento social no puede ser identificado como un grupo determinado sino como un proceso “en el que se produce una deliberación colectiva que promueve cambios en alguna dirección y con algún significado” sin excluir la violencia, la ilegalidad o su adscripción a utopías comunitaristas. Desde otra perspectiva, sostiene que los movimientos sociales “se sustentan por la interacción que se establece entre niveles de autoridad específicos y los portavoces de acciones quienes plantean retos diversos a aquellas autoridades”. Este autor, sin embargo, insiste en que los movimientos siempre surgen en un contexto de lucha política que da lugar a la construcción de una identidad, la cual busca modificar unas relaciones de poder que no se limitan a las establecidas por el Estado, aunque este puede participar de ellas.⁸

Una visión más comprensiva del concepto la propone Dianni para quien los movimientos son definidos como “redes de interacción informal que comparten creencias y solidaridad, y desarrollan formas conflictuales de acción que se sitúan fuera de la esfera institucional y los procedimientos rutinarios de la vida social”.⁹ Por tanto, rescatamos los señalamientos que reconocen en un movimiento social la confrontación que mantienen individuos o colectividades con las expresiones de autoridad y eventualmente de legalidad a diferentes niveles, lo cual implica la construcción de afinidades y solidaridades que devienen en el reconocimiento de una identidad colectiva, para impulsar cambios en una determinada dirección.

Una dimensión vinculada a los movimientos sociales como forma de acción es la construcción de identidades colectivas en razón de las expectativas que se construyen ya

⁷ Para reconocer con mayor amplitud la conceptualización de estos autores, *cfr.* Alain Touraine, 1997, y Alberto Melucci, 1991, p. 198.

⁸ Ver al respecto Joe Foweraker, 1995, p. 23

⁹ Al respecto de la definición de Dianni, ver Enrique Laraña, 1999, p. 69.

que la participación en los movimientos implica también la necesidad de definirse a sí mismos de manera interactiva y compartida. De acuerdo con Melucci, la propensión del individuo a implicarse en la acción está ligada a la capacidad diferencial para definir una identidad colectiva, la que define como el proceso mediante el cual los actores producen estructuras cognoscitivas comunes en las que se valora el *ambiente* y se calculan costos y beneficios de la acción, sin que ello implique reducirla a la racionalidad instrumental toda vez que generalmente la participación en la acción está dotada de significado.¹⁰ Esto es así además porque un contexto de cambios como el que señala el establecimiento de una nueva relación Estado sociedad, implica la redefinición de las pautas bajo las cuales se configuraban los relaciones y los acuerdos.

La esencia de los movimientos sociales es entonces el impulso de formas de socialidad alternativa a las formas que son impulsadas desde el poder mediante el impulso de una política cultural. De acuerdo con lo expresado por Escobar, cuando los movimientos despliegan conceptos alternativos como democracia, ciudadanía, mujer, naturaleza, raza ó economía, se pone en marcha una política cultural que desestabiliza los significados culturales dominantes, política cultural que a menudo resulta difícil discernir, pero que normalmente sus efectos tienen que ver con la(s) cultura(s) política(s) que define los espacios sociales concretos.¹¹

Para comprender adecuadamente las formas en que se desarrolla la producción cultural del espacio social y el papel de la cultura en el proceso de la reproducción social, es importante señalar que junto al reconocimiento del repertorio cultural que define a la región -en términos de las visiones y prácticas de los grupos sociales-, existe una integración jerárquica de éstas, que se produce mediante una relación o situación de poder. Estas visiones y valoraciones definidas o matizadas por la posición social o de clase de quienes las expresan, constituyen de hecho un patrón espacial de las relaciones de poder y de la producción cultural que define a esa sociedad regional.

La existencia de un sistema económico o político es entonces la base mediante la cual se expresará una cultura regional que se reproduce y define por las formas de transmisión de un conjunto de signos, los cuales son reflejo de las relaciones de poder que se expresan en

¹⁰ Lo central del concepto de identidad que propone Alberto Melucci, 1999, p. 67, es que este es construido por el actor colectivo mediante la interacción, la negociación y las relaciones con el ambiente.

¹¹ Respecto de este planteamiento véase Arturo Escobar, et al, 2001.

los diversos espacios sociales. Así, la cultura regional funciona bajo una lógica propia, en la que existe una diversidad de símbolos que son compartidos por los grupos sociales y que se reconocen al interrelacionarse individuos o grupos mediante procesos de comunicación e interacción, en diversos espacios que se reproducen en términos de las relaciones de poder, lo que lleva a estructurar una situación de hegemonía por parte de los grupos de poder.

Muy ligado al concepto de movimiento social, el concepto de poder nos permite identificar la dinámica de confrontación que se establece entre los actores sociales, los motivos de las disputas normalmente asociadas a la posibilidad de acceso a los recursos o a los espacios de decisión que tienen que ver con el control de éstos. Las confrontaciones por el acceso a los recursos y su control muestran la conformación de fuerzas sociales y las correlaciones de fuerza entre los actores. Aunque generalmente buscan dirimirse en el plano político, en ocasiones su solución ha implicado formas autoritarias que devienen en la eliminación física de los adversarios.

Según Foucault, una relación de poder es aquella que se establece entre dos grupos, uno de los cuales adquiere una posición subordinada, la cual se mantiene durante el tiempo que dure esa relación. El otro grupo adquiere por tanto el carácter de dominante en esa relación.¹² Siguiendo a este autor, para que esa relación se sostenga, es necesario que el grupo subordinado acepte como tal esa condición de subordinación lo que es posible que sea no solamente mediante mecanismos de coerción, sino también los de orden cultural y social (relaciones de compadrazgo, reconocimiento del status, entre otros).

Me parece importante realizar algunas precisiones en relación con las formas que adopta la configuración del poder en los espacios rurales, a la luz de las transformaciones que se vienen operando en la actualidad, y el rol que en torno a las configuraciones del poder adoptan los movimientos sociales. Ante todo, entendemos el poder como una relación social que se constituye históricamente en formaciones sociales específicas, lo cual implica reconocer la relación que se establece entre elite y masa sin que ello una contraposición esquemática entre una y otra pues a su interior no existe una concepción monolítica y unitaria.

Una relación social no es otra cosa más que el contacto que se establece entre dos o más personas con determinados objetivos. Considero que estas relaciones se establecen con al

¹² Respecto a la perspectiva de este autor, *cfr* Michael Foucault, 1985.

menos tres tipos de objetivos y que dan lugar a tres tipos de relaciones. Las relaciones económicas (para fines de intercambio, que no siempre es equitativo), las relaciones políticas (para fines de crear, disputar o utilizar espacios de poder) y relaciones culturales (de creación, recreación ó dominación).

Bajo esta concepción relacional, el poder está presente en todas los espacios y relaciones cotidianas de las personas. Al respecto resulta sugerente recuperar los señalamientos de Wolf, en el sentido de que “todas las configuraciones sociales, incluyendo las de la comunicación implican relaciones de poder”, lo que ocurre también con las ideas, así como con los proyectos sociales y políticos que a menudo muestran la competencia por el poder en las relaciones sociales.¹³

La cuestión del poder no es solamente el resultado de una relación mecánica entre gobernantes y gobernados, entre élite y masa, o del “carisma” personal de líderes o dirigentes, al margen del contexto social que los hace posible. La noción de élite que aquí desarrollamos corresponde a la clásica que se refiere “a aquella minoría que posee en una medida mucho más elevada que el resto de la población una o más características valoradas socialmente.”¹⁴ Así, resulta necesario analizar la cuestión del poder y por tanto de las élites de poder, como resultado de una sociedad con historia en la que, como producto de las definiciones y retos que ésta se plantea, deviene en una especie de “voluntad colectiva”.

Las formas que adopta una relación de poder no son de una vez y para siempre. Su expresión tiene que ver con periodos históricos más o menos largos o cortos dependiendo del contexto y el lugar a que refiera. Una relación de poder se puede reconocer en cualquier espacio social pero éstas cambian cuando se transforman las condiciones que la hacen posible. Un grupo que en un contexto tenía una posición de dominio, en otra circunstancia y con otros actores en juego, puede adquirir una situación de subordinada poniendo en cuestión la posibilidad de su existencia y obligándolo a cambiar. Según Melucci, el poder que se ejerce en un sistema complejo, es un poder que se ejerce en los códigos y en el lenguaje que organiza el sistema. Por ello para este autor, la eficacia de la acción consiste en el cuestionamiento del código en su naturaleza de instrumento de manipulación.¹⁵

¹³ Estas precisiones sobre el poder se recogen de la Introducción del libro de Eric R. Wolf, 2004.

¹⁴ Esta definición es de Norbert Elías, citado por Salvador Giner *et. al.*, 1998. Para una mayor comprensión sobre la relación entre los conceptos de élites y poder ver, Piñón, 1987, p. 223-239.

¹⁵ Ver al respecto Alberto Melucci, 1999, p. 89-90.

Resulta por tanto necesario reconocer las formas que adopta la construcción del poder en la actualidad, en un contexto en el que el Estado deja de jugar un papel central y se da pie a un nuevo empuje de desarrollo del capitalismo, ahora tomando como base el impulso de un programa abiertamente empresarial en los espacios rurales. Consideramos que el problema del poder se ha complejizado en la medida en que hoy la sociedad rural, además de poseer un mayor nivel de instrucción, se encuentra fuertemente articulada a la dinámica de una sociedad predominantemente urbana. El factor ideológico, por su parte, ahora ya no se limita a la influencia que ejerce la Iglesia bajo diferentes denominaciones, sino que ahora habría que agregar la enorme influencia que tienen los medios de comunicación, quienes difunden bajo un conjunto de códigos generalmente imprecisos una perspectiva del poder que a menudo traspasa las fronteras nacionales.

Tanto el concepto de movimiento social como el de poder los consideramos subsidiarios del sistema de relaciones sociales regionales, el cual nos permite ubicar las particularidades de la relación entre los diversos actores, clases y grupos sociales en la región, la dinámica de confrontación entre éstos, los procesos económicos de los que participan, las relaciones políticas y de alianzas, los grupos de poder y las formas de ejercerlo, los espacios de convivencia, la forma de establecer acuerdos y de resolver los conflictos. Por tanto al referirnos al sistema de relaciones sociales, estamos estableciendo de manera genérica las modalidades bajo las cuales los actores han venido construyendo sus relaciones cotidianas en el plano económico y también en el político.

Como parte de la forma de construcción de las relaciones sociales identificamos las prácticas corporativas que los diversos actores sociales regionales mantuvieron durante años con el Estado mexicano. Estas prácticas, al recrearse cotidianamente alimentaron una cultura política regional basada en el clientelismo de la cual participaron durante años, los diversos actores sociales y políticos las que contribuyeron a mantener formas de relación social que impidieron el ejercicio de formas de participación más democráticas. El corporativismo o las relaciones corporativas según Giner, alude a la integración de un cuerpo social supuestamente homogéneo en el que los intereses individuales deben ser supeditados al interés general en la formulación de políticas públicas.¹⁶ En los Estados autoritarios esta integración se hace por la vía de la imposición, lo cual denota las viejas

¹⁶ Salvador Giner, *et. al.* 1998. p.154.

prácticas corporativas. Habría que ver las formas que adopta en las llamadas economías de libre mercado o de capitalismo avanzado.

Para la discusión acerca de las relaciones corporativas, presente a lo largo del documento, nos apoyamos en las reflexiones que nos propone Schmitter quien considera el corporativismo como un sistema de representación de intereses y/o de actitudes, es decir como un particular arreglo institucional, en el que se vinculan y se ven representados los intereses organizados de la sociedad civil en relación con las estructuras decisionales del Estado. Lehmbruch por su parte analiza el corporativismo en su génesis y modalidades de presentación, quien muestra las circunstancias de su surgimiento en las sociedades industriales y establece que éste es una construcción tipológica que viene a designar un sistema económico opuesto al liberalismo de mercado, teniendo fuertes connotaciones de burocratización administrativa e intervencionismo estatal dentro de la economía.¹⁷ Para este autor, se viene configurando un “corporativismo liberal” o un neocorporativismo distinto del corporativismo tradicional, con el que reconoce un tipo especial de participación de grandes grupos sociales organizados en las políticas públicas, especialmente económicas y cuyo rasgo esencial es su alto grado de autonomía.

Como se verá en el documento, nuestra reflexión recoge la perspectiva de la historicidad, reconociendo la continuidad que existe entre los elementos que definen la conformación estructural de la región en el plano de las relaciones sociales, pero también en los momentos de ruptura observados en situaciones de tensión y cuestionamiento al sistema de relaciones desarrollado por los actores sociales, dimensiones que juegan en el proceso de la construcción regional. De igual forma se reconoce a la región como el espacio socioterritorial, donde se condensan un conjunto de procesos y situaciones que definen la dinámica de la reproducción social, la que a su vez define la acción social y los procesos de su construcción. Por eso, al mismo tiempo recuperamos la idea del movimiento en su dinámica de constitución, asumimos que el conflicto y las formas de expresión de la acción colectiva tienen una base territorial, aplicándola en este caso a la llamada región de La Frailesca.

Con base en este orden de ideas presentamos en este documento los elementos considerados en nuestra indagación y discusión, de acuerdo con el siguiente orden lógico:

En el primer capítulo presentamos un acercamiento a las razones y características del modelo económico neoliberal que desde mediados de los ochenta adopta el país y se impone como vía a seguir en todos los sectores de actividad y regiones, destacando cómo este modelo no solamente refiere a aspectos de política económica sino que también tiene que ver con una visión de Estado muy diferente, que viene a replantear las formas de relación que éste había tenido con la sociedad y de cómo esto incide en la dinámica de las relaciones sociales y políticas en el plano local. En este mismo capítulo se analiza la forma en que esta política tendió a aplicarse en el medio rural mexicano, las implicaciones que conllevó el replanteamiento de la relación Estado–campesinos, y las respuestas sociales que, en términos de acción colectiva, se generaron en los últimos años para enfrentar las nuevas condiciones de reproducción campesina en el país.

En el segundo capítulo analizamos las principales características que en la región adoptó el modelo de desarrollo de carácter estatista que se impulsó en el país a partir de la década de 1940, el cual tuvo como base el paquete tecnológico de “revolución verde” que llevó no solamente a la transformación de los sistemas productivos basados en tecnologías tradicionales, sino que también trajo como consecuencia la consolidación de La Frailesca como una región orientada a la producción de maíz y de ganado. En este capítulo también reflexionamos acerca de las condiciones que hicieron posible la exitosa puesta en práctica de este modelo, entre las cuales señalamos la experiencia de reparto agrario en la región que llevó al temprano surgimiento de un sistema de ejidos a partir del cual se hizo posible la consolidación de una estructura de organización social corporativa que, al mismo tiempo que dosificaba y mantenía viva la posibilidad de resolver favorablemente la demanda agraria, mantenía una estrecha coordinación con el aparato institucional para canalizar los recursos, garantizándose así el control político y el éxito de las políticas de fomento productivo.

En el tercer capítulo reflexionamos en torno a las condiciones y modalidades bajo las cuales avanzó en imponerse, en su primera etapa, la aplicación del programa neoliberal en la región, así como las condiciones sociopolíticas imperantes que hicieron posible su aplicación y las reacciones y respuestas de los actores sociales en términos de movilización social. En este capítulo se hace hincapié en que la aplicación de las políticas de ajuste en La

¹⁷ Al respecto del concepto de corporativismo y sus usos y connotaciones actuales ver, Gerhard Lehmbruch,

Frailesca fue el inicio de un proceso de recomposición de la dinámica corporativa que había caracterizado la relación Estado–campesinos en la región al ponerse en entredicho la lealtad de algunos de los actores políticos al régimen político en el estado, lo que llevó a un proceso de redefinición de las relaciones políticas al interior de la región, iniciándose una dinámica de confrontación y fragmentación de las lealtades por parte de los grupos campesinos que hasta ese momento habían sido leales al sistema. Se señala también que la aplicación de la política neoliberal en esta etapa, caracterizada por el proceso de desregulación estatal sirvió de base para delinear las características del modelo de desarrollo que se habría de impulsar en los años posteriores.

En el cuarto capítulo analizamos las expresiones del movimiento social que los campesinos desarrollaron en la región en el marco de la coyuntura que se abrió con el alzamiento indígena que se produjo en la entidad en 1994. Aquí reflexionamos acerca de la forma en que esta coyuntura permitió actualizar muchas de las viejas demandas que de tiempo atrás venía planteando la sociedad regional, buscando destrabar el sistema de relaciones sociales y de poder centradas en la propiedad territorial heredados del viejo sistema de finca y las relaciones corporativas y autoritarias en las que se sustentó el ejercicio del poder local, al mismo tiempo que avanzaba en imponerse el programa de desregulación estatal y se hacían presentes actores sociales que a menudo buscaban llenar los espacios dejados por las instituciones. Señalamos asimismo que como resultado de las movilizaciones sociales de mediados de la década de 1990, se produjo en la zona un amplio espectro de organizaciones sociales y políticas que evidenciaban el fin del corporativismo regional, y que daban lugar a una nueva forma de relación Estado–campesinos basada en la libre asociación, lo que permitiría dar respuesta a las exigencias de democratización y participación en los espacios de representación, decisión y gestión.

En el capítulo cinco nuestra reflexión pone atención a las condiciones en que, al final de la década de 1990, avanza en su concreción el proyecto de transformación regional de las élites en el marco del modelo económico centrado en la primacía que adopta el capital y la empresa privada. En esta parte de la tesis, se hace énfasis en la presencia del capital trasnacional como elemento hegemónico que, junto al discurso social que lo acompaña, subordina las diferentes formas de acción colectiva en un contexto en el que pareciera que

las opciones están determinadas por las condiciones que impone el capital privado, así como por las visiones que diferentes actores sociales tienen con respecto a este proceso. Esta reflexión se acompaña con un análisis de las condiciones y acechanzas que enfrentan las expresiones colectivas de la sociedad local como son los ejidos y las organizaciones productivas quienes, en razón del deterioro de las condiciones sociales y de búsqueda de opciones para la sobrevivencia, mantienen una dinámica de conflicto a su interior que les genera un serio desgaste social y les impide construir formas alternativas de desarrollo, viéndose limitadas a participar en los resquicios que le define el modelo dominante.

Como resultado del análisis socio histórico que hacemos acerca del carácter de la acción social en el espacio de relaciones que significa la región Frailesca, en un periodo de transición de un modelo de sociedad fuertemente intervenida por la política gubernamental a otro en el que se busca que sean los criterios del mercado que articulen y definan las formas de organización y estructuración social, encontramos una línea de continuidad en el sentido que adopta la expresión de las luchas sociales y populares, las que se orientaron a destrabar formas de relación social atadas a una estructura de poder territorial y política sustentadas por su carácter cerrado, vertical y autoritario. No obstante, el periodo de lucha social aquí analizado, consideramos que tuvo la virtud de contribuir a destrabar los mecanismos de poder que durante años se ejerció bajo las formas corporativas que eran auspiciadas por el Estado.

I. POLÍTICA NEOLIBERAL Y RECONFIGURACIÓN DE LA ACCIÓN SOCIAL EN EL MEDIO RURAL

En los últimos veinte años en nuestro país se han producido importantes transformaciones en los espacios rurales, cambios que pasan por una redefinición de las formas de inserción de la economía nacional en el contexto mundial, así como por el papel que tradicionalmente había tenido el Estado como conductor de la economía y como mediador de los conflictos entre las clases y actores sociales.

En el país después de 1950, se constituyeron diversas instituciones de asistencia social que tenían como objetivo otorgar servicios a la población trabajadora en aspectos como salud, educación, vivienda, entre otras prestaciones. Las definiciones de política social en muchos sentidos estaban orientadas a favorecer a los sectores populares, lo que hacía que el Estado apareciera ante nuestros ojos como una especie de Estado social o de bienestar.

Esta situación comenzó a cambiar desde la primera mitad de la década de los ochenta, periodo en el que inicia la puesta en práctica de un conjunto de medidas de política económica que se ha dado en llamar de forma genérica como el modelo neoliberal, al inspirarse en muchas de sus características con el modelo económico que adoptó el sistema capitalista mundial a finales del siglo antepasado. Las principales definiciones por las que aboga este modelo son la libertad económica para la operación del capital en términos de que no haya ningún tipo de barreras para el funcionamiento del mercado, así como la no participación del Estado en la actividad económica.

La adopción de esta orientación de política económica en el país tuvo como base no solo las corrientes de pensamiento que en diversos países de Europa y en los Estados Unidos empezaron a mostrarse como dominantes a finales de los setenta, sino también por las características propias del modelo de desarrollo productivo nacional que conoció el país por espacio de casi cincuenta años, construido sobre la base de un sistema político autoritario como el que constituyeron los regímenes posrevolucionarios del periodo, y que a principios de la década de 1980 mostraba claros signos de agotamiento. Así, la puesta en práctica del modelo de desarrollo basado en las políticas neoliberales a mediados de la década, vino a trastocar no solamente la vida económica en sus diferentes ramas productivas sino también las relaciones políticas internas sobre las cuales hasta ese

momento se habían construido los consensos entre los diversos grupos, actores y clases sociales¹⁸.

Estos cambios implicaron un paulatino replanteamiento de la relación Estado sociedad en el país, que llevó a la recomposición de las relaciones entre diversos actores políticos y a replantear diversas formas de acción y de prácticas desarrolladas por los actores sociales en los ámbitos locales y regionales. Consecuentemente, en este periodo en el plano teórico, desde la Ciencias Sociales también se produce un replanteamiento de las visiones y paradigmas bajo las cuales se habrá de desarrollar la interpretación acerca del carácter y sentido que adquiere la acción social, relativizando conceptos y teorías que habían tenido preponderancia en la explicación y comprensión de la realidad social al tiempo que se recuperaban nuevos enfoques y otras perspectivas hasta entonces poco valoradas.

En este primer capítulo nos proponemos realizar un análisis de los principales cambios que se han operado en el modelo económico en nuestro país y las implicaciones que ha tenido en la sociedad rural a partir del replanteamiento de la relación Estado-sociedad. De igual forma, exponemos algunos elementos conceptuales que consideramos adecuados para la comprensión de las respuestas y acciones que en este contexto se vienen construyendo desde la sociedad, en particular desde las sociedades rurales.

1.1. Política neoliberal y redefinición de la relación Estado-sociedad

La redefinición de las orientaciones de política económica en el país, presionado por los cambios operados en la economía mundial, implicó, desde mediados de la década de los ochenta, la recomposición de diversos grupos de poder tanto en el plano de la economía como de la política, quienes habían venido definiendo hasta entonces las orientaciones fundamentales del rumbo del país. Bajo la divisa de crear condiciones para volver más eficiente y competitiva la planta productiva, en adelante las definiciones de política económica se orientarían a favorecer a los sectores empresariales más poderosos, así como al capital trasnacional, con la consecuente quiebra de las empresas más débiles. Ello trajo

¹⁸ Con el concepto de clase recuperamos la noción que identifica a agrupaciones de hecho que surgen en la estructura de las desigualdades sociales. Desde la perspectiva de Marx, las clases son la manifestación del modo de producción de la sociedad, mismo que se define por las relaciones entre las clases y las relaciones de éstas con los instrumentos de producción. Las clases constituyen pues, un sistema de relaciones en que cada clase presupone la existencia de otra u otras clases, Norberto Bobbio, *et al*, 1990, p.225-227.

recomposiciones y realineamientos entre los actores sociales y políticos, particularmente entre quienes se adscribieron a la iniciativa de abrir la economía nacional a las corrientes mundiales de comercio e inversión y quienes abogaban por una perspectiva que procurara mantener a resguardo la soberanía nacional.

Pero esta redefinición y recomposición de los procesos económicos y las relaciones políticas internas implicaron también cambios en las formas de la relación que hasta entonces había mantenido la sociedad y el Estado, así como en el carácter y sentido de esta relación, cambios y redefiniciones que tuvieron sus implicaciones y particularidades en los espacios locales y regionales, los que a la postre han generado transformaciones en las formas de articulación entre los actores sociales, en las formas de organización y convivencia, en suma, han redefinido las formas de relación social y política.

En este primer capítulo abordamos la discusión acerca de la manera en que la adopción del modelo de desarrollo neoliberal desde los años ochenta ha implicado la redefinición de la relación del Estado con la sociedad lo que configuró un nuevo escenario para los diversos actores sociales y políticos en nuestro país, así como para los diversos sectores de la economía nacional. De igual manera reflexionamos acerca de cómo ello se ha enlazado con un cambio en los paradigmas teóricos dominantes de la década de los sesentas y setentas en la comprensión del sentido de la acción social. En un segundo momento analizamos los principales rasgos que ha tenido la aplicación de la política neoliberal en el medio rural en términos de las nuevas condiciones en que se construye la relación Estado sociedad rural y que se ha traducido en una reconstitución de las formas y sentido que adquiere la acción social en los espacios rurales.

Esta discusión la realizamos a partir del reconocimiento de los principales elementos que definieron la llamada “reforma rural” concretada en términos legales con las adecuaciones al Artículo 27 Constitucional, lo que produjo un severo cambio en las formas de relación que el Estado había mantenido con la sociedad rural: Tales cambios ocurridos en el plano nacional no son ajenos a las características y condiciones bajo las cuales se desarrolla hoy en día la acción social en la región Frailesca, espacio rural de particular interés en este estudio, ya que expresa de manera muy clara las redefiniciones que en el plano local han tenido los actores sociales en el medio rural, en el marco del actual modelo económico.

Sin duda, las regiones rurales de nuestro país han sido impactadas por este conjunto de cambios en el contexto nacional e internacional que se expresan en la nueva relación del Estado con la sociedad en la gestión de los procesos económicos y, por tanto, en la vida política, lo que ha llevado a la reconfiguración de las relaciones sociopolíticas y sus formas de representación. Estas redefiniciones que se producen en contextos más amplios, trastocan el conjunto de dimensiones de la vida social regional y generan respuestas y formas de expresión social que se conjugan y entrelazan con las historias locales, sus procesos económicos y productivos, la dinámica de sus relaciones sociales y políticas, así como las formas de representación y participación construidas en diferentes momentos históricos.

1.1.1. Origen y fundamentos de la política neoliberal

La política neoliberal o neoliberalismo se puede definir como la forma de pensamiento que se impone en el mundo a finales de la década de los ochenta, –que ya había sido planteada en Europa la década anterior–, como respuesta a los problemas que en diferentes países observaba el capitalismo para garantizar las tasas de acumulación de las empresas. Esta forma de pensamiento es abrazada en Europa por fuerzas conservadoras que identifican en el Estado de bienestar, muchos de los problemas que impiden un mejor desempeño de las empresas, buscando así desacreditarlo.

Los problemas surgieron al final de los años setenta cuando se reconoció la crisis fiscal del Estado y se multiplicaron los problemas para poder mantener el sistema político corporativo construido en los años previos bajo la idea del “Estado de bienestar”. Las críticas a éste se producen según lo señalado por Offe “no solamente por motivos económicos (ineficacia, despilfarro, burocracia, corrupción...), sino también por elementos ideológicos (estatismo, distorsión del sistema de precios y del mercado...)”. De este modo, al final de la década el modelo o régimen de acumulación que durante la época de la posguerra había resultado funcional, parecía haber llegado a su fin, ya fuera porque tendía a agotarse o porque entraba en crisis.¹⁹ El modelo neoliberal que se implanta en Estados Unidos y Europa en la década de 1970, y en América Latina en la de 1980, surge porque el

¹⁹ Al respecto de los cambios operados en el llamado Estado de Bienestar en Europa y otros países en el mundo, véase los trabajos de Claus Offe, 1990 y Joaquín Estefanía, 2000.

sistema capitalista en el plano mundial asiste a un proceso de recomposición estructural como consecuencia de la “tercera revolución tecnológica”, dando lugar a una nueva fase del capitalismo en el que las corporaciones transnacionales, en su estrategia de negocios globales, se han convertido en las principales protagonistas de este proceso, trayendo consigo una hiperconcentración del capital en el mundo.

En esta nueva fase expansiva del capital, el entorno económico demanda concretar cambios en los sistemas de regulación, que tiendan a flexibilizar los sistemas normativos y la incidencia estatal en las actividades económicas. La empresa transnacional con una estructura ágil y descentralizada se constituye así en el agente principal de esta fase, desarrollando toda una red de actividades productivas y distributivas perfectamente enlazadas en diferentes partes del mundo. Estas nuevas empresas demandan espacios compatibles con la nueva configuración de los procesos económicos, así como garantizar condiciones adecuadas del proceso de valorización.

Las posiciones expresadas desde principios de los ochenta, adelantaban ya, dice Offe, la disputa que se daría en el ámbito de las fuerzas económicas y sociales con relación al carácter que debiera tener la organización institucional que sustituyera el Estado de Bienestar, en las que “se propugnaba por un *laissez faire* que produjera una resurrección de la sociedad mercantil “libre y armoniosa”, o bien, un Estado descentralizado y desburocratizado asumido por “comunidades libertarias e igualitarias”. Aunque en México o América Latina no se pueda hablar en términos estrictos de un Estado de Bienestar como el que surgió en la Europa de la posguerra, es posible establecer un equivalente en términos de la política de Estado social o sus variantes que adoptaron la mayoría de los regímenes políticos en nuestros países.

Así, la configuración de lo que sería posteriormente uno de los fundamentos de la propuesta neoliberal será la definición en torno a las características que debería tener el Estado en la nueva fase del capital. Para autores como Touraine por ejemplo, la etapa actual del capitalismo en el mundo asiste a la descomposición de todos los sistemas sociopolíticos de control y de utilización de la economía. Aunque este autor habla particularmente desde la experiencia desarrollada en algunos países europeos, en muchos otros países asiáticos, africanos o latinoamericanos, industriales o no, se avanza también en la destrucción del Estado corporativista y en la apertura de la economía, al mismo tiempo que se impulsa la

integración de sus sociedades bajo la forma de un nacionalismo cultural, en ocasiones acompañado de una política vertical y autoritaria.²⁰

Así, en términos del reconocimiento de los cambios que se estaban produciendo en el ámbito de las relaciones económicas, los diversos análisis reconocían que a lo largo de la década de los ochenta y los noventa el neoliberalismo terminó por invadir la política económica de la mayoría de los países, presentándose como un modelo de carácter universal, que para implantarse no considera territorios, regiones o naciones, y lo más grave aún, prescinde del consenso y la legitimidad de la sociedad para imponerse. Para ello se ha servido de una explicación cerrada y compacta acerca de las causas que desencadenaron la crisis económica y los remedios para superarla, presentando las interpretaciones y soluciones alternativas como torpes e inconsistentes por las consecuencias que pudieran provocar. Así, el modelo se nos presenta como el único viable, incidiendo todos los ámbitos de la vida societal: el económico, el político y el cultural.²¹

Los neoliberales impusieron una interpretación de la crisis y las vías para resolverla; las recetas neoliberales se han aplicado ya durante un largo tiempo sin que las perspectivas de la economía mundial se hayan aclarado. Los defensores del modelo sostienen que la crisis se ha prolongado porque la flexibilidad y el libre juego de los mercados no han alcanzado la concreción necesaria. Pero a pesar del tiempo que las propuestas neoliberales llevan aplicándose bajo el argumento de que es el único camino posible, siempre queda la impresión -de acuerdo con este discurso- de que falta mucho por enderezar en el funcionamiento de la economía.

Por otro lado tenemos la explicación de raigambre marxista de la crisis del capitalismo basada en la teoría de los ciclos, según la cual la economía mundial desde finales de la década de los sesenta había alcanzado una situación de sobreproducción y la tasa de beneficio del capital había descendido sensiblemente. De acuerdo con ello, los principales sectores habían entrado en una situación de sobreproducción, rompiéndose la proporcionalidad entre el crecimiento de la demanda y la capacidad productiva.²²

²⁰ Opinión expresada por Touraine en el clásico libro de Joaquín Estefanía, 2000.

²¹ El concepto societal se recoge de la obra de Alain Touraine, 1997, en la que ubica y reconoce las diversas expresiones por las que discurre la vida social.

²² Ver al respecto la obra de Pedro Montes, 1999, p. 68.

De acuerdo con esta perspectiva, los procesos que estamos viviendo en los últimos años, son parte del proceso de reestructuración del sistema capitalista que en un contexto de crisis busca nuevas formas de valorización, ya que la lógica fundamental del sistema a través de la historia, elemento central de su naturaleza, es la búsqueda de ganancias. Así, las crisis observadas en el sistema capitalista a nivel global, y las formas bajo las cuales éstas se han producido en diferentes momentos históricos, no son mas que manifestaciones de las vías bajo las cuales el capital logra garantizar su reproducción. De este modo, la reproducción actual del sistema capitalista impacta a los Estados, forma social generada por el sistema capitalista que expresa la lógica del capital.

De acuerdo con esta interpretación, el Estado como forma de las relaciones sociales capitalistas es el marco de referencia en el cual se redefinen y expresan los procesos de internacionalización del capital, y está sujeto a las crisis de la sociedad capitalista. Bajo este planteamiento, el llamado Estado de bienestar (benefactor ó providencial según otras denominaciones), corresponde a un momento histórico del capital que resultó funcional a sus necesidades de acumulación, lo cual nos lleva a reflexionar sobre la crisis que se expresó en el sistema y mundo capitalista desde los años setenta, la cual no era solamente un fenómeno económico, ya que también expresaba un desfase entre un modo de regulación que se agotaba y un régimen de acumulación que había resultado funcional desde los años de la posguerra. De ahí que hablar de reforma del Estado es hablar de crisis del Estado y de su necesaria transformación.²³

1.1.2. El nuevo rol del Estado

La emergencia del nuevo modelo económico y fundamentalmente las propuestas de desregulación que acompañan a la política neoliberal, ha llevado a algunos estudiosos a la convicción de que está surgiendo en América Latina un nuevo orden estatal que tiende al desplazamiento del núcleo de decisiones en el sistema político, es decir, hacia la descentralización, tendiente a ajustar creativamente sus aparatos de gobierno so pena de ser castigados en la contienda competitiva, o bien buscando la adopción de conductas

²³ Para un mayor reconocimiento de la perspectiva marxista en relación con las transformaciones del Estado, ver los trabajos de Robert L. Heilbroner, 1989, John Holloway, 1992 y Joachim Hirsch, 1996.

gerenciales acorde con las corrientes innovadoras, procesos que tienen el objetivo de crear condiciones para la inserción plena del modelo de libre mercado.

Así, las políticas de privatización, desregulación o descentralización impulsadas en la mayoría de los países, consideramos, tienen el objetivo de garantizar las condiciones de funcionamiento del libre mercado. Pero además, las nuevas formas de intervención estatal tienden a privilegiar a los grupos de inversores nacionales o externos, buscando crear al interior de sus respectivas fronteras nacionales, condiciones óptimas de rentabilidad para atraer el capital internacional, quedando en un segundo plano el bienestar material y las demandas de la sociedad o el equilibrio entre los sectores económicos de los países. Ello ha traído como consecuencia la consolidación de la brecha entre ricos y pobres, el incremento del desempleo y la exclusión creciente de amplios grupos sociales.²⁴

Desde la perspectiva de la experiencia latinoamericana desarrollada a partir de las políticas de ajuste estructural de los años ochenta, –momento en que se empezó a plantear con insistencia en la mayoría de los países la necesidad de la reforma del Estado–, el paradigma neoliberal plantea un nuevo tipo de Estado que se viene constituyendo mediante un programa de reformas de carácter burocrático institucional que se concretó bajo la forma de un conjunto de iniciativas de descentralización y privatización impulsadas por los gobiernos en nuestros países.

Para el caso mexicano, este programa de reformas concebidas bajo la idea paraguas de reforma del Estado viene a reconfigurar el andamiaje del aparato estatal construido en el marco del anterior modelo económico. Aquí la reforma del Estado ha implicado diversos cambios a los ordenamientos legales que se han traducido en adecuaciones a diversos ámbitos de la vida institucional (reforma educativa, de la ley del trabajo, sistema de pensiones, salud, electoral) lo que está llevando paulatinamente a la concreción de un nuevo Estado de derecho.²⁵

Concretar estas políticas reformadoras implicó evidentemente un ajuste que trastocó el tipo de relación que mantuvo el Estado con la sociedad, es decir, rubricó el desmantelamiento de todos aquellos espacios y relaciones institucionales que contribuyeron

²⁴ Para un mayor reconocimiento de las formas que viene adoptando la transformación del Estado en América latina véanse los trabajos de Fernando Jeannot, 1990, Fernando Calderón y Mario R. Dos Santos, 1997, y Cristina Lucchini, *et al*, 2001

²⁵ Ver respecto de esta valoración, Carlos Jiménez Solares, 2000, p.73.

a la plena funcionalidad del modelo económico anterior y que en términos generales podemos identificar con la construcción de lo público, a partir de la relación que el Estado mantenía y fomentaba con la sociedad. Hoy, en el contexto de una nueva relación Estado sociedad, se trata de demoler lo público, de deconstruir al Estado como parte constitutiva de lo público y sustituirlo por una nueva relación en la que el espacio que antes ocupaba la sociedad, hoy está definido por una nueva centralidad que es ocupada por el mercado.²⁶

Las políticas impulsadas en los años ochenta, pero sobre todo las desarrolladas en los noventa en la mayoría de los países y en particular en los latinoamericanos, trajeron profundas transformaciones en las formas de relación que habían caracterizado al Estado para con la sociedad. Si durante por lo menos cuarenta años el Estado se había constituido en un actor fundamental que se abrogaba la representación de los actores sociales y estaba en una diversidad de espacios que correspondían a la sociedad civil, a finales de la década las elites económicas y políticas en prácticamente todos los países se cuestionaban el sentido y carácter de esa presencia omnipresente del Estado y planteaban la necesidad de una maduración de la sociedad por la vía de que ésta debe responsabilizarse y participar en la definición y construcción de las decisiones que le competen.

La relación construida entre el Estado y los diversos actores sociales y políticos es identificada, según Garretón “por tener una matriz nacional popular cuya principal característica era, idealmente, la fusión entre sus componentes, es decir, el Estado, los partidos políticos y los actores sociales, en donde el primero jugaba el rol referencial de todas las acciones colectivas”. Esta relación entre los grupos sociales y populares ha sido reconocida como un tipo de corporativismo que generalmente se construía sobre la base de una práctica autoritaria por parte del Estado, dinámica que impedía un conocimiento mas profundo de las relaciones y procesos que se daban a su interior en el plano local o regional. Según este autor, la situación bajo la cual se construían las anteriores formas de relación y representación Estado Sociedad se debían a que existía “una relación entre Estado, representación y sociedad civil de tipo nacional popular o político céntrico”.²⁷ De acuerdo con esta propuesta, a partir de la década de los ochenta se accede a un tipo societal que denomina “sociedad post-industrial globalizada” en la que se produce una desarticulación

²⁶ Para Jiménez Solares “en lo público el Estado era la matriz, es decir, era el espacio central en torno al cual se movilizaba y tenía consistencia lo público”, *Op. Cit.*, p.74.

²⁷ Respecto a estas reflexiones ver: Manuel Antonio Garretón, 2001, p.9.

de las formas de representación y se abre la búsqueda de una nueva relación entre los elementos señalados, la cual es aun incierta.

Para el caso de México, la transformación del Estado mexicano implica una recomposición plena de las relación Estado-sociedad, toda vez que la construcción del estado nacional es un proyecto que durante años mantuvo un importante respaldo popular a partir de un discurso nacionalista y de la promesa de acceso a la justicia social y al bienestar que traería el proyecto de la élite posrevolucionaria. Sin embargo como lo señala Gledhill, la construcción del Estado nacional implicó el respaldo y fortalecimiento de una suerte de caciquismo a lo largo y ancho del país el cual adquirió un status propio al responsabilizarse localmente del funcionamiento y operación de las instituciones, quienes además concretaban el propósito de incluir a los ciudadanos y hacer concesiones a la gente común.²⁸

Con el advenimiento y auge del capitalismo estatista que se inaugura a partir de la década de los treinta, la configuración del poder en los espacios rurales adquirió nuevas formas. Si bien la hacienda o la finca dejaron de ser el elemento articulador, el Estado se constituye en un elemento fundamental que, para garantizar su consolidación como elemento hegemónico y eventual mediador entre las clases, construye un aparato corporativo apoyado en líderes y caciques locales, muchos de los cuales surgen y se consolidan al calor de los movimientos campesinos y populares de esos años.

Con la aplicación del modelo neoliberal, la reflexión de que se está construyendo una nueva forma de relación Estado-sociedad civil parte del reconocimiento de que el país se encuentra inmerso en la construcción de un nuevo tipo societal, que algunos denominan “post-industrial globalizado”, y lo definen rasgos diferentes como son el consumo, la información y la comunicación. Pero el nuevo modelo económico también se estaría produciendo en el país una recomposición de las prácticas sociales y de las identidades, pues de acuerdo con lo señalado por Gledhill, en el régimen anterior la mayoría de los mexicanos definían sus prácticas sociales y sus identidades como personas en términos de las relaciones con otras personas, como integrante de una familia basada en una jerarquía interna o con parientes y paisanos integrados en otras familias; con el nuevo modelo al individuo le faltan enlaces sociales de parentesco o de patronazgo. En este orden de ideas,

²⁸ Cfr al respecto el trabajo de John Gledhill, 1998.

se estarían constituyendo nuevos tipos de actores sociales que coexisten con los actores que provienen del modelo productivo anterior –aunque transformados–, dando lugar a actores públicos o a redes de diversa naturaleza mas o menos estructurados, que tienen como característica no tener una fuerte y estable densidad organizacional, pero que pueden constituirse sobre la base de un principio fundamental o de una identidad.

Entre los actores sociales que vemos emerger en la arena social encontramos una diversidad de expresiones en las que se desdibuja cada vez más la relación o vinculación con la estructura productiva y se configuran expresiones de actores que se interesan en problemáticas nuevas o latentes de la sociedad y donde se pone en el centro la edad, la condición étnica, de género, de pertenencia a una región, etcétera. Actores con mayor densidad organizacional surgidos en este proceso de desnaturalización de la tradicional relación Estado sociedad, son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que por su carácter flexible y ámbitos de implantación constituyen redes que coadyuvan en un proceso de aparente desinstitucionalización o desnormativización, lo que aparentemente forma parte de la naturaleza misma de la llamada “sociedad post-industrial globalizada”.

Bajo esta perspectiva, muchos de los movimientos sociales actuales muestran una mayor individualización de las conductas y estrategias en el movimiento campesino a menudo ligadas a sus dinámicas migratorias, la institucionalización estatal y legitimación de los movimientos de mujeres, la reorientación de los movimientos urbanos hacia las cuestiones de la seguridad. Otras expresiones y sentido del movimiento social estarían dados por la lucha de los trabajadores, más que contra el capital, por la reintervención del Estado; por movimientos guerrilleros menos orientados hacia la toma del poder que a la negociación de espacios en el ámbito institucional, todo esto junto con un reforzamiento de las acciones político electorales y de participación ciudadana más que como grandes movimientos que propugnen por el cambio social radical.

Así, las alteraciones socio-económicas de los últimos años han transformado profundamente el panorama de los actores sociales, sus reivindicaciones y sus formas de acción colectiva. Es obvio que este tipo de actores conlleva problemas de representación en la arena política, en relación con los actores propios de la “sociedad industrial de Estado nacional” señalada por Garretón. Pero ello no quiere decir que en la mayoría de los países en los que hoy se impone un tipo de desarrollo marcado por las fuerzas de un mercado

transnacionalizado, la acción estatal deje de tener sentido. En el nuevo modelo sociopolítico ya no se puede pensar en un tipo de Estado que sea el unificador exclusivo de la vida social, pero tampoco puede prescindirse de la intervención de un Estado dirigida a la constitución de los espacios e instituciones que permitan el surgimiento de actores que se constituyan como autónomos de aquél, así como de la protección de los individuos.

En el nuevo contexto pareciera existir un agotamiento de la política clásica en sus expresiones de ideologismo, polarización y autoritarismo. Por su parte las visiones neoliberales, con su carga de pragmatismo, muestran también sus insuficiencias para la reconstrucción de los nuevos espacios sociales e institucionales, en donde la Política vuelva a tener sentido y pueda reconstruir la necesaria relación entre la sociedad y el Estado. Todo ello implica una recuperación de la Política con un sentido democrático, la que en muchos sentidos apunta a un cuestionamiento de la política clásica.

El énfasis en los esfuerzos de democratización que han puesto los diversos actores sociales y políticos en los últimos años, puede dar la pauta de cuáles son las vías para la construcción de una nueva forma de relación del Estado y la sociedad, en donde pudiera estar presente el reconocimiento de los derechos conquistados en las luchas históricas o de quienes hoy luchan contra cualquier manifestación de discriminación, incluyendo las modernas formas de exclusión social intrínsecas al actual modelo económico. Las enormes dificultades que conlleva la consolidación democrática es, como dice Krischke, algo que queda marcado en la experiencia histórica de la mayoría de nuestras sociedades y hoy en día, explorar sus posibilidades, se define como una tarea para los nuevos actores que se constituyen en el actual contexto sociopolítico de los países de América Latina.

1.2. Enfoques actuales en el estudio de la acción colectiva

Observamos también un conjunto de cambios que han llevado a nuevas visiones o paradigmas en la interpretación y en las formas de construcción y el sentido que tiene la acción social. Las formas de participación que anteriormente estaban atadas a la existencia de las clases, quienes a su vez se veían representadas por partidos o supeditadas a la acción del Estado, hoy en día son mediadas por otras modalidades de participación que definen las relaciones entre los diferentes actores, al mismo tiempo que emergen nuevas formas de

representación y participación social en donde adquiere relevancia la lucha por los derechos sociales, por la democratización y la ciudadanía.

La interpretación que sobre la acción social se realizaba en la década de los setenta partía de reconocer la centralidad de un actor o sujeto en torno al cual se subordinaba al resto de los actores. En el marco del viejo paradigma, el estudio de los movimientos sociales se realizaba en torno a la idea de la confrontación entre las clases, misma que en un proceso de agudización, conducía al cambio de sociedad con la consecuente construcción de una nueva hegemonía de clase (propuesta marxista). Este planteamiento se sustentaba en la visión según la cual los aspectos estructurales determinaban el carácter de la acción y el cambio social se definía como el paso de un tipo de sociedad a otra. La visión del cambio o de la historia era definida como una sucesión de etapas, y para lograr el cambio bastaba con incidir en el factor preponderante que expresaba las contradicciones de la sociedad.

El auge que tuvo la emergencia de organizaciones sociales amplias de carácter sectorial y el aparente fortalecimiento de diversas expresiones de organización regional, urbanas o rurales, llevaron a que algunos autores como Foweraker y Craig, definieran a este amplio abanico organizativo con apelativo de movimiento popular. La confrontación que en diversos ámbitos desarrollaban con un Estado autoritario para expresar sus demandas, era la tónica. Para ese momento, los presupuestos teóricos y enfoques con los que se analizaban los movimientos sociales se mostraban insuficientes para finales de la década de los setenta y ochenta, tal fue el caso de los movimientos estudiantiles, urbano populares, por reivindicaciones ciudadanas e incluso de los movimientos armados.

La aparente fortaleza mostrada por los movimientos sociales estructurados en organizaciones, frentes y coordinadoras o como movimientos civiles por la conquista de derechos ciudadanos, al concretarse la ola neoliberal en México, pronto se vieron disminuidos en sus alcances y posibilidades, no obstante que desde el discurso gubernamental se hablaba de un fortalecimiento de la sociedad por la vía de transferir recursos y funciones. En realidad ese proyecto implicó la desestructuración de las organizaciones y movimientos configurados tras años de lucha social. Así por ejemplo, Zermeno, mantenía la postura de la desorganización social que privaba entre los grandes actores sociales como resultado de las acciones neoliberales del gobierno, señalando que los agentes dinamizadores en el terreno de lo social no eran precisamente los actores, sino

el Estado. Otros autores, como González Casanova, reconocían una situación de desmovilización social atribuida a las políticas de inversión localizadas para la acumulación y legitimación del capital.²⁹

1.2.1. Los actores y el sistema de acción social

La configuración de nuevas formas de interpretación y estudio de los movimientos sociales y de la acción colectiva se centraron en señalar las insuficiencias del paradigma marxista para la comprensión de las características y sentido que adquirirían los movimientos sociales. Particular relevancia adquirió la teoría de la acción, construida a partir de la discusión desarrollada por la sociología europea a partir del análisis de las dinámicas y formas de constitución de la acción social, en buena medida como resultado del reconocimiento de las características que adquirirían los movimientos sociales, muchos de los cuales se demarcaban de los márgenes de negociación establecidos por el *Welfare State* (centrada en la pareja sindicalismo-partidos en la versión europea), y adoptaban la forma de movimientos ciudadanos, pacifistas, ecologistas o feministas. Inicia, pues, la preocupación por precisar y distinguir a los actores sociales a partir de su quehacer concreto, sus acciones y ejes de aglutinación, con lo cual se empezaron a generar estudios del movimiento social desde una perspectiva de análisis distinta: la de la acción colectiva.

A partir de la sociología de la acción planteada por Touraine, surge la discusión acerca de los llamados nuevos movimientos sociales, concepto controvertido que describe, mas que nada, un nuevo discurso reflejo del cambio de paradigma asumido por la teoría social, en parte como respuesta a las propuestas interpretativas de la escuela estructural-marxista dominante hasta los años sesenta, buscando superar el concepto de clases sociales ligado a la posición en las relaciones de producción. En su lugar apareció una interpretación que reconocía no la necesidad sino la contingencia, la cual era desarrollada por actores sociales responsables de acciones colectivas productoras de sociedad. Mas allá del encuadre teórico que este autor hace para comprender al actor social como parte de un “sistema de acción histórica”, la propuesta abrió un abanico de posibilidades de interpretación del

²⁹ Para ver la posición de estos autores respecto a la tónica de los movimientos populares, ver los trabajos de Sergio Zermeño, 1989 y Pablo González Casanova, 1995.

comportamiento de quienes, de manera individual o colectiva, participaban en procesos sociales al margen de las ataduras de la adscripción a una clase social.

El enfoque propuesto por Touraine, quien reivindicaba la perspectiva del actor social, resultó de particular importancia para el análisis de la realidad social. La postura de este autor se sustenta en la visión según la cual la sociedad ha accedido a una nueva fase que denomina “postcapitalista” o “postindustrial”. En ella las estructuras y sujetos que la articulaban dejan de tener sentido y, por tanto, la acción social adquiere nuevas connotaciones que no están definidas por las relaciones de clase. De acuerdo con Touraine, durante años, la sociología se interesó fundamentalmente por los cambios que se operaban en el sistema; era importante, sin embargo, reconocer que el movimiento y la práctica de los actores tenían una dinámica propia, lo que no implicaba disociarles de su relación con “la lógica del sistema”. Implicaba más bien orientar el interés del análisis sociológico por la acción social, es decir, por el actor. Bajo esta propuesta se reconoce entonces la capacidad de la sociedad de reorientar sus prácticas sociales y culturales, así como de redefinir las relaciones de poder y las formas en que se expresa el conflicto.³⁰ De hecho la perspectiva de Touraine se conoció en la sociología latinoamericana desde la década de los setenta, producto de lo cual las visiones sobre la sociedad dual empezaron a ser desplazadas y pronto se hizo evidente que, en el terreno de lo social, los agentes dinamizadores no siempre eran las clases, a veces ni los actores, sino el Estado.

Sin negar esta perspectiva, y en relación con la pertinencia de los esquemas teóricos anteriores, Melucci contribuye a esta redefinición al señalar que la imagen tradicional en el análisis teórico en torno a la acción colectiva está agotada ya que las luchas y relaciones que esos enfoques establecían eran inherentes al sistema productivo existente, lo cual definía a su vez la demanda de acceso al poder estatal y de extensión de derechos políticos. Para este autor, los actores sociales eran vistos como personajes, “como entidades objetivas que se movían hacia un destino”, lo que configuraba un modelo de acción colectiva que hoy se encuentra agotado, sin que ello quiera decir que la lucha por la obtención de la ciudadanía haya terminado o que no haya áreas de la vida social que puedan ser democratizadas.³¹

³⁰ Para una visión mas completa de la perspectiva de este autor, *cfr*: Alain Touraine, 1997.

³¹ Al respecto de esta discusión ver Alberto Melucci, 1988.

Para Melucci, el análisis de las formas que adopta la acción colectiva en la sociedad contemporánea –a la que define como la sociedad informatizada– no se produce al margen del sistema de relaciones sociales en el cual se hace posible y en la construcción de la acción social se implica, también, la definición de acuerdos y consensos en torno al sentido de su actuación y los fines perseguidos. Es decir, los actores colectivos “producen” la acción colectiva porque son capaces de definirse y reconocerse a sí mismos y el campo de su acción y de producir identidades colectivas que se generan en un marco de relaciones sociales. Además, un componente central de la acción colectiva que incide en el sistema de relaciones es la consideración de las situaciones de tensión, pues según su planteamiento, la acción es el resultado de intenciones, recursos y límites construidos por medio de relaciones sociales en un espacio de oportunidades y restricciones.³²

1.2.2. Los movimientos sociales y la cultura

Esta discusión fue recuperada para el análisis de las formas y condiciones bajo las cuales se construye hoy en día la acción social en América Latina, a partir de reconocer la diversidad de formas bajo las que se expresaban los movimientos sociales de nuestros países quienes pugnaban por superar los lastres dejados por los estados autoritarios. Autores como Fernando Calderón, Elizabeth Jelin y otros, en diversos estudios analizaron las expresiones diversas que adquirirían los movimientos sociales a los que les reconocían connotaciones éticas y culturales. En éstos lo fundamental no era el acceso al poder del Estado sino la conquista de derechos ciudadanos, característica que lleva a reconocerlos como la expresión de los llamados “nuevos movimientos sociales”.

La visión dualista de los movimientos sociales y su caracterización como nuevos y viejos, fue reconocida por autores como Calderón en la década de los ochenta al reconocer movimientos con orientaciones expresivo simbólicas como los comunitaristas, étnico culturales, de género, éticas y de derechos humanos a los cuales les atribuyó mayor potencial para expresar demandas de modificación institucional o con importantes repercusiones sistémicas. Estarían por otro lado los que desarrollaban acciones orientadas a satisfacer demandas materiales en donde los actores (obreros, campesinos, marginales

³² Cfr Alberto Melucci, 1999, p. 37.

urbanos) centraban sus demandas de modificación institucional en el ejercicio o ampliación de sus derechos ciudadanos.³³

Desde la perspectiva de Calderón, existían otros actores sociales cuyas acciones no estaban orientadas hacia formas centradas en la política ni en demandas directas hacia el orden institucional, sino más bien hacia el reforzamiento de la identidad social y la transformación de las relaciones cotidianas, y configuraban una nueva manera de relacionar lo político y lo social, lo público y lo privado, en donde el referente a considerar era el referente ético y valorativo expresado en las prácticas sociales cotidianas de individuos o colectividades.³⁴

La discusión sobre los llamados nuevos movimientos sociales (ecológicos, étnicos, de mujeres), sin embargo, se considera superada en la medida en que en trabajos posteriores como los de Escobar, Álvarez y otros, se asumió que éstos no solamente comprometían nuevas formas de hacer política y nuevas formas de socialidad sino que también los movimientos populares urbanos, campesinos, obreros y marginales ponían en acción fuerzas culturales que los llevaba a cuestionar las concepciones dominantes de construcción nacional, el desarrollo y la represión.³⁵ De acuerdo con este señalamiento, todos los movimientos sociales estarían inevitablemente ligados a la construcción de identidades y estrategias colectivas atadas a la cultura. ¿En dónde estuvieron entonces los cambios en las formas de interpretación que de la acción social se produce en los años recientes?

Para Garretón, por ejemplo, el cambio de paradigma teórico se produce sobre la base de un cambio en los tipos societales en el que se produce una desarticulación de las formas de representación construidas sobre la base de una sociedad industrial de Estado nacional en el que existía una relación entre “Estado, representación y sociedad civil de tipo nacional-popular o político céntrico”.³⁶ Según este autor, el nuevo modelo societal post-industrial globalizado que existe como principio o combinado con el anterior, tiene como ejes centrales el consumo, la información y la comunicación, y es en torno a estos ejes básicos que se constituyen nuevos tipos de actores sociales, entremezclados o coexistiendo con los actores provenientes del modelo societal industrial-estatal transformados.

³³ Ver al respecto Fernando Calderón, 1995, p. 114

³⁴ Ver Fernando Calderón, 1995, p. 110.

³⁵ Esto es demostrado en los trabajos de Arturo Escobar, Sonia Álvarez y Evelina Dagnino, 2001.

³⁶ Ver Manuel Antonio Garretón, 2001, p. 12.

Sin embargo, el mismo Melucci que inicialmente participó en la formulación del concepto y que promovió la discusión acerca del carácter novedoso de los movimientos sociales, posteriormente reconoce que es una discusión completamente inútil, pues de lo que se trata no es de comparar los nuevos movimientos sociales con los viejos y ver cuáles son mejores, sino más bien de reconocer las dificultades para explicar los comportamientos y las formas empíricas de movilización, de conflicto y protesta, que las categorías de la sociedad capitalista e industrial no pueden explicar del todo. Como dice Moncayo, con el concepto se describe probablemente una realidad novedosa que, sin negar la existencia de nuevos movimientos sociales, su revalorización corresponde más a la fuerza que adquiere su designación, siendo la principal novedad el cambio de paradigma en el discurso habitual de la intelectualidad en el campo de las teorías sociológicas.³⁷ No obstante autores como Guido y Fernández, que les define su adscripción a la perspectiva marxista, al realizar una sistemática defensa de esta perspectiva de interpretación de los procesos sociales frente al movimiento teórico surgido en relación con las teorías de la acción colectiva, han señalado que estos “nuevos paradigmas” modifican en profundidad antiguos puntos de vista y conceptos que han demostrado su pertinencia como el de clases, sistema de dominación, hegemonía o cambio revolucionario sobre los que se ha sustentado el análisis de la dinámica social.³⁸

En la interrogante de por qué luchan los actores sociales hoy en día, se puede aseverar que, de acuerdo con lo expresado por Calderón, el supuesto normativo de la democracia se ha convertido prácticamente en valor consensual en América Latina; este valor pone en el centro el reconocimiento que los derechos humanos constituyen el fundamento ético de la democracia, la que se define no solamente como una cuestión política y social clave, sino también cultural. Por la experiencia de las últimas dos décadas, pareciera que el apremio de los actores sociales está centrado en la ampliación de derechos o en la vigencia plena de regulaciones constitucionales, en donde se recupera el valor de la democracia como signo inequívoco de consolidación, que en muchos casos ha sido letra muerta como en el caso de la legalidad mexicana.

Pareciera entonces que la lógica de la acción colectiva en nuestros países oscila entre las nociones de cambio social y cultural, por un lado, y las que están insertas en la

³⁷ Las opiniones y saldos de esta discusión *cfr.* Alberto Melucci, 1998, p. 367, y en Moncayo, 1999.

institucionalización o funcionamiento del sistema político por otro, ambas como visiones alternativas que podrían permitir recuperar una ciudadanía avasallada, bajo el signo de la complejidad y pluralidad que vienen adquiriendo nuestras sociedades

Desde una postura propiamente antropológica, otros estudios sobre los movimientos sociales, abogan por un enfoque propiamente cultural en el análisis de los movimientos sociales, a los que reconoce como agentes vitales de la producción cultural.³⁹ Para estos autores, es fundamental el análisis de significados y prácticas, generalmente implícitos en los ensamblajes culturales de la política. Esta propuesta parte de reconocer que la ciencia social convencional no ha explorado de manera sistemática los vínculos entre cultura y política y que al entenderse en diversos campos del saber a la cultura como algo estático, se ha contribuido a hacer invisibles las prácticas culturales cotidianas como la fuente de prácticas políticas. Para estos autores, el cuestionamiento a las relaciones sociales de desigualdad y la lucha por transformarlas por parte de movimientos sociales, los lleva a plantear que es posible poner en práctica una política cultural alternativa que redefina los significados de las prácticas sociales.

Al hacer un balance del significado de las luchas políticas en Latinoamérica en los últimos años y al debatir los parámetros de la democracia y las fronteras que deben definir el escenario político, reconocen que éstas se libran en torno a posibles planos democráticos alternativos en el que los movimientos sociales juegan un papel decisivo. Por ello establecen que los movimientos sociales constituyen un escenario fundamental para comprender la manera en que se constituye, en la práctica, ese enmarañamiento de lo cultural y lo político. Así por ejemplo en esta discusión se expresa una concepción alternativa de ciudadanía, que considera no solamente la redefinición del sistema político sino también de prácticas sociales y culturales que pudieran dar lugar a un ordenamiento democrático de la sociedad como un todo.

1.2.3. El enfoque de los movimientos populares

Desde la perspectiva de la pertinencia de los enfoques vinculados al análisis de las transformaciones que en los últimos años se han venido operando en los diversos países,

³⁸ Ver al respecto Rafael Guido y Otto Fernández, 1989.

³⁹ Ver Arturo Escobar 1992, y Arturo Escobar, Sonia Álvarez y Evelina Dagnino, *Op. Cit.*

particularmente en América Latina, cuando se analizan las características que mantienen los regímenes políticos en su situación de democracia o de autoritarismo y la manera en que los movimientos populares han incidido en esa transformación, adquieren relevancia desde la teoría política conceptos como el de “sociedad civil” o el de la “transición a la democracia”, para denotar los cambios que en lo político se han producido en la relación Estado-sociedad, no sin dejar de reconocer la ambigüedad y vaguedad del concepto de sociedad civil o de los peligros que acompañan a la llamada transición a la democracia.⁴⁰

Una concepto que busca atender las particularidades que adquieren los movimientos sociales en el contexto de la adscripción que adopta la política neoliberal es el concepto de sociedad civil útil para definir a todos aquellos actores sociales que se oponen a las prácticas políticas y proyectos desarrollados por un Estado autoritario, y que en ese proceso se inscriben en la perspectiva de buscar la democratización de los regímenes políticos que la sustentan. Concretamente Lechner señala que el concepto de sociedad civil adquiere relevancia en el discurso de la izquierda latinoamericana con el fracaso de la concepción revolucionaria de la acción política, para refugiarse en la propuesta “gramsciana” y ver desde ésta óptica la relación entre lo social y lo político y de paso superar la concepción “leninista” lo que la obliga a repensar la esquivada noción de lo popular

Para el caso de México la discusión sobre las particularidades que han adoptado los movimientos sociales en el marco de la crisis ha sido retomada por diversos autores, quienes analizan las formas de expresión del movimiento social en el país en el contexto de la transformación que experimenta el sistema político en la década de los ochenta, bajo la tesis de que existe una retroalimentación de los movimientos populares de la época de crisis y las respuestas institucionales a los planteamientos del movimiento social. Esta propuesta es desarrollada por Foweraker y Craig para quienes el punto de partida es el reconocimiento de las expresiones de la acción colectiva como movimientos populares y no como movimientos sociales, al entender que la base de la lucha social la define el “pueblo” como actor político.⁴¹ Estos autores se apoyan en el reconocimiento de las transformaciones que se produjeron en las últimas dos décadas en la sociedad mexicana y su sistema político, analizan y caracterizan las expresiones que de los movimientos sociales en el país,

⁴⁰ Sobre las acepciones del concepto de sociedad civil y su adopción por la izquierda latinoamericana ver, Norbert Lechner, 1996, p.11.

⁴¹ Ver al respecto la compilación de trabajos de Joe Foweraker y Ann. L. Craig, 1990.

planteando como eje de reflexión la capacidad de los movimientos populares para incidir en cambios institucionales.

Desde la perspectiva, el movimiento popular estaría definido no tanto por los intereses que representa como por las demandas que plantea. Por su parte la construcción de sus demandas estaría definida en el proceso de organización popular, no tanto por las estrategias escogidas o su composición de clase sino por sus prácticas políticas expresadas en relación con las instituciones estatales, los partidos y otros actores de la sociedad civil. Por tanto, la noción de movimiento popular no expresa, según estos autores, el “nacimiento de la sociedad civil” sino la creación de sujetos políticos en la sociedad civil. De ahí que, de acuerdo con la perspectiva planteada por Foweraker y Craig, en los llamados movimientos sociales no puede existir una esfera social separada o externa en relación con el sistema político.

Tendríamos por otra parte los señalamientos establecidos por Zermeño en relación con las condiciones que para la acción social enfrenta la sociedad mexicana y sus organizaciones sociales, en el contexto de las transformaciones que se empezaron a concretar desde la década de los ochenta y durante los noventa en la relación del Estado con la sociedad.⁴² Esta propuesta parte de reconocer que la crisis del progreso de estos años, aunada a las acciones neoliberales del gobierno mexicano han provocado una fuerte desorganización social expresada en procesos de atomización, polarización y depauperación que se ha traducido en una situación de desesperanza y desintegración, lo que define como una situación de anomia defensiva.

Esta propuesta se deriva de la discusión que se desarrollaba al interior de la sociología latinoamericana a finales de la década de los ochenta, en la que se cuestionaba si, dado este contexto de negatividad, deterioro, destructividad y anomia social, era aún posible pensar en un modelo teórico global de la acción social dada la heterogeneidad y fragmentación de los movimientos sociales, y por tanto, si se asistía a la generación de un nuevo sistema de acción histórica y de creación de sujetos a partir de la resignificación simbólica de identidades comunes.

Navegando a contracorriente, al final de la década, Zermeño reconoce que en las ciencias sociales predomina un enfoque que se resiste a ser calificado como una sociología

⁴² Ver Sergio Zermeño, 1989, p. 115.

negativa el cual se esfuerza por reconstruir coherentemente, en términos de movimientos sociales y de recreación de identidades colectivas, el mundo de los excluidos. Concluye sin embargo que en los movimientos sociales lo que existe mas bien es “una lógica instrumental, agudizada por los requerimientos de sobrevivencia en los que se reclama la participación no la ruptura, apoyos del Estado y no más autonomía, un espacio en la cultura moderna y no la reducción en el folclore”.⁴³

En este mismo tenor, en un nuevo trabajo este autor hace una síntesis de las expresiones de la acción social que se produjeron al final de la década de los ochenta y los noventa, se pregunta si la sociedad se organiza o se desorganiza, se fortalece o se debilita tomando como base la configuración de la acción social al final de esa década considerando el cisma que provocó a mediados de la década anterior la emergencia zapatista.⁴⁴ En esta reflexión Zermeño mantiene su postura en el sentido de que la sociedad en su relación con el Estado mantiene un afán de buscar el descarrilamiento de los actores colectivos por la vía del vaciamiento y cooptación de líderes, dada la tensión existente entre la participación partidista legal y el permanecer en la base de los movimientos.

Resulta necesario, por tanto, reconocer los cambios que el nuevo contexto plantea en relación con las condiciones bajo las cuales se construye hoy en día la acción social y preguntarnos en qué difiere de la modalidad bajo la cual se construía en el pasado, en términos de la relación que mantenían los actores sociales con el Estado y la que se viene imponiendo en el marco de la transformación de éste último. Es también fundamental analizar las formas de expresión y vertientes de la acción en términos de qué buscan o por qué luchan los actores sociales, así como el sentido y alcances de sus luchas. Esto nos permitirá hacer algunas precisiones en cuanto a las formas de expresión de la acción colectiva desarrollada por actores y sujetos del medio rural mexicano en el periodo de la aplicación de la reforma rural neoliberal.

La presencia de viejos actores, muchos de ellos herederos de las anteriores formas de propiedad, sigue siendo una realidad. La perspectiva de la democracia liberal representativa sustentada en la participación del individuo, es la que viene sentando sus reales como la concepción dominante en todo el mundo. Así, en la articulación de las nuevas formas de poder, el Estado pareciera prescindir cada vez más de los viejos sistemas de intermediación

⁴³ Sergio Zermeño, *Op. Cit.*, p. 121.

política determinados por los cacicazgos locales, o en todo caso pareciera que estos adoptan nuevas formas en función a la razón empresarial que parece determinar el rumbo de la sociedad. De ahí que reconocer a los actores en conflicto que luchan por imponer una dirección distinta, resulta una tarea difícil. Para el caso de las nuevas configuraciones que tiende a adquirir la sociedad rural, cabría preguntarse entonces: ¿Es la empresa rural o la agroindustria y las relaciones y procesos que generan, el nuevo elemento articulador de las relaciones sociales y de poder en el medio rural? y, por tanto, ¿Hasta qué punto este eje articulador se constituye en el elemento que garantiza la reproducción social o solamente en un elemento desarticulador y diferenciador que no tardará en mostrar sus limitaciones?

1.3. La reforma rural y la construcción de la acción social

La política neoliberal en México se ha desarrollado ya durante cuatro administraciones sexenales consecutivas, las que se han esforzado por mantener, sin grandes variantes, la aplicación de un modelo de economía para el país. A lo largo de este periodo se ha consolidado en el poder un grupo, que al margen de signos y colores partidarios, se caracteriza por sus estrechos vínculos con los círculos de poder económico a nivel internacional. A lo interno este grupo proclama, sin cortapisas, la defensa del modelo económico y busca apoyarse en los grupos empresariales más poderosos del país.

En este apartado buscaremos mostrar, en términos muy generales, las particularidades bajo las cuales a lo largo de veinte años se ha venido imponiendo el modelo económico neoliberal en nuestro país y las formas bajo las cuales se ha concretado en el medio rural, señalando las decisiones adoptadas y la forma en que participaron las organizaciones campesinas en el proceso de reforma rural. De igual manera se hace una exposición de la situación de crisis a la que se condujo al sector rural antes y durante las reformas y la incertidumbre a la que fueron sometidos los campesinos mexicanos, en particular los productores de granos en el contexto de un Estado “desregulado”, así como las respuestas y búsqueda de opciones que, frente a los retos que les plantea el modelo económico, han tenido que poner en marcha las organizaciones campesinas para poder existir.

⁴⁴ Cfr Sergio Zermeño, 1997, p. 333.

1.3.1. De los programas de ajuste a las reformas estructurales

La aplicación de la política neoliberal en nuestro país ha tenido dos momentos claramente diferenciados. El primero asociado a la crisis de la deuda externa que estalló a partir de 1982 y que se puede reconocer a través de los programas de ajuste que el gobierno impulsó en razón de las recomendaciones de la banca internacional, durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Estas recomendaciones, que tenían como objetivo reducir el déficit público del gobierno, estuvieron orientadas a la desincorporación y venta de las empresas paraestatales que en su momento se consideraron no prioritarias, así como a la reducción de los subsidios que el Estado venía canalizando hacia diversos sectores de la economía.

El cambio de modelo se había iniciado desde principios de los ochenta, con el relevo de los “políticos” por los “tecnócratas” en el gobierno. Entre los acuerdos impuestos al gobierno mexicano (en el marco del llamado Consenso de Washington) durante la crisis de la deuda, fue el de cambiar su modelo de economía-país, compromiso que incluyó a prácticamente todos los países endeudados. Las políticas de ajuste recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) buscaban una reducción del déficit público, por la vía de la disminución del gasto corriente y la inversión pública, además del incremento de impuestos a las tarifas de bienes y servicios. El otro rasgo del programa de ajuste fue el cambio drástico en la fijación del salario mínimo con respecto a la inflación, lo cual se tradujo en una reducción de los ingresos. La aplicación de estas medidas, se pensaba, tendría costos relativamente pequeños en términos de crecimiento y del poder adquisitivo de la población, y se esperaba recuperar las históricas tasas de crecimiento previas al ajuste. Sin embargo el resultado no fue el esperado en virtud de las presiones ejercidas para mantener el servicio de la deuda externa.

Los costos principales de la adopción del modelo económico en esta primera etapa (1982-1994), fueron mas bien políticos al provocarse un cisma en la clase política mexicana que hasta ese momento se había aglutinado en torno al partido de Estado, el Revolucionario Institucional. Ello generó que algunas posiciones nacionalistas se agruparan en torno al neocardenismo y se organizaran en una perspectiva opositora al gobierno, atrayendo a amplios sectores del movimiento popular y de la izquierda. El neocardenismo significó en su momento la posibilidad de canalizar el descontento acumulado entre amplios sectores de

la población, como resultado de la política aplicada en el sexenio anterior. A ello se sumó el amplio movimiento de la sociedad civil en la ciudad de México después de los sismos.

Pese al cuestionamiento realizado por el neocardenismo a la legalidad y legitimidad con que la corriente político-ideológica abanderaba la perspectiva neoliberal a finales de la década de los ochenta, ésta se impuso por la vía del fraude electoral y el respaldo de los centros de poder económico, financiero e ideológico. El neocardenismo por su parte, fue incapaz de impedir la consolidación del nuevo gobierno ilegítimo, como también lo fue para combatir las iniciativas que este lanzó ya instalado en el poder, entre las cuales destacaban el proyecto de liberalización comercial y el programa de reforma rural que impulsó con fuerza en los años posteriores.

La política de ajuste se mantuvo y profundizó en los años siguientes con el inicio del desmantelamiento de la infraestructura y empresas propiedad del Estado. Con el arribo de Salinas al gobierno se afinaron las propuestas acerca de cómo hacer frente a las presiones del exterior. Su administración transformó el déficit público en gran medida por el aumento de la recaudación fiscal, reorganizó y redujo de manera significativa la deuda externa y los índices de la inflación y se estabilizaron los salarios siguiendo la política “pactista” iniciada desde el sexenio anterior. El impulso de las políticas adoptadas en el país dentro de la “ortodoxia neoliberal”, hicieron de hecho que los organismos financieros internacionales reconocieran a México como el “alumno modelo” del experimento neoliberal, por seguir sus recomendaciones, toda vez que fue en nuestro país donde estalló la crisis de la deuda externa.⁴⁵

En esta primera etapa de la aplicación del modelo, que duró por lo menos diez años, fue un periodo en el que se crearon las bases para reorientar la economía hacia el exterior. Bajo el planteamiento de buscar el equilibrio de las finanzas públicas, se desreguló también el sector financiero al tiempo que se abrieron numerosos sectores y ramas de la economía a la apropiación por parte de inversionistas nacionales y extranjeros por la vía de la privatización, concesiones o de subsidios velados, dándose así un proceso de concentración sin precedente del poder económico en unos cuantos grupos empresariales, lo que significó

⁴⁵. Respecto de este reconocimiento de la aplicación de la política neoliberal en México, ver: José Antonio Ibáñez Aguirre *et al*, 1988.

por otro lado, la pérdida de empleo y el consecuente empobrecimiento de importantes sectores de la población.

La consolidación de la propuesta neoliberal –pese a los problemas que gravitaban sobre ésta durante la década de los noventa–, se apoyó en un sistemático cuestionamiento a las posturas críticas que diferentes actores sociales y políticos realizaron en su momento al modelo neoliberal, estrategia para la cual el régimen contó con las voces y plumas de académicos e intelectuales, calificando las posturas nacionalistas y de defensa de la soberanía como anacrónicas y atrasadas. Así, en diferentes espacios sociales e institucionales a mediados de la década ganaba terreno la perspectiva del pensamiento único postulada por Estefanía, buscando con ello el descrédito y desprestigio de las posturas alternativas.

Las principales ideas sobre las cuales se consolidó el salinato frente a algunos de los cuestionamientos de las posturas opositoras y que orientaron el carácter de su régimen, eran, *grosso modo*, las siguientes: el grave error que podrían cometer los mexicanos al marginarse de los procesos económicos mundiales en un mundo cada vez más globalizado; la necesidad de generar riqueza en el país para estar en condiciones de repartirla posteriormente, y finalmente, el señalamiento de que lo más importante era concretar las reformas económicas, pues los cambios políticos vendrían después. Así, para la segunda mitad del sexenio de Salinas su administración parecía incuestionable, toda vez que el neocardenismo –principal posición opositora a la política neoliberal–, parecía ceder ante los señalamientos de su intransigencia realizados por parte de los ideólogos del régimen.

Para la segunda etapa del gobierno de Salinas se precisan las formas y contenidos del proyecto neoliberal y de su aplicación en la sociedad mexicana, mismas que en lo fundamental se han mantenido en los años posteriores. Para justificar el proceso de desmantelamiento de los activos del Estado, a principios de la década de los noventa se impulsó como proyecto la reforma del Estado, que de acuerdo con el mismo Salinas tenía el sentido de superar la situación de ineficiencia e injusticia en que incurría para con la sociedad dada su condición de desmesurado crecimiento de los años anteriores. Dicha estrategia, sin embargo, tenía el sentido de canalizar una importante masa de recursos a la intervención privada en detrimento de la pública, bajo el supuesto de la capacidad de los grupos empresariales para dar mayor dinamismo a la actividad económica del país. Estas

iniciativas se impulsaban bajo el argumento de la imposibilidad de sustraerse a los cambios y exigencias que imponía el contexto mundial, así como de participar en las corrientes mundiales de comercio. Así, a finales de 1993 se concretó la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, instrumento que de acuerdo con ese discurso “garantizaría la entrada del país al primer mundo”.

El otro rasgo de esta nueva etapa del modelo, fue la puesta en práctica de una política social que buscaría acercar recursos y mejores condiciones sociales a una creciente población empobrecida y con pocas expectativas de empleo. De este modo, habiendo resuelto en lo fundamental las presiones de la crisis de la deuda, a partir de 1990 se impulsa un amplio programa de canalización de recursos que bajo criterios clientelares se hacían llegar hacia los sectores y regiones focalizados como pobres. De hecho muchos de los recursos que se utilizaron para los programas de “combate a la pobreza” fueron derivados del programa de privatización de las empresas del Estado que se consolidó en esos años. Este elemento de la estrategia neoliberal impulsada a partir de los noventa, que no ha cambiado en lo fundamental en los gobiernos subsiguientes, ha sido calificada de populista, ya que ha buscado movilizar a los pobres bajo una pretendida solución a sus problemas de pobreza.⁴⁶

Paralelamente, las presiones de la sociedad civil abogaban por una mayor democratización del sistema político. Durante este periodo se lograron diversas reformas en el plano de la legalidad electoral que llevaron a una mayor credibilidad y transparencia de los procesos político-electorales. Este proceso de reforma legal ha sido acompañado por el surgimiento de un amplio pluralismo político y social que se expresa en diferentes ámbitos y niveles. Estos cambios bien pueden explicarse por la emergencia durante las últimas dos décadas de una sociedad civil cada vez mas participativa y cuestionadora. En diferentes momentos, ésta ha sido capaz de arropar las expresiones políticas que bajo la forma de movimientos político electorales o de insurgencia armada, han cuestionado al proyecto político de la elite neoliberal en nuestro país.

No obstante que las expresiones del movimiento social –ya sea bajo la expresión del neocardenismo o neozapatismo– hayan carecido de fuerza suficiente para revertir el modelo económico y político dominante, es importante reconocer que fueron los zapatistas quienes

⁴⁶ Al respecto de la política social de los gobiernos neoliberales, ver: Bertha Lerner, 1996.

al final de los años noventa realizaron de manera más contundente la crítica al modelo neoliberal. Con el concepto neozapatismo denotamos la expresión de la confluencia de intereses y pluralidades que se produjo en el país con el surgimiento público del EZLN en 1994. El neocardenismo también significó un proceso de confluencia que pugnó, desde fines de la década de los ochenta, por poner fin a las relaciones autoritarias en el sistema político mexicano.⁴⁷ En términos generales, podemos decir que a lo largo de estos veinte años ha habido un sistemático cuestionamiento a la política neoliberal desarrollado por el movimiento social o político y/o por parte de académicos y aunque no hayan logrado modificar en lo fundamental el proyecto dominante, constituyen un importante referente en la perspectiva de construir una propuesta alternativa de sociedad que vea por los intereses de los grupos mayoritarios en el país.

Visto en su conjunto, el resultado de la aplicación de la política neoliberal en México durante estos veinte años ha implicado, en nuestra opinión, un proceso de concentración de la riqueza en un pequeño grupo de empresarios, mientras amplios sectores de la población han visto reducidas sus expectativas sociales. El desempleo, la migración y la inseguridad de amplios sectores son los lastres principales que deja un modelo económico que se propone como vía para superar los rezagos sociales, pero en su lugar provoca todo lo contrario. En el plano político lo que ha caracterizado a los gobiernos neoliberales es la subordinación que han mantenido con respecto al exterior buscando adaptarse al consenso de Washington. Los gobiernos neoliberales de nuestro país han tenido todo el respaldo del gobierno de Estados Unidos para hacer frente a las crisis del modelo y a los embates a los que ha sido sometida la economía nacional en el contexto de las crisis financieras internacionales

1.3.2. La reforma rural en la perspectiva neoliberal

Discutiremos a continuación los elementos fundamentales bajo los cuales se ha expresado la adopción del modelo neoliberal en el medio rural mexicano, asumiendo lo complicado que resulta hacer una síntesis del significado e implicaciones de la política hacia el sector rural impulsada en el país en los últimos veinte años y considerando la gran cantidad de

⁴⁷ Ver al respecto Xochitl Leyva y Willibald Sonnleitner, 2000 y John Gledhill, 1998.

documentos generados al respecto. Esta tarea, sin embargo, resulta fundamental para reconocer las particulares formas en que se aplicó en una región agrícola por excelencia como es La Frailesca, en el marco del programa reformador del conjunto de las instituciones que conforman el Estado mexicano.

Como ya ha quedado establecido, con la crisis de la economía nacional de 1982 se definen un conjunto de estrategias que apuntaban a la refundación del Estado y que en una primera etapa tenían como propósito estabilizar la dinámica de la acumulación, buscando el saneamiento de las finanzas públicas, el control del crédito y la inflación. Ello conducía a enfatizar un conjunto de reformas tendientes a privatizar los recursos del Estado y al rediseño de nuevas formas de alianza y hegemonía con la sociedad nacional.

En virtud de la situación de crisis que venía afectando directamente a la producción agrícola, se planteaba como un reto y necesidad el crecimiento agropecuario, el cual sería sobre la base de eliminar el intervencionismo del Estado y de regulaciones extremistas sin metas claras y definidas. El cambio agrario gozaría de éxito si se fundaba en una lógica de apertura y de modernización capitalista flexible y competitiva para evitar distorsiones de los procesos económicos, lo que sería posible en la medida en que imperara la lógica del mercado con la participación de agentes competitivos y eficientes.

De este modo, las posibilidades de inserción y crecimiento de la agricultura eran patrimonio de una expansión capitalista que debía tener bases más racionales, para evitar dinámicas de inestabilidad en el sector y al mismo tiempo abatir rezagos y pobreza sobre la base de buscar la eficiencia y su competitividad. De acuerdo con la interpretación propuesta por Fernández, la agenda agraria se debía basar en privatizar, desestatizar y despolitizar el tema agrario para lograr la transformación de la agricultura nacional, al mismo tiempo que se debían redefinir las formas de participación y representación de los actores sociales rurales.⁴⁸

Es posible reconocer dos fases del salinato claramente diferenciadas en la aplicación de las reformas. En un primer momento buscó la adecuación del gasto en el sector agropecuario al programa de ajustes macroeconómicos que de hecho ya se venía impulsando desde el gobierno precedente y que en lo general se tradujo en una abrupta caída del programa de los subsidios y financiamientos hacia el sector. En los hechos, la

⁴⁸ Ver al respecto Otto Fernández, 1994, p. 68.

política salinista subordinó al sector agropecuario al plan de estabilización, abandonando en definitiva el viejo sueño de los gobiernos posrevolucionarios de la autosuficiencia alimentaria. En esta primera etapa también, el gobierno insinuó que buscaría transformar y ajustar el viejo aparato de poder clientelar y corporativo enraizado en el campo, aunque en realidad evitó desmantelarlo o sustituirlo.

Esta etapa de la política neoliberal en el medio rural tuvo un impacto fundamentalmente de carácter económico. Entre los principales efectos podemos señalar la reducción del monto y volumen de los subsidios, la disminución drástica de la intermediación bancaria y por tanto la desaparición de las tasas de interés preferencial que caracterizaban los financiamientos y la transición a modelos privados de comercialización. Aunado a los ajustes macroeconómicos, paralelamente se producía una apertura indiscriminada del mercado lo que se tradujo en una concentración del ingreso entre los grandes productores y los intermediarios del agro.

La segunda etapa la podemos ubicar al inicio de los años noventa, a partir de que el gobierno emprende la batalla para reformar el artículo 27 constitucional y orienta su política a la aprobación del TLCAN. La reforma al orden constitucional que concluye en 1992, dio un giro a la concepción jurídica preexistente de la propiedad de la tierra, de la relación entre los campesinos y el Estado y sobre la perspectiva de las funciones de este mismo. Sin temor a equivocarnos, podríamos decir que fue la reforma más importante impulsada por el sexenio de Salinas ya que perfiló el proyecto político e ideológico del grupo conservador que se había hecho del poder estatal en México, contra lo que había sido la política agraria de más de setenta años. Este fue el periodo más importante en el impulso de un conjunto de reformas que impactaron severamente al medio rural (constitucionales, administrativas y económicas), cuya orientación trastocó radicalmente la concepción sobre la propiedad de la tierra y por consecuencia el papel del Estado en la agricultura.⁴⁹

Esta segunda etapa mostró, de hecho, la profundidad de los cambios que impactarían al sector. La reforma al régimen agrario sentó las bases para transformar la tierra ejidal en propiedad privada y liberarse de trabas legales que imponía el marco constitucional, al mismo tiempo que buscó dar certidumbre jurídica al régimen de propiedad y dejar terminado el reparto agrario. La aprobación del TLCAN, por su parte, impuso a la

⁴⁹ En relación con el alcance de las reformas salinistas, ver Arturo Alvarado, 1996, p. 138.

agricultura mexicana un nuevo contexto internacional. Se buscaba forzar a los agricultores mexicanos a participar en los circuitos productivos de competencia internacional, haciendo omisión de las condiciones desventajosas como los productores y de la diversidad de objetivos de la producción nacional.

Ya casi al final del sexenio y para hacer frente a los señalamientos de las condiciones desventajosas de la agricultura en relación con los subsidios que los gobiernos signatarios del TLCAN otorgaban a sus agriculturas, aparece el Procampo, un programa a quince años que se proponía canalizar subsidios y apoyos directos a los productores. Este programa si bien fue recibido con beneplácito por parte de distintos especialistas y actores rurales al significar una nueva etapa en la orientación del gasto y de apoyo a los productores, fue severamente cuestionado en el plano político al denunciársele sistemáticamente como un programa electorero.

Por la contundencia de los cambios que se produjeron en la administración de Salinas, podemos decir que su sexenio sentó las bases de la política rural y de canalización de recursos al campo que impulsarían los gobiernos posteriores. Esta reforma afectó profundamente al modelo socioeconómico rural y las relaciones preexistentes entre los distintos sectores y grupos. La reorganización de la propiedad y de los productores es un cambio que ha trastocado los cimientos de las organizaciones gremiales tradicionales sobre las que se sustentó el anterior modelo productivo y en este periodo, sin duda se sentaron las bases para su transformación.

1.3.3. El fin de la alianza Estado–campesinos

Entre 1940 y 1980 la vida política e institucional en México estuvo marcada por la organización corporativa y sectorializada de los obreros, campesinos y sectores populares, lo que daba sustento al régimen político del periodo bajo el sistema de partido único, periodo que coincide con el modelo económico de industrialización sustitutiva de importaciones. Para el impulso de este modelo, los actores políticos fundamentales resultaron ser el Estado y su partido, mientras que los actores que se expresaban como sociedad tenían en el plano político un papel secundario. Este vínculo planteaba la situación contradictoria de inclusión de los actores en muchas de las iniciativas impulsadas por los

sucesivos gobiernos, pero al mismo tiempo implicó su exclusión como sujetos con capacidad de decisión, ya que por lo general, el Estado se encargaba de decidir por ellos.

El agotamiento, a principios de la década de 1980, del modelo económico impulsado por más de cuarenta años por el gobierno sobre la base de la construcción de la alianza entre el estado posrevolucionario y la sociedad mexicana, cuestionó las bases sobre las cuales operaba el proyecto social impulsado por las elites políticas en el país, proyecto que contaba con la aprobación y participación de los sectores populares, obrero y campesino en la estructura misma del partido de Estado.

Cierto es que esta alianza implicó, en grados diversos, la subordinación de las organizaciones gremiales –construidas de facto– respecto al Estado, lo cual constituyó entre ambas entidades una relación corporativa, en la que los sujetos que ostentaban la representación de las organizaciones sociales y quienes representaban al Estado, compartían visiones, proyecto y prácticas políticas que, a la postre, resultaron perniciosas para el funcionamiento pleno del modelo económico que las sustentaba. Ambos actores constituyeron la elite política de este país y dieron lugar al sistema político corporativo que definió la relación Estado–sociedad que caracterizó al régimen político anterior del México contemporáneo. Como muestra de esta nueva actitud expresada en la sociedad mexicana se puede contar la amplia participación popular después de los sismos de 1985 en la ciudad de México y la movilización ciudadana en torno al proceso político-electoral de 1988.

Esta relación corporativa y las formas de representación y participación a que dio lugar, comienza a cambiar a mediados de la década de los ochenta como resultado de la presencia de un persistente movimiento popular expresado desde las anteriores dos décadas, pero ante todo por la presencia desafiante de nuevas expresiones de un movimiento social y político que cuestionaba de manera radical el control corporativo desarrollado por las organizaciones sectoriales ligadas al Estado mexicano. En su lugar se pone en el centro la capacidad de la sociedad para organizarse al mismo tiempo que para reivindicar sus derechos ciudadanos. La sociedad rural no se quedaba atrás en ese despertar y venía construyendo, de hecho, diversos procesos organizativos que, al poner en el centro la lucha por la “apropiación del proceso productivo”, reivindicaba para sí una nueva forma de relación con el Estado, al tiempo que muchos otros grupos mantenían sus demandas agrarias.

El ascenso de Carlos Salinas al gobierno y el impulso de su programa de reformas, tenía entonces en este despertar social un dique para la concreción de sus iniciativas. No obstante que las reformas buscaron impulsarse con el apoyo de las organizaciones corporativas tradicionalmente vinculadas al Estado, después de éstas la relación entre las representaciones campesinas y el Estado ya no siguió siendo la misma. En adelante, los actores sociales prioritarios en el medio rural para desarrollar el programa de transformación del campo lo constituyeron los sectores empresariales aptos o con disposición para participar en el modelo de desarrollo agropecuario orientado hacia la agro exportación. En el nuevo esquema no cabían la mayoría de las organizaciones nacionales que se habían construido sobre la base de mantener viva la demanda agraria; tampoco cabían muchas organizaciones campesinas regionales que habían cifrado sus expectativas de sobrevivencia en torno a la producción de alimentos.

En el periodo álgido de discusión y definiciones en torno a la propuesta de reforma agraria salinista orientada a darle un giro a la concepción tradicional del régimen de propiedad de la tierra, aunque la mayoría de las organizaciones campesinas reconocían que la iniciativa gubernamental implicaba el abandono de la relación y el compromiso histórico con los campesinos por parte del Estado, no fueron capaces de oponerse a la propuesta gubernamental. Como reconoce Sánchez al hacer un balance del proceso “a pesar de que los campesinos tenían voz y voto, su influencia fue eclipsada por los actores institucionales y por los actores empresariales, con mas experiencia en el proceso de concertación”.⁵⁰

Pese al interés de apoyarse en las organizaciones campesinas o al menos de neutralizar la oposición que se pudiera generar hacia las iniciativas de reforma, lo cierto es que al grupo político impulsor de las reformas y a los intereses que representaba, les pesaban las formas burocráticas de representación y control de las organizaciones interlocutoras y abogaban por flexibilizar los procesos de producción y los mecanismos para la canalización de recursos al campo. De ahí que en esa etapa el gobierno ensayara formas diversas de organización que le permitieron canalizar apoyos al campo, al tiempo que avanzaba en dismantelar el aparato institucional que por años mantuvo una relación directa con los campesinos.

⁵⁰ Con respecto a esta discusión: *cfr* Armando Sánchez Albarrán, 1993, p. 188.

Las organizaciones campesinas aglutinadas en el Consejo Agrario Permanente que tuvieron la representación del sector (muchas de ellas surgidas de luchas agrarias históricas como la UNORCA o la CIOAC), en el periodo de la discusión de las reformas, fueron incapaces de mantener una posición contraria al programa privatizador y anticampesino del gobierno, no obstante que en su postura abogaban por mayores márgenes de autonomía política frente al Estado y cuestionaban las prácticas hegemónicas de organizaciones como la CNC que durante años monopolizaron la representación e interlocución de los campesinos frente al Estado y se mantuvieron bajo el manto protector del partido oficial.

Así, el reconocimiento que el régimen otorgaba a esta diversidad de agrupaciones no implicaba sin embargo la posibilidad de su consolidación como organizaciones autónomas; la suerte de su existencia estaba echada dada su subordinación al proyecto agrario gubernamental. La política de concertación impulsada por el régimen y que involucró a prácticamente todas las organizaciones independientemente de su signo ideológico, en realidad implicaba acallar las voces que pudieran oponerse a la puesta en marcha de la política de modernización del gobierno. En adelante sería la ruptura política con ese proyecto la única posibilidad de generar condiciones para poder madurar una propuesta alternativa que rompiera al mismo tiempo con las prácticas clientelares que alimentaron la relación Estado-campesinos durante años.

Las organizaciones sociales estaban emplazadas a modernizarse por la vía de abandonar el tutelaje que por años caracterizó su relación con el Estado. Ahora se les pedía corresponsabilidad en las iniciativas y proyectos de desarrollo, lo cual era al mismo tiempo condición para poder acceder a recursos. Algunas organizaciones campesinas empezaron a hablar de la necesidad de un “nuevo movimiento campesino” que, se pensaba, debía construirse a partir de adoptar una perspectiva propositiva y dialogante en el marco de la política concertadora del gobierno.

La crisis rural, sin embargo, también produjo nuevas relaciones entre las instituciones y los grupos políticamente activos en las localidades y regiones independientemente de su adscripción político-ideológica. Sin duda las reformas, así como muchas de las iniciativas impulsadas en ese marco, trastocaron las formas corporativas de relación del Estado con la sociedad rural, no obstante que en términos prácticos éstas no hayan desaparecido del todo. Las iniciativas de reforma del Estado impulsadas en el periodo -como la política de

descentralización institucional-, implicaron también cambios en el control que la federación ejercía sobre los estados, municipios y los grupos de poder local, toda vez que ésta era una demanda expresada por diversos actores sociales y políticos en las más diversas regiones del país.

Por tanto, si bien a lo largo de la década de 1990 el régimen no planteó de manera radical la eliminación de las prácticas corporativas y la democratización de las organizaciones, fue por que ello era útil para el impulso de su programa de reformas. No obstante, consideramos que se produjeron cambios dentro de las viejas formas de representación social dando lugar a configuraciones nuevas más acordes al modelo de desarrollo que se impulsaba, a pesar de que como dice Alvarado, “muchas de las organizaciones campesinas y sus líderes formados a la vieja usanza, pese a las reformas, siguieron manteniendo el control político de los productores en el campo”.⁵¹

1.3.4. Las organizaciones campesinas frente a la crisis

Como resultado de las políticas impulsadas hacia el sector rural en los últimos quince años, la mayoría de las organizaciones ejidales que surgieron durante la década de los ochenta enarbolando la lucha por la “apropiación del proceso productivo” se colapsaron como resultado de las políticas macroeconómicas neoliberales impulsadas por el Estado mexicano y la desatención de que fueron objeto. Muchas de estas organizaciones habían orientado sus estrategias a la producción de alimentos y granos y no a la generación de productos para la exportación, siendo los integrantes de éstas organizaciones, ejidatarios que generalmente destinaban su producción al mercado.

La razón principal de la crisis en que cayeron las organizaciones campesinas a principios de la década de 1990 tiene que ver con las condiciones desfavorables a que se enfrentaba la producción de los principales granos (maíz, frijol, arroz, trigo) cuyo precio se encontraba muy por debajo de los precios internacionales. A esto habría que agregar la situación de cartera vencida en la que se vieron la mayoría de las organizaciones como resultado de la baja rentabilidad de la producción, la que además de despojarlos de la

⁵¹ Ver al respecto Arturo Alvarado, *Op. Cit* , p. 138.

posibilidad de ser sujetos de crédito, provocó una severa disminución de las condiciones de vida de la mayor parte de los ejidatarios mexicanos.⁵²

Los esfuerzos de muchas de las organizaciones por ser escuchadas en su propuesta de reorientar la política de desarrollo rural cayeron en el vacío. La mayoría de las organizaciones de productores conformadas por ejidos o las uniones ejidales que se constituyeron en la década anterior, vieron debilitada su capacidad de gestión y negociación frente a la política del Estado. La reforma al artículo 27 constitucional vino a confirmar la orientación de la política agrícola y agraria del gobierno en el sentido de abrir las puertas para que las tierras ejidales ingresaran al mercado, que sumadas a la política económica de liberalización del comercio agropecuario, ponían de hecho en riesgo la sobrevivencia misma del sector ejidal como se demostró en los años posteriores.

Ante la difícil situación enfrentada por las organizaciones campesinas de productores, muchas de éstas avanzaron en la discusión de las posibles alternativas frente a los escasos márgenes de acción que dejaba la política agrícola y agraria del régimen. En las nuevas condiciones la disyuntiva no estaba muy alejada de una estrategia que buscara garantizar los espacios de autodefensa. La situación implicaba competir por los financiamientos para la producción y la inversión que en adelante se insertarían en la lógica y exigencias planteadas por el mercado, (Ramírez, 1992).

Esto significaba que en adelante la disyuntiva de las organizaciones ejidales para la producción, estaría marcada por alguna de las siguientes opciones: por un lado la necesidad de garantizar la reproducción por la vía de la producción de alimentos que asegurara el futuro de la familia campesina o bien, por el otro, la de construir opciones en una estrategia de diversificación y mejoramiento de sus estándares productivos que las llevaran a enfrentar con éxito las demandas planteadas por un mercado exigente y competido que les era impuesto.

Este proceso trastocó también al ejido al debilitarse como el espacio de organización por excelencia de los campesinos. Las razones de su debilitamiento se pueden reconocer en la diversificación del carácter de las actividades de la población aglutinada en torno a éste, nucleamiento no necesariamente definido por la posesión de un título de propiedad o por centrarse en las actividades vinculadas a la producción agropecuaria. Otra expresión de su

⁵² En relación con la situación de crisis que enfrentaron las organizaciones de productores en la década de los

debilidad fue la emergencia, en esos años, de nuevas figuras organizativas al interior de los ejidos, más dinámicas y flexibles para gestionar créditos o acceder a recursos como es el caso de las Asociaciones Civiles, las Sociedades de Producción Rural o las Sociedades de Solidaridad Social, figuras organizativas consideradas por parte de las agencias de financiamiento como más confiables y libres de ataduras políticas.⁵³

Como resultado de las políticas implementadas hacia el sector rural, la mayoría de las organizaciones productivas redefinieron sus estrategias productivas y de organización en el margen estrecho que les dejaba una reforma rural que las asediaba. Algunas optaron por el fortalecimiento de organizaciones locales, llegando a plantear la desaparición de las uniones ejidales para sustituirlas por uniones de sociedades de producción rural, más funcionales en el contexto de las modificaciones a la ley agraria. En otras, los trabajos de reorganización se orientaron en una dimensión más política al centrar sus esfuerzos en la participación de los productores en las instancias de poder local y regional como lo muestran las definiciones adoptadas por UNORCA en su Congreso de 1992.⁵⁴

Es así como prácticamente todas las organizaciones campesinas, oficiales o independientes, al margen de su tamaño o cobertura, se han visto obligadas a adaptarse a los cambios desarrollando iniciativas de diversa naturaleza, ya sea en el plano de las estrategias productivas, organizacionales o políticas. Y si bien en diferentes momentos a lo largo de la década de 1990 se generaron importantes movimientos de protesta por parte de las organizaciones campesinas, visto en su conjunto, éstas no han logrado modificar un ápice la política de desarrollo rural. Algunas organizaciones, sobre todo las que históricamente estuvieron ancladas a la tradición y prácticas corporativas, muestran poca capacidad de cambio para poder adaptarse a la transformación que se ha operado en el propio Estado. Otras, aun sin romper con sus prácticas y relaciones políticas, tienen ahora un importante dinamismo y están modificando sus objetivos y formas de acción, aunque ello a menudo les implique desgaste o ruptura con las bases que representan.

noventa, ver el artículo de Cristina Steffenn Riedemann, 1997, p. 118.

⁵³ Arturo Alvarado *Op. Cit.*, p. 157, reconoce que con los cambios "...se incrementó el desarrollo de nuevas formas de asociación de productores, tanto para la producción como para la exportación," Sin embargo ubica que este nuevo proceso organizacional no ha sido por iniciativa de las organizaciones campesinas sino promovido por el Estado.

⁵⁴ Sobre la definición adoptada por las organizaciones de productores, *cfr.*: Cristina Steffen, *Op. Cit.*, p.122.

El cuestionamiento al que fueron sometidas las formas de organización y de representación tradicional dio como resultado la proliferación de un sinnúmero de organizaciones de base regional que se configuraron bajo la forma de redes para gestionar apoyos a la producción. Estas redes se conformaron a partir del reconocimiento mutuo y las múltiples relaciones sociales y políticas existentes en las regiones, normalmente bajo la participación de núcleos familiares ampliados con la idea de gestionar y dar respuesta a problemas de la producción. Muchas de estas agrupaciones o redes tendieron a constituirse como organizaciones de segundo o tercer nivel, a menudo rompiendo con relaciones y prácticas corporativas, pero además conscientes de que solamente mediante la organización amplia sería posible enfrentar los retos y limitaciones que les imponía el modelo económico.

Podemos concluir entonces que la crisis de las organizaciones y las iniciativas de reforma para la reestructuración del sector, ha obligado a los actores sociales tradicionales del medio rural a su transformación y recomposición en los últimos años. Estos cambios atraviesan los diversos ámbitos de la vida campesina que van desde la unidad de producción hasta las estructuras organizativas más amplias de carácter regional e incluso nacional, pasando por los núcleos de organización económico-territorial surgidos en el marco del proceso de reparto agrario en el país: el ejido. Por su parte, la política hacia el sector rural en los años posteriores a las reformas, no ha dado señales de cambio sino que al contrario, se ha afianzado. Los productores ejidales de granos han seguido enfrentando la inexistencia de programas de fomento productivo, el incremento de las importaciones de granos, la escasez de créditos y las carteras vencidas. Esto ha conducido a que las organizaciones se hayan visto profundamente afectadas por la pérdida de eficacia, la disminución de su radio de acción y por tanto de representatividad frente a los productores.

II. MODERNIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN TERRITORIAL: LOS SALDOS DEL MODELO CORPORATIVO ESTATISTA

Hasta aquí hemos hecho un rápido recuento de las modalidades bajo las cuales, desde principios de la década de los ochenta, se impusieron un conjunto de transformaciones en las sociedades rurales, señalando que éstas en lo general estuvieron definidas por la forma en que nuestro país se vio obligado a concretar un conjunto de adecuaciones a la política económica en función de las iniciativas que buscaron insertarlo en los procesos y definiciones que, tanto en lo económico como en lo político, se establecían a nivel mundial. Estos cambios, como ya lo hemos señalado, implicaron modificaciones no solamente en las prioridades económicas en el país, sino también en las formas en las que en adelante se establecería la relación entre el Estado y la sociedad, tanto en las formas de representación social como en la construcción de nuevas formas de acción social y política por parte de actores sociales los que han tenido que adaptarse a las actuales condiciones incorporando otras prácticas sociales en sus relaciones cotidianas.

Las formas en que estas redefiniciones y cambios se han concretado en los espacios locales y regionales se han estudiado poco, o bien siguen siendo en la actualidad objeto de discusión. Desde nuestro parecer, la manera en que las sociedades específicas han asumido y participado de los cambios globales, implica entender la especificidad bajo las cuales se ha construido la dinámica de sus relaciones sociales (las cuales atraviesan otras dimensiones como son lo político y lo cultural) lo que sin duda ha tenido que ver con su historia social y productiva local, no solo reciente o del periodo inmediato anterior al de los cambios de referencia, sino también el construido en ocasiones a lo largo de una dilatada historia regional.

Para el caso de La Frailesca consideramos que este periodo se centra en dos procesos fundamentales que se retroalimentan entre si: por un lado, el conflicto que se desarrolla entre los actores o clases sociales fundamentales en torno a la disputa agraria y que deviene a finales de la década de 1970 en la construcción de un moderno sistema ejidal, base de la acción social desarrollada en dicho periodo, así como por la particular relación del Estado con la sociedad regional y, por otro, en el intenso proceso de modernización que se desarrolló en el ámbito técnico productivo, teniendo como marco una importante participación del Estado en la regulación y orientación de ambos procesos.

Enfocaremos ahora nuestro análisis en el reconocimiento de los elementos centrales que, a lo largo de por lo menos cincuenta años, contribuyeron a definir las características del proceso de conformación de la región Frailesca, tanto desde la perspectiva del significado que tuvo la acción estatal bajo el paraguas que le otorgaba la ideología y el discurso nacional estatista construido en los años posteriores a la fase armada de la revolución, como por las formas bajo las cuales los actores sociales aceptaron, se adaptaron o bien atenuaron muchos de los programas y acciones que en este periodo se impulsaron en función a como éstos favorecían o afectaban los intereses o aspiraciones de los actores. No obstante, para entender los antecedentes, señalaremos algunos elementos clave del proceso histórico de conformación regional

Así, el presente capítulo muestra la dinámica de la vida social de una región de base agraria y su proceso de transformación definido por las exigencias que le impuso el modelo de desarrollo nacional impulsado por más de cuarenta años conocido en lo económico como el proceso de industrialización autocentrado “por sustitución de importaciones”. En el plano político estuvo definido por un sistema estatal autoritario reconocido en lo formal por el predominio casi absoluto de un partido; rasgo central del sistema político de nuestro país en este periodo. Estos elementos determinaron en lo fundamental el sentido de la acción social y política de los actores en el nivel de la política nacional, la que se reproducía mediante diversos comportamientos y prácticas sociales en los ámbitos micro-regionales como se reconocerá en el caso de la región chiapaneca objeto de nuestro estudio: La Frailesca.

2.1. De la finca señorial a la constitución de los ejidos

Aunque nuestro interés estriba en reconocer aquí las modalidades bajo las cuales se produjo en la región el proceso de reconfiguración territorial por efecto de la demanda agraria, así como por las negociaciones y conflictos que se produjeron entre los principales actores durante lo que aquí denominamos como la fase de modernización estatista, bosquejaremos de manera sucinta los antecedentes de la configuración regional previa a esta etapa.

La construcción de la región implica reconocer un proceso histórico social atravesado por un conjunto de dimensiones económicas, políticas y culturales que se conjugan en un espacio de relaciones sociales particulares mediados por la dinámica de poder que, en si

misma, implica la disputa de los actores por el acceso y control de los espacios de la reproducción social. Por tanto, en el proceso de construcción socioterritorial de la región Frailesca se entrecruzan diferentes historias y procesos que han moldeado su territorio, lo que podemos reconocer, tanto si rastreamos su dilatada historia anterior, como la reciente.

2.1.1. Algunas claves de la configuración regional

Diversos testimonios dan cuenta de cómo desde tiempos prehispánicos, el actual territorio de La Frailesca formaba parte del señorío chiapaneca, uno de cuyos grupos se estableció en la Depresión Central de Chiapas, particularmente sobre los márgenes de los grandes ríos como el Grijalva y el Suchiapa. Definidos por los conquistadores españoles como terribles guerreros, los ‘chiapa’ extendieron su territorio hasta lo que hoy se conoce como la Frailesca, ejerciendo en el territorio una violenta soberanía militarista y cobrando tributo a los pueblos que dominaban.

El rechazo de los pueblos mayas y zoques a la dominación ejercida por los chiapanecas fue aprovechada por los españoles para conquistarlos y sentar sus reales en estos territorios. En los años posteriores, inicia el proceso de despojo y reubicación de los pueblos ahí asentados impulsada por frailes y encomenderos, en particular por parte de los frailes del convento de Santo Domingo de Chiapa, quienes despojaron a los indios de las tierras del Cutilinoco o Macatapana como se les llamaba a estas tierras; y desde 1582, el principal Domingo Nutú, nieto del cacique don Pedro Nutú Nuari, reclamaba las tierras de Nimbariti y el crucero de Santa Catarina que los frailes les habían quitado.

El carácter de la relación colonial que la corona española instauró para con sus colonias en América, marcó a futuro las modalidades bajo las cuales estos países se habrían de insertar en la economía mundo capitalista comandada por Europa e instaurada desde el siglo XVI.⁵⁵ En el siglo XVII, la región fue el asiento de frailes dominicos que organizaron este despoblado territorio en diversas estancias ganaderas y cañeras donde se producían cueros y panela, así como alimentos que eran demandados por los conventos de Chiapa, Ciudad Real, y Guatemala. Así, desde los albores del periodo colonial, la hacienda se constituyó como el espacio de relaciones sociales y económicas mas importante, dado su

carácter autosuficiente desarrollado en parte por la actividad productiva realizada por mozos y laboríos -centrada en la producción de maíz-, lo que les permitía mantener cautiva la fuerza de trabajo.

El origen del nombre de La Frailesca tiene que ver con la herencia de la actividad económica y religiosa desplegada por los frailes dominicos del siglo XVII y XVIII, que se tradujo en la fundación de numerosas fincas y haciendas de su propiedad. La actividad de los frailes generó una forma de poder socio territorial que ejercieron los religiosos mediante la constitución de estancias ganaderas que buscaban ser la vía para solventar las necesidades económicas de la iglesia bajo la jurisdicción del Convento de Santo Domingo de Chiapa. Los frailes dominicos de Ciudad Real, por su parte, orientaron su atención a la producción de ganado en la zona templada de Ocosingo que, junto con Comitán y la del Convento de Chiapa, formaron las llamadas tres Frailescas de los tiempos coloniales.

Durante la etapa de la independencia, por lo menos la mitad de las haciendas de Chiapas eran propiedad de clérigos, y ellas ocupaban los mejores territorios en la zona de las tierras bajas, en particular aquellas ubicadas en los márgenes de los ríos, y por lo general subutilizadas. En aquellos años tempraneros, los aires liberales y de colonización de terrenos baldíos y de indios llegaron a Chiapas debido a que el gobierno de este estado - recién incorporado a la naciente nación mexicana-, alienta a que se denuncien y registren tierras incultas u ocupadas por los nativos.

En los años siguientes el estado de Chiapas se adscribió a las pugnas que enfrentaron a liberales y conservadores. Los liberales, quienes eran partidarios de imponer restricciones a la iglesia, por lo general se encontraban ubicados en las tierras bajas, mientras que los conservadores, defensores del poder y los privilegios del clero, estaban concentrados en San Cristóbal. La reforma juarista había propiciado la expansión de los terratenientes quienes bajo su amparo, se lanzaron sobre las tierras de los frailes y las pocas que habían logrado conservar las comunidades quienes proclamaban el carácter antieconómico de unas y esclavizante de las otras.

La historiografía local registra que fue la pugna entre liberales y conservadores lo que motivó a los liberales de Villacorzo encabezados por Julián Grajales a fundar, en 1876, el

⁵⁵ Recuperamos aquí el concepto de sistema mundo capitalista propuesto por Immanuel Wallerstein, 1998, que define el carácter de las relaciones económicas mundiales que se instauraron con el proceso de conquista y su posterior subordinación a las metrópolis europeas.

pueblo de Villaflores. La transformación que vivió la región en esos años en relación con el régimen de propiedad agraria, fortaleció la propiedad terrateniente, así como cambios en su estructura productiva basada en la cría de ganado y la producción de azúcar manifiesto en toda la Cuenca del Grijalva. Estos fueron elementos fundamentales que coadyuvaron a que se consolidara un importante crecimiento poblacional en toda la zona y consecuentemente, de los asentamientos urbanos más importantes.

La contundencia con la que las élites locales impulsaron las reformas liberales y de colonización de tierras, junto a la perspectiva de insertar las regiones de Chiapas en las exigencias que imponía un mercado mundial en expansión, inhibieron durante estos años la expresión de protestas sociales. En tal circunstancia, las leyes promulgadas estaban más interesadas en favorecer la consolidación de la gran propiedad territorial. La alternativa que se dejaba a comunidades y pueblos era la de participar de manera subordinada como peones y baldíos, como fuerza de trabajo sujeta a las disposiciones que le marcaba el sistema de fincas y haciendas.

Desde principios de este siglo, el sistema de servidumbre agraria se había enraizado plenamente en la sociedad local. La palabra *fincas*, muy común tanto en Chiapas como en América Central, era una unidad de producción comparable (mas no idéntica) a la hacienda mexicana. En este periodo, la entidad vivió una primera etapa de desarrollo capitalista definida por la orientación de la vinculación de la economía nacional hacia el mercado mundial y la inversión extranjera. Después de 1870 hubo en Chiapas una gran afluencia de inmigrantes alemanes y españoles que contribuyó a la transformación de la sociedad y del estado mismo, quienes se dedicaron a los negocios y al comercio. La llegada de capitales foráneos, particularmente alemanes por la vía del Soconusco, para invertir en cultivos novedosos como el café u otros productos comerciales, se extendió a las diversas regiones de Chiapas, lo que produjo un cambio en la estructura productiva de la región.⁵⁶

De hecho, la palabra modernización se volvía común en el vocabulario de algunos empresarios chiapanecos, quienes demandaban al gobierno estatal reformas que permitieran el desarrollo capitalista de la entidad. A estos cambios en la economía, vino a sumarse al proceso de concentración de la propiedad territorial que fortaleció el sistema de finca sobre el que se montó la empresa capitalista de finales del siglo antepasado. Pese al auge que tuvo

en ese periodo la producción orientada al mercado en las tierras bajas de Chiapas, el carácter autosuficiente de las haciendas y los ranchos nunca se perdió, pues su dinámica interna obligaba al cultivo de maíz y frijol, así como al cuidado de ganado para el sustento de peones y laboríos.

La dinámica de las relaciones sociales recreada en torno a la figura de la hacienda y la finca, son cuestiones que calaron hondo en la forma de organizar no solamente las actividades económicas, sino el conjunto de la vida social y cultural en este espacio, teniendo como figura protagónica a los propietarios, quienes construyeron la vida cotidiana de la región en torno a la figura de la finca, en un ambiente jerárquico de relaciones de carácter patriarcal que definió el conjunto de la vida social en todo el Valle.

La finca era pues la base sobre la cual se tejió el imbricado tejido de la vida social durante este siglo en la región, una figura económica y social caracterizada por reproducir las añejas relaciones de carácter señorial que definieron, en lo fundamental, a la mayor parte de llamada región centro o Valles Centrales. Dada esta relación, no resulta difícil entender entonces la formación del “movimiento mapache” en la región durante los cruentos años de 1916 a 1920 que tuvo como base y origen las posiciones de un grupo de rancheros encabezados por Tiburcio Fernández oriundo de Villaflores, en contra de las leyes y políticas promulgadas por el gobierno del carrancista Jesús Agustín Castro en 1914, que a decir de sus protagonistas, atentaba contra sus intereses, al plantear el fin de la sujeción y la liberación de los trabajadores agrícolas endeudados. Por esta razón, los finqueros –junto con caporales y trabajadores- se alzaron en armas en contra de lo que consideraron una intromisión en los asuntos y tradiciones de los chiapanecos.⁵⁷

2.1.2. La demanda agraria y el origen del corporativismo

Al terminar la fase armada de la revolución en la que los habitantes de La Frailesca participaron de manera destacada, la dinámica social en la región estaba determinada por las relaciones de subordinación que mantenían, mediante la estructura de la finca, los

⁵⁶ Según Thomas Louis Benjamín, 1995, fue en esos años cuando la palabra modernización ingresó al vocabulario chiapaneco.

⁵⁷ Ver al respecto José Casahonda, 1999, p. 35.

propietarios de éstas y los peones. Las condiciones de atraso que mantenía la entidad, pese a que varias de sus regiones habían conocido a finales del siglo anterior un primer empuje modernizador, se agudizaron por el abandono de las actividades productivas en este periodo.

No obstante, a partir de la década de los veinte, y sobre todo en la de los treinta, se inició en la región un conjunto de transformaciones en la dinámica productiva y en la estructura agraria, como resultado de la conjunción de dos factores fundamentales. La exigencia de los antiguos peones, constituidos en un consistente movimiento campesino, demandaba a los caudillos de la revolución triunfante se les dotara de tierra, -quienes para enfrentar la estructura local del poder terrateniente contaron con el apoyo y la simpatía de funcionarios y asesores del nuevo gobierno-, con lo cual se inicia la conformación de los ejidos, muchos de los cuales se mantienen hasta hoy. El otro eje de transformación se dio en torno a la estructura productiva definida por las técnicas de producción atrasadas en que se desarrollaban tanto la agricultura como la ganadería, actividades económicas fundamentales de la región.

Al inicio de la década de 1920, grupos de peones y ex peones de diferentes fincas empezaron a demandar la dotación de tierras en La Frailesca. Varios factores se conjuntaban en el contexto político estatal y nacional del momento, que permitía que se planteara tal demanda. Estaba fresca en la memoria de la población la promulgación de algunas leyes agrarias por parte de los caudillos revolucionarios en el país, de la que eventualmente se hacían eco los caudillos locales. Ello implicó reconocer la necesidad de una relativa autonomía respecto al control directo y cotidiano que ejercieron los finqueros sobre los campesinos, al mismo tiempo que resultaba previsible la consolidación en el poder de los caudillos locales, como lo fue Tiburcio Fernández Ruiz, con gran influencia en la política obregonista.

En términos generales, los grupos campesinos que demandaban el acceso a la tierra en la década de 1920 eran de estructuras frágiles y, por lo general, no tenían la capacidad política para organizarse independientemente de los caudillos a quienes habían estado subordinados durante la fase de guerra y enfrentamientos entre facciones. De este modo, en la región tomó fuerza la demanda de dotación y afectación agraria por parte de peones, que

empezaron a reconocerse como sujetos de derecho a partir de la conformación de diversos grupos de solicitantes, normalmente de las fincas que habitaron, no sin fuertes dosis de confrontación con los propietarios y finqueros que los consideraban incapaces de emprender tales acciones.

Las expresiones del movimiento campesino en esa época, por tanto, se movieron entre la acción protectora del Estado y un agrarismo radical, lo cual de ninguna manera estuvo exento de fuertes conflictos. Así, desde esa época, el Estado empezó a constituirse como la instancia principal para la definición, en el futuro, del proyecto de modernización económica, las condiciones de trabajo y del proceso de reparto agrario. Es decir, la confluencia de estos elementos en el marco de las contradicciones que implicaba la concreción de las demandas campesinas, prefiguraba ya el carácter de la relación que en adelante mantendría el Estado con los campesinos en el país.

Un campesino de Benito Juárez –uno de los ejidos más viejos y productivos de la región– en relación con el proceso de la fundación del ejido y los enfrentamientos que se sucedieron con el dueño de la finca expresa: “cuando se luchaba por la creación del ejido allá por 1930, en este ejido corrió mucha sangre quedando bastantes viudas y huérfanos”. Otro campesino, quien además es cronista de Jesús M. Garza –ejido contiguo a Benito Juárez–, narra algunas de las peripecias que tuvieron que pasar con el propietario de las fincas en cuyos terrenos se asentaron ambos ejidos en 1928. *“Aquí no hubo mucho problema como en Benito Juárez. En lo que es el ejido de La Garza había dos fincas. El señor Ciro López, quien era el dueño, repartió las propiedades cuando llegó la orden del gobierno. Pero este señor tenía la pretensión de recuperar sus propiedades cuando pasara ese gobierno. Nunca imaginó que ya nunca las recuperaría”*.⁵⁸

La circunstancia política del retiro temporal en 1926 del general Fernández Ruiz, junto al alineamiento político de “los socialistas del sureste” a favor de Carlos A. Vidal en la entidad, fueron factores aprovechados por el emergente movimiento campesino de esos años para plantear sus demandas, desarrollar la organización de cientos de comités peticionarios e iniciar, de hecho, una oleada de tomas de tierra y enfrentamientos armados. El surgimiento del Partido Socialista Chiapaneco en la década de 1920, su vinculación con

⁵⁸ Opiniones expresadas por el señor Francisco Nucamendi, cronista del ejido Jesús M. Garza, 18 de abril de 1999.

campesinos demandantes de tierra y su inserción en la vida política, permitió expresar la abigarrada problemática agraria de Chiapas y darle forma a la incipiente pero sentida demanda de tierras.⁵⁹ Así, las acciones agrarias se dieron en un marco de pugnas entre facciones políticas por el acceso al poder estatal, pero una vez que los grupos triunfantes se instalaban en el gobierno, el común denominador fue el carácter antiagrario de su política, sin duda, como resultado de la respuesta que ejercían los finqueros ante la presión de los grupos de campesinos solicitantes.

No obstante, la desatención y falta de interés mostrados por las élites políticas locales para atender las demandas sociales, los afanes peticionistas en materia agraria por parte de los campesinos de la región no dejaban de hacerse presentes. A principios de la década de 1930 el movimiento se extendió por todo el alto Grijalva, La Frailesca, Ocozocuatla y Cintalapa, con expresiones a menudo muy violentas. En ese marco accede a la gubernatura de Chiapas Raymundo Enríquez, quien con el aval del presidente Calles buscó poner orden entre los grupos en pugna centralizando todo el poder, al mismo tiempo que consideraba importante mantener los esfuerzos agrarios en Chiapas a contrapelo de las orientaciones poco proclives a la acción agraria del gobierno federal.

Esta definición se vio fortalecida en el gobierno de Efraín Gutiérrez al frente del gobierno de Chiapas a partir de 1936, etapa en la que la lucha campesina recibió un trascendental impulso. En este periodo la avalancha por la recuperación y el reclamo de tierras se volvió incontrolable, pues para ese momento ya no eran sólo los comunistas adheridos al Partido Socialista Chiapaneco quienes impulsaban esta lucha. En esos años, también agentes gubernamentales, ya sea como funcionarios o maestros, se dedicaron a convencer a los campesinos de la necesidad de acelerar las reclamaciones. Por ello durante la administración de Gutiérrez, la cifra de tierras entregadas a los campesinos casi se quintuplicó respecto a la década anterior, llegando a 290 534 hectáreas que beneficiaron a 20 000 campesinos, al ejecutarse 179 acciones agrarias en 66 municipios.⁶⁰

En general en algunos municipios de la región Valles Centrales, las acciones agrarias fueron más importantes que en otras regiones, por ejemplo en Cintalapa, Ocozocuatla,

⁵⁹ Sobre el papel jugado por el Partido Socialista Chiapaneco en esta coyuntura, *cfr.*: Antonio García de León, 1985, p. 183 y Daniela Spenser, 1988.

⁶⁰ Reyes Ramos, María Eugenia, 1992, p.62. Cifras más optimistas son las de Thomas Benjamín, 1995, que sitúa en 349 180 las hectáreas otorgadas bajo concesiones definitivas en el periodo de Gutiérrez.

Berriozábal, La Concordia y Villaflores. Fue en ese contexto que surgieron en los terrenos de las antiguas fincas muchos de los ejidos mas importantes de La Frailesca, como San Pedro Buenavista, Jesús M. Garza, Francisco Villa o Cuauhtémoc. Es el periodo en el que surgen la mayoría de los ejidos que existen en la actualidad, no obstante que según algunas estimaciones, todavía a finales de la década de 1940 tres cuartas partes de la tierra en La Frailesca seguían estando en manos de propietarios y rancheros.⁶¹

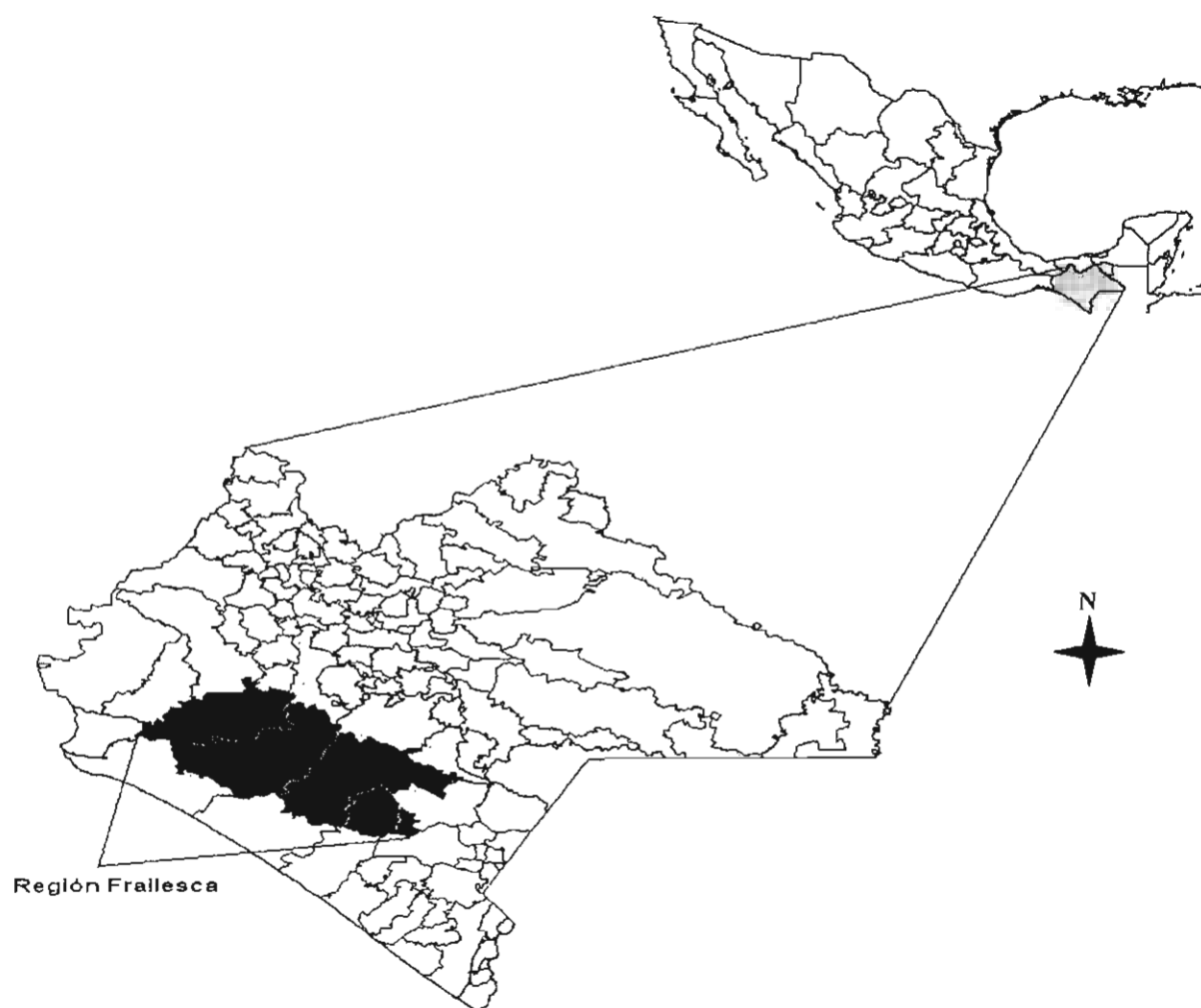
El acceso de los antiguos peones a la posesión –aunque de manera parcial– de un pedazo de tierra, en términos del proceso de modernización de las relaciones sociales, significó la posibilidad de concretar el derecho a “ser alguien” a partir de la posesión y usufructo de una parcela, no obstante que esta posesión fuera sobre la base de la tutela del Estado. La mentalidad agrarista, que se generalizó durante la época, fue capaz de romper y sobreponerse a la cultura de subordinación, a la ideología del finquero y los múltiples mecanismos de consenso y coerción que durante años formaron parte del sistema de finca. Para la defensa de sus intereses los ex finqueros organizaron desde 1937 la Asociación Ganadera Local de Villaflores. Esta asociación pretendía defender la explotación ganadera, lo cual implicaba preservar la propiedad privada de la tierra, además de tener el control sobre la distribución del ganado y participar de las ventajas de las políticas de fomento a la actividad.⁶²

De este modo, los campesinos de la región Frailesca avanzaron en desembarazarse de manera temprana de las relaciones que caracterizaron a la finca señorial, no así de las relaciones de tutelaje y subordinación que a partir de ese momento empezaron a construir con el Estado y sus instituciones, sin que ello quiera decir que los conflictos con la clase finquera se desvanecieran. Al Estado mexicano posrevolucionario, en su proceso de consolidación, le interesaba mantener una alianza con los campesinos, a los que consideró, sobre todo durante el cardenismo, actores fundamentales en los que debía apoyarse para avanzar en la desarticulación de las atrasadas relaciones que los mantenían en sujeción. El periodo de intenso reparto agrario en Chiapas, enriquecido primero y gutierrista después, fue importante porque permitió crear un marco institucional útil para reafirmar la presencia del Estado, en un contexto en el que todavía imperaba la ley de los hombres fuertes o de caciques regionales. Se reafirmaba así la presencia en Chiapas de un Estado de masas que

⁶¹ Ver María de las Mercedes Blanco, 1980, p.106.

al mismo tiempo que daba respuesta a las demandas agrarias de la sociedad, lo hacía desde una visión caudillista y autoritaria.

Mapa 1. Ubicación de la región Frailesca en el estado de Chiapas



El programa de reforma agraria en los decenios de 1930 y 1940 no sólo incluía la formación de los ejidos, sino también la creación de una estructura burocrática compleja que debería ayudar, supervisar y controlar a los ejidatarios. Los jefes de estas oficinas eran agrónomos especializados, quienes además de decidir el destino de enseres de trabajo, herramientas, caminos, escuelas y demás apoyos que se enviaban a los ejidos, a menudo

⁶² En relación con las acciones de defensa de los ganaderos, *cfr.*: Antonio García de León, 1985, p.214.

también asesoraban a los campesinos para obtener ampliación de las concesiones originales. Estas acciones bien intencionadas desarrolladas también por activistas ligados al pensamiento agrarista o socialista de la época, sentaron las bases de organización corporativa que promovió el gobierno en los años posteriores.

Las múltiples acciones desarrolladas por el gobierno estatal y federal en apoyo a los grupos agrarios, una vez constituidos como ejidos, buscaban concretar la política impulsada por el gobierno federal de corporativizar al movimiento, con la finalidad de mantener la estabilidad política. Con este propósito, desde 1938 el gobernador Gutiérrez promueve el surgimiento de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado de Chiapas bajo los auspicios del gobierno cardenista, al mismo tiempo que se iniciaba una caída en los ritmos de la aplicación de la reforma agraria y cada vez con mayor frecuencia se hablaba de la necesidad de pasar a la fase constructiva de la política agraria.⁶³ Con la fundación de los ejidos inició una nueva etapa para los campesinos frailescanos que, al mismo tiempo que avanzaban en destrabar el control que sobre ellos mantuvieron los terratenientes, en adelante también estrecharon sus vínculos con el Estado, provocándose una desmovilización de las organizaciones y ligas agrarias que en toda una década mantuvieron inalterables sus demandas agrarias.

Con ello se iniciaba en La Fraileasca la construcción de una forma de relación Estado sociedad durante por lo menos las siguientes cinco décadas, en la que el primero se abrogaría la representación de los actores sociales y políticos en una suerte de tutelaje hacia las organizaciones campesinas, sus demandas y formas de participación en el modelo de economía nacional impulsado en aquel momento, que tuvo como base un Estado “de matriz nacional y popular” como lo ha definido Garretón.

En razón de las particularidades del conflicto entre campesinos y terratenientes que en esa coyuntura se manifestaba bajo la forma de una agria disputa agraria, al Estado le interesaba mantenerse como mediador entre las clases o actores y dosificar las demandas campesinas, lo que al mismo tiempo le garantizaba la adhesión de los actores sociales a su proyecto de insertar al país en un modelo de economía capitalista dependiente como el que conocimos a lo largo de ese periodo. La concreción de tal política de mediación y transformación regional no fue nada fácil, lo cual no quiere decir que a la vuelta de los años

⁶³ Al respecto véase Anatoli Shullgovski, 1980, p. 264 y María Eugenia Reyes, *Op. cit.*, p. 58

no haya tenido implicaciones en por lo menos dos sentidos: la modernización de la agricultura campesina regional y la recomposición de la estructura de la propiedad territorial.

2.1.3. Recomposición de la estructura de poder territorial

Después de la revolución sobrevinieron importantes cambios para el proceso de configuración regional. Los finqueros quedaron descapitalizados por la pérdida de su ganado, la destrucción de sus fincas y por los gastos de seis años de alzamiento en los que no se produjeron excedentes para su comercialización. La organización jerárquica del sistema de finca también empezó a ser cuestionada por diferentes actores sociales y políticos. Así, los peones quedaron en condición de “personas libres” pudiendo trabajar con quien quisieran, situación que generó que al término de la fase armada existiera una masa de trabajadores agrícolas sin tierra, cuya principal opción de subsistencia era cultivar los terrenos que seguían perteneciendo a los mismos propietarios.⁶⁴

La inminencia del fraccionamiento y reparto de tierras que trajo consigo la aplicación de la política agraria llevó a los finqueros a adoptar diversas medidas para no perder sus propiedades. Una de ellas fue la de recurrir a la fragmentación ficticia, titulando fracciones a nombre de hijos y parientes o haciendo contratos de compraventa, por ejemplo entre padres e hijos, quedando la propiedad legalmente dividida, aunque en realidad quedaba indivisible. Así, para garantizar su reproducción como clase hegemónica, un sector de ex finqueros tuvo que adoptar nuevas estrategias que les permitieran obtener ganancias económicas y control social, tales como la comercialización de productos regionales y los préstamos usurarios. Otros, mientras tanto, se centraron en la actividad ganadera haciendo esfuerzos para su mejoramiento, a partir de la posesión de numerosos ranchos que provenían del viejo sistema de finca.

Para fortuna de este grupo, la política agraria, sin embargo, cambiaría de sentido y profundidad en su aplicación al terminar el “periodo gutierrista”. La presión de los ganaderos de Chiapas había convencido al gobernador Gutiérrez, al final de su

⁶⁴ Según María de las Mercedes Blanco, *Op. Cit.*, p. 35, esto dio pie a que en esos años se generalizara un sistema de arriendo, como estrategia de subsistencia para los trabajadores agrícolas y de recapitalización de los finqueros.

administración, de la necesidad de frenar los repartos en beneficio de la ganadería, de conceder inafectabilidades agrarias y otorgar permiso a los propietarios de portar armas de fuego y organizar guardias blancas para la protección de sus propiedades. Esta orientación de la política agraria se reforzaría a partir de 1940, cuyos gobiernos y administraciones estuvieron más interesados en el impulso y fomento de la ganadería mediante el otorgamiento de certificados de inafectabilidad, en detrimento de la demanda agraria a la que se le mantuvo controlada bajo promesas, la aplicación dosificada y la represión. Esta actitud se reforzaba por la presión que ejercían los terratenientes en el contexto de los gobiernos autoritarios que caracterizaron a la entidad lo que se expresó claramente a partir del gobierno de Francisco J. Grajales.

La lentitud bajo la cual se realizaban los procesos de dotación o ampliación de tierras reflejaba la resistencia de los grupos de poder a perder el control de sus propiedades. Algunos ejidos en La Frailesca tuvieron que esperar más de treinta años, entre la fecha del mandamiento gubernamental y la fecha de ejecución de la resolución presidencial correspondiente. Así, el proceso de reparto agrario fue lento y diferenciado en la región, considerando que en estos años la actitud de las autoridades agrarias iba en sentido contrario a la desarrollada en años anteriores. Paralelamente, en la región se desarrolló una forma alternativa de acceso de particulares a la tierra por la vía de terrenos nacionales ya ensayada en la década de 1920. Esta forma de acceso a la tierra adquirió forma legal en el decenio de 1940 mediante la Ley Federal de Colonización expedida durante el periodo de Miguel Alemán.⁶⁵

La constante demanda de tierra, así como el temor de los propietarios a ser invadidos, no obstante, trastocó a la finca como forma de propiedad dominante de principios de siglo y generó, no sin fuertes conflictos al interior de la sociedad regional, una distribución más social de la propiedad territorial, a pesar de lo lento y limitado del reparto agrario en la región. Pese a los privilegios dados a la ganadería y las garantías otorgadas por el gobierno a la tenencia de la tierra, en el decenio de 1940 se inició un proceso de fragmentación de la propiedad territorial que, ante la amenaza de invasiones o por la política gubernamental de beneficiar a grupos campesinos demandantes, los antiguos terratenientes optaron por vender o fraccionar sus propiedades.

⁶⁵ De acuerdo con María Eugenia Reyes, 1992, p. 79, Chiapas fue de los estados donde más se favoreció esta

Como resultado de la lucha agraria desarrollada en esa etapa, numerosas fincas resultaron afectadas y diversos grupos peticionarios vieron satisfecha su demanda de tierra, siendo el periodo que va de 1934 a 1952 el de mayor el de reparto agrario en la región (Ver cuadro 1) La lucha agraria que mantuvieron los campesinos frailescanos fue configurando así un contrapoder que se vio fortalecido por la política agropecuaria desarrollada por el gobierno en los años posteriores, consistente en la dotación de créditos y asistencia técnica. Así, el proceso de afectación agraria llevó a que finales de la década de 1950 existiera un conglomerado de más de 30 ejidos formalmente constituidos en los dos municipios que histórica y culturalmente le han dado cuerpo a la región frailesca.

Cuadro 1. Proceso de estructuración del sistema ejidal en La Frailesca por periodos.

Municipio	1934-1952	1955-1979	1983-1990	Total
Villaflores	21	9	7	37
Villacorzo	11	16	9	36
La Concordia	4	14	8	26
Ángel A. Corzo	3	10	8	21
Total por periodo	39	49	32	120

Fuente Estimaciones realizadas con datos del Registro Agrario Nacional. Dirección de Catastro Rural 1997, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La fuerte disputa agraria que se desarrolló en la región en esta etapa, en los hechos, desarticuló el sistema de finca como centro de poder. La ruptura social que provocó el movimiento de afectación agraria puso en retirada a la elite finquera, que de esta manera se vio imposibilitada de seguir garantizando –bajo su hegemonía– la reproducción del sistema de relaciones sociales, como había venido sucediendo durante por lo menos los últimos ciento cincuenta años. En el plano político, se iniciaba también la lucha de los ejidatarios –como nuevo actor social– por ampliar los espacios de decisión favorable a sus intereses en el ámbito local avanzando en la lucha por acceder a los espacios de poder municipal, los que continuaban siendo controlados por los antiguos caciques y terratenientes, quienes

forma de acceso a la tierra, que vino a fortalecer sobre todo a los propietarios privados.

durante años ostentaron esa condición bajo el reconocimiento oficial de jefes políticos. En ese sentido, la dinámica de las relaciones sociales sufre un vuelco que iniciará una transformación social en diversos órdenes, avanzando en la concreción de un proceso de modernización de las relaciones económicas, sociales y políticas, que se mantendría en las décadas siguientes.

Muchos ex finqueros identificados ahora como propietarios, lograron mantener a flote sus predios y propiedades, al aceptar el emplazamiento del gobierno federal de modernizarse en el sentido de tecnificar sus predios que se habían orientado hacia la ganadería. Pero el propósito de modernizar la actividad ganadera en los ranchos y propiedades que la soportaban, se cumplió sólo parcialmente dependiendo de las posibilidades y la capacidad para acceder y administrar créditos, cuestión que solamente unos pocos lograban concretar. Así, los propietarios que no tenían la perspectiva de modernizarse —o que simplemente no lo podían realizar—, mantenían abandonados sus ranchos, por lo que a menudo se convertían en blanco de la demanda campesina, viéndose obligados a fraccionarlos o venderlos, convirtiéndose en otro factor de desestructuración territorial.

El proceso modernizador que vivió La Frailesca en esta etapa fue posible, en parte gracias al sistema de ejidos que para la década de 1950 se había configurado sobre algunas de las antiguas fincas, el cual se constituyó durante la segunda mitad del siglo XX en un espacio de poder contra hegemónico, vale decir como una plataforma desde la cual se seguía manteniendo la disputa por el acceso a la tierra por parte de los campesinos. La figura del ejido como espacio de poder se vio fortalecido en esa década, y fue considerado como la punta de lanza de la modernización del campo frailescano, la que se impulsó bajo una mentalidad “ejidalista” que perdura hasta nuestros días. Además, la consolidación del ejido como un contrapoder fue la base desde la cual se impulsaron diversos movimientos que cuestionaron el control que siguieron manteniendo los ex finqueros en los espacios locales y municipales.

La finca decimonónica, convertida ahora en rancho ganadero o predio rústico, se vio obligada a coexistir durante la mayor parte de este siglo con el sistema de ejidos, no obstante su disminuida presencia en el ámbito propiamente territorial. Además, por un interés marcadamente clientelar, el Estado mantuvo abierta durante todo este periodo la vía

del recurso de ampliación o de nuevas dotaciones, lo que permitió no solamente la manipulación de la demanda campesina sino también la presencia de nuevos ciclos de movilización que presionaron una y otra vez sobre las cada vez más disminuidas pequeñas propiedades de la región. El ciclo de lucha y dotación agraria que parecía se cerraba en la década de 1950 con el mayor énfasis que se ponía en la tecnificación de la producción agrícola, no logró eliminar la cultura de finca que coexistía con las prácticas y visiones ejidalistas.

2.1.4. La “tecnificación” de la agricultura campesina

Una vez lograda una relativa distribución social de la propiedad agraria, la región de La Frailesca vivió, a partir de la década de 1940, una importante oleada modernizadora de su espacio rural. Con la extensión de los certificados de inafectabilidad expedidos en ese gobierno y habiendo sido satisfecha en lo fundamental la demanda agraria, en los años siguientes se produjo una desmovilización de la sociedad regional. Se iniciaba una etapa de modernización regional que buscaba el desarrollo de la entidad, mediante el impulso de caminos y de proyectos de infraestructura. En La Frailesca, en particular, se iniciaron diversos estudios para reconocer las posibilidades de irrigación en Villaflores, Villacorzo y La Concordia, al tiempo que se mejoraban las condiciones para el desarrollo de la ganadería.⁶⁶

El contexto social en el que se produjo este proceso modernizador fue el de un aparente reflujo del movimiento agrario de la década de 1930, ya que a partir de 1940 la mayoría de las organizaciones sociales que protagonizaron la lucha por la recuperación de tierras se desmembraron o se desmovilizaron para confundirse, poco a poco, con las organizaciones corporativas que desde el Estado se alentaban. En su lugar se inicia un importante impulso modernizador en lo económico y productivo, el cual vino a cuestionar muchas de las formas tradicionales de producción (como la siembra con “espeque”, el uso del arado “trompa de cochi”, el uso de mancuernas de bueyes) e introdujo en la región entre otras iniciativas, el uso del arado de reja, de maquinaria agrícola, así como de fertilizantes y agroquímicos.

⁶⁶ Para documentarse sobre la obra de gobierno de Francisco J. Grajales, se puede leer la monografía realizada por Dolores Camacho y Arturo Lomelí, 2000.

La adopción de tecnología moderna se dio al principio de manera lenta, sin embargo, el importante impulso, que desde un principio recibió por parte de las instituciones del Estado, resultó ser factor fundamental para que la región se insertara en el modelo productivo de industrialización sustitutiva de importaciones impulsado en el país, interesado en apoyar a aquellos sectores de agricultura que garantizaran la producción de excedentes para el mercado nacional. En esa etapa se buscaba que la agricultura mexicana subsidiara el desarrollo de la naciente industrialización del país en diferentes ramas estratégicas.

El proyecto de modernización regional consideró relevante impulsar la actividad productiva de los grupos de campesinos, como principales protagonistas del proceso, mediante el mecanismo de garantizar diversos apoyos técnicos y crediticios a los ejidos recién conformados. Junto a los agrimensores que tenían la misión de hacer los deslindes para los proyectos de dotación, iban los agrónomos encargados de distribuir los créditos del Banco Nacional de Crédito Ejidal que, a menudo, a la vez que asesoraban en la gestión de créditos y tecnologías, se convertían en organizadores y promotores de la continuidad de la lucha agraria. Sin embargo, en un marco de grupos confrontados donde las heridas que había dejado el reparto agrario estaban vivas, el Estado estaba llamado a ser “el fiel de la balanza”, quien por vía de las diferentes instituciones de carácter federal que se fueron creando vinculadas al sector, se colocó como un actor central en la mediación y resolución de los conflictos que cotidianamente surgían.⁶⁷

Sin provocar una abierta ruptura con los hombres fuertes de La Frailesca, el Estado impulsó la modernización de la producción campesina, a la vez que buscaba apoyar la ganadería y garantizar el respeto a la pequeña propiedad que la sustentaba. Por ello, en esta etapa la región y sus actores se colocan en una situación privilegiada en su relación con el Estado mexicano, a partir de las iniciativas de modernización agrícola desarrolladas. Así, muchos de los recursos canalizados por parte del gobierno a la región estuvieron orientados a impulsar económicamente a los ejidos, al tiempo que la propiedad privada –tanto agrícola como ganadera– fue no sólo legalmente protegida sino también económicamente incentivada.

⁶⁷ Sobre los problemas que implicó concretar el programa modernizador del gobierno del estado en esta región en los años cuarenta, ver la obra de Thomas L. Benjamín, 1995.

El énfasis que el Estado puso en apoyar a los grupos de campesinos desposeídos, para que en cierta forma compitieran con los sectores hegemónicos en el acceso a los recursos productivos (tierra, créditos, asistencia técnica), no necesariamente implicó que el grupo de ex finqueros se marginara de los espacios y recursos que le garantizaban una posición de poder. En ese sentido, el gobierno consideró importante seguir impulsando también a este sector canalizándole importantes apoyos, pues no obstante haber visto disminuida su centralidad en términos de actor hegemónico, desde el punto de vista económico y político seguía detentando la mayor parte de la tierra y la comercialización de la producción agrícola y ganadera. Incluso, el poder político formal ejercido a través de los ayuntamientos era controlado por ellos, situación que los mantenía como grupo predominante en la región, pese al activismo desarrollado por diversos núcleos de campesinos que buscaron crearse sus propios espacios de poder y negociación.

La dinámica de intermediación, bajo la cual se impulsó la modernización productiva, combinó las viejas estructuras de control político que mantenían caciques locales, con la emergencia de nuevos mecanismos de control de carácter corporativo, en el que los campesinos mantenían una mayor iniciativa en el impulso y gestión de las políticas de desarrollo para la región. La otra dimensión del proceso de modernización en el periodo, de la que aquí se busca dar cuenta, se produjo en el plano de las relaciones sociales. En esta etapa se definieron y reconstruyeron nuevas identidades sociales y políticas, a partir del protagonismo de un campesinado liberado de las ataduras que impuso el viejo sistema de finca, pues desde ese momento buscó ampliar sus espacios de poder en la vida económica y política en la región.

Pese a los importantes apoyos económicos, tecnológicos y jurídicos otorgados en Chiapas a la ganadería por parte del gobierno estatal y federal, las acciones impulsadas a favor de los campesinos, como parte del proceso de modernización agrícola, provocaron una especie de competencia entre éstos y el grupo predominante de propietarios, donde el Estado resultaba ser un tercero en discordia. No obstante, con el apoyo que este dio a grupos de campesinos en materia agraria, productiva o financiera, los grupos de poder perdieron el monopolio en el acceso a la tierra, a la comercialización o a los créditos que

antes habían controlado.⁶⁸ Ello implicó un cambio en los procesos de intermediación con el Estado, los que hasta entonces habían sido concentrados por ex finqueros, –avenidos después como comerciantes ó prósperos ganaderos–, y también sentó las bases para el posterior auge que experimentaron las actividades agropecuarias, con el que se buscaba insertar a la entidad en el modelo de industrialización sustitutiva que se impulsaba en el país y de atender la necesidad de alimentos que demandaba el crecimiento urbano.

Podemos señalar entonces, que esas transformaciones se producían, tanto en relación con la estructura agraria que llevó a la constitución de una nueva socialidad centrada en los ejidos, como en torno al proceso modernizador bajo la nueva estructura agraria que se conformaba. Los actores y protagonistas de este proceso fueron sin duda, por una parte los campesinos organizados en los comités peticionarios y por otro, el Estado mediante las acciones agrarias que desde ese tiempo impulsó a través de algunos líderes políticos ligados a la ideología agrarista que no desapareció al termino del gobierno cardenista.

Sin embargo, este periodo fue importante porque sentó las bases de la relación corporativa y las formas de representación que en adelante definirían la relación del Estado con la sociedad regional. La desestructuración de la anterior estructura de poder territorial centrada en la finca y la conformación del sistema de ejidos dio lugar a una nueva forma de relación y representación en la que el Estado jugaría en adelante un papel central en el impulso de las diferentes iniciativas de desarrollo para con la sociedad regional. Las vías de intermediación que resultarían funcionales y permitirían articular a la sociedad regional con el Estado estarían dadas por la gestión de los comisariados ejidales ante el aparato gubernamental que buscaría centralizar y dosificar las demandas campesinas.

No obstante, las expresiones caudillistas y caciquiles como formas de representación no se eliminaron con la creación de los ejidos sino que se fundieron con la estructura agraria en proceso de conformación, ya fuera para mantener y recrear espacios de poder regional - principalmente de ex-finqueros o propietarios-, o bien como una forma de negociar frente al Estado las demandas parcialmente resueltas. En cualquiera de los casos ello permitía recrear una relación corporativa que lograba mantener en equilibrio los intereses de las instituciones en ciernes en pro de la centralización de las decisiones fundamentales, los

⁶⁸ Un trabajo pionero ya citado sobre la dinámica de la recomposición de las relaciones entre los actores sociales y sus conflictos en la región en este periodo, es el realizado por María de las Mercedes Blanco, 1980.

intereses y privilegios de los grupos de poder local, además de la respuesta dosificada de las demandas campesinas, principalmente de las agrarias.

2.2. Modernización productiva e intervencionismo estatal

Un segundo momento del proceso de consolidación estatista bajo rasgos autoritarios se produjo en las décadas posteriores a 1940, en las que los gobiernos surgidos de la revolución mexicana se orientaron por la política de industrialización vía sustitución de importaciones aprovechando las condiciones ventajosas que representaba la incorporación de los Estados Unidos como país beligerante en la Segunda Guerra Mundial. Para el campo significó el impulso con nuevos bríos de un programa modernizador que buscaba elevar la producción agropecuaria regional. Esto conllevaba un viraje de la política agraria definida ahora por la protección de la propiedad terrateniente, lo cual se concretó en la expedición de certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera, así como en los apoyos económicos brindados para la expansión y modernización de la ganadería en el país.

La puesta en marcha de este modelo de desarrollo se dio sobre la base de un sistema político autoritario y presidencialista cuyas bases de funcionamiento se sentaron en el periodo cardenista con la subordinación de las organizaciones sectoriales de masas al partido oficial. El impulso funcionamiento del sistema político centralista y corporativo no impidió que el régimen se apoyara en las organizaciones sociales de masas sino, por el contrario, fueron la base de lo que se ha dado en llamar la constitución de un Estado de carácter nacional popular que garantizó el impulso de un desarrollo capitalista dependiente en el país. La región de La Frailesca participó en la construcción de este modelo de desarrollo a partir del impulso de un conjunto de iniciativas políticas y de inversión estatales que trajeron como resultado la transformación de su estructura territorial y productiva, al mismo tiempo que se construían formas de relación e intermediación que se recreaban sobre la base de la cada vez mayor centralización en el Estado de las decisiones políticas fundamentales. Estas transformaciones se producían en un contexto regional de relaciones sociales y políticas determinadas por el control que mantenían los grupos de poder vinculados en lo fundamental a los cacicazgos tradicionales de la región.

2.2.1. La “revolución verde” como estilo de desarrollo

A partir del decenio de 1950 la actividad agrícola en La Frailesca experimentó un proceso de modernización, al iniciarse una incipiente mecanización y tecnificación tanto agrícola como pecuaria, impulsada particularmente por los propietarios privados. La presencia estatal en el apoyo a la actividad agrícola en los años posteriores al reparto agrario, como ya ha quedado asentado, fue fundamental para la adopción de las propuestas de transformación tecnológica que se empezaban a difundir. Paralelamente con la aparición de nuevos actores sociales que se movían de manera más libre (ejidatarios, pequeños propietarios, rancheros) se produjo la expansión de un mercado regional con capacidad adquisitiva que requería de diversos servicios. Villaflores se iba convirtiendo así en un centro urbano, al que los campesinos debían trasladarse para adquirir productos manufacturados, ofrecer sus cosechas, o bien, para pedir préstamos a los propietarios, ganaderos o comerciantes.

El esquema desarrollista que se impulsó en el país a partir de los años cuarenta, tenía como metas no explícitas extender el alcance del Estado en las zonas rurales e incorporar a los campesinos a las relaciones de mercado. A escala nacional, el modelo fue un vehículo para la integración de la industria y la agricultura, que buscaba como meta, la construcción de un sector agrícola nacional organizado y tenía como método socavar la agricultura de subsistencia e integrar toda la producción agrícola a la dinámica comercial.⁶⁹

En relación con las políticas y programas de modernización impulsadas en ese momento, si bien tenían una clara adscripción territorial, su aplicación tenía un carácter diferenciado en términos sectoriales. En los ejidos se promovía la conformación de las Sociedades de Crédito, mediante las cuales el Banco de Crédito Ejidal proporcionaba créditos de avío a los campesinos para sus labores en el campo. A los ganaderos, por su parte, se les atendió por medio del Banco Agrícola y Ganadero que canalizó importantes recursos económicos destinados, indistintamente, para el mejoramiento de sus hatos y pastizales.

⁶⁹ Respecto a las orientaciones de la política agrícola de los años cincuenta y sesenta, ver el trabajo de Phillipe McMichel, 1999.

Cuadro 2. Orientación de la política de desarrollo agrícola en Valles Centrales de Chiapas, 1950-1980.

Periodo	Rasgos básicos
Efraín Aranda Osorio (1952-1958)	Inicia una nueva concepción de la actividad productiva en el medio rural, buscando su tecnificación. Se define por primera vez un Plan Agrícola para la entidad que consideró como una de sus tareas prioritarias, dotar de semillas mejoradas a las principales zonas agrícolas de los Valles Centrales de Chiapas.
Samuel León Brindis (1958-1964)	Introducción de tractores y maquinaria, tanto en el sector privado como en el ejidal. Apertura de nuevas áreas a la producción agropecuaria bajo el argumento de proveer de alimentos básicos a una creciente población nacional
José Castillo Tielmans (1964-1970)	Exponencial incremento en el uso de fertilizantes y de semillas mejoradas en particular en zonas maiceras buscando aumentar la productividad. Impulso a la construcción de centros y bodegas de acopio por parte de Conasupo y Andsa.
Manuel Velasco Suárez (1970-1976)	Busca ampliar la infraestructura productiva. Se introducen cultivos de mayor interés comercial (soya, algodón, ajonjolí, cártamo). Se apoya por diversas vías la producción de granos básicos –sobre todo de maíz– que con el tiempo llevó al fortalecimiento de su monoproducción.
Jorge de la Vega-Juan Sabines Gutiérrez (1976-1982)	Fortalecimiento de la infraestructura de acopio y comercialización (bodegas de Conasupo y Andsa). Mecanización de la agricultura otorgando créditos baratos para la compra de tractores, desgranadoras y trilladoras. Distribución bajo responsabilidad del Estado de insumos (semillas mejoradas y fertilizantes) en todos los ejidos.

Fuente: Cuadro construido con base en los informes de gobierno.

En materia agrícola, la acción gubernamental se orientó, a partir de la década de 1950, hacia el mejoramiento de los métodos de cultivo, así como al incremento de la superficie sembrada. Esta política tenía el propósito de promover tanto los cultivos considerados básicos para la alimentación como cultivos comerciales, lo cual implicaba desechar los sistemas de cultivo que habían definido hasta ese momento las formas de la relación con la naturaleza. Para ello, el poder federal irrumpe con gran fuerza como impulsor del desarrollo tecnológico y las vías de comunicación, en ese momento bastante precarias. Existía la urgencia de avanzar en la concreción de programas de modernización que remontaran las condiciones tradicionales en que se desarrollaba la producción agropecuaria fuertemente orientada a la producción de básicos, maíz y frijol. Lo anterior no quiere decir que antes de 1950 no existiera la producción de cultivos comerciales típicamente agroindustriales. De hecho, se sabe de la importancia que tenían cultivos como el tabaco y el ajonjolí en la región, los que al final de la década fueron sustituidos por la prioridad que tuvieron los básicos.⁷⁰

⁷⁰ Ver al respecto: Moisés T. De la Peña, 1951.

La visión de desarrollo sostenida por parte de las élites locales pugnaba por un modelo de agricultura tecnificada bajo el modelo que se impulsaba en el norte del país, con la idea de modificar la proporción de población campo-ciudad y superar la condición de un estado predominantemente rural, lo que se realizaba en el contexto del modelo económico sustitutivo de importaciones que se impulsaba en el país. Estos propósitos se veían reforzados por el impulso de una política de apertura de caminos para comunicar a esta aislada región, sobre todo con la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez.

La tendencia modernizadora de la producción agrícola se mantuvo durante la década de 1960, mediante la introducción de tractores y maquinaria, tanto en el sector privado como en el ejidal. A la par, se abrieron nuevas áreas a la producción agropecuaria, iniciativa que se justificaba por la necesidad de proveer de alimentos básicos a una creciente población nacional. No obstante, los niveles de productividad se mantuvieron bajos, ya que si al inicio del decenio de 1950 se producían 1.4 toneladas por hectárea de maíz en promedio, en la década siguiente apenas se logró incrementar 0.2 toneladas.⁷¹ Lo anterior se corrobora con la información presentada al final de la administración de Samuel León Brindis, bajo cuyo gobierno las hectáreas destinadas al cultivo del maíz en Chiapas pasaron de 282,000 en 1959 a 420,000 en 1963; en ese mismo lapso, la productividad del grano pasó de 900 kilogramos a 1,150 por hectárea. Así, el aumento de la producción agrícola, en esos años, fue resultado más bien de la ampliación de la frontera agrícola que del incremento de los niveles de productividad.

La política de modernización económica llevó al fortalecimiento de un sector ejidal que desarrolló una dinámica productiva y comercial, que desde muy temprano emparentaba con regiones de alto desarrollo capitalista del país, en el mar de atraso económico y social que era Chiapas durante esos años. De igual forma, se consideró fundamental promover la modernización de la actividad ganadera, mediante el cultivo de pastos forrajeros y la introducción de ganado de registro a las zonas orientadas a tal actividad, para lo cual se canalizaron importantes recursos económicos y legales a ese sector. Para la década de los setenta la producción de maíz tendió a incrementarse a partir del impulso de diversos programas impulsados por parte de los gobiernos federal y estatal no obstante que se introducen otros productos con valor comercial. Al finalizar la década de los ochenta era

⁷¹ Cfr Sexto Informe de Gobierno. Noviembre de 1964. Tuxtla Gutiérrez.

evidente la condición monoprodutora que había adquirido la región en relación con el maíz.

Con la transformación de la agricultura campesina regional que se observó a partir de la aplicación del programa de revolución verde que ya se ensayaba en el norte México con la creación de los distritos de riego, se trataba de incentivar la implantación –bajo el modelo de capitalismo estatista–, las relaciones de mercado y la modernización de las actividades económicas, proyecto que diversos actores sociales regionales asumieron con entusiasmo dada la particular relación paternalista que en ese marco se mantenía y recreaba con respecto al Estado.

2.2.2. La ganadería y el surgimiento de Nestlé

La revolución verde representó una forma de ‘sustitución de importaciones’ en los países no industrializados, pero también introdujo la dinámica agroindustrial de producción de alimentos. Regiones como La Frailesca cumplían un papel fundamental en la reproducción de este modelo, toda vez que se trataba de transformar los sistemas productivos introduciendo tecnología moderna o incorporar innovaciones a la producción para poder participar del abastecimiento de la demanda de productos con contenido proteínico de las zonas urbanas. El modelo de dieta alimentaria con la proteína animal como su centro, fue difundido en los países pobres, pero la repetición del modelo fue, en el mejor de los casos un proceso parcial, pues en los años posteriores, la dependencia alimentaria de estos países creció a pesar de (o precisamente por) la revolución verde.⁷²

Esto se puede reconocer también en los cambios que se operaron en la ganadería chiapaneca a partir de la década de 1950, que en su proceso de expansión para garantizar el abasto de carne a una creciente población urbana, tendió a agudizar diversos conflictos agrarios. Esto fue así porque el proceso de ganaderización extensiva que se impulsó para el sureste de México mediante la apertura de pastizales en zonas que hasta ese entonces eran áreas vírgenes o de explotación forestal, pronto se vio rebasado, y la ganadería empezó a competir también con terrenos que anteriormente se habían dedicado a la producción agrícola.

⁷² Cfr. Phillippe Mc Michael, *op. cit.*, p. 11.

Cuadro 3. Producción de maíz y ganado en La Frailesca, en los años de la modernización estatista (toneladas y cabezas).

Año	Villalores			Villacorzo		
	Maíz	Frijol	Ganado	Maíz	Frijol	Ganado
1950	12,069	1,901	18,457	7,765	860	16,776
1960	13,996	4,235	22,442	11,312	1,843	21,110
1970	20,481	1,081	39,353	17,208	1,027	33,469
1980*	234,100	2,000		203,653	2,160	

Fuente: Censos Agrícola, Ganadero y Ejidal. *Datos estimados con base en el Anuario de Chiapas 1985.

En La Frailesca existía, de hecho, el interés de parte de un sector de ganaderos de avanzar en la modernización de esta actividad, como ya venía sucediendo con la producción de maíz y frijol. A principios de la década de 1950, dejaron de cultivarse en la región extensas áreas orientadas a la producción de maíz y de frijol “de norte” o de invierno, lo cual coincide con el inicio de la modernización de los ganaderos tradicionales extensivos vía la ganadería para leche, así como con la agudización de conflictos en torno a la posesión de la tierra.⁷³

Las razones de la modernización de la ganadería en La Frailesca habría que buscarlas en la baja inversión requerida por la ganadería, ya fuera en infraestructura como en mano de obra. Esta actitud contrastaba con la que habían asumido a finales del decenio de 1940, cuando se mostraron renuentes al impulso de la modernización, interesándose más por mantener sus privilegios y poder al tiempo que demandaban el apoyo gubernamental para protegerlos. En ocasión de la campaña de Francisco J. Grajales a la gubernatura, los ganaderos realizaron una mesa redonda para plantear sus demandas. Entre estas destacaban: suspensión del programa agrario; que los terrenos con pastizales que no fueran utilizados por ejidatarios fueran rentados a los ganaderos; que la tierra destinada a la cría y engorda de ganado vacuno quedara exenta de afectaciones.⁷⁴ Así, habría que entender la expansión de la ganadería, sobre todo en la década de 1950, por las presiones que realizaron ganaderos para la ocupación de terrenos nacionales, que ocasionalmente pudieron haberse destinado a cubrir la demanda campesina de tierras.

⁷³ Ver Antonio García de León, 1978.

El trato privilegiado que recibieron los ganaderos, por parte del gobierno federal y estatal, generó que con los años la ganadería fuera adscribiéndose al proceso modernizador. Algunos ganaderos, además de productores, se convirtieron en introductores de ganado en pie a los frigoríficos de Arriaga, Villahermosa e incluso de la Ciudad de México. De acuerdo con Fernández y Tarrío, aquellos que tenían menos capacidad económica siguieron siendo sólo productores de becerros, que luego vendían para su finalización en otros estados de la república,⁷⁵ actividad que en la actualidad también es compartida en parte, por campesinos acomodados en los ejidos. La posibilidad de una ganancia fácil generó que en el marco de la expansión ganadera, diversos ejidos se interesaran por participar de la actividad. Sin embargo, las diferentes condiciones de recursos entre la ganadería ejidal y la privada llevan a que, incluso en la actualidad, se establezca una relación funcional entre ambas.

Los ganaderos fueron especializándose en esa actividad, desarrollando la ganadería de doble propósito, es decir, de leche y carne. El proceso modernizador, sin embargo, fue más fructífero en torno a la producción de leche. En este ramo se trataba de promover el uso de la inseminación artificial, así como la introducción de ganado de alto registro mediante la Asociación Ganadera Local, a la que se canalizaron importantes subsidios, lo que se hacía ya desde esa época bajo el discurso de la “vocación ganadera” que según ellos caracterizaba a la entidad. Entre los propósitos del periodo del gobierno federal estaba hacer de Chiapas una importante reserva ganadera del sureste de México, así como fomentar la creación de cuencas lecheras; por ello, en algunas regiones, como en La Frailesca, se promovió la siembra de sorgo y la introducción de ganado cebú y suizo.

La base de este impulso modernizador lo encontramos en los apoyos externos que recibió la actividad para su desarrollo como parte de la política alimentaria global ya expresada, particularmente por parte del gobierno federal, inicialmente por vía del Banco de Crédito Agrícola y posteriormente mediante instituciones como FIRA, que financiaron los diversos proyectos ganaderos de la región, sobre todo los que disponían de un mayor nivel de ingreso. A principios del decenio de 1950 varios de los principales ganaderos de la región fueron a Estados Unidos a elegir los lotes de ganado suizo, para distribuirse entre propietarios privados que participaban de un crédito ganadero otorgado al gobierno

⁷⁴ Al respecto se puede consultar Luis M. Fernández y María Tarrío, 1983, p. 47.

mexicano por el Eximbank.⁷⁶ Pese a los importantes financiamientos que recibió la ganadería en la región, su crecimiento de una década a otra en términos del número de cabezas, no fue espectacular, pero sí fue sostenido. Es necesario señalar, sin embargo, que la modernización de la ganadería no eliminó las formas de producción extensiva que se siguieron practicando en los predios, a las que a menudo también se buscaba incorporar tecnologías modernas.

Sin duda, un elemento central en el proceso de modernización de la ganadería frailescana fue el impulso dado por la trasnacional Nestlé, empresa pionera de los esfuerzos de agroindustrialización en Chiapas. Las diversas iniciativas en términos de mejoramiento de las razas de ganado en la región, así como de la introducción de pastos mejorados, tuvieron su origen en las iniciativas promovidas por la trasnacional. Esta empresa instaló a finales de la década de 1960 un depósito en Villaflores, con el propósito de realizar la captación de la producción regional de la leche que, hasta ese momento, diariamente se enviaba a Chiapa de Corzo. De hecho, la estrategia de la empresa en el sureste era insertarse en regiones de bajo nivel de desarrollo, pero con un importante inventario ganadero.⁷⁷ Con la instalación de depósitos de acopio, la producción lechera recibió un fuerte impulso, convirtiéndose en una importante opción de mercado de un producto cuyo destino era anteriormente la producción artesanal de queso o su venta para consumo como leche bronca.

La adscripción y crecimiento de la ganadería en la región, junto a la tecnificación de la producción agrícola, perfilaba a La Frailesca como uno de los puntales de la modernización capitalista del estado de Chiapas. Este proceso modernizador impulsado por el gobierno federal era, sin embargo, parcial; la falta de visión de las élites políticas locales les impedía ver que era necesaria también una modernización de las relaciones sociales que, hasta ese momento, seguían reproduciéndose bajo la herencia ideológica de un sistema económico y político basado en relaciones cerradas y autoritarias. La misma ganadería como actividad económica heredera de las viejas formas de concentración de la tierra y, por tanto, de las

⁷⁵ Cfr Luis Fernández y María Tarrío, *op. cit.*, p. 106.

⁷⁶ Al respecto ver María de las Mercedes Blanco, *Op. Cit.*, p.145.

⁷⁷ Sobre la importancia y centralidad de la Nestlé en la modernización de la ganadería frailescana, cfr Adolfo Álvarez, *et. al.* 1998.

relaciones de dominación era una actividad socialmente cuestionada, que en sí misma estaba ligada a la cadena de desalojos y represión en contra de los campesinos.

Ello no impidió, sin embargo, que a mediados de la década de 1960 la implantación de la trasnacional Nestlé, adaptándose a las condiciones de atraso que imperaban en Chiapas en términos de comunicaciones, caminos e infraestructura, fungiera como un elemento dinamizador de la actividad ganadera y coadyuvara a la inserción de la economía local en las exigencias que desde aquel momento eran planteadas por el capital trasnacional. Con ello la empresa aceptaba de hecho el contexto de las relaciones sociales y de disputa territorial en la que se fomentaba la ganadería en diferentes regiones de Chiapas por parte del Estado mexicano.

El manto represivo que cubría la actividad ganadera era apenas sólo un intento de ser develado por la exigencia de su modernización, planteada por diversos actores sociales que a cada momento reivindicaban de diversas formas sus derechos sociales y políticos. Este proceso de modernización significaba solamente una especie de tregua entre los actores sociales y políticos, que permitió aminorar (que no eliminar) las dimensiones de los conflictos sociales. No obstante, el auge productivo de la región contribuyó a precisar el carácter y perfil del discurso ideológico de la élite política chiapaneca, que en los años posteriores sería una especie de religión en torno a la llamada “vocación agropecuaria” que, como hemos expuesto antes, fue impuesta por las exigencias de la división internacional del trabajo.

2.2.3. Antidemocracia y control político

Es importante hacer notar que el proyecto de modernización agropecuaria, impulsado en aquel momento en La Frailesca, se produjo en un ambiente de movilización y confrontación política entre diferentes grupos al interior de los municipios, y no en un marco de tranquilidad y adhesión sumisa a las políticas oficiales como a menudo se cree. En esta confrontación participaban, por supuesto, las colonias ejidales, destinatarias privilegiadas de los recursos gubernamentales. El marco de la movilización social se expresaba a dos niveles: por un lado, la lucha por el acceso a los créditos y otros recursos expresada desde los ejidos, que era más evidente que la desarrollada por el acceso a un pedazo de tierra, bajo

el recurso legal de dotación y ampliación. El otro nivel era el de la disputa que se expresaba alrededor de la conquista de derechos políticos en torno a los procesos municipales.

Así, no todo fue jolgorio durante las administraciones modernizadoras lo cual se confirma si analizamos el contexto político y la radicalidad que adquirió el movimiento popular en pro de la apertura de los espacios de poder que, en lo formal, regulaban la vida pública: las administraciones municipales. Los conflictos políticos desarrollados al interior de los gobiernos municipales evidencian las dificultades, contradicciones e intereses sostenidos por parte de diferentes grupos, en el marco de un conjunto de indefiniciones que dejaba el proceso modernizador que se había iniciado en la región. Estas disputas y posicionamientos se producían en el marco de posibilidades y constricciones que definían el sistema de relaciones sociales desde el que se generaban y construían las modalidades de la acción colectiva. Las modalidades de la acción social no tenían por tanto solamente un carácter de clase sino que, eventualmente, sobre todo en las coyunturas políticas, se constituían alianzas en las que participaban actores con posiciones y objetivos diversos en función a valoraciones particulares.⁷⁸

En estas condiciones y habiendo consolidado los ejidos un espacio vital definido por la dotación parcelaria, la disputa de los campesinos como actores sociales se centró en torno a los espacios de poder local, particularmente los municipios, espacios dominados en ese momento por grupos de poder tradicional representados por ganaderos y comerciantes de la región, quienes detentaban el poder económico y político. Es así como en esta etapa, el movimiento popular en La Frailesca se centró en la lucha por el control de los espacios de poder municipal, sin abandonar del todo la lucha agraria que se orientaba ahora hacia la demanda de ampliación de los ejidos, pues después de la fase inicial que garantizó un importante reparto de tierras la Ley Agraria vigente permitía mantener viva la esperanza de ampliación de la superficie inicialmente dotada.⁷⁹

Así por ejemplo en 1955, casi a la mitad del periodo de gobierno de Efraín Aranda Osorio, los conflictos municipales en contra de la imposición de autoridades mostraban las contradicciones existentes entre diferentes grupos de poder, tanto en Villaflores como en

⁷⁸ Sobre las modalidades que puede adquirir la acción colectiva y la relación con el sistema de relaciones sociales, cfr: Alberto Melucci, 1991 y 1999.

⁷⁹ De hecho, Antonio García de León, 2002, p. 89, advierte que en la década posterior a 1955 se había agudizado la represión contra los campesinos solicitantes de tierra, dándose una cadena ininterrumpida de desalojos y enfrentamientos.

Villacorzo. En el primero, el conflicto emergió por la imposición de Francisco Fernández Aguilar por parte del Congreso Local como candidato a la presidencia para el trienio 1956-1958. Y aunque la protesta social no logró revertir la decisión de las élites locales, resulta importante reconocer el rechazo de la población a las imposiciones y prácticas políticas desarrolladas por este grupo, en acuerdo con el legislativo local, para nombrar directamente a las autoridades municipales sin que mediara un proceso electivo.

Ese mismo año, los conflictos afloraron también en Villacorzo, al interior del ayuntamiento recién electo, en contra de las intenciones del presidente municipal Romeo Grajales Corzo de imponer como parte de su equipo a personas que no eran del agrado del resto de los integrantes. Existía, de hecho, una pugna abierta entre dos grupos de interés al interior del municipio; por un lado, el representado por el presidente municipal a quien se le cuestionaba su actitud prepotente para con la población y, por el otro, el que era encabezado por Crisóforo Zuarth Ruiz, quien se ostentaba como primer regidor. Este conflicto, que inició el mismo día de la toma de posesión y duró por espacio de ocho meses, se resolvió en el Congreso del Estado a quien se le demandó la remoción del munícipe quien, se decía, era respaldado por el gobierno del estado a contrapelo de la protesta social en su contra.

En efecto, junto al proceso de modernización que en lo económico vivía la región a partir de ese momento, en los espacios municipales se desarrolló también una etapa de intensa lucha social y política que tuvo como escenario no sólo la disputa por el acceso a la tierra, que se mantuvo vigente, sino también el control de los ayuntamientos por parte de viejos cacicazgos. Mediante estas estructuras, los grupos de poder y caciques tradicionales podían mantener y legitimar también el control sobre los ejidos, vía la determinación de las personas que habrían de fungir como agentes rurales municipales.

Otra forma de expresión de la lucha en contra de las imposiciones desarrolladas por las autoridades municipales, durante este periodo, fue el rechazo que diversas colonias ejidales manifestaron en contra de la imposición de los agentes municipales, o bien, por la decisión de los munícipes de imponer de manera autoritaria a sus colaboradores en los ayuntamientos. Bajo esta forma de expresión del conflicto, la población de los ejidos generalmente señalaba que los agentes municipales impuestos no contaban con el aval de la población, que eran represivos, que estaban inmiscuidos ‘en hechos de sangre’, o bien, que

estaban “amafiados” con los grupos que detentaban el poder político y territorial en el municipio.

Esta movilización social combinaba una especie de revuelta rural con un creciente descontento urbano, cuyo eje de ruptura era la conquista de derechos políticos y que buscaba abrir los cerrados espacios de decisión política, hasta este momento concentrados en los grupos de poder tradicional, reflejo del viejo sistema de relaciones construido y permeado todavía por la ideología heredada del sistema de la finca. La dinámica de las contradicciones que mostraba el proceso modernizador de carácter conservador impulsado en Chiapas y que en La Frailesca tuvo sus formas particulares de expresión, formaban parte de una secuela de descontento social más amplia que se manifestó en diversos municipios de la entidad. De particular importancia fue el movimiento cívico desarrollado en 1955 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez encabezado por Artemio Rojas Mandujano en 1955, conocido como “movimiento pollino”, que no era más que la expresión de una ola de protesta en diversos municipios de Chiapas.

Importantes fueron en este periodo los conflictos municipales escenificados en la región en contra de la imposición de autoridades, los que volvieron a presentarse con mayor agudeza después de 1964, particularmente en el municipio de Villaflores. Un movimiento cívico de amplias proporciones que incluyó no sólo a las colonias ejidales sino también sectores urbanos de la ciudad, buscó revertir la imposición, lo cual finalmente lograron. Tal fue el caso de la candidatura de Jesús Flores Meléndez que aun cuando había sido aceptada por el Congreso local fue posteriormente sustituida por la de Bersaín Corzo Serrano. Para el siguiente proceso electoral en 1967, el conflicto por la presidencia municipal se reedita en este mismo municipio. Nuevamente participaron en rechazo a esta candidatura las colonias ejidales así como sectores urbanos. En esta ocasión, sin embargo, no bastaron las manifestaciones de repudio que realizó la población, que decidió no votar en esas elecciones como muestra de rechazo.⁸⁰

La disputa entre los actores políticos, en la que normalmente se involucraba a amplios sectores de la población bajo la forma de movimientos que demandaban la civilidad política de los procesos políticos, se expresaron al interior del PRI, única opción válida y reconocida en ese momento para acceder a los espacios de poder formal local. Estos

⁸⁰ Ver: Archivo histórico del Congreso del Estado. Carpetas Municipales. Diciembre de 1964.

movimientos que se desarrollaron de forma enconada entre los actores políticos en pugna, expresaban que la lucha en contra de la imposición de autoridades municipales seguía expresando la necesidad de mayor apertura de los espacios de decisión detentados por parte de los grupos de poder que, sin mediar procesos de consulta, imponían a candidatos impopulares que eran avalados por los poderes en turno de la ciudad de Tuxtla.

La lucha por los ayuntamientos que se desarrolló al interior del partido de Estado, a lo largo de la década de 1960, evidenciaba un despertar de la ciudadanía frailescana en contra de las formas de control político sostenidas por los grupos de poder tradicional. Los conflictos políticos escenificados durante la década en la región mostraban también, que las formas de intermediación constituidas desde los gobiernos municipales y controladas por los caciques, empezaban a entrar en crisis y podían poner en entredicho a las que se desarrollaban mediante las organizaciones corporativas de los campesinos, particularmente de la CNC, toda vez que la solución de las demandas agrarias se seguía manifestando como un proceso muy tortuoso.

En estas movilizaciones participaron no sólo grupos vinculados a la vida rural sino importantes sectores urbanos. No obstante las acciones colectivas que desarrollaron los campesinos frailescanos en alianza con otros actores, éstas se hacían generalmente en el marco del sistema de representación que hegemonizaban las organizaciones corporativas. Aunque los conflictos políticos se dirimieran al interior del partido oficial, el cual, de acuerdo con los cánones del momento era formalmente quien administraba la política, lo cierto es que las decisiones políticas importantes se tomaban de manera centralizada en la capital, Tuxtla Gutiérrez, y en el rejuego participaban diferentes grupos vinculados a los espacios del poder público.

2.2.4. Nueva fase de la disputa agraria

La atención gubernamental en materia agrícola de que fueron objeto los ejidos durante los sucesivos gobiernos modernizadores, no atenuaron la demanda de tierra por parte de los campesinos. Para la década de 1970, los hijos de los ejidatarios fundadores demandaron ser incorporados como ejidatarios con derechos plenos. Esta era, además, una expectativa que se mantenía en el plano nacional y que había generado desde principios de la década un consistente movimiento campesino en por lo menos una veintena de estados en el país,

movimiento que tenía la posibilidad de expresar la fuerza de la demanda agraria en virtud de que la misma ley en la materia consideraba el recurso de la ampliación, aunque precisaba que la gestión debería realizarse de acuerdo con los procedimientos legales establecidos.

Para 1976 en el municipio de Villaflores se contaba con 29 ejidos, 7 rancherías y 6 Nuevos Centros de Población Ejidal (NCPE). Otros tantos se podrían reconocer en Villacorzo.⁸¹ Así, pese a que durante esos años se mantuvo abierta la política de distribución de tierra, los conflictos y disputas por la misma nunca se resolvieron a cabalidad. La demanda agraria siempre estuvo revestida por el conflicto histórico que, como regla general, protagonizaron campesinos y propietarios, en un contexto en el que la ganadería mantenía una tendencia ascendente. De ahí que la preocupación fundamental de los propietarios siempre fuera la inseguridad de la tenencia de la tierra.

Bajo este clima social que se vivía localmente, era obvio que en cualquier momento se desatarían nuevamente las contradicciones históricas no resueltas. A mediados de la década de 1970 se vivió un nuevo auge de la lucha agraria en La Frailesca, al calor de las movilizaciones campesinas que desde principios de la década se registraron en varias entidades de la república. En la región empezaron a gestarse expresiones de un movimiento campesino novedoso que enfrentaba no sólo a los herederos de la elite terrateniente, ya muy transformados por la historia de anteriores afectaciones y luchas agrarias, sino también al aparato corporativo del Estado expresado mediante la CNC local. Los primeros brotes de descontento agrario se produjeron en 1972, con las tomas de tierra por parte de un grupo de baldíos de las fincas “Argentina” y “Soledad” en el municipio de Villacorzo, quienes solicitaban la creación de un Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE). En 1974, otro grupo campesino toma 164 hectáreas de terrenos nacionales y fundan el Centro de Población Los Amates.⁸²

Los momentos más álgidos del movimiento agrario que se vivieron en la región, en esa década, fueron entre 1975 y 1977, al final de la administración de Velasco Suárez. La fuerza que adquirió el movimiento en esa coyuntura la podemos reconocer mediante la información que el mismo gobernador manejó en el último año de su mandato, en relación

⁸¹ Archivo Histórico del Congreso del Estado. Carpetas municipales, Villaflores, Junio de 1976.

⁸² Algunos de los datos e información de esta sección se retoman de los trabajos de Juan González Esponda, 1980 y 1989.

con la existencia de más de ochenta invasiones a predios privados ocurridas en La Frailesca durante los primeros seis meses de 1976. Esta fase de movilizaciones se desarrolló bajo la figura de la “Alianza Campesina 10 de Abril”, que aglutinaba campesinos de varios municipios de Chiapas y prescindía de las organizaciones oficiales, lo que en ese contexto les permitía, además de reclamar para su causa el legado histórico del zapatismo, declarar su independencia del gobierno y de su central corporativa.

Las movilizaciones campesinas continuaron en 1975, año en que campesinos de Villa Hidalgo y Cuauhtémoc toman las fincas Rincón Ocote y Pueblo Viejo, lo que trajo un inicial triunfo para el movimiento. En abril de 1976, con motivo del aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, campesinos del ejido Cuauhtémoc se posesionaron de las tierras que habían venido solicitando desde muchos años antes y de lo cual no obtenían respuesta. A esta lucha se sumaron, posteriormente, los ejidos Francisco Villa, Galeana, 16 de Septiembre y Melchor Ocampo, mismos que mantenían pendientes solicitudes o decretos de ampliación no ejecutados.

Algunas de las acciones mas significativas realizadas por los campesinos bajo la bandera de la “Alianza Campesina 10 de Abril”, durante ese año, serían las de los campesinos de Villa Hidalgo, quienes se posesionaron de las finca “Hawai” y “La Haciendita”; también los campesinos del ejido Francisco Villa tomaron las fincas “Tehuacan” y “Zitacuaro”. Los campesinos del ejido Cuauhtémoc, por su parte, tomaron nuevamente la finca “Pueblo Viejo”, al tiempo que los solicitantes del NCPE Galeana invadieron la finca “San Ángel”, propiedad de Alfonso Macías. Los campesinos del ejido 16 de Septiembre se apoderaron del predio “San Damián”, mientras que los de los ejidos Melchor Ocampo y Agrónomos Mexicanos lo hicieron con la finca “El Tablón”.

Resulta interesante señalar que muchas de las movilizaciones campesinas, que se realizaron en esta etapa, se desarrollaron sobre la base de los ejidos constituidos, los que generalmente tenían pendientes la plena solución de demandas agrarias. Algunos de estos ejidos desarrollaron una actitud de resistencia en relación con el control político que mantenían caciques y terratenientes, mediante las agencias rurales municipales. Por lo general, estas movilizaciones confrontaron a ganaderos y propietarios en un clima de gran tensión social. Estas acciones formaban parte de la ola de movimientos campesinos que durante la década observó el país y que al reivindicar y poner en práctica la independencia

política frente a la CNC, las colocaba como bien dice Harvey, como parte de los nuevos movimientos sociales que se definían por un posicionamiento político de autonomía frente al régimen.⁸³

La movilización social, por lo general, fue enfrentada con el recurso del desalojo con lujo de fuerza, ya fuera por parte del ejército mexicano o por guardias blancas contratadas por los mismos ganaderos, lo que confirma la actitud y visión de éstos como un sector ligado a la represión.⁸⁴ Los campesinos de Villa Hidalgo así como los de Francisco Villa fueron duramente golpeados y torturados por el ejército, además de dispersarlos por diferentes regiones del estado para evitar que pudieran reorganizarse y responder a la represión. De hecho, al primero de los ejidos lo convirtieron en un cuartel, lo cual tenía el objetivo de intimidar a la población.

Con el sistemático cuestionamiento que en esta etapa desarrolló el movimiento social en relación con las estructuras de poder y dominación en la región, es evidente que se ponía en práctica por parte de éste, una política cultural tendiente a desestructurar formas de control incorporadas a la cultura local en las que, pese al fortalecimiento del ejido como espacio de interacción social construido en las anteriores décadas, la cultura autoritaria heredada del sistema de finca seguía definiendo el carácter de las relaciones sociales y culturales desarrolladas por los actores, expresadas por diversas prácticas políticas tales como el paternalismo, el clientelismo y el favoritismo.⁸⁵ Pese al rechazo a las formas de poder desarrolladas por parte del movimiento social, la persistencia de diversas prácticas políticas asentadas en la cultura, hacían que en lo fundamental, se mantuviera una relación viciada de los campesinos con el Estado.

Las movilizaciones y disputas que en este contexto desarrollaban diversos actores sociales en La Frailesca, no eran más que una pequeña muestra del asfixiante clima político en que se recreaban las relaciones sociales y políticas regionales y los esfuerzos de democratización desarrollados por parte de diversos grupos en los que generalmente participaban en primera línea los ejidos. Esta confrontación la sostenían principalmente los

⁸³ Al respecto del planteamiento de este autor, *cfr* Neil Harvey, 2000, p. 29-56.

⁸⁴ Respecto a la "cultura del desalojo" practicada por el gobierno del estado frente a la movilización campesina de la década de 1970, *cfr.*, Antonio García de León, 2002.

⁸⁵ Según lo planteado por Arturo Escobar, *et al*, 2001, p. 14, la existencia de muchas de éstas prácticas políticas tienen su origen en una concepción oligárquica y autoritaria profundamente arraigada en las sociedades y culturas latinoamericanas.

campesinos que mantenían viva su demanda agraria en contra de caciques y terratenientes quienes, a la vez que controlaban los espacios de gestión y poder local, mantenían la interlocución con los actores políticos de los gobiernos en turno en la entidad.

Cuadro 4. Distribución de la tenencia de la tierra en La Frailesca Chiapas.

Tipo de Tenencia	Has	%
Ejidal	303,105	36.5
Propiedad privada	378,144	45.5
Terreno nacionales	70584	8.5
Total	831,182	100.0

Fuente INEGI, 1990, XI Censo General de Población y vivienda.

Pese a sus logros en términos de la amplia movilización social desarrollada, la “Alianza Campesina 10 de Abril” tuvo una vida efímera. Como resultado de la represión que vivieron los ejidos, y del ambiente político regional, un grupo de poder emergente en la región, representado por Germán Jiménez y Efraín de Coss que mantenían una disputa con los viejos cacicazgos en descomposición por el acceso al gobierno municipal, se acercó al movimiento con un discurso democratizador ofreciendo apoyo y recursos para sacar a los detenidos de la cárcel, cuestión que el movimiento aceptó dada la situación de aislamiento y temor a la que se le había conducido.

Con este acercamiento, en realidad lo que estaba en juego, sin embargo, no eran solamente los objetivos inmediatos de sacar de la cárcel a los líderes del movimiento, o la posibilidad de que la Alianza, en recompensa, apoyara las pretensiones de este grupo para acceder al gobierno municipal, lo que finalmente sucedió. En realidad, lo que buscaba este acercamiento era la mediatización y subordinación del movimiento a este grupo de poder emergente, que le llevó a perder su condición de independencia política frente a los grupos de poder regional y frente al Estado.

Y no era que el movimiento campesino no pudiera eventualmente establecer alianzas con un grupo de interés como el que en aquel momento representaba Jiménez y de Coss. El problema era que un acuerdo político en esa circunstancia se realizaba en condiciones de debilidad y sin la perspectiva de buscar la independencia política frente a los

planteamientos de un grupo que, además de tener muy claro un proyecto político orientado a ganar espacios de poder al interior del aparato del Estado, abrazaba plenamente la orientación corporativa que se había recreado la región durante al menos las tres décadas previas. Por muy prometedor que pudiera ser el movimiento campesino que se venía gestando en otros estados en el país y en la misma entidad, la fuerza de la relación corporativa construida en los años anteriores y la pobre vinculación sostenida con un movimiento campesino que emergía en otras latitudes, era perfectamente lógico que sus posibilidades disminuyeran en los años posteriores al no haber tenido la capacidad de consolidar un proyecto regional alternativo al impulsado por el grupo de comerciantes liderados por Jiménez a finales de la década de 1970.

El movimiento campesino de ese momento, sin embargo, formaba parte del ciclo de movilizaciones sociales que después de 1968 pugnarían por un cambio general en la vida política de México, con sentido popular y democrático y por la progresiva realización de la ciudadanía tal y como nos lo señala Foweraker en relación con los movimientos sociales y populares que se desarrollaron en el país, buscando generar prácticas democráticas en las que sus líderes no sólo fueran sus representantes sino también responsables frente a la estrategia de cooptación desarrollada por el Estado.⁸⁶

2.2.5. El granero de Chiapas

Ya hemos visto cómo en las décadas de 1950 y 1960, los diferentes gobiernos estatales canalizaron importantes recursos, así como maquinaria e insumos, para transformar la agricultura temporalera de la región de los Valles Centrales de Chiapas. No está por demás señalar que este proceso se daba sobre la base de la creación de todo un complejo institucional que se empeñaba en promover el desarrollo agropecuario de la región. La participación en este proceso de diversos organismos federales como INIA, Pronase, Conasupo, y Fertimex, junto con las instituciones de financiamiento, muestra la centralidad que en este momento tenía la participación federal en la modernización agrícola de la región. En términos generales, el esfuerzo institucional buscaba garantizar a los ejidos recién constituidos el acceso a los insumos y recursos para la gestión del proceso

⁸⁶ En relación con el papel jugado por ciertos líderes vinculados al gobierno para la desarticulación del movimiento social a finales de los setenta y los ochenta, *cfr.* Joe Foweraker, 1989, p.93.

productivo, sobre todo a un consolidado grupo de campesinos maiceros que iba emergiendo como importante actor económico en la región.

La acción del Estado se refuerza en la década de 1970, al ampliar y fortalecer la infraestructura productiva de las regiones de Chiapas, sobre todo las que tenían posibilidades de producir alimentos y granos en gran escala. Para 1970 se podían contabilizar en los dos principales municipios de la región Frailesca, de acuerdo con el Censo Agrícola y Ganadero de ese año, 225 tractores, 160 rastras de fierro, 110 sembradoras para tractor, 150 cultivadoras, así como 130 desgranadoras de motor. Ello se hacía buscando revertir la crisis agrícola que se había hecho presente desde mediados de la década de 1960, mediante la introducción de cultivos con mayor interés comercial como soya, algodón, ajonjolí, cártamo.

Para el caso de La Frailesca, sin embargo, el gobierno seguía apoyando por diversas vías la producción de granos básicos –sobre todo de maíz– que con el tiempo llevó al fortalecimiento de su monoproducción. La propuesta consistía en insistir en los paquetes e innovaciones tecnológicas inspiradas en el programa de la “revolución verde”, mediante la introducción de semillas de maíz mejoradas, generadas ahora por las instituciones de investigación agrícola del país. Se buscó, igualmente, hacer estudios para aprovechar el potencial productivo de los suelos, así como fomentar el uso de maquinaria agrícola mediante el financiamiento para la adquisición de tractores, rastras de fierro, sembradoras, cultivadoras, desgranadoras, así como otros implementos.

Paralelamente se amplió la infraestructura de acopio y comercialización mediante la construcción de bodegas administradas por Conasupo y Andsa. Todavía en 1975 fueron construidas en la región 5 nuevas bodegas y ampliadas otras 13 que se consideraban insuficientes. Para fines de 1976 los centros de acopio en la región habían llegado a prácticamente todos los ejidos de la zona maicera, los cuales sumaban 32 bodegas construidas tanto en el municipio de Villaflores como en el de Villacorzo.⁸⁷ Con ello se fortaleció la intervención estatal, tanto en el abasto para la producción como en la comercialización iniciada en años anteriores, y se amplió el monopolio en la comercialización y distribución de insumos (semillas y fertilizantes nitrogenados) en todos los ejidos. La construcción de esta infraestructura de acopio correspondía al incremento de

⁸⁷ Informe de Gobierno, 1975 y 1976, Tuxtla Gutiérrez.

la producción de maíz que para ese año reportaba 578,000 toneladas en el estado, no así la de frijol que se situaba en 48,000.

El proceso modernizador de la producción agrícola en la región, por tanto, si bien se tradujo en un incremento de los índices productivos, infraestructura de acopio y organización de productores vía la participación corporativa de los ejidos en el partido oficial, también se tradujo en una relación de dependencia de los campesinos hacia las iniciativas del Estado, así como a la condición monoprodutora de maíz que se perfilaba en la región. A la par que se extendía la maraña burocrática de las instituciones, se desarrollaba también el juego de intereses por el control y la administración de los recursos que se canalizaban a la zona, intereses de los grupos de poder que se expresaban en diferentes espacios de decisión como los ejidos y municipios.

La dinámica productiva ensayada desde años atrás en La Frailesca, así como el ambiente político imperante, hacían que las propuestas del Sistema Alimentario Mexicano fueran aceptadas y adoptadas como el discurso que debía seguir justificando la alianza y fidelidad de la región y sus actores a los grandes proyectos del Estado mexicano. El Sistema Alimentario Mexicano impulsado durante el gobierno de López Portillo fue tal vez el último de los programas de fomento productivo que buscó concretar la autosuficiencia alimentaria en el país. Este programa resultaba sin embargo muy costoso para una agricultura subsidiada en el exterior.

El impulso de esta política mostró, durante la última parte de esa administración y al inicio de la siguiente, que La Frailesca resultaba ser pieza clave dentro del proyecto económico gubernamental en el que todavía se impulsaron iniciativas orientadas a garantizar la soberanía alimentaria. El gobernador Juan Sabines abrazó la causa del SAM y buscó apoyarse en La Frailesca, como región destacada en la producción de maíz, a la que a partir de ese momento, políticos y burócratas empezaron a llamar “el granero de Chiapas”. El gobierno de Juan Sabines se caracterizó por la impresionante cantidad de recursos que manejó su administración, muchos de los cuales se utilizaron para mantener vivo el discurso de la “vocación agropecuaria” de Chiapas y para buscar mantener la paz social, atenuando la demanda agraria vía la compra de tierras en las regiones más conflictuadas. Durante la administración de Juan Sabines se ensayó, con éxito, una forma novedosa de resolver las demandas agrarias vía la compra de tierras. Con ello se satisfacía la demanda

campesina, al mismo tiempo que se indemnizaba a los propietarios las tierras recuperadas, lo que dio lugar a la generalización de la copropiedad, una figura que hacía de los campesinos una suerte de pequeños propietarios.

La compra de diversas propiedades que se destinaron a los ejidos demandantes, se realizó mediante los recursos que se manejaron con el Convenio de Concertación Agraria, (Codecoa), recursos que significaron una palanca para el impulso de esta fase modernizadora centrada en la preocupación por eficientar la producción agropecuaria. Para 1980, el gobierno chiapaneco hacía alarde de que se había logrado una producción de un millón doscientas mil toneladas de maíz y para el año siguiente, reportaba un millón seiscientas mil, lo que colocaba al estado como el segundo productor en el país. Por el encanto que proyectaba esta información, La Frailesca resultaba ser la región maicera por excelencia y para ego de los frailescanos se le otorgó en por lo menos dos ocasiones a principios de la década de 1980 el premio nacional “La Mazorca de Oro”, aunque algunos campesinos de manera recurrente afirman que este premio fue un engaño, toda vez que los niveles de productividad de 7 toneladas por hectárea nunca fueron alcanzados.⁸⁸

No obstante, La Frailesca se proyectó nacionalmente en la década de 1980, como una de las regiones especializadas en la producción del grano, la mayor parte del cual se enviaba al centro del país. Todavía en 1993 Chiapas abasteció al país con el 6.85 % de la producción nacional, en particular a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México con más de 195 000 toneladas y a Veracruz con 166 000.⁸⁹

Así, la zona definida por parte de los municipios de Villaflores-Villacorzo con un mayor nivel de integración al mercado, adquirida a partir de la especialización en la producción de maíz y ganado, aparenta en dicha década una situación de bonanza de la que alegremente participaban los ejidos. Mientras que la producción de maíz rebasaba el millón y medio de toneladas, el inventario de ganado bovino colocaba a la entidad en alrededor de tres millones de cabezas. La base de esta bonanza la podríamos encontrar en las posibilidades que encontró un amplio sector de campesinos que mantuvieron una relación privilegiada con el Estado por las relaciones y nexos políticos que desarrollaron por la vía del carismático líder regional Germán Jiménez.

⁸⁸ Seminario de planeación regional, Universidad Autónoma Chapingo, Villaflores, Febrero de 1996.

⁸⁹ Para reconocer la importancia de la entidad como abastecedora de maíz al país, *cfr.* Luis Chías Becerril y José Gazca Zamora, 1995, p. 218.

Fue con base en esta política de fomento productivo desarrollada por espacio de varias décadas, pero que observó su mejor momento durante la administración de Juan Sabines, en que los actores sociales regionales, y en particular los campesinos, participaron de la construcción de una identidad social maicera. Esta construcción identitaria se mantiene hasta nuestros días, pese a los embates de la política neoliberal impulsada en los últimos años buscando su deconstrucción a partir de buscar la modernización de los procesos productivos con base en los criterios de rentabilidad y eficiencia técnica. Esta identidad maicera es, quizá, la base de las diversas movilizaciones que en los años de la crisis y recomposición de la política estatal en el campo, protagonizaron los campesinos de la región en defensa de lo que consideraron ser parte de su saber hacer.⁹⁰

La administración sabinista tenía como objetivo específico profundizar la mecanización de la agricultura, con recursos que se pusieron a disposición de los productores mediante créditos accesibles. También se propuso canalizar apoyos a campesinos que producían con métodos tradicionales. Al final de su corta gestión Juan Sabines señalaba haber entregado 150 000 machetes, 45 000 azadones, 35 000 coas, 50 000 palas, 50 000 zapapicos y yuntas de bueyes para los campesinos de las diferentes regiones de Chiapas.⁹¹ Estos recursos eran entregados de manera gratuita por Germán Jiménez, ya en su condición de líder estatal de la CNC, quien había logrado acumular un impresionante capital político mediante la gestión de apoyos diversos para los campesinos, lo que se traducía en una influencia importante tanto en la región como entre el equipo de gobierno en turno.

No se puede dejar de reconocer que en esos años, la dinámica de la acción social en la región transitaba por dos bandas: por un lado, los campesinos que mantenían la relación corporativa con el Estado mediante las organizaciones oficiales y, por otro, quienes habían abrazado la causa de un movimiento campesino independiente del Estado en demanda de tierra y que participaba en los esfuerzos de construcción de formas alternativas de representación social.

Pese a ello, la alianza estratégica de los campesinos frailescanos y el Estado era evidente y no estaba a discusión. Los recursos canalizados en esos años para el impulso de diversos proyectos por medio de la inversión directa o bajo la forma de créditos baratos

⁹⁰ Para un reconocimiento de la construcción de identidades sociales y culturales en la región de estudio ver Alvaro Martínez, 2001

⁹¹ V Informe de Gobierno. Noviembre de 1981, Tuxtla Gutiérrez.

fueron abundantes, los cuales al distribuirse con criterios clientelares profundizaron una relación de dependencia de los campesinos hacia los apoyos del gobierno. No obstante, las organizaciones y grupos de productores en los ejidos, por lo general desarrollaban un papel activo en las iniciativas y aceptaban tales condiciones responsabilizándose, incluso, del fomento y difusión de las innovaciones tecnológicas en materia de producción de semillas desarrolladas por la Secretaría de Agricultura.⁹²

A manera de síntesis, señalaremos que con el gobierno de Juan Sabines se cerró un ciclo en la vida económica, política y social en la región, que se caracterizó por el apoyo que diferentes gobiernos estatales –desde Aranda Osorio hasta Sabines Gutiérrez– dieron para el fomento de su vida productiva. Esta política se justificó por la importancia que en ese momento tenía para el modelo económico la producción de alimentos suficientes para satisfacer la demanda interna. A los apoyos otorgados por el Estado, los campesinos respondieron manteniendo permanentemente su lealtad mediante los aparatos políticos y de control corporativo: la CNC y el PRI.

Mas allá de la orientación productivista que por lo general mantuvieron las diferentes administraciones en materia de desarrollo rural, el impulso de tales iniciativas generalmente se hizo buscando mantener la subordinación de los ejidos y sus comisariados ejidales a los proyectos del Estado mediante la relación corporativa con las organizaciones oficiales. No obstante que, en el marco de las disputas políticas locales, eventualmente se haya optado por cambiar de interlocutores políticos desechando la intermediación de actores políticos ligados a la vieja casta terrateniente para sustituirla por otros que manejaban un discurso aparentemente democrático, ello no implicó el cuestionamiento de las prácticas políticas que mantenían la relación de subordinación de los campesinos hacia las iniciativas del Estado que llevaran, por tanto, a la construcción de formas más democráticas de organización y gestión. La consolidación de este grupo emergente implicó enfrentar y disputar el control político que mantenían los caciques tradicionales sobre los espacios de poder y consolidar una fuerza social capaz de desplazar a sus representantes como lo veremos enseguida.

⁹² Es el caso de la Sociedad productora de semillas promovida por técnicos del Inifap en San Pedro Buenavista y que llegó a distribuir semilla mejorada en las diferentes regiones maiceras de Chiapas.

2.2.6. La construcción de un liderazgo

En los primeros años de la década de 1970, el control político de los municipios de La Frailesca se seguía ejerciendo por parte de grupos de poder herederos del viejo sistema finquero, reconvertidos ahora a la ganadería, o bien, vinculados a actividades como el comercio de bienes y la prestación de servicios. Esto era así, porque muchos ex finqueros detentaban, junto a sus ranchos y propiedades, prósperos negocios en los florecientes espacios urbanos en ascenso.

Las prácticas y visiones políticas del grupo político que se había accedido al poder en ese periodo, se movían entre las formas tradicionales de control y dominio político y las iniciativas modernizadoras desarrolladas por el gobierno de Velasco Suárez. Su ascenso tenía como contexto la confrontación política sostenida con el grupo representado por Alfonso Macías Zebadúa, conocido comerciante de Villaflores, quien en 1970 accede a la presidencia municipal, y durante su administración impulsó una gestión de corte empresarial. La gestión de Macías transcurrió sin mayores sobresaltos, en parte porque se propuso cambiar algunas de las prácticas autoritarias en la forma de gobernar, además del discurso modernizante con el que se presentaba en los ejidos.

El poder y relativo consenso logrado por Macías durante su gestión le llevó a la tentación de recrear la vieja práctica de imponer a su sucesor, quien se ostentaba como dirigente municipal del PRI. No obstante el abierto rechazo a la propuesta de su candidato y a las protestas posteriores por las irregularidades observadas en el proceso de elección, éste fue ungido como presidente en 1973, con el aval del Congreso del Estado.

La relación que mantenía el poder municipal con las colonias ejidales era de dominación y control, el cual se ejercía fundamentalmente mediante el nombramiento vertical de los agentes rurales municipales, quienes a menudo eran rechazados por los ejidos. Las redes del poder local que se concentraban en Villaflores permitían incidir en la dinámica de los procesos políticos de municipios y ejidos. Así, la vieja élite local, que había mantenido el poder por años y en lo fundamental había resultado beneficiada por la política modernizadora de las décadas previas, se mantuvo cohesionada como clase defendiendo una clara ideología de tipo finquero en todo el territorio frailescano hasta mediados de la década de 1970.

Para 1976, las relaciones autoritarias que establecían las autoridades municipales con los ejidos, así como la madurez adquirida por los sectores urbanos, generó en Villaflores un consistente movimiento opuesto a una nueva imposición. Este movimiento aglutinó una vez más a la mayor parte de los ejidos, entre los que destacaron los que mantenían conflictos de tierras no resueltos, como fueron Francisco Villa, Cuauhtémoc y 16 de Septiembre, entre otros. La tenaz lucha opositora abrió la vía para nombrar a Efraín de Coss Velasco, un comerciante de Villaflores, –a la sazón, pariente del gobernador Velasco Suárez– como autoridad municipal electa democráticamente por abrumadora mayoría, hecho que el gobierno del Estado reconoció de buen modo.

Este movimiento político era promovido por un sector emergente de comerciantes enriquecidos de Villaflores, encabezados por el mismo Efraín de Coss y Germán Jiménez, quienes formaban parte de una corriente política que con el tiempo daría lugar a lo que en este documento denominamos “germanismo”. En una situación de efervescencia democratizadora en la región, este grupo respaldado por campesinos armados con machetes y palos se enfrentó a la vieja oligarquía local, representada en ese momento por Macías, haciéndole ver que la correlación de fuerzas se inclinaba a favor de una propuesta que se proponía abrir los espacios de participación al conjunto del espectro social frailescano.

La lucha por el poder municipal mostraba, en ese momento, la pugna entre dos grupos: el que encarnaba el poder tradicional que históricamente había detentado el poder político-territorial y otro grupo emergente que, consciente de su fuerza, buscaba destrabar las relaciones que ya no correspondían a las nuevas condiciones de la democracia política controlada y dirigida desde el Estado (consolidado con el auge del corporativismo en el que los campesinos eran su base más fuerte).

Esta disputa se expresaba de manera alternada y a veces discontinua en los municipios de la región; de cualquier modo, permitía mantener los alineamientos políticos e identificar posiciones e intereses de los grupos en conflicto, uno de los cuales se manifestaba, revestida con posiciones de clase, por el rechazo a las viejas prácticas de dominación y control que ejercía un grupo dominante. En el marco de esta disputa, fue emergiendo la figura de Germán Jiménez como el portador de una propuesta más ligada a los intereses y proyectos de una clase empresarial emergente articulada a la visión de la clase política estatal en turno y, lo que es más importante, con la posibilidad de reorientar y contener un movimiento

social agrario que amenazaba con desbordarse y que venía construyendo sus propias opciones organizativas.

El grupo representado por Jiménez participó en apoyo a las movilizaciones de los campesinos de la región que demandaban la entrega de tierras, mediante la llamada “Alianza Campesina 10 de Abril”, fundada años antes por gente cercana al entonces Partido Socialista de los Trabajadores. Ello incrementó el prestigio de Germán Jiménez como líder campesino en los diversos municipios de la región. La fuerza de Jiménez se extendió hasta La Concordia donde también apoyó a varios ejidos en proceso de formación, en el contexto de la reubicación de diversas poblaciones por efecto de la inundación de la presa La Angostura.

La experiencia y relaciones desarrolladas por Jiménez como funcionario del Banco de Crédito Rural en la región, le permitió madurar y construir en 1977 la llamada Coalición Frailescana de Defensa y Producción, que después se transformaría en la Asociación Agrícola Local de Villaflores, plataforma organizativa mediante la cual mantenía vínculos con los ejidos y sus necesidades. Es importante reconocer la habilidad con la que un líder como Jiménez logró construir el andamiaje político que le permitió concentrar una importante influencia política y social. ¿Qué mecanismos utilizó y cuáles fueron las circunstancias que permitieron su consolidación y ascendencia entre los campesinos chiapanecos, en particular de La Frailesca, a fines del decenio de 1970 y principios del de 1980?

Si en las contiendas por el poder municipal de las décadas anteriores a 1970 los campesinos presionaban, junto a una cada vez mayor clase media urbana, por la apertura del sistema dominado por la vieja clase finquera, en la segunda mitad de la década de 1970 se produce, mediante la figura de Jiménez, un discurso transfigurado que se apoya en la ideología de “lo campesino”, con lo cual buscaba un doble objetivo: establecer una clara diferencia con respecto al grupo de poder tradicional (los terratenientes) y atraer a sus filas un amplio conglomerado de campesinos ya modernizados o tradicionales –con o sin tierra–, para mantenerse como grupo de presión.

La movilización social en contra de los grupos de poder tradicional entre 1975 y 1979, encabezada por la Coalición Frailescana de Defensa y Producción, se desarrolló en varios planos: por demandas agrarias, político-electorales y servicios urbanos. Esta lucha permitió

a Germán Jiménez lograr el consenso necesario para que, en 1979, aspirara a suceder a Efraín de Coss en la presidencia municipal de Villaflores. No resultó difícil lograr este propósito, pues, localmente, se contaba con el apoyo tanto de los ejidatarios como de los grupos de comerciantes y transportistas que pugnaban por relaciones políticas más abiertas. Con la llegada de Juan Sabines al gobierno de Chiapas como prospecto a terminar el sexenio, el ambiente político en el estado también favoreció esa posibilidad.

Sin embargo, Jiménez ocupó el cargo de presidente municipal por un periodo no mayor de seis meses, pues en su ambición de poder y por las relaciones políticas que desarrollaba con el recién ungido gobernador de Chiapas, Juan Sabines Gutiérrez, pocas veces se le encontraba despachando los asuntos municipales.⁹³ En septiembre de 1980, Juan Sabines invita al entonces edil Germán Jiménez para que se hiciera cargo de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de la CNC, designación que le permitió proyectar su figura como líder campesino en el estado. Su ascenso como líder estatal no impidió que siguiera teniendo una enorme influencia en la región, sino que por el contrario, la fortaleció en términos de reivindicar su origen y raíces, lo que cuidó repartiendo puestos y definiendo a quienes habrían de sustituirlo.

Pese a la consolidación de este grupo de poder local estrechamente ligado a la corriente sabinista, a principios de 1982 se empiezan a escuchar voces de inconformidad en contra de sus principales líderes, en relación con el manejo de los recursos canalizados a la región. Este fue el caso de los campesinos del ejido Francisco Villa, quienes denunciaron la no realización de obras en los ejidos y el uso fraudulento de los recursos del Codecoa destinados para comprar tierras. De acuerdo con la denuncia presentada por los mismos campesinos, los predios “fueron reportados como pagados en una suma bastante más elevada para que le quedaran al intermediario jugosas ganancias, como lo demuestran los avalúos a dichos predios en relación con lo pagado a los propietarios”. De acuerdo con la denuncia, entre los predios que fueron reportados como pagados en una suma más elevada están los ranchos: Zitácuaro, La Haciendita, San Damián, Tehuacan, El Jardín, Pueblo Viejo, Reparo Limón, La Gloria, entre otros.⁹⁴

⁹³ En mayo de 1980, el presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado pedía al presidente municipal le informara quién despachaba en la presidencia municipal de Villaflores, toda vez que había quejas de los habitantes de que no se resolvían sus asuntos. Archivo Histórico del Congreso del Estado.

⁹⁴ Carpetas Municipales, Villaflores, Archivo Histórico del Congreso del Estado, Febrero de 1981.

Como resultado de estas y otras denuncias, por esos días era amenazado de muerte el líder del ejido Cuauhtémoc, José Solís Pérez, quien poco tiempo después fuera asesinado por la espalda. Este era un ejemplo de la respuesta de este grupo para quienes se oponían a sus designios. Según diferentes fuentes, en ese tiempo hubo por lo menos unas 15 muertes por motivos políticos. Mientras tanto el Congreso del Estado detectaba anomalías por corrupción en la administración de Rudy López Silva (presidente municipal sustituto una vez que Jiménez fue llamado a dirigir la CNC estatal) por una desviación del presupuesto municipal superior a los nueve millones de pesos.⁹⁵

No obstante, muchos ejidos como los de Villa Hidalgo, 16 de Septiembre, Francisco Villa y otros, se opusieron a estas prácticas caciquiles aprendidas de los grupos que antaño habían mantenido las viejas formas de control basadas en las relaciones de dominación de horca y cuchillo. Fiel al modelo corporativo que se había instalado en la región en los años posteriores al reparto agrario, el grupo de Jiménez conocía muy bien los métodos usados por los finqueros y ex finqueros de la región para reprimir o eliminar a los campesinos que se atrevieran a confrontarlos y a expresar una posición política divergente.

Por la violencia utilizada en contra de opositores, la forma de ejercer el poder repartiendo lealtades, el carisma y la interacción que desarrolla todavía entre diversos grupos de campesinos, así como la evidente delimitación regional de su área de influencia, podemos aseverar que Jiménez representó en aquel momento un cacicazgo clásico, que ejercía una forma de dominación capaz de enfrentar al aparato gubenamental como lo hizo algunos años después y de movilizar amplios contingentes para seguir manteniendo sus privilegios.⁹⁶

No se puede negar, sin embargo, que el ascenso del grupo de Germán Jiménez significó el término de una forma de dominación y la implantación de una nueva forma de control y caciquismo. En adelante, sería este líder quien impondría a los sucesivos presidentes municipales, bajo el acuerdo tácito de respetar los intereses de los grupos de poder tradicional, quienes se dedicarían a sus actividades y negocios. La corriente encabezada por Jiménez, desde la dirección estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC) e inserto ya en uno de los grupos de poder político en Chiapas —en la perspectiva de la

⁹⁵ Carpetas Municipales, Villaflores, Archivo Histórico del Congreso del Estado, Abril de 1981.

⁹⁶ En relación con las características de las formas de dominación y el carisma. Ver: Max Weber, 1999, p. 191.

sucesión que ya se avizoraba—, se dedicó a comprar lealtades de dirigentes campesinos mediante los millonarios recursos que se manejaron durante la administración “sabinista”. El manejo discrecional de los recursos del Codecoa por parte de los dirigentes agrarios del sabinismo, sirvió también para fortalecer su condición de poder dada la demanda agraria y la presión sobre la tierra a principios de los años ochenta.

En los hechos, este grupo expresaba una forma diferente de construir las relaciones políticas, donde superar la relación de dominación que ejercían los ex finqueros con la sociedad local era fundamental, lo cual se tradujo a la postre en un fortalecimiento de la relación corporativa de los campesinos con el Estado. Podríamos decir, entonces, que la primera fase del movimiento social estuvo centrada en la lucha contra las formas tradicionales de dominación (política y territorial). En esa aspiración legítima del movimiento se montó el grupo de Jiménez y la condujo hacia un desenlace que satisfacía sus intereses. Fue también, sin embargo, una etapa que preparó las condiciones para las movilizaciones que los campesinos maiceros protagonizaron a mediados de la década de 1980, como veremos en el capítulo siguiente.

El periodo aquí analizado inició, sin embargo, un proceso de modernización política de la región, sobre la base de una importante participación campesina en diversos movimientos sociales. Paralelamente, los cambios que en este sentido se produjeron en el espacio regional, como resultado del proceso de modernización agropecuaria, se expresaron en por lo menos los siguientes aspectos: el afianzamiento de una cultura productiva centrada en el cultivo de maíz, la incorporación de la dinámica productiva de tecnología agrícola moderna (maquinaria agrícola, agroquímicos), la construcción de infraestructura de acopio y comercialización y la emergencia de nuevos actores sociales (comerciantes, transportistas), lo que mostraba un importante nivel de complejidad de la sociedad local.

No obstante que muchas de estas iniciativas fueron impulsadas y respaldadas por el Estado, los cambios tuvieron como base la acción social desarrollada por parte de los núcleos ejidales, principales protagonistas de este proceso, quienes a partir de la confluencia de sus intereses con la política estatal, lograron dinamizar y proyectar la economía de la región en torno a la producción de maíz. Este proceso se tradujo en la emergencia de un sector de agricultura ligado al mercado que cumplió con los objetivos de garantizar un importante nivel de producción para satisfacer el mercado nacional, modelo

que a principios de la década de 1980 resultó inviable por las nuevas condiciones del mercado internacional.

El movimiento popular por su parte, no obstante que en los arranques del programa desarrollista regional tuvo un *impasse*, se expresó posteriormente como un movimiento cívico demandando la democratización de relaciones políticas autoritarias que mantenían los grupos de interés dominados por caciques y terratenientes, movimiento social que para la década de los setentas retoma impulso replanteando las viejas demandas agrarias al mismo tiempo que pugnaba por la transformación de las relaciones políticas jerárquicas que se sostenían y recreaban regionalmente en los espacios de poder local (comisariados ejidales, ayuntamientos) con la participación y el aval de las organizaciones corporativas vinculadas al Estado.

Los cuestionamientos que desde el movimiento popular y democrático se dieron de manera recurrente a la estructura de poder en que se cimentaba el sistema político regional y las formas de dominación desarrolladas por los grupos de interés local, en lo fundamental se mantuvieron durante el periodo aquí analizado. Para lograrlo el Estado fue capaz de aplicar por la vía de las organizaciones corporativas la cooptación de líderes y la división del movimiento, otorgando algunas prebendas y en su caso aplicando la represión abierta cuando lo anterior no daba los resultados esperados. Este esquema de contención resultaba funcional en un contexto en el que no se permitían expresiones políticas que no se adscribieran a las formas tradicionales de dominación, que por más de cuarenta años habían resultado adecuadas y que lo seguían siendo a principios de la década de 1980.

III. AJUSTE ESTRUCTURAL, MOVIMIENTO SOCIAL Y CONFLICTO: ¿FIN DEL CORPORATIVISMO?

En el capítulo anterior hemos realizado un recuento de las características que observó la región de La Frailesca en términos de los procesos sociales, económicos y políticos en el contexto del modelo de desarrollo por sustitución de importaciones que se impulsó en esta etapa, así como por el régimen político que definió al país y del cual participaban los actores políticos de las diferentes regiones. Este modelo de desarrollo se agotó a principios de la década de los ochenta obligando a las élites dirigentes en el país a buscar otras vías y modalidades de acumulación que dejaran de lado la importante participación que el Estado tenía en los procesos económicos, orientando en adelante su intervención a incentivar el desarrollo e inserción de los sectores empresariales del país en las actividades económicas.

El cambio de modelo impulsado significó, por tanto, la reorientación del sentido social que en muchos aspectos mantuvieron los programas gubernamentales del periodo en el contexto de un Estado que mantenía una visión centralista, corporativa y autoritaria hacia la sociedad. A partir de la primera mitad de la década de los ochenta, con el reconocimiento de las modalidades de la crisis, y de manera más particular, con el impulso de los primeros programas de “ajuste”, se empiezan a replantear los términos de las formas de participación y representación de la sociedad en relación con el Estado. Ello implicó una reconfiguración de los actores sociales y políticos en el país que tuvo sus particulares formas de expresión en razón de la especificidad encontrada en los procesos socio-históricos regionales.

En este capítulo analizaremos las características que adoptó, en sus inicios, la concreción de la política neoliberal en la región Frailesca. Para ello rescataremos las particularidades de la relación que mantuvo esta región con el anterior modelo económico y la articulación de los actores al sistema político corporativo de principios de la década de los ochenta. También ubicaremos las estrategias impulsadas por el Estado para concretar su política económica, la dinámica de la deconstrucción de las relaciones sociopolíticas de ese periodo, así como las medidas desarrolladas por los actores en relación con las demandas sociales históricas, principalmente la demanda agraria, siguiendo así la pista a las respuestas desarrolladas por los actores sociales y políticos en la región.

3.1. Un gobernador militar para una sociedad en transición

La década de los ochenta se inicia en Chiapas en medio de una importante efervescencia social y política, como resultado de los importantes movimientos sociales, en particular del movimiento campesino y magisterial, cada uno por reivindicaciones particulares. El primero, reivindicando la solución de añejos problemas agrarios, había evidenciado ante la sociedad nacional la persistencia en la entidad de relaciones sociales arcaicas propias de siglos anteriores. Por su parte el movimiento magisterial que se había presentado al final de la década anterior en contra del sistema corporativo de su organización sindical y sirvió de ejemplo a la insurgencia magisterial en otros estados, estaba aun fresco en la conciencia colectiva de los actores políticos chiapanecos y ensayaba formas democráticas de participación y gestión hasta ese momento poco reconocidas.

La hegemonía y control político corporativo desarrollados al final del sabinismo en la región así como la agria disputa en que se desenvolvía la sucesión para la gubernatura en la entidad, mostraba a La Frailesca como una región en la que aparentemente se había extinguido el movimiento campesino de los años anteriores, pues sus expresiones más visibles se concentraban en los municipios de Venustiano Carranza, Simojovel, la Selva Lacandona y expresiones aisladas en otros puntos de la entidad. Pero aunque en la región no existía una situación de efervescencia social como la mostrada en otros momentos, en parte por el carácter cíclico de los movimientos sociales, la dinámica de la vida social y sus actores estaban preparando nuevas fases de movilización como veremos en este capítulo.⁹⁷

La importancia estratégica que adquiriría la entidad se debía no solamente a la resonancia de la expresión de sus movimientos sociales sino, sobre todo, por significarse como una importante fuente de recursos energéticos para el país y en torno a los cuales la federación venía desarrollando por lo menos desde veinte años antes, una “política extractiva” de los mismos, sin que ello se tradujera en desarrollo para Chiapas. Un tercer elemento que definía el carácter estratégico de la entidad, era la importante afluencia de refugiados guatemaltecos que huían de sus comunidades como resultado de la situación de violencia

⁹⁷ Un análisis de las expresiones del movimiento campesino en Chiapas a principios de la década de 1980 lo encontramos en Marie Odile Marion-Singer, 1984. Sobre el carácter cíclico de los movimientos sociales, ver André Gunder Frank y Marta Fuentes, 1989.

política que se vivía en el país centroamericano y existía el temor de que eventualmente esta situación de violencia pudiera extenderse a Chiapas.

A esta situación se agregaba el proceso sucesorio del gobierno estatal que debería concretarse a finales de 1982 y de acuerdo con las definiciones de la clase política en el gobierno, la mejor manera de enfrentar la situación chiapaneca era mediante la designación de un militar, situación que recayó en la persona del general Absalón Castellanos, oriundo de Comitán y vinculado a las familias de terratenientes de la región. La política de “seguridad nacional” era entonces para la clase política la estrategia a seguir en Chiapas y para su concreción resultaba atractiva la figura del general Castellanos.⁹⁸

Esta no era, sin embargo, la única iniciativa estratégica que debía desarrollar el gobierno de la entidad. La situación de rezago social obligaba a concretar un conjunto de cambios que la llevaran a estar a la par de otros estados en materia agraria, social, económica y política, medidas que se expresaron en el Plan Chiapas, iniciativa que sintetizaba la propuesta de gobierno sexenal la cual se proponía superar la situación de rezago que en muchos sentidos definían a la entidad, entre los que destacaban un conjunto de planteamientos para modernizar la administración pública. El deterioro de la situación económica del país de mediados de 1985, así como las inercias y conflictos que caracterizaron esa etapa, impidieron que muchas de estas iniciativas no se pudieran aplicar o bien que se hicieran a medias.

3.1.1. El conflicto por la sucesión

El arribo de Absalón Castellanos al gobierno de Chiapas estuvo precedido de una fuerte pugna al interior del grupo gobernante en la entidad. Ante tal posibilidad, algunas fracciones del grupo en el poder se opusieron férreamente a tal designación, entre quienes se encontraba la encabezada por el líder campesino de La Frailesca, Germán Jiménez, quien también aspiraba a ser gobernador de Chiapas dado el importante poder que había concentrado en sus manos. Ello le ganó la animadversión del general, misma que se reflejó desde el inicio de la búsqueda de la gubernatura y durante buena parte de su administración.

⁹⁸ Cfr al respecto el documento de Alicia Paniagua, 1985.

Como resultado de las definiciones y alineamientos políticos, Jiménez tuvo que conformarse con la nominación de candidato a diputado federal, cargo que ocupó de 1982 a 1985. Sin embargo, en el desarrollo mismo de la campaña política para la elección de ese año, llegó a realizar concentraciones políticas que hacían evidente que en muchas regiones la figura de Germán Jiménez opacaba la del candidato a gobernador. De este modo existía un especial interés del futuro gobernador de despojar o, al menos, disminuir la fuerza del “germanismo” en La Frailesca así como en otras regiones de Chiapas. Por ello, en el marco de la sucesión municipal, el general Castellanos, gobernador electo, impuso como presidente de Villaflores a Alberto Cuesy Balboa. De hecho, Jiménez no tuvo ingerencia en las administraciones municipales de Villaflores y Villacorzo después de 1982, porque el general lo mantuvo a raya.

Estas pugnas prefiguraban los conflictos que se presentarían entre los actores políticos en el país algunos años después y que conducirían a una serie de realineamientos en la clase política mexicana a finales de esa década. En el caso de Chiapas, aunque las pugnas sostenidas por estos dos grupos dentro del sistema político de principios de los ochenta no llegaron al nivel de la ruptura, sí rompieron con una tradición de homogeneidad en las posiciones sostenidas hasta ese momento por la clase política local, y al profundizarse en los años posteriores, crearon las condiciones para la recomposición de los grupos de poder político.

En los hechos, con la llegada de Absalón Castellanos al gobierno del estado, se produjo una recomposición del grupo gobernante. Sin abandonar del todo la perspectiva modernizadora de su antecesor, Castellanos mantuvo una estrecha vinculación con los grupos de poder tradicional para golpear al movimiento popular emergente. A esta administración le tocó, en los hechos, administrar la reorientación de la política económica que se impulsaba en el país, que se expresó en un programa de cambios institucionales para reducir el gasto público. Pero Chiapas era un caso aparte, que exigía “un trato especial” en el contexto de un agravamiento de la crisis social y política que se vivía en diversos países centroamericanos y por la virulencia que presentaban diversos conflictos agrarios del momento.

3.1.2. La Frailesca y las políticas de ajuste

Para fines de 1982 la política de recuperación económica, impulsada durante por lo menos los últimos doce años en el país, se hizo insostenible y el presidente José López Portillo anunciaba la crisis de la economía mexicana, que se traducía en la incapacidad de pago de adeudos de los empréstitos internacionales como resultado de la caída de los precios del petróleo y el aumento de las tasas de interés. Para hacer frente a esta situación, se debía enderezar el rumbo de la política económica que se concretó en los programas de ajuste que, a partir de ese año, se empezaron a delinear por parte del gobierno de Miguel de la Madrid. Ante la emergencia económica, el discurso de la autosuficiencia alimentaria fue abandonado en esa administración, por no corresponder a las prioridades que se delinearon por el nuevo gobierno federal.

A mediados de la década de 1980, el giro en el modelo económico y la concreción de las políticas de “ajuste estructural”, impulsadas por el gobierno de Miguel de la Madrid, tomaron desprevenidos a los actores sociales rurales del país, quienes no comprendían el sentido y alcance de las políticas abiertamente neoliberales impulsadas desde la segunda mitad de la década. Ello se tradujo en el retiro de muchos apoyos que en los periodos anteriores se habían canalizado: créditos, asesoría técnica, infraestructura productiva, paquetes tecnológicos, entre otros (lo que había generado a la postre gran dependencia de los productores hacia los programas de gobierno). En los inicios de esa administración, pese a los proyectos y buenas intenciones del régimen para impulsar una política de desarrollo rural integral mediante el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral (Pronadri), se impusieron otras prioridades y este programa pronto quedó en el olvido.

Eran los inicios de la aplicación del modelo neoliberal que empezaron con una fuerte disminución del gasto público, lo que afectó de manera directa los programas de desarrollo rural que el Estado proyectaba hacia el sector. Disminuyó también el monto del crédito destinado al sector agropecuario, lo que se acompañaba con una drástica caída de los precios de garantía concebidos como mecanismo para proporcionar a los productores un ingreso mínimo.⁹⁹ Lo anterior afectó de manera directa a la región que por historia se había

⁹⁹ Entre 1980 y 1982 el porcentaje del crédito destinado al sector agropecuario disminuyó del 13.5 al 6.3 %. Por su parte los precios reales de garantía del maíz entre 1984 y 1986 disminuyeron en pesos de 1980 de

especializado en los cuarenta años anteriores en la producción de alimentos. Tales hechos fueron la base para que a mediados de la década se gestara en La Frailesca una nueva fase de movilización social protagonizada por campesinos productores de maíz, dirigidos por el ya mencionado líder campesino Germán Jiménez.

Esta situación se reveló como un problema que afectó no sólo a los ejidos de La Frailesca sino que se extendió al conjunto de la región maicera de Chiapas. De hecho, en este periodo, el campo fue abandonado y si los campesinos siguieron produciendo fue por inercia o por mantener la esperanza de que las definiciones que estaba tomando la política agropecuaria se iban a enderezar. Lo anterior no sucedió sino que, por el contrario, la situación se profundizó y en los años posteriores la producción de maíz dejó de ser prioridad para el régimen. Aunque en el discurso se hablara de impulsar un desarrollo rural integral, no hubo políticas específicas para reactivar el campo más allá de reorientar la producción para la exportación, y no las hubo porque simplemente los recursos que antes se destinaron al fomento productivo se destinaron al pago de la deuda externa.

Desde principios de la década de 1980, ya se había hecho evidente la crisis campesina en torno al maíz, fundamentalmente por un desbalance entre los costos de producción y los precios de venta. Esta opinión es sustentada ampliamente en un estudio realizado por Calva a mediados de la década de 1980, en el que se analiza la manera en que el deterioro de la situación económica golpeó a los campesinos mexicanos entre 1982 y 1988.¹⁰⁰ Es así como campesinos de la región empezaron a presionar a la CNC estatal para que encabezara la demanda de aumento al precio del maíz, que en ese momento se planteaba de manera tímida mediante las organizaciones corporativas que les eran propias. Con ello se creaban condiciones para un movimiento que estallaría a mediados de 1985 y que se extendería por las diferentes regiones maiceras de la entidad.

Debido a la caída de los niveles productivos que se produjo en esa etapa y frente al señuelo de la importancia lograda como una de las regiones más productivas del país, los campesinos de los otrora ejidos productivos reconocían que los premios de “la mazorca de oro” fueron un engaño y señalaban el uso político que en su momento se le dio a estos premios. Los programas de apoyo y mejoramiento a la producción de maíz impulsados por

3,895.7 pesos por tonelada a 3,378.5. *Cfr.* reporte de Rosalba Carrasco Licea y Francisco Hernández Puente, Balance Económico, La Jornada, 4 de diciembre de 1989.

¹⁰⁰ Ver al respecto José Luis Calva, 1989.

la SAGAR en la región en aquel momento (tales como el Pronamat), no tuvieron el impacto deseado dado que su aplicación consideraba el uso de créditos caros, asistencia técnica permanente y prácticas agronómicas específicas. Así, entre 1985 y 1990 se sembraron en promedio en las zonas maiceras de Chiapas 40,250 has. con semilla certificada, es decir, con una cobertura de apenas el 6.1 %. Por otro lado, el trabajo de investigación que realizaba en la región el INIFAP prácticamente desapareció y en adelante solamente promocionarían de manera limitada el uso de las semillas de alto rendimiento antes generadas y probadas.

Así, las ‘políticas de ajuste estructural’ impulsadas por el gobierno para enfrentar la crisis, por tanto, impactaron seriamente a los productores de maíz de La Frailesca, quienes reconocieron que dejaban de ser un sector privilegiado, en particular en relación con los precios a los que era pagada su producción. Esta percepción mostraba, en realidad, un cambio en el trato que el Estado había proporcionado a los productores por lo menos hasta 1982, año en que Juan Sabines dejó el gobierno del estado. En efecto, el arribo del nuevo gobierno anunciaba cambios importantes en el trato político que se habría de dar a la región y sus actores, tanto en la economía del país, como por las definiciones políticas que se daban entre los grupos de poder en Chiapas.

3.1.3. El movimiento maicero de 1985: ¿Manipulación o demanda legítima?

Hemos señalado en este capítulo que al iniciarse la década y hasta antes de 1985 no era posible reconocer una clara participación de La Frailesca en la efervescencia que mantenía el movimiento campesino en la entidad, pues la dinámica de la acción social en la región era reconocida más bien por el conflicto político entre el general y gobernador y el líder campesino Germán Jiménez quien gozaba de un amplio respaldo social y político en los ejidos. El periodo que va de 1982 a 1985 coincide también con la participación de Jiménez como diputado federal y en esa situación o no quiso moverle el piso al General, o era muy cuidadoso de su fuero y prefirió concentrarse en sus labores legislativas. El caso es que la región de La Frailesca, en términos de movimientos sociales, poco dio de que hablar. Pero una vez que Jiménez dejó la diputación, se hizo eco de la inconformidad de los campesinos dada la situación que en la región enfrentaba la producción maicera, con lo que dio inicio un nuevo ciclo de movilización campesina.

La dinámica y contexto en que se produjeron estas movilizaciones nos permite plantearnos las siguientes interrogantes: ¿Qué genera un movimiento social? ¿Qué condiciones son necesarias para que se presente un movimiento de protesta? ¿Basta que se presente una situación de inconformidad o que la sociedad se sienta engañada para que se produzca el movimiento? ¿O es condición la presencia de un liderazgo al que la sociedad tenga confianza para que la acción colectiva y de protesta aparezca? ¿Cuál era el grado de influencia política que mantenía Jiménez en la región que sin su presencia no se producía la protesta? Aquí tenemos que recuperar la propuesta de Melucci para quien la acción colectiva no se genera *per se* sino que esta es “resultado de complejos procesos que favorecen o impiden la formación y el mantenimiento de vínculos de solidaridad, cultura compartida y organización, los cuales hacen posible la acción común”.¹⁰¹

Es obvio que los vínculos de solidaridad se generan a partir del sentimiento colectivo de la existencia de un agravio o una necesidad sentida socialmente. Para mediados de los ochenta era evidente que entre los productores existía gran descontento por el permanente incremento de los costos de los insumos a la par que los precios de garantía permanecían estancados. Este descontento se había venido acumulando en los años previos al estallido formal de las movilizaciones visibles –los llamados periodos de latencia en los cuales se van generando las disposiciones que el mismo Melucci señala–. Sin embargo, para que este movimiento estallara se necesitaba un detonante, el cual lo proporcionó el trato diferencial que el gobierno federal había otorgado a los campesinos productores de maíz de otros estados a quienes se les garantizaba una solución favorable a su demanda. La cultura compartida así como la organización estaba asegurada por la tradición productiva y las tramas de interacción bajo las cuales la mayoría de los ejidos habían venido participando en la CNC bajo el liderazgo de Jiménez. Revisemos algunos de los pormenores de este ciclo de protesta.

La experiencia acumulada por Jiménez en diferentes puestos políticos –incluida la dirección estatal de la CNC– sería la base para encabezar, entre octubre de 1985 y mayo de 1986, un movimiento estatal por el aumento de los precios de garantía del maíz en alianza con algunos ex líderes del movimiento magisterial chiapaneco. En el contexto de crisis económica, el movimiento reaparece en la región, enarbolando ahora demandas productivas

¹⁰¹ Al respecto de las condiciones para la construcción de la acción, ver Alberto Melucci, 1988, p. 198.

y los productores de la región incorporados a un movimiento estatal, demandaban homologar el precio del maíz al otorgado en otros estados de la República.¹⁰²

El gobernador Castellanos había conformado su gabinete estatal con gente de su confianza y al frente de la CNC impuso a un gris personaje de nombre Óscar Ochoa. Durante el tiempo en que este líder estuvo al frente de la organización se dedicó a golpear a Jiménez, tratando de restarle influencia entre los campesinos de Chiapas y en la misma región de La Frailesca. Se trataba de borrar de la memoria de los campesinos de la entidad el papel jugado por Jiménez durante el corto pero fructífero periodo que estuvo al frente de la CNC. Sin embargo, Jiménez, en su condición de diputado federal para el periodo 1983-85, afianzó lazos y relaciones y se mantuvo atento –como buen líder– a los problemas de los campesinos chiapanecos, como resultado de los cambios en la política económica que ya se empezaba a aplicar. Sabedor de que su fuerza estaba en La Frailesca, al término de su periodo Jiménez regresa a su región pero no se queda cruzado de brazos y, al margen de la dirección estatal de la CNC, se propone encabezar las demandas de los productores, mediante la Coalición Frailescana de Productores de Maíz, figura organizativa que serviría de plataforma para iniciar las movilizaciones en contra del trato discriminatorio que iniciaba el gobierno federal hacia los productores. A continuación se señalan algunos pormenores de este movimiento.

En noviembre de 1985 se abrieron las filiales de Boruconsa en los centros de producción maicera de Chiapas. Los productores descontentos con las formas de operación de Conasupo en diferentes regiones de la entidad –caracterizadas por el retraso en el pago de las cosechas–, demandaron a la paraestatal el pago oportuno de su producción. El descontento pronto se extendió en ejidos de Villaflores, Jiquipilas y Suchiapa por lo que el delegado estatal de Conasupo declaraba que la tardanza de los pagos se debía a factores que escapaban de su control, al tiempo que se comprometía a agilizar el pago de adeudos. A finales del mismo mes, las promesas de agilizar los pagos no fueron cumplidas y el descontento entre los productores se incrementó. Para mediados de diciembre, los productores de maíz amenazaron con tomar cuarenta bodegas de Conasupo en caso de persistir la tardanza, pero ahora planteaban una demanda adicional: que el pago del maíz

¹⁰² Sobre el movimiento maicero que tuvo lugar en la zona central de Chiapas a mediados de los ochenta, véase María Teresa Castillo, 1988.

entregado en fechas recientes debería ser actualizado al que se estaba pagando a los maiceros del estado de Chihuahua. El precio de garantía que el Gabinete Agropecuario había fijado para ese año era de 53 000 pesos por tonelada; mientras tanto, los productores de maíz de Chihuahua habían logrado, mediante diversas movilizaciones, que se les pagara 70 000 pesos. Para ese momento la participación de Germán Jiménez como líder del movimiento era ya patente, pues previamente había estimado justa la demanda de los maiceros del norte en el sentido de que se les pagara por encima de los precios de garantía.

A los pocos días del emplazamiento, los campesinos de Villaflores empezaron a hacerlo efectivo al tomar dos bodegas receptoras en ejidos de su municipio. La paraestatal Conasupo les adeudaba, a mediados de diciembre, dos mil millones de pesos de cosechas entregadas. Como resultado de la negativa a agilizar los trámites de pago, los campesinos decidieron presionar al gobierno con el bloqueo parcial de los accesos a la capital chiapaneca. Con ello se tuvo una airada respuesta por parte del gobierno del estado, el cual mediante la Policía de Seguridad Pública, dispersó la manifestación y detuvo a varios inconformes. Ante este hecho, la indignación campesina se incrementó, sumándose a la protesta ejidatarios de la zona de Jiquipilas. En virtud de que el retraso de los pagos a mediados de enero no se solucionaba, los maiceros frailescanos amenazaron a Conasupo en el sentido de que si no les pagaba el maíz ya entregado, habrían de sacarlo de las bodegas y lo venderían al mejor postor. Los representantes de la paraestatal sostenían, sin embargo, que “salvo pequeñas demoras, la situación tendía a normalizarse”, al tiempo que se quejaban porque productores manipulados de Villaflores y Villacorzo persistían en tener bajo su control nueve bodegas de Conasupo y una de ANDSA.

Para la tercera semana de enero de 1986, la situación se había complicado con la toma de 54 bodegas y la extensión del movimiento a otros municipios como Chiapilla, Suchiapa, La Concordia, Villaflores y Villacorzo. Los responsables de esas tomas eran miembros de la Coalición Agrícola Frailescana, dirigida por Germán Jiménez, que aglutinaba a unos 30 mil agremiados. Desde esta organización regional como plataforma, se constituye posteriormente la Unión de Productores de Maíz del Centro de Chiapas a la cual se integraron algunos propietarios privados, con el objetivo concreto de luchar por un mejor precio para el maíz. Desde ella también insistían en sus demandas y reclamaban la participación del Gabinete Agropecuario, rechazando que se pudiera negociar con la CNC

el nuevo precio de garantía, no obstante que muchos de los campesinos afiliados a dicha central eran seguidores de Germán Jiménez.

En el marco de la pugna que Jiménez, como uno de los líderes mas visibles del movimiento, tenía con el gobernador y con los dirigentes de la CNC, a mediados de marzo, Óscar Ochoa anunció que esta organización y la delegación de la SARH propondrían al Gabinete Agropecuario un incremento al precio de garantía superior al demandado por la Unión de Productores de Maíz dirigida por Jiménez. El esfuerzo del gobierno del estado por restarle base social y deslegitimarlo era constante; al mismo tiempo, el movimiento cuestionaba que la paraestatal se propusiera importar cuatro millones de toneladas del grano a un precio superior al que demandaban se pagara a los productores. De este modo, el movimiento siguió adquiriendo legitimidad y creciendo en extensión y profundidad, pues para mediados del mes de abril se había ampliado a 18 municipios y mantenía en su poder 105 bodegas. Sin embargo, seis meses después de iniciado el movimiento, poco o nada habían logrado, pues la delegación de Conasupo sostenía que el Gabinete Agropecuario sería quien tomaría la decisión de incrementar o no los precios de garantía, con lo que se lavaba las manos frente al problema.

A principios de mayo y después de varias reuniones fallidas con representantes del gobierno, policías de Seguridad Pública se presentaron en las bodegas de La Frailesca buscando desalojar a quienes las tenían tomadas, pero éstos los enfrentaron con palos y piedras. Con la intención gubernamental de desalojar las bodegas tomadas, se iba perfilando la respuesta del gobierno federal y estatal centrada en la negativa de dar una solución favorable a la demanda de los productores. Después de seis meses de desgaste al que había sido sometido el movimiento y de los nulos frutos que éste había obtenido al mantener su lucha en los marcos legales, el movimiento empezó a plantearse la necesidad de utilizar otras tácticas de lucha.

Buscando llamar la atención a la opinión pública nacional, el 12 de mayo de 1986 los maiceros de la Unión de Productores con el apoyo de algunos dirigentes magisteriales, acordaron bloquear la carretera federal que va de Chiapas a Oaxaca, vía principal para comunicar a la entidad con la capital de la república. Ante este hecho, la acción del gobierno no se hizo esperar y el día 14 por la mañana, alrededor de unos 1,000 miembros del ejército, seguridad pública y de la policía judicial del estado realizaron el desalojo de

los maiceros, quienes hicieron lo posible para no ser masacrados, formando una comisión de 30 personas con el fin de que el resto del contingente no fuera maltratado. Los integrantes de la comisión fueron tomados presos y el resto de la gente fue dispersada. Después de diversas presiones, la Procuraduría de Justicia del Estado accedió liberar a 22 personas quedando detenidos solamente siete de los principales líderes, quienes permanecieron en la cárcel durante varios meses bajo las acusaciones de asonada o motín, conspiración, terrorismo, daños y asociación delictuosa.

Mientras se resolvía su situación legal, los dirigentes pidieron a los campesinos regresaran a sus campos a sembrar, dada la proximidad del ciclo agrícola. Los dirigentes permanecieron en la cárcel por espacio de casi dos años. Con la acción de desalojo se iniciaba el cierre del ciclo de movilización campesina que, bajo procedimientos poco usuales, había desarrollado un importante grupo de campesinos maiceros que formalmente se seguían reconociendo como parte de las filas de la CNC en Chiapas. Podríamos decir que este movimiento, aunque confrontaba al régimen y en el fondo cuestionaba la orientación que adoptaba el nuevo modelo económico, los objetivos que se proponía no rebasaba la demanda inmediata de aumento a los precios de garantía. No hay que olvidar además que el movimiento tenía como antecedente la disputa entre las figuras políticas más importantes en la entidad en aquel momento.

Por el contexto político, el carácter de la demanda y el desenlace que tuvo, este movimiento puede definirse como de carácter sistémico, dado que no hacía un cuestionamiento amplio de las orientaciones y definiciones que adoptaba el modelo económico. A lo sumo, buscaba mejores condiciones para la inclusión de un sector que empezaba a ser secundario en las prioridades del régimen. En los meses que siguieron a la represión, la dinámica de movilizaciones de la Unión de Productores de Maíz continuó, pero ahora bajo una tónica defensiva y de creciente debilidad del movimiento.¹⁰³

A finales de mayo la Unión de Productores de Maíz del Centro de Chiapas modificó su nombre y cobertura por el de Unión Estatal de Productores de Maíz de Chiapas, misma que logró incorporar al movimiento a productores más allá de los límites de la región de Valles Centrales que mantenían problemáticas similares. Con esta base organizativa, para mediados de julio, estando sus dirigentes en la cárcel, la Unión Estatal de Productores de

¹⁰³ Sobre el carácter sistémico o antisistémico de los movimientos sociales, ver: Immanuel Wallerstein, 1990.

Maíz de Chiapas convoca a su primer Congreso con la asistencia de campesinos de 21 municipios de la entidad, con el objetivo de analizar la problemática que aquejaba a los productores de maíz, así como el saldo de las movilizaciones realizadas. Este Congreso, que se efectuó con el lema “Si Zapata viviera, con nosotros estuviera”, también contó con la asistencia y diferentes formas de solidaridad por parte de organizaciones como la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) y la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).

Algunos de los principales acuerdos tomados en este Congreso fueron, entre otros: afianzar la Unión surgida del movimiento y brindarle apoyo y solidaridad, continuar participando al interior de la CNC y ampliar la movilización campesina con el apoyo de otros sectores sociales. Junto a estos resolutivos acordaron movilizarse para demandar la libertad de los presos políticos, el cese de la represión, así como la solución de los problemas del agro chiapaneco. Las demandas planteadas, sin embargo, seguían sin ser escuchadas por parte del gobierno. Por el contrario, en el marco de la pugna entre el gobierno y los dirigentes de este movimiento, el gobierno opta por crear organismos de representación paralela como la creación de la Unión Estatal de Productores de Maíz a finales de 1986, en Ocozocuaula, a cuya ceremonia de constitución asistió el gobernador Castellanos y presidió el acto.

Para el mes de agosto de 1986, era evidente que el movimiento había sido conducido a la derrota, con la consecuente frustración de los campesinos. Los dirigentes confiaban que manteniéndose leales al sistema evitarían la represión; este fue un error de cálculo que demostró sus limitaciones, ya que se impusieron las contradicciones y el revanchismo de quienes detentaban en ese momento el monopolio del poder estatal. Por lo demás, la negativa del gobierno federal a satisfacer las demandas, mostraba ya –además del uso político que se hizo con el manejo de precios de garantía–, sus propósitos para intentar administrar la crisis. Con todo, y aunque las demandas planteadas no fueron en su momento satisfechas y el movimiento fue reprimido, los campesinos del centro de Chiapas (incluidos los de La Frailesca) mostraron una vez más su capacidad de movilización y de protesta desde la CNC, bajo el liderazgo de Jiménez. Era, en ese momento, la única agrupación que podía encabezar las demandas y canalizar el descontento campesino.

La respuesta positiva a la convocatoria de luchar por mejores precios y las acciones que acompañaron a este movimiento no hubieran sido posibles sin la red de relaciones tejida durante los años previos, que dieron como resultado una base social amplia en términos regionales, toda vez que sus dirigentes mantuvieron la capacidad de construir acuerdos y alianzas no sólo con grupos de campesinos de los municipios de La Concordia y Ángel Albino Corzo, sino también con los grupos de poder tradicional ahí establecidos.¹⁰⁴

Una vez revisados algunos de los hechos en que se desarrolló esta movilización campesina, cabe preguntarse: ¿De que depende el éxito o fracaso de los movimientos? ¿No era suficiente la influencia y compenetración que Jiménez tenía con el tejido social frailescano, así como con el entramado político e institucional en el que siempre se movió, para que este movimiento resultara triunfador? y finalmente, dados los conflictos políticos que Jiménez mantenía con el grupo en el poder ¿Su liderazgo no se constituyó más bien en un estorbo para que el movimiento lograra sus objetivos?

En torno a la posibilidad de éxito de los movimientos, Cadena habla de la necesidad de reconocer las condiciones internas y externas en que estos se desenvuelven. Entre las primeras reconoce las formas de organización, de liderazgo, de participación y de toma de decisiones que conocen y emplean las organizaciones. Por lo que toca a las condiciones externas, señala que el poder de los movimientos depende en buena medida del grado en que los actores están vinculados con el resto del tejido social, político e institucional y son capaces de usar ese poder para conseguir sus objetivos.¹⁰⁵ Y si bien en aquella circunstancia existía un importante vínculo de los dirigentes con el tejido social, en particular con los ejidos, y si además se había logrado tejer alianzas consistentes con el magisterio estatal, el elemento fundamental que influyó para la derrota de la acción colectiva fueron las pobres alianzas y disposiciones encontradas en el entramado institucional las que, con el desarrollo del movimiento se fueron desgastando, además de que para ese momento le elite política nacional a cuyos favores apostó, venía ya optando por abandonar la perspectiva paternalista que había caracterizado a otras administraciones.

¹⁰⁴ En el análisis del sentido e implicaciones del movimiento social, es importante recuperar la interpretación de Alberto Melucci, 1999, p. 48, en la propuesta de que sus orientaciones y alcances son el resultado del sistema de relaciones sociales donde se produce la acción, el cual se constituye como su sistema de referencia.

¹⁰⁵ Al respecto *cfr.* Jorge Cadena Roa, 1999, p. 175.

Buscando hacer un balance del ciclo de movilizaciones y de cómo y por qué se estructuró este movimiento, podemos desprender que era importante, aunque no suficiente, que existiera una inconformidad y una demanda sentida por parte de los campesinos de la región. Era necesario que existiera la disposición subjetiva de los grupos campesinos para movilizarse, así como también la existencia de un liderazgo capaz de aglutinar y encabezar la inconformidad, más allá de los intereses políticos y caciquiles que representaba Germán Jiménez y su grupo. En la circunstancia política en la que surge el movimiento y dada la tradición corporativa en que se recreaba la participación del grueso de los campesinos de La Frailesca, era el único grupo que podía reencabezar el movimiento.

3.1.4. La disputa por la representación campesina

Una vez infringido un duro golpe al germanismo, después de la derrota del movimiento maicero en julio de 1985 y con Germán Jiménez en la cárcel como resultado de la captura de los dirigentes, se inicia en la región una fuerte disputa por el control de las comisarías ejidales, entre la corriente germanista y la dirigencia de la CNC en el estado. Para el gobierno del estado estaba claro que, en razón de la gran influencia social del grupo leal a Jiménez en La Frailesca, de lo que se trataba ahora era de restarle base social en los ejidos mismos, lo cual da lugar a una sistemática confrontación entre los seguidores de Jiménez y grupos leales al gobernador, la cual tenía por objeto desplazar a las autoridades ejidales de orientación germanista. Esta pugna se desarrolló particularmente en los ejidos con más infraestructura y población como: San Pedro Buenavista, Parral y Jesús M. Garza, que son también los que se han distinguido por la producción de maíz.

Para lograr tal objetivo, a finales de 1985 se da formal nombramiento al interior de la CNC a Milton Fernández Hernández, campesino originario de Jesús María Garza, como dirigente del Comité Regional, quien en sus discursos señalaba los “múltiples fraudes y trapacerías” cometidos por Jiménez. Para el dirigente estatal de la CNC en turno, Óscar Ochoa, el nombramiento de Fernández era importante porque mostraba que en el propio ejido de origen de Jiménez (el Jesús M. Garza), éste era rechazado. Sin embargo, la fuerza de este grupo –aún estando sus dirigentes en la cárcel– seguía siendo importante, no sólo por su capacidad de convocatoria entre los comisariados ejidales, sino por la influencia que tenía

entre 1985 y 1988 incluso con los presidentes municipales, Lusteín Esquinca Martínez de Villaflores y Moxel Solís de Villacorzo, leales a la corriente germanista.

La región era de hecho impenetrable para otras opciones políticas distintas a la oficialista. Existía, sin embargo, una sorda disputa que se desarrollaba entre dos grupos al interior del PRI que pugnaban por el control de los comisariados ejidales y de los agentes rurales municipales. Los argumentos y artilugios que usaban las autoridades municipales de uno y otro grupo para lograr sus objetivos eran de lo mas diverso: se negaban recursos para determinadas obras a ejidos que no comulgaran con la línea del presidente municipal; se desautorizaba la realización de bailes y festejos en los ejidos; se practicaban diligencias judiciales a comisariados ejidales rebeldes; se desconocía a los jueces rurales nombrados en asambleas ejidales; se amenazaba con meter la policía de seguridad pública estatal para imponer el orden, entre otras. Los ejidos, por su parte, a menudo rechazaban el nombramiento de jueces rurales, facultad que recaía en los presidentes municipales.

A guisa de ejemplo, en San Pedro Buenavista, ejido del municipio de Villacorzo, un grupo encabezado por el Juez Rural Municipal –quien dicen fue impuesto por Moxel Solís Morales, presidente municipal de orientación germanista–, demanda a principios de 1986, en asamblea, la destitución de Marcelo Ruiz Estrada quien se ostentaba como comisariado ejidal, cuya permanencia era avalada por Milton Fernández del Comité Regional de la CNC. El comisariado ejidal, por su parte, apoyado por la CNC, se quejó ante el gobernador Absalón Castellanos señalando que “el presidente se niega a remover al juez municipal pese a las instrucciones giradas por el Ejecutivo del estado”. Para mayo de 1987, esta disputa se resolvió con el cambio de autoridades ejidales, nombrando a Jesús Castillejos como comisariado ejidal, quien de inmediato se puso a las órdenes del presidente municipal Moxel Solís.

En el marco de estas disputas, también ejidatarios de El Parral se quejaron en marzo de 1987 de la poca atención de que eran objeto por parte de la presidencia municipal, al tiempo que señalaron su lealtad al PRI y a la política del general Castellanos. Por la desatención de la cabecera municipal, decían que pensaban incluso buscar su independencia de Villacorzo y hacer de su ejido un municipio libre. En respuesta, el presidente municipal

solicita apoyo de la Policía de Seguridad Pública para conservar el orden en este ejido.¹⁰⁶ La pugna se recrudece y a mediados de 1988 el comisariado nuevamente advierte al gobernador de la presencia de un grupo divisionista en el ejido, que ofrece soluciones a los problemas “como si fueran autoridades constituidas” y le pide que intervenga para poner fin a la agitación. Pese a la labor “divisionista” que se atribuía al grupo germanista, este ejido se mantuvo leal al gobernador Castellanos.

En un escrito dirigido al gobernador por Milton Fernández Hernández, en su calidad de presidente del comisariado ejidal de Jesús M. Garza, en febrero de 1987 le informaba los problemas que tenía el ejido en relación con el cambio de agente municipal. El escrito señala que Lusteín Martínez “nombró su agente por capricho de la gente que siempre ha apoyado a los enemigos de su gobierno”, así como “la poca palabra de Lusteín” al comprometerse a estar en la asamblea del ejido para operar el cambio, porque al final los dejó plantados. En los hechos, Fernández era uno de los operadores políticos del gobierno de Castellanos en la región, primero como comisariado ejidal de Jesús M. Garza, donde a finales de 1985 fue promovido desde Tuxtla para que fungiera también como presidente del Comité Regional de la CNC. En ese tenor, en 1986 es nombrado además diputado federal suplente de Óscar Ochoa Zepeda, y en Julio de 1987 despachaba también como presidente de la Unión Estatal de Productores de Maíz.

Mas allá de las formas en que se desarrollaba esta lucha entre grupos o facciones vinculadas al sistema político estatal y de los objetivos que explícitamente se reconocían en las decisiones de los actores, cabría preguntarse: ¿Qué mostraba esta disputa en términos de las características y condiciones bajo las cuales se habían sustentado las relaciones políticas en la región que habían garantizado el control corporativo de los ejidos por parte del Estado? ¿Reflejaba acaso el fin del monolitismo político y agotaba de hecho las posibilidades y dividendos que el corporativismo había garantizado a la política oficial durante por lo menos las últimas cuatro décadas?

Es claro que ésta era una posibilidad que podría madurar, siempre y cuando la visión de los actores evolucionara en desembarazarse de la fuerte dependencia que en términos políticos, los actores mantenían con respecto al Estado. Las dificultades que esto encarnaba

¹⁰⁶ Este sentimiento separatista reaparece en 1999, en el contexto de la propuesta de remunicipalización del gobernador Albores Guillén, el cual se apoya en la importancia del ejido y en la distancia que lo separa de Villaherzosa, su cabecera municipal.

no eran menores. No se puede desconocer la escasa tradición en la existencia de identidades y organizaciones intermedias en la región al margen de las visiones oficialistas, ya que como dice Zermeño, “el mecanismo privilegiado de orden y la estabilidad utilizado por el Estado consiste en la destrucción de esas constelaciones alternativas, dividiendo, matando, encarcelando, cooptando”, lo que se traduce a la postre en la destrucción de los sistemas locales de autoridad y la centralización burocrática en torno a un jefe indiscutido, que en este caso era representado, dado el contexto de la disputa, por el gobernante en turno.¹⁰⁷

No obstante las diversas escaramuzas desarrolladas por los actores políticos durante esta etapa, el control de la región lo siguió teniendo desde los mismos ejidos la corriente germanista como grupo de poder al interior del PRI, pese a la permanencia en la cárcel de su principal líder. El auge momentáneo de los grupos opositores a la corriente de Jiménez duró el tiempo que estuvo en el gobierno el general Castellanos. A mediados de ese año, la figura del general empezó a decaer en un marco de fuertes conflictos y lucha social generalizada en el estado y en la perspectiva de la sucesión por la gubernatura, el candidato del partido de Estado empezó a hacerse cargo de muchos de los asuntos de la entidad, sobre todo desarrollando las acciones tendientes a garantizar la gobernabilidad en Chiapas.

3.1.5. La CNC frente a las demandas agrarias

La euforia de los ejidos frailescanos por los premios a la producción de maíz obtenidos y la posterior movilización por mejores precios para el grano, así como las disputas por el control de los ejidos por parte de los grupos en pugna durante la primera mitad de la década de 1980, ocultaron la centralidad que seguía teniendo la demanda agraria en la región. La dinámica de la vida social en La Frailesca en el periodo posterior al movimiento maicero no se perdía en los conflictos que mantenían los grupos ligados al partido oficial. Pese a la ausencia de organizaciones intermedias con una visión alternativa, existía un movimiento social latente manteniendo la histórica demanda agraria de los campesinos de la región como lo veremos enseguida.

Las movilizaciones desarrolladas por tierras en el periodo, si bien no fueron espectaculares, no por ello dejaron de ser importantes. Este movimiento agrario se expresó

¹⁰⁷ Aquí Segio Zermeño, 1989, refiere las diversas estrategias de institucionalización que en términos generales desarrollaba el PRI-Gobierno hacia las luchas populares.

desde 1982 para que se les dotara de tierras. A principios de 1987 los integrantes del Comité Ejecutivo Agrario, encabezados por Mario Coutiño Solís, fueron acusados por parte de las autoridades municipales de ser falsos líderes, de usurpar funciones, de ser estafadores de campesinos y de traficar con madera. No obstante, en diciembre de 1987 resultaron beneficiados, por resolución presidencial, 129 capacitados a quienes se les dotó de 1,609 hectáreas. Con esta resolución, los campesinos se sintieron fortalecidos y solicitaron al delegado agrario comisionara personal para que hiciera efectiva la entrega de las tierras.

Los demandantes habían venido realizando sus gestiones por medio de la Alianza Campesina Revolucionaria filial del PRI y no mediante la CNC, la que avalaba la actitud divisionista del también presidente del Comité Ejecutivo Agrario, Rodolfo Lazos Martínez. El conflicto entre ambos grupos se mantuvo por mas de siete años. A finales de 1989 se les acusó también de “pertenecer al cardenista Partido Revolucionario Democrático” (sic). Los representantes de la CNC en el estado, por su parte, avalaban la actitud del delegado agrario para no ejecutar la resolución presidencial y dar solución al conflicto, alegando que había división en el poblado. Cabe destacar que en nuestra indagación no encontramos evidencias que mostraran que ésta resolución presidencial se haya ejecutado.

La demanda agraria también se expresó en algunos de los viejos ejidos de Villacorzo, tales como Primero de Mayo y Manuel Ávila Camacho. En el primero de estos ejidos en mayo, de 1987 ciento setenta y seis familias campesinas se posesionaron de 840 hectáreas de tierra, amparados en la resolución presidencial del 13 de agosto de 1985; dichas tierras eran propiedad de Humberto Ruiz Balbuena, Horacio Gamboa y Octavio González, quienes intimidaban a los campesinos con pistoleros a sueldo. El delegado de la SRA, por su parte, por presión de los propietarios, se negaba a ejecutar dicha resolución dando largas al asunto. Sin embargo, en agosto de 1987, al ser presentada una denuncia en contra de campesinos de este ejido por parte de los propietarios de la Finca Dolores –afectada por resolución presidencial– las autoridades judiciales la ejecutaron inmediatamente, sin ninguna investigación de por medio.

La tónica de la política oficial en el ámbito de la lucha agraria fue enfrentar a los grupos de campesinos demandantes, tal como sucedía en el Ejido Manuel Ávila Camacho donde, en enero de 1987, treinta y tres familias se posesionaron de 200 hectáreas de la CFE que reclamaban también ejidatarios del lugar. Cuando la difamación o el enfrentamiento entre

grupos no funcionaba, se procedía al inminente desalojo por grupos armados enviados por las autoridades, como lo denunciaron en febrero de 1986 los campesinos del poblado Francisco I. Madero, municipio de Villacorzo, quienes meses antes habían invadido 639 hectáreas. Cuando a los grupos de solicitantes se les hacía justicia dotándoseles de tierra, en muchos casos la disputa por la misma continuaba como en el caso del Ejido 24 de Diciembre, donde, según denuncia de marzo de 1988, la familia Macías y otras más, pretendían adueñarse de los terrenos que por dotación habían obtenido 30 ejidatarios.

La ola de invasiones y conflictos ocurridos en Villaflores a mediados de la década de 1980 no eran menores a los de años anteriores, ya que campesinos de los ejidos históricos seguían buscando que se concretaran las solicitudes de ampliación. En algunos casos, ya contando los ejidos con resoluciones presidenciales, los propietarios mantenían la expectativa de recuperar sus tierras y presionaban para que dichas resoluciones no se ejecutaran. Era el caso de los dueños de los predios El Encinal y Las Pavas quienes, a mediados de 1981, se quejaban ante el Gobernador Juan Sabines por la resolución presidencial del 17 de diciembre de 1980 que favorecía el proyecto de ampliación del Ejido Roblada Grande.

La demanda de tierra no siempre favoreció a los campesinos, ya que en muchos casos sólo encontraron una solución parcial como en la Colonia Francisco Villa donde, en mayo de 1984, Carmen Ruiz Gómez, propietaria del predio rústico Zitácuaro, también conocido como En el nombre de Dios, pedía la intervención del gobierno para resolver la invasión de 46 hectáreas que los campesinos de este ejido habían realizado desde el 8 de marzo de 1979. Además de plantear su queja, la propietaria del predio proponía como “única” salida para terminar con la invasión la compra del predio de 342 hectáreas, que cotizaba en once millones de pesos. Este ejido, de hecho, contaba con la resolución presidencial del 27 de abril de 1976, pero por presiones de los propietarios no se lograba ejecutar plenamente, bajo el argumento de que los terrenos que estaban dentro del área de afectación eran predios protegidos por la ley con certificados de inafectabilidad. En julio de 1977, la promotoría de Villaflores había ordenado efectuar la ejecución de la resolución presidencial en beneficio del poblado por concepto de ampliación de 548 hectáreas, pero se entregaron únicamente 193 con la consiguiente inconformidad del grupo.

Cuadro 5. Principales conflictos agrarios en La Frailesca, 1982-1990

Poblado o Ejido	Expresión del conflicto
Poblado Belisario Domínguez	Falta de ejecución de la resolución presidencial de diciembre de 1987 para la dotación de 1609 hectáreas argumentando división en el poblado.
Ejido 1° de Mayo	No ejecución de resolución presidencial de agosto de 1985 por 840 hectáreas por presión de los propietarios de la Finca Dolores.
Ejido Manuel Ávila Camacho	Invasión de 200 hectáreas de Comisión Federal de Electricidad por parte de 33 familias, terrenos que también reclamaban los ejidatarios.
Ejido 24 de Diciembre	Conflicto de los ejidatarios con la familia Macías por terrenos que habían obtenido por dotación.
Ejido Roblada Grande	Protesta de los dueños de los predios El Encinal y Las Pavas contra la resolución presidencial de 1980 a favor del Ejido.
Colonia Francisco Villa	Disputa por el predio Zitácuaro por la invasión de 46 hectáreas no entregadas en resolución presidencial de 1976 que amparaba 548 hectáreas.
Poblado Nueva Esperanza	Disputa por seis predios (1400 hectáreas) señalados como terrenos nacionales y propiedad de la familia Velasco.
Joaquín Miguel Gutiérrez	Disputa por el predio La Esmeralda de 100 hectáreas propiedad de los hermanos Alfaro Pérez.

Fuente: Construido con información del Archivo Agrario Nacional y Cartas Municipales del Archivo Histórico del Congreso del Estado.

Los campesinos presionaban para que se les entregaran las tierras y por la vía de los hechos se posesionaron de los predios que no eran trabajados y cuyos propietarios vivían fuera del municipio. Tal es el caso del predio Maicote, en el que campesinos de este mismo ejido, mediante un acta del Comité Ejecutivo Agrario signada el 24 de agosto de 1983 y dirigida a las autoridades agrarias, señalaban que se encontraban “usufructuando dicho predio, propiedad de Candelaria Gómez, porque no lo reclamó durante un año”. Señalaban asimismo, “estamos dispuestos a desalojar el predio siempre que se nos entreguen las hectáreas faltantes de terrenos nacionales o se nos financie su adquisición”. Esta resolución no llegó a ejecutarse en su totalidad, pues en julio de 1993 las autoridades agrarias informaban que “de las 355 hectáreas pendientes, se habían localizado los predios llamados Rincón de las Flores y Chapultepec de 19 y 16 hectáreas, respectivamente, considerados propiedad de la nación”, que sería la base para la formal entrega de solamente 36 hectáreas en noviembre de ese año bajo la forma de ejecución complementaria.

En otros casos existió protección de autoridades locales para con los demandantes de tierras, como en el caso del predio denominado El Pedregal, cuyas propietarias denunciaban en octubre de 1981 que había sido invadido por campesinos encabezados por Rodolfo

Camacho López. Se señalaba que pese a las quejas no se había hecho nada porque las personas invasoras fueron protegidas por autoridades que estaban al frente de la anterior administración. Sin embargo, pese a todas estas denuncias, al inicio de su administración el munícipe Alberto Cuesy Balboa informaba al gobernador Absalón Castellanos de la situación en que encontró al municipio, reconociendo solamente “una invasión en la propiedad denominada Fracción Las Marías, de terrenos nacionales que sumaba un total de 83 hectáreas”. Acerca de esta invasión señalaba que no había ninguna acusación legal, ya que el mismo propietario buscó la gente para invadirse con el propósito de que el gobierno de Juan Sabines le comprara el predio.

Otro caso fue el de los campesinos de Nueva Esperanza, municipio de Villaflores, quienes en mayo de 1988 informaban que desde hacía siete meses, 33 familias empezaron a habitar seis predios de 1,400 hectáreas de tierras nacionales, ya que contaban con una solicitud ante la SRA, pero los propietarios Francisco Javier y Claudia Velasco interpusieron una demanda Judicial y los campesinos tenían orden de aprehensión. En ese mismo mes, ejidatarios de Joaquín Miguel Gutiérrez, también de Villaflores, afirmaron que desde hacía varios años tenían en su poder el predio La Esmeralda de 100 hectáreas, el cual fue propiedad de los hermanos Alfaro Pérez, quienes fueron agredidos con arma de fuego por los señores Isaías Alfaro Molina y Abigail Salgado Sarmiento que se presentaron al predio mencionado disparando a los campesinos. Un mes antes, en abril de ese año, el presidente del Comité de Apoyo a la producción de Villaflores informó que habían sido invadidas unas mil hectáreas de este municipio. Se señalaban las tierras de los predios Las Mercedes con 33 hectáreas, propiedad de Alberto Cuesy Balboa; de Cerro Azul con 560 hectáreas, propiedad de Quico Zuarth; y el predio La Victoria, en terrenos nacionales, con 300 hectáreas, ocupadas por el ex comandante de la policía municipal Antonio Corzo Velasco, entre otros predios.

La ola de invasiones registradas en ese año lleva a la Asociación Ganadera del Centro a reconocer que éstas se habían incrementado en los municipios de la región, señalando que en ese mes (mayo 1987) se registraron 43 invasiones, a razón de dos invasiones diarias. Esta situación llevó a Roberto Ortiz Gutiérrez, presidente de la Asociación, a declarar que “Chiapas está condenado a cosechar miseria en lugar de un desarrollo”. Fue entre 1987 y 1988 cuando se sucedieron la mayor cantidad de invasiones en la región. Frente a ello, en

enero de 1988 Patrocinio González Garrido –ya como candidato del PRI al gobierno de Chiapas–, declaraba en una asamblea de la CNC, que “el problema agrario es el más grave y el más injusto y de la solución de este depende sentar las bases de una estabilidad política y de una justicia económica que hagan posible el desarrollo integral de Chiapas”.¹⁰⁸

3.1.6 La política de compra de tierras.

Los mecanismos de intermediación tradicionales para canalizar la demanda agraria resultaban obsoletos; a menudo incluso campesinos solicitantes de tierra adheridos a las organizaciones oficiales eran utilizados para desarticular y confrontar a los grupos de solicitantes. Ello reflejaba el desgaste y desarticulación de los mecanismos de convencimiento que la burocracia agraria y las dirigencias oficialistas habían utilizado durante años. Eran parte quizá del deterioro que observaba el Estado que abandonaba los rasgos populistas con que durante años mantuvo viva la posibilidad de mantener a su favor la adhesión de los campesinos, y que con los cambios que se iban observando en la configuración y orientación del Estado, las prioridades de una política clientelar pasaban a segundo plano.

A pesar de ello, a principios de la década de 1990 algunos demandantes todavía tuvieron la fortuna de que se ejecutaran las resoluciones presidenciales que estaban pendientes, como fue el caso de la segunda ampliación del ejido Melchor Ocampo que en agosto de 1990 le fueron entregadas formalmente las tierras que se habían afectado a la finca Ocotlán y anexos, recibiendo una superficie total de 1,258 hectáreas que eran propiedad de las señoras Joaquina Iglesias y Pilar Ramírez, para 48 beneficiados del ejido y seis peones acasillados. Otras gestiones, sin embargo, no procederían como la añeja demanda sostenida por los peticionarios del ejido Francisco Villa, a cuyo representante del Comité Particular Agrario, Mario Suchiapa Hernández, le era solicitada bajo amenaza en junio de 1989 la renuncia al Comité Particular por parte del presidente municipal Roger de Coss Corzo. De igual forma se le pedía entregara los documentos que amparaban la posesión de los terrenos del predio Santa Inés, el cual se les había otorgado mediante el programa de rehabilitación agraria.

¹⁰⁸ Acto proselitista de Patrocinio González en Villaflores. *Diario de Chiapas*, 8 de enero de 1988, p. 3.

La política de compraventa de tierras se vio reforzada a mediados de la década de 1980, mediante el Programa de Rehabilitación Agraria impulsado por el gobierno de Absalón Castellanos, mismo que, de acuerdo con un informe presentado en marzo de 1987, había repartido (comprado) 533 predios con una superficie de 80 mil hectáreas que beneficiaban a 9,280 familias en todo el estado. Para el caso de La Frailesca, el programa implicó la entrega de 6,330 hectáreas, que significaba la adquisición de 34 predios que se otorgaron a 986 beneficiarios de los municipios de Villaflores, Villacorzo y La Concordia, orientándose en la mayoría de los casos a la creación de Nuevos Centros de Población Ejidal.¹⁰⁹

Lo cierto es que la política de compra de tierras del gobierno y la amenaza real de invasión de predios generaba que muchos propietarios se autoinvadieran, como mecanismo para poder ofertar y vender sus propiedades, lo que a menudo se daba en acuerdo con las autoridades locales. No obstante, al inicio de la década de 1990 el problema agrario no se había resuelto. Un rancharo tradicional de Villacorzo, que también es profesor de primaria en el ejido Vicente Guerrero, nos ilustra con su testimonio acerca de la actitud adoptada por algunos de los propietarios en relación con la política de compraventa de tierra: *"Los Cruz Manzur estaban muy amenazados; su intención de ellos era invadir para que después les pudieran comprar. Se han hecho reuniones con gente de las Colonias; es un grupo de 82 gentes que vienen a discutir de sus necesidades. Ellos han sido baldíos toda su vida"*.¹¹⁰

La representación estatal de la CNC jugaba un doble papel en relación con la lucha agraria en la región. Por un lado se interesaba en neutralizar la demanda agraria, y si esto no era posible, buscaba administrarla siempre y cuando los procesos no se "salieran de las manos". No habría que olvidar que los dirigentes estatales de esta organización en la coyuntura que analizamos eran leales al general Castellanos, quien imprimió a su administración el sello que demandaban los ganaderos. Esto resulta más evidente al observar que el Secretario de organización de esta central, en esa etapa, era Efraín Coutiño Velazco, rico ganadero de Villacorzo y hermano del presidente de la Unión Ganadera Regional de Chiapas, Jaime Coutiño Velazco. Como líder de la CNC, Coutiño afirmaba a principios de 1988 que durante la administración de Castellanos se habían repartido 70, 000 hectáreas de tierra. En contrapartida Jorge Enrique Hernández Aguilar señalaba en un

¹⁰⁹ Al respecto del impacto de la política de compra de tierras en Chiapas, *cfr* Reyes Ramos María Eugenia y Álvaro F. López, 1994.

¹¹⁰ Entrevista con el señor Xicoténcatl Códova. Rancho Alto Buenavista. Villacorzo. Octubre de 1997.

artículo periodístico escrito en ocasión del aniversario de Zapata, que ese diez de abril “se haría entrega de tierras a los campesinos, aunque sólo fueran papeles que son copias de sus documentos a los que ahora llaman Carpetas Básicas y Certificados de Derechos Agrarios”.¹¹¹

La disputa entre los grupos oficiales de la CNC no sólo se daba en el plano político por el control de los grupos campesinos sino también en el simbólico por la figura de Zapata, lo que era evidente en el marco de las conmemoraciones del aniversario de su sacrificio. Lo anterior quedó de manifiesto en el discurso pronunciado en el acto agrario de abril de 1987 en el que el orador Efraín Coutiño Velazco expresó: “...el caudillo del sur no es como lo plantean los portavoces de la provocación, una bandera para las causas más descabelladas de la anarquía y la violencia, ya que la carabina de Zapata no sirvió para sembrar el caos, sino fue un arma para establecer el derecho y hacer valer la fuerza de la razón”.¹¹²

La capacidad de la CNC para garantizar el control del movimiento campesino estaba en entredicho por la cada vez menor disposición de esta organización para canalizar y dar respuesta a las demandas agrarias. La política favorable a los propietarios privados desarrollada por el gobierno de Castellanos así lo evidenciaba. La represión, la resistencia y el rechazo a la cooptación mostrada por parte de organizaciones campesinas de carácter independiente en diversas regiones del estado, ponía en entredicho la capacidad de esa organización para dar respuesta a futuro a los persistentes reclamos de tierra. Como bien dice Harvey, la erosión del control corporativo en esos años observó diferentes respuestas por parte de la CNC que pasaban por la negociación y la represión, pero un control a largo plazo de los núcleos agrarios en Chiapas no se garantizaba por las formas verticales de organización que le caracterizaban.¹¹³

3.1.7. Fragmentación y conflicto: ¿Fin de las lealtades políticas?

Recapitularemos por último sobre algunos elementos que, al final de los años ochenta, contribuyeron a configurar el proceso de descomposición del corporativismo y de la relación

¹¹¹ “Si Zapata viviera...” *Diario de Chiapas*. 9 de abril de 1987, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, p. 6.

¹¹² *Cuarto Poder*, 11 de abril de 1987, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, p. 3.

¹¹³ Sobre el deterioro del corporativismo agrario en Chiapas en la década de los ochenta, *cfr.* Neil Harvey, 1990, p. 195.

clientelar que por años había mantenido el gobierno con los campesinos de la región de La Frailesca.

En primer lugar, la desatención de que fue objeto la región en cuanto al fomento productivo en la segunda mitad de la década de 1980, producto del revanchismo político por parte del gobierno castellanista hacia los ejidos vinculados al germanismo. De igual manera, la decisión deliberada del gobierno del Estado de auspiciar la adscripción política de los comisariados ejidales a los programas oficiales a través del control que ejercía el aparato cenecista. Así, ganaba terreno la postura de no canalizar apoyos hacia muchos de los ejidos que habían participado en el movimiento “desestabilizador” al gobierno, pese a la gravedad de la situación del medio rural frailescano en el contexto de la crisis. Relacionado con lo anterior, la represión ejercida en contra del movimiento maicero y en particular el encarcelamiento de sus principales dirigentes, creó una situación de desesperanza entre los campesinos fieles al germanismo, lo cual evidenció que frente a la mano dura ejercida por el gobierno no había intocables, por mas encumbrados que estos pudieran estar.

Un segundo elemento que contribuyó al desgaste del corporativismo al final de los años ochenta en La Frailesca fue la bandera de la lucha agraria que mantuvieron diversos ejidos. Esta demanda venía desde la década anterior y pese a la supuesta afectación de predios, documentada en los informes gubernamentales, la actitud de los funcionarios agrarios era dar largas a la ejecución de las resoluciones presidenciales o enfrentar a los grupos de solicitantes con otros grupos adheridos a la CNC, fomentando así la división entre los mismos campesinos.

A esta actitud de desdén mostrada por la burocracia gubernamental hacia la problemática campesina en la región, se sumó la situación de insolvencia económica del país que dejó de canalizar recursos al sector rural. Por el contrario, empezó a cuestionarse, desde el discurso oficial, la viabilidad del ejido como figura productiva. Así, los diversos problemas que vivía la región expresaban ya cambios importantes en la historia de la relación Estado-campesinos y era obvio que las prioridades de la política gubernamental eran otras.

Y aunque la política local aparecía hegemonizada por la corriente germanista, la disputa interna entre grupos al interior del PRI permitió que, desde finales de la década de 1980, la región empezara a abrirse de manera muy lenta a otras opciones políticas. A ello contribuyó

el importante movimiento electoral que se desarrolló en el país en 1988, junto con el desgaste al que fue sometido el germanismo como opción política y de poder en la región. En este marco de conflicto y en la perspectiva del proceso electoral que se avecinaba en el país, en marzo de ese año el candidato a gobernador Patrocinio González realiza las gestiones necesarias para excarcelar a Jiménez, pues, además de necesitar su apoyo para enfrentar el reñido proceso electoral, era ya en los hechos el candidato a gobernador quien asumía cada vez más la conducción del poder del estado en Chiapas. De acuerdo con Escalante, 1995, "...existía ya una situación nueva; los grupos de poder y los actores políticos sufrían un reajuste, la correlación de fuerzas cambiaba y también la incidencia del gobierno federal en el juego político local"¹¹⁴

Con los elementos hasta aquí expuestos, podemos concluir que la región y los actores políticos aquí considerados observaban una transformación del esquema tradicional de funcionamiento, reflejo de lo que pasaba en los espacios políticos más amplios. De hecho se iniciaba un proceso de fragmentación de la sociedad regional, que en los años posteriores se profundizaría como resultado del despertar ciudadano que vivió la entidad y el país entero. En este sentido habría que señalar, como dice Guillén, que la entidad se esforzaba por marchar a la par con los tiempos nacionales, en el plano de sus transformaciones económicas y políticas, superando la visión que diversos historiadores mantienen acerca de los tiempos diferenciales que ha vivido la sociedad chiapaneca.¹¹⁵ No obstante, la influencia del germanismo como grupo al interior del PRI, con una base social propia, se mantiene todavía en la actualidad como una fuerza real –aunque disminuida– en la región Frailesca y aunque se señala que su capacidad de convocatoria actualmente no es la misma, mantiene su fuerza basada en la presión a los funcionarios de los gobiernos en turno y el control de la presidencia municipal de Villaflores, la que ha refrendado durante las últimas contiendas políticas.

La dinámica de las relaciones sociales se transformaba con el tiempo y, –como dice Escalante–, era evidente que muchas de las formas de dominación tradicional en Chiapas se estaban modificando en la medida en que el Estado entraba en la vía de desarrollo neoliberal y de las políticas modernizadoras.¹¹⁶ La sociedad regional mediante la lucha por

¹¹⁴ Ver al respecto María de la Paloma Escalante, 1995, p.15.

¹¹⁵ Ver Diana Guillén, 1998, p.130.

¹¹⁶ Cfr. María de la Paloma Escalante, *Op. Cit*, p. 3.

la conquista de diversas reivindicaciones empujó para la construcción de formas más democráticas de gestión, lo que también se vio corroborado como una exigencia en el ámbito nacional. Estas transformaciones se desarrollaron, sin embargo, en un contexto de importantes disputas que desde diversas posiciones desatarían los grupos de interés local, los cuales mantuvieron o redefinieron su adscripción a diferentes posiciones políticas.

Los cambios que se produjeron en las relaciones políticas locales implicaron un lento proceso de maduración –antes de su expresión abierta– en la sociedad regional, que se mostraron primero como un conflicto entre la ciudad y el área rural mediante el rechazo de autoridades municipales que no tomaban en cuenta y, a veces, ni conocían los problemas de los ejidos. Ello implicaba, más que cuestionar el poder de la ciudad regional, cuestionar a los grupos de poder que ahí se asentaban y su ya tradicional imposición de las autoridades. Esta fase democratizadora correspondió al periodo del corporativismo mexicano que ejerció el Estado por intermediación de líderes, que supieron enarbolar demandas productivas y políticas, y le valió a éste mantener una clara hegemonía y el control indiscutible de la región, así como de los sistemas de representación y gestión durante un periodo de casi veinte años. Se reafirmaba la presencia del Estado como el actor poderoso e indiscutido que ha caracterizado la relación Estado sociedad en México al tiempo que, de acuerdo con lo establecido por Zermeño, se mostraba la debilidad de las fuerzas sociales provocando su propensión hacia la autonomización.¹¹⁷

Por su parte, el movimiento popular que se expresó en esta etapa planteando demandas que garantizaran los derechos de participación e inclusión de los actores, se desarrolló bajo una situación contradictoria. Este al mismo tiempo que avanzó en destrabar el viejo sistema de relaciones sociales imperante, mantuvo la relación corporativa y de sumisión al Estado, sin lograr concretar opciones políticas y organizativas que lo llevaran a construir una relación de autonomía frente al Estado. Este desenlace del movimiento vinculado a la actitud y visión que a lo largo de la década mantuvieron los actores, es explicable, en parte, por el contexto, la falta de madurez y los intereses políticos de sus principales líderes, que los condujo a mantener la institucionalidad en todo momento. Como dice Foweraker, los movimientos populares de finales de la década de los ochenta en México se caracterizaban por buscar su reconocimiento institucional al mismo tiempo que procuraban obtener

¹¹⁷ Respecto a esta propuesta, ver el trabajo de Sergio Zermeño, 1989, p.149,

mejoras materiales, lo cual buscaban concretar mediante diversos intercambios políticos y una estrategia gradualista, no obstante que a menudo lo hicieran bajo un discurso revolucionario o radical. Eran pues al mismo tiempo institucionalistas y no conformistas.¹¹⁸

3.2. Mano dura y modernización: las dos caras de la era “patrocinista”

El arribo de Patrocinio González Garrido al gobierno de Chiapas se concibió como la posibilidad de encauzar el reencuentro entre los diversos actores sociales y grupos políticos, cuya confrontación se había agudizado en el sexenio anterior el cual, política y socialmente se había mostrado incapaz de entender y dar respuestas a una sociedad que tendía a expresarse de manera cada vez mas heterogénea y compleja. Previo a su elección, el candidato en campaña manejaba un discurso conciliador para con las organizaciones sociales. Ya en el poder, combinó el discurso concertador propio de la era salinista con una política represiva hacia los movimientos campesinos, siendo una de sus tareas iniciales enviar al Congreso del Estado la iniciativa de reforma al Código Penal del estado de Chiapas bajo la cual la libertad de expresión y manifestación corrían el riesgo de tipificarse como delitos de difamación, motín o rebelión.

La otra cara que mostró el nuevo gobierno giraba en torno a su proyecto modernizador acorde con las iniciativas que se venían impulsando a nivel nacional. En materia de desarrollo rural se impulsó una política restrictiva y selectiva, pues al mismo tiempo que disminuían los apoyos a la producción de alimentos básicos con el consecuente impacto entre la población campesina, se ensayó el apoyo a la producción de cultivos más rentables respaldando a los sectores empresariales. En particular para el caso de las actividades productivas vinculadas a la producción ejidal se buscó acabar con muchos de los lastres de ineficiencia que definieron la política de desarrollo rural en las administraciones de la era populista. La orientación de la política de desarrollo rural estaba clara: se creaban las bases para el impulso de un programa modernizador sin campesinos y se modificaban las condiciones que impedían insertar al campo en una perspectiva privatizadora de la sociedad rural.

¹¹⁸ Como dice el mismo Joe Foweraker, 1990, p.11, la noción de institucionalismo en los movimientos populares no implica la ausencia de conflicto político.

3.2.1. Un agrarismo concertador

A pesar del programa de rehabilitación agraria impulsado en la década de los ochenta, la conflictividad y el rezago agrario caracterizado por ser de los más importantes en el país, resultaba ser una de las prioridades de Patrocinio González en el arranque de su gobierno. La actitud conciliadora que había mostrado desde un inicio el nuevo gobernante de Chiapas, fue interpretada por las diversas organizaciones campesinas como la posibilidad de poner orden a los diversos conflictos agrarios que se arrastraban desde administraciones anteriores. En efecto, González desde los primeros años de su administración, tuvo entre los objetivos de su gobierno finiquitar el rezago agrario, identificado como el problema más importante en la entidad.

Este propósito se buscó concretar mediante su Programa de Concertación Agraria, el cual buscaba dar respuesta a las demandas expresadas por las principales organizaciones campesinas independientes de la entidad focalizadas en algunas regiones de Chiapas (Venustiano Carranza, Simojovel, Selva Lacandona) y que sobresalían por la conflictividad y beligerancia con la que los actores sociales locales habían buscado resolverla. Mediante este programa durante 1989 el gobierno hizo entrega de resoluciones presidenciales de dotación y ampliación de tierras ejidales a 26 colonias afectadas por el Decreto que creó la comunidad Lacandona en 1972. En abril de ese mismo año entregó a los comuneros de la Casa del pueblo del Municipio de Venustiano Carranza, recursos para la adquisición de 3,184 hectáreas reclamadas por la comunidad. En la zona norte se impulsaron acciones tendientes a regularizar la tenencia de la tierra a fincas invadidas desde 1981.¹¹⁹ Resultaba claro que el gobierno se interesaba en desactivar estos focos de conflicto e institucionalizar el movimiento resolviéndole sus demandas. Así, entre enero y junio de 1990, se había regularizando la tenencia de la tierra de los campesinos de la zona norte que habían invadido fincas desde 1981; de igual manera, entregó a la comunidad indígena tzotzil de Venustiano Carranza la documentación definitiva que amparaba la posesión comunal de cerca de 50 000 hectáreas. A pesar de ello, el mismo gobierno reconocía que Chiapas seguía representando la proporción más importante del rezago en materia agraria.

¹¹⁹ Cfr al respecto., María Eugenia Reyes y Álvaro F. López, *Op. cit.*, p. 17.

En el caso de la región de La Frailesca ya hemos visto la forma en que participaba de este problema; demandas que se expresaban por parte de los núcleos agrarios directamente ante el gobierno o por la intermediación de la CNC, con el compromiso de mantener fidelidad a la política gubernamental. De esta manera la región fue beneficiada por el arranque agrarista del gobierno que en menos de dos años, a finales de 1990, según las cuentas de los funcionarios agrarios, habían entregado a las organizaciones campesinas 10,316 hectáreas en siete municipios, entre los que se encontraba Villacorzo con 2,180.

La estrategia desarrollada por González Garrido le permitió procesar los conflictos desactivando muchas de las demandas agrarias que, por años, habían sostenido las principales organizaciones independientes. Al desactivar los principales conflictos agrarios de la entidad, el gobierno buscaba allanar el camino para el impulso de su programa modernizador en Chiapas como parte de la estrategia nacional diseñada por el salinismo. Para ello era indispensable contar con el aval de diversos grupos para declarar que en Chiapas se había terminado el rezago agrario. Esto después de ser aprobadas las reformas al Artículo 27 constitucional en 1991, la cual permitía avalar la decisión política de dar por terminado el reparto agrario que cancelaba en el país la posibilidad de acceso a un pedazo de tierra y reorientaba el problema a dar protección y certidumbre a la propiedad.

La problemática agraria no era, sin embargo, el único asunto que aquejaba a los campesinos en el complejo tejido social regional. A este añejo asunto se sumaron otros propios de la política de reconversión y transformación productiva, que se había iniciado desde la mitad de la década en cuestión. En efecto, con la administración de Miguel de la Madrid se redefine y reorienta la política agropecuaria. Sin embargo los cambios más importantes en el medio rural, en relación con la política hacia el campo, se concretaron durante el gobierno de Carlos Salinas, quien se propuso impulsar un conjunto de medidas modernizadoras buscando cambiar la forma y el fondo de la relación Estado-campesinos que prevaleció en el país durante más de cincuenta años. Localmente, en Chiapas, correspondió a Patrocinio González darle forma y contenido al proyecto modernizador durante los primeros cinco años de su gobierno, antes de que estallara el movimiento zapatista.

En efecto, González Garrido se preocupó por dar una fachada de modernización a la economía chiapaneca buscando incorporar a los grupos más dinámicos –la producción para

la exportación y los servicios— a los flujos de comercio e inversión. Hacia las organizaciones campesinas y el movimiento popular su oferta política más bien fue de contención, o sea, la de conceder respuestas favorables hacia las regiones y organizaciones más conflictivas, al mismo tiempo que se les maniataba tipificando sus acciones de movilización y protesta como delitos. Una propuesta de desarrollo hacia el campo que considerara la diversidad de condiciones de la agricultura chiapaneca, en esta etapa, fue letra muerta. Más bien se buscó desalentar los procesos en los que se había insertado la actividad agropecuaria en la década anterior, por considerarlos onerosos para la situación económica del país.

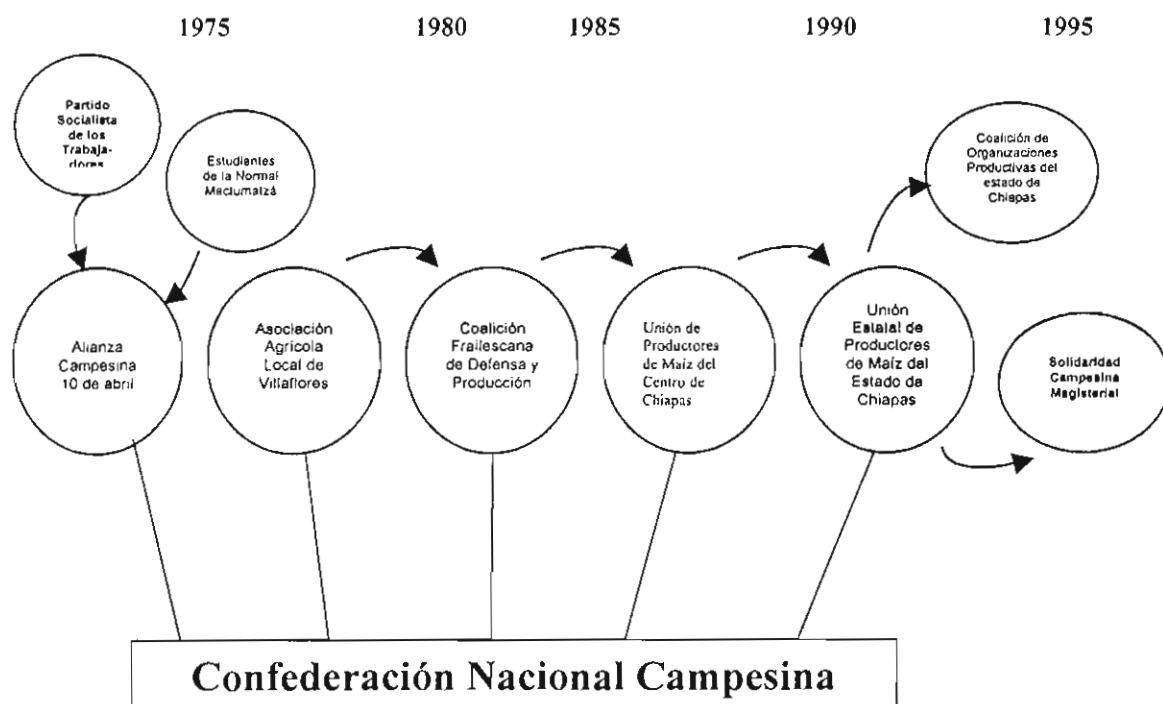
3.2.2. Reestructuración institucional y abandono

La región de La Frailesca sufrió los efectos de la indefinición, o más bien, de la redefinición de la política gubernamental hacia el medio rural, en el marco de la política de liberalización económica que en esos años se profundizó. Los primeros años de esa nueva administración se orientaron a dismantelar el aparato de apoyo institucional al campo construido durante los cuarenta años anteriores, incluidas las instituciones de investigación agrícola. Así, el abandono aparente o real que en estos años vivió la región en materia de fomento de la producción agropecuaria, no sería más que el preludio del contenido de las políticas que se impulsarían años después de manera sistemática con el advenimiento del salinismo.

Con los antecedentes de las movilizaciones campesinas de los productores maiceros desarrolladas a mitad del sexenio anterior, para ese momento resultaba claro que al régimen no le interesaba ya la producción de maíz en la región y los recursos que se ofrecían para el fomento de este cultivo eran solamente para la sobrevivencia de los campesinos más golpeados por la crisis. Un campesino de La Concordia señalaba que en la región existían 300 tractores abandonados propiedad de SARH y SDR y que eran chatarra. Otro signo del abandono productivo de la región era la situación de cartera vencida en que se encontraban la mayoría de los ejidos. Así, en adelante, el carácter de la relación de los campesinos de la región con el Estado se desarrollaría en razón de la posibilidad de acceder a recursos que, bajo el argumento de ser destinados a fomentar la producción, serían más bien recursos que serían utilizados para garantizar la sobrevivencia de las familias campesinas.

A pesar de la circunstancia de la reclusión de los principales líderes del movimiento maicero, en ese periodo la corriente germanista en alianza con los líderes magisteriales se mantuvo activa, buscando mantener su fuerza social, al tiempo que desarrollaban diferentes modalidades de acuerdo con políticos y funcionarios gubernamentales. Quienes más sacaron provecho de estas alianzas y relaciones fueron los líderes magisteriales Manuel Hernández y Jacobo Nazar, quienes a partir de ello consolidaron una fuerza política entre los campesinos mediante la llamada “Solidaridad Campesino Magisterial” que, en el marco de la política concertadora del gobierno, hacían gala de que su lucha era enfocada a conseguir el bienestar de los campesinos y de que sus esfuerzos se orientaban no a la confrontación sino a la lucha por la producción. Entre 1986 y 1988 esta corriente volcó sus esfuerzos a la creación de uniones de ejidos, por diferentes rumbos de la geografía chiapaneca, entre las que destacan la Unión de Ejidos Juan Sabines en Escuintla, la Unión de Ejidos Maravilla Tenejapa en la Frontera, la Unión de Ejidos Huixtla en la Costa y en los Altos, la Unión de Ejidos Mi Patria es primero.

Figura 3. Procesos de organización campesino-maicera vinculados al germanismo



En el contexto de la política patrociniada no existía –o no debía de existir– lugar para la protesta campesina y si la había, ésta podía ser canalizada por las organizaciones oficiales como SOCAMA (Solidaridad Campesino Magisterial) que ahora orientaba sus esfuerzos –según sus propios pronunciamientos–, a organizar la producción. Sin embargo, para la mayoría de los productores, las condiciones para la reproducción de la vida económica y material de sus unidades productivas no se veía garantizada, pues el trabajo y recursos que el campesino invertía en su parcela no se recuperaba al término del ciclo agrícola por la precariedad de los precios de mercado. En este marco, la posibilidad de presentación de nuevas protestas y movilizaciones esperarían las condiciones adecuadas para ser canalizadas.

Mientras tanto, la región maicera de Chiapas, y en particular La Frailesca, vivía una crisis total desde el punto de vista productivo. El abandono de la región expresado en el retiro de los créditos, la cartera vencida y las plagas que azotaron la zona, se tradujo en una dramática caída de la producción. La maquinaria agrícola, que años antes era adquirida o entregada con entusiasmo, se iba convirtiendo en chatarra. Entre los productores de maíz existía desaliento como resultado de la derrota del movimiento, el golpeteo y las pugnas entre los grupos de poder al interior de los ejidos y el desinterés por el campo mostrado por parte del gobierno. Ello, en los hechos, llevó a los ejidos a una dinámica de marginación económica y social, junto a la nostalgia por los mejores años del auge maicero. Frente a la situación de desastre que a principios del sexenio vivía La Frailesca en lo social y productivo, en 1989 los grupos leales al germanismo inician un proceso de reorganización y acuerpamiento, transformando la Asociación Agrícola Local en la Coalición Frailescana de Defensa y Producción, con el propósito de impulsar un plan para la recuperación y el desarrollo agrícola de la zona.

Pese a la desarticulación de la corriente germanista, como resultado del hostigamiento al que fueron sometidos los líderes y campesinos en los ejidos leales a esta corriente, al ser liberados sus dirigentes, a finales de 1987, deciden mantenerse en la institucionalidad. No podía ser de otra manera. Si durante los momentos más álgidos de la lucha y de la represión se mantuvieron leales al partido y al sistema, en la nueva circunstancia estaban obligados a seguir siendo institucionales, toda vez que fueron los mismos agentes de la institucionalidad los que promovieron su libertad; estaban en deuda con ellos. Por ello, al

salir de la cárcel los dirigentes se propusieron seguir haciendo política en Chiapas desde el partido oficial, enarbolando la consigna de la producción.

3.2.3. La batalla por las carteras vencidas

A principios de 1990 la acción gubernamental favoreció solamente aquellas actividades y sectores que se consideraron rentables y se orientaron hacia la exportación. Se pugnaba por una reconversión productiva, en la que producir granos básicos para el abasto nacional no era lo más importante. De hecho, en La Frailesca el contexto y justificación para operar localmente los cambios en materia de política agrícola fue la disminución de los niveles productivos que se estancaron, en medio de una escandalosa situación de cartera vencida que hizo inoperante el trabajo de la banca de desarrollo entre los productores, ambos resultado de la desatención que vivió la región en el sexenio anterior.¹²⁰ De este modo, se condujo a la ruina a la mayoría de los productores de la región, algunos de los cuales se incorporaron a la naciente Asociación de Deudores de la Banca en Chiapas (Aditoch), expresión chiapaneca de la organización de deudores como lo fue el Barzón en el país.

Entre 1990 y 1991, la propuesta principal que mantenía el discurso oficial en la región era que los campesinos debían pagar los adeudos que tenían con la banca oficial. Al tiempo que el gobierno procedía a desaparecer Anagsa por ser, de acuerdo con los señalamientos de los líderes en turno de la CNC, “un nido de corrupción”. También se cuestionaba el papel de Pronase “por no haber producido en Chiapas variedades que mejoraran la producción”. De hecho, en estos años –por considerar que eran una pesada carga financiera– el gobierno procedió a anular, o de plano a eliminar diversas instituciones que durante mucho tiempo funcionaron como instrumento para canalizar recursos directos al campo, como fueron los casos de Banrural, Anagsa y Fira, mientras que otras instituciones de fomento como Fertimex o Conasupo, que durante años fueron orgullo de la política gubernamental hacia el campo, también empezaron a ser cuestionadas, para lo cual se tomaba como argumento las quejas de los mismos productores.

¹²⁰ De acuerdo con reportes de la producción agrícola estatal de 1992, entre 1980 y 1990 se observó en Chiapas una disminución de la superficie cultivada de maíz, niveles de producción y rendimientos por hectárea.

Con la exigencia del Banco de Crédito Rural a los campesinos, para que liquidaran sus adeudos, salieron a flote muchos de los mecanismos que durante años alimentaron una relación viciada entre éstos, los funcionarios del banco y el Estado, en la que se fomentó la cultura del “no pago” de los créditos. Esta relación deformada propició que los campesinos, con frecuencia, declararan siniestradas sus siembras –aún cuando esto no fuera real–, ante lo cual la aseguradora respondía “en parte”; con ello se beneficiaban los campesinos y los funcionarios de las dependencias en cuestión. Esto habilitaba a los productores para la adquisición de nuevos créditos, sin haber cubierto los anteriores, pero en una situación de disminución de los precios, los productores cayeron en cartera vencida y algunos llegaron a acumular adeudos de varios ciclos.¹²¹

Frente al problema de carteras vencidas, después de 1987, el gobierno lanzó varias propuestas para recuperar los adeudos. Los productores por lo general las ignoraron. Pese a los problemas generados por la situación de cartera vencida, y por la postura de los campesinos de no pagar adeudos en los que los funcionarios de las instituciones también estaban involucrados, la estrategia del gobierno fue no mover demasiado las aguas y dejar que los pagos se dieran voluntariamente o condicionando la posibilidad de acceso a otros apoyos.

A partir de 1989, los recursos de Banrural para habilitar la producción de maíz dejaron de fluir y fueron sustituidos por el llamado “crédito a la palabra”, propuesta ingeniosa del salinismo para canalizar dinero a los campesinos desfavorecidos. Posteriormente se demostró que estos recursos tenían un tinte electoral, pues, por disposición oficial, eran canalizados por las autoridades municipales, lo cual permitía entregarlos de acuerdo con criterios clientelares. Para el caso de Villaflores, ese año se entregaron mediante el programa de “crédito a la palabra” recursos a más de dos mil campesinos de los 28 ejidos, que incluía los más productivos. Mientras tanto, los funcionarios de Banrural previendo la futura desaparición de la institución, a la par que suspendieron la canalización de créditos, hacían esfuerzos para recuperar los adeudos de años anteriores, recursos que los productores nunca estuvieron en disposición o en condiciones de pagar.

Según el representante de Banrural en Chiapas, Alejandro Villar Borja, para mediados de 1992 las principales regiones maiceras de Chiapas habían acumulado un adeudo con la

¹²¹ En relación con el problema de cartera vencida en la Frailesca, ver Oel Hernández, 1998.

institución de 150 000 millones de pesos. En el mismo sentido, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado, Marco A. Bezares Escobar, informaba que alrededor de 25 000 productores de maíz en el estado aún no habían liquidado 36 000 millones de pesos del crédito que obtuvieron un año antes del Fondo de Solidaridad para la Producción.¹²² Para colmo, en ese año, se presentó una plaga de langosta que afectó a los principales municipios maiceros de la región de Valles Centrales. Ello hacía más improbable el pago de la cartera vencida, lo que llevó a los comisariados ejidales a declarar que más de 50 000 campesinos quedarían imposibilitados de pagar todo tipo de crédito. Pero la situación de cartera vencida no fue más que la “punta del iceberg” de la quiebra del modelo que había imperado durante cuatro décadas.

Por los vicios existentes, pero también por no encajar dentro del nuevo modelo económico, el Estado se propuso cancelar todas las operaciones crediticias de Banrural, institución financiera paraestatal que durante cuarenta años había financiado la producción en el medio rural. Todavía en 1988 el crédito de Banrural en apoyo a la producción de maíz tuvo una cobertura del 37 %. Sin embargo, para 1992, la cobertura fue de sólo 9.5 %.¹²³ El mismo ejido era, en ese momento, fuertemente satanizado y criticado desde el discurso oficial, señalándosele como improductivo.

Y no es que no hubiera dinero para financiar las actividades productivas, lo que sucedía era que las prioridades hacia el campo eran otras y se manejaban de manera discrecional. Así, para mediados de 1990, el gobernador anunciaba que existían dos billones de pesos para actividades agroindustriales y 200 000 millones para créditos agrícolas. Estos recursos se empezaron a canalizar mediante otros esquemas como fueron los Fondos de Empresas en Solidaridad (Fonaes), que orientaban sus iniciativas de acuerdo con las nuevas prioridades vinculadas a procesos de carácter agroindustrial. A los campesinos más empobrecidos se les apoyaba mediante los llamados Fondos de Solidaridad para la Producción (Fosolpro), que no eran más que una posibilidad más de garantizar la sobrevivencia campesina. Ya desde ese entonces quedaba claro que la estrategia de desarrollo para la región se orientaba a fortalecer la presencia de los sectores con mayor capacidad y potencial de recursos, siempre y cuando aceptaran participar bajo los criterios mercantiles que se venían imponiendo.

¹²² *Diario de Chiapas*, 27 de noviembre de 1992, Tuxtla Gutiérrez, p. 4.

3.2.4. En lo político: autoritarismo y subordinación

No obstante el impulso de las iniciativas desreguladoras del gobierno patrocিনista en la región, en el plano de las relaciones políticas entre los actores y de sus prácticas La Frailesca, como el resto de la entidad, no había cambiado. Seguía la cerrazón de los grupos de poder en torno al sistema de partido único. En 1989, había sido nombrado Roger de Coss como presidente municipal de Villaflores en sustitución de Lusteín Martínez. A principios de ese año, en reunión de cabildo se discutía, por ejemplo, si se aceptaba o no la participación de la regidora plurinominal Nery Pereyra Hernández por el Frente Democrático Nacional (FDN), al manifestar los líderes locales ante el Congreso del Estado que se debía hacer valer la ley orgánica municipal. Ante tal pronunciamiento el cabildo en pleno acuerda entonces presentarse ante el Congreso para hacerle saber directamente su postura en contrario. Las resistencias al cambio político, que ya se avizoraba en otros rumbos, parecían no tener posibilidades en la región.

Otro caso de autoritarismo fue la actitud asumida por parte de las autoridades municipales de Villacorzo, en relación con un grupo demandante de tierra en el poblado Belisario Domínguez, que a pesar de tener firmada una resolución presidencial desde 1987, ésta no se ejecutaba bajo el argumento de existir división en el grupo demandante. Cuando la resolución presidencial se logra ejecutar en 1989, se hace sobre la base de que existan nuevos representantes del Comité Particular Agrario. En 1991, los demandantes se inconforman ante las autoridades agrarias de México, por haber ejecutado la resolución presidencial con personas no consideradas en ésta. Las diferencias en este grupo agrario eran porque la canalización de la demanda se había venido haciendo mediante el membrete de la Alianza Revolucionaria Campesina –al parecer filial del CAM– y, por lo tanto, no gozaba de la simpatía de las corrientes hegemónicas del oficialismo. Así, al dirigente de este núcleo agrario, Rodolfo Lazos, se le destituye y, posteriormente, se le señala de usurpar funciones y de gestionar apoyos –despensas, créditos– que no llegaban a la comunidad.

Con el nuevo presidente municipal de Villaflores, Roger de Coss, en 1989 la corriente de Jiménez volvía a ubicarse como la posición fuerte en la política local. De hecho nunca

¹²³ Ver al respecto Jorge Vázquez Gómez, 1994.

había dejado de serlo y siempre estuvo actuante desde los ejidos, a pesar de haber sido constantemente vapuleada. Existía, por tanto, el interés de recuperar posiciones entre los grupos campesinos, por la vía de colocar a gente leal en los comisariados ejidales. En el marco de esta disputa, algunos ejidatarios de Jesús M. Garza, en octubre de 1990, muestran su inconformidad con el presidente de Coss por las irregularidades y la forma en que manejó la elección de los directivos del ejido como queda registrado en una carta enviada al Congreso del Estado: *“Estas irregularidades -decían- no son nuevas ya que son obra y arte del ‘engaña pueblo’ Germán Jiménez Gómez, como lo hacía en épocas del presidente Efraín de Coss y se mofaba que (los dineros que repartía) eran de su bolsa. Actualmente lo sigue haciendo con el actual presidente municipal Roger de Coss, primo de aquel, que con dinero del presupuesto convencen a las personas”*.¹²⁴

En Villacorzo también existía inconformidad en contra de las autoridades municipales afines al germanismo, por parte de ejidatarios de El Parral. En este caso, se cuestionaba haber designado al agente y juez rural municipal y haber prometido que sería en asamblea donde se escogería la terna. También lo acusaban de otorgar los recursos Pronasol a sus amistades, quienes –decían– no cumplieron con los pagos del “crédito a la palabra”. Aquí las autoridades del comisariado ejidal, leales a Jiménez, defendiendo un discurso democrático reivindicaban que debía ser la asamblea general la que nombrara a las autoridades municipales del ejido.

La pervivencia del grupo germanista en los ejidos permitió, de hecho, que su líder volviera a la disputa política a partir de agosto de 1991 cuando, por decisión oficial, se le promueve de nuevo como diputado federal. Para el partido de Estado estas elecciones a nivel federal eran cruciales para legitimar un régimen que se había impuesto por la vía del fraude, además de sacar adelante los proyectos de reforma que se venían planificando para el medio rural. Dentro del oficialismo había la necesidad de liderazgos con arrastre y control regional, para recuperar las posiciones perdidas tres años antes. Esto daba a Jiménez la posibilidad de reconstruir y mantener el tráfico de influencias y seguir incidiendo políticamente en la región. De hecho, después de 1991, no obstante la apertura de la región a otras posiciones políticas, la corriente de Germán Jiménez siguió siendo la dominante,

¹²⁴ Carpetas municipales, Villaflores, Archivo Histórico del Congreso del Estado, Octubre de 1990.

imponiendo a los políticos que formalmente estarían al frente de los municipios de La Frailesca.

La reincorporación de Germán Jiménez a la política local en el contexto del proyecto patrocínista-salinista mostraba luces y sombras con respecto a la tradición corporativa de los campesinos de la región y la influencia que su líder aún mantenía. El auge del neocardenismo en el país y en Chiapas no había hecho mella entre los actores sociales y políticos y la fuerza del partido de Estado seguía haciéndose patente. No obstante, la dinámica de las relaciones corporativas había empezado a cambiar y el cuestionamiento a estas prácticas y formas de relación política en la región eran cada vez mas evidentes. Con ello se iniciaba un proceso que, aunque lento, buscaba ampliar los espacios de participación y expresión y democratizar las relaciones políticas todavía concentradas en el partido oficial.

Como diputado federal por segunda ocasión, a Jiménez le tocó intervenir en la aprobación de la reforma a la Ley Agraria como integrante de la comisión de Reforma Agraria del Congreso, y que al ser dictaminada dio marcha atrás al carácter social del Artículo 27 constitucional. En realidad los campesinos de La Frailesca –como los del resto del país–, bajo esta circunstancia estaban imposibilitados de comprender que con la iniciativa de reforma estaba en juego el futuro de su espacio comunitario, mientras su líder histórico, Germán Jiménez, junto con el resto de la diputación federal chiapaneca apoyaba la “contrareforma”. La confluencia de propósitos entre el régimen reformador salinista-patrocínista y los intereses del grupo de Jiménez se hicieron patentes en esta ocasión, en la que ni él ni ningún otro miembro de la diputación chiapaneca tuvieron una expresión de desacuerdo. La sumisión al régimen y sus iniciativas era total. Lo que a futuro sucediera con el carácter social de la propiedad de la tierra era lo de menos para los dirigentes del otrora movimiento maicero.

*“En la zona se da el rentismo y la venta de parcelas. A mucha gente no le interesa ya trabajar el campo, tampoco hay interés por conocer de las reformas al Artículo 27 y la política, sino más bien de conseguir recursos para sobrevivir. (...) y si para el campesino la tierra cumple una función social, para el gobierno cumple una función económica”.*¹²⁵ Así justificaba Hernández Aguilar, en 1993, la posición de esta corriente en torno a la reforma,

¹²⁵ Conferencia dictada por Jorge E. Hernández Aguilar, 5 de marzo de 1993, Tuxtla Gutiérrez.

quien además de reconocer la gravedad de la situación productiva de la región, aceptaba que a partir de ello se iba a generar una dinámica de concentración de la propiedad territorial. Ello no sucedería en Chiapas por la presión de las organizaciones campesinas para enarbolar esta demanda social y por la decisión de oponerse a la política de represión instrumentada por el gobierno, pese a las iniciativas desreguladoras que ya se venían imponiendo tendientes a disminuir la presencia institucional en el campo. Estas definiciones y tomas de posición, en realidad, no eran más que el preludio de una nueva etapa de lucha social que en la entidad se desataría con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que definiría en los siguientes años la dinámica de los movimientos sociales en Chiapas, a partir del influjo que tuvo el alzamiento indígena en las diferentes regiones de la entidad.

La situación del movimiento social durante la era patrociniista fue por demás difícil. Existía una situación de anomia entre las organizaciones más representativas del movimiento campesino por la política de “palo y zanahoria” puesta en práctica por González Garrido. Esto provocó, a finales de 1992, la desarticulación de las organizaciones campesinas pese a diversos intentos por estructurar una respuesta a la política del gobierno estatal. De acuerdo con lo señalado por Canabal “el círculo estaba cerrado pues el acceso a la tierra, a la democracia, al crédito, así como el respeto a los derechos humanos y a la dignidad del indio ya no se lograba resolver con movilizaciones o concertaciones” y solo quedaban promesas y más violencia, con lo que parecía poco más que imposible cambiar la correlación de fuerza.¹²⁶

En el caso de La Frailesca, la desmovilización campesina no podía ser mayor. Mas allá de la lucha de algunos grupos que mantenían viva la demanda agraria, el movimiento campesino regional parecía completamente desarticulado o había entrado en una fase de latencia en espera de la construcción de nuevos liderazgos y relaciones de fuerza. La demanda de inclusión quedaba pospuesta para expresarse en otro momento, en el que los actores en razón de la coyuntura pudieran establecer las alianzas necesarias y una correlación de fuerza a su favor. La coyuntura era completamente desfavorable para las organizaciones campesinas, situación bajo la cual el Estado estaba decidido a concretar su proyecto de reformas, aun en contra de la opinión de los campesinos.

¹²⁶ Al respecto *cfr* el artículo de Beatriz Canabal, *et. al.*, 1994, p. 68.

De acuerdo con nuestro análisis, en aquella coyuntura el movimiento campesino en la entidad tendía a tejerse de manera silenciosa desde las dinámicas regionales y a construirse desde otras vertientes que no necesariamente pasaban por las demandas y las formas de organización tradicional, sino que había un “regreso a la comunidad” en el que cobraban importancia la denuncias en contra de la corrupción y por la democracia municipal. Esta desestructuración de las formas tradicionales de organización centralizada, evidentemente mostraba la tendencia a replantear las formas y mecanismos de intermediación tradicional basados en las relaciones clientelares. Y si bien ésta era una de las tendencias que prefiguraban el movimiento campesino de principios de la década de 1990, al mismo tiempo se expresaban otras formas de acción social que mantenían una estrecha relación con las iniciativas y propuestas concertacionistas que planteaba el Estado.¹²⁷

3.2.5. La perspectiva anticampesina del proyecto modernizador

Los grupos que asumieron el poder del Estado, a partir de 1989, eran portadores de un proyecto modernizador que pugnaba abiertamente por superar los lastres que, consideraban, impedían al país proyectarse como una nación plenamente moderna desde una perspectiva capitalista. La divisa que manejaban era la de introducir el país al entorno mundial cambiante, que “demandaba dejar atrás esquemas y modelos ya superados”. Para ello, habían madurado un conjunto de iniciativas que, como proyecto, implicaban el lanzamiento de una nueva fase modernizadora. Así, los principales cambios económicos que se impulsaron correspondieron a estrategias de adaptación a las exigencias de la economía internacional. Una visión más clara del significado y los alcances de las iniciativas promovidas por González Garrido las podemos reconocer a partir de un recuento de su periodo.

Desde el inicio de su gestión, Salinas de Gortari presenta su Programa Nacional de Modernización del Campo, en el cual una de las principales propuestas era profundizar el programa de desregulación estatal, para hacer más eficientes las instituciones y ponerlas en manos de los productores. Las propuestas básicas de la iniciativa modernizadora se dieron a conocer en Tuxtla Gutiérrez, en enero de 1990, al presentarse con bombo y platillo el

¹²⁷ Ver Álvaro Martínez *et al.*, 1994.

Programa Nacional para la Reactivación del Campo Mexicano, para que quedara constancia de cuál sería a futuro la política hacia el campo, bajo el argumento de la gravedad de la problemática agraria y el atraso productivo en la entidad.

Las razones que argumentaba Patrocinio González para la presentación en Tuxtla de esta propuesta eran las siguientes: *"...se hizo en Chiapas porque es aquí donde se concentra y expresa, con mayor gravedad y mayor injusticia, la problemática agraria; porque es aquí donde el conflicto todavía genera pérdida de vidas, la pérdida de la producción y la cancelación de expectativas de justicia y dignidad a que tiene derecho el pueblo de Chiapas"*.¹²⁸

Las acciones que, sin embargo, impulsaría el gobernador Patrocinio González en los años siguientes al subordinar su política y programas al proyecto modernizador impulsado desde el centro del país, poco tenían que ver con su discurso de regresar a los chiapanecos las expectativas de "justicia y dignidad". De acuerdo con una opinión del mismo Hernández Aguilar –ex líder maicero– en lo que respecta al campo chiapaneco, el gobierno de Patrocinio González solamente había llevado más desesperanza, ya que sus acciones se centraron en dos lemas: justicia y obras, mientras el campo permanecía en el olvido.¹²⁹ Ello porque una política de fomento productivo, si acaso existió en los primeros años de su gobierno, fue muy pobre en su impacto.

Uno de los elementos básicos de la política rural hacia el campo lo constituyó el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) el cual fue concebido como un instrumento del gobierno federal para el combate a la pobreza extrema a principios de 1989, y en su aplicación, Chiapas fue una de las entidades mas favorecidas; sin embargo, fue incapaz de superar las condiciones estructurales de pobreza en que se siguió debatiendo la entidad. Para el caso de La Frailesca los recursos del Pronasol fluyeron vía los Fondos de Solidaridad para la Producción (Foslopro), los cuales tuvieron el sentido de apoyar temporalmente el cultivo del maíz en razón del proceso de liquidación de Banrural que dejó de canalizar créditos a los productores y que por el contrario, resolver la situación de cartera vencida se convirtió en su preocupación fundamental.

¹²⁸ *Diario de Chiapas*, 9 de Enero de 1990, Tuxtla Gutiérrez, p.3

¹²⁹ Efectivamente, Hernández Aguilar había sido beneficiado por la "justicia patrocinista" en enero de 1988. En relación con el segundo aspecto, se refería al programa de obras de relumbrón que se realizaron en Tuxtla Gutiérrez durante esa administración.

Para mediados del sexenio, el proyecto de reforma al Artículo 27 Constitucional, así como las negociaciones en torno al Tratado de Libre Comercio, presagiaban importantes cambios en la política del Estado hacia los campesinos del país, que habían construido en gran parte sus formas de socialidad y convivencia en torno a la figura del ejido. Ambas iniciativas concatenaban el gran propósito gubernamental de romper las trabas que impedían al país insertarse en los flujos del mercado mundial. Para los campesinos mexicanos, estos cambios mostraban la tendencia a incorporar al mercado sus precarios bienes, así como la posibilidad de enajenar sus parcelas bajo el discurso de garantizarles “libertad y certidumbre”.

La apertura comercial, también representó un duro golpe para los campesinos maiceros de la región, fundamentalmente por el acuerdo firmado en torno a la desregulación progresiva de los aranceles a la importación del grano que contemplaba el acuerdo comercial, y que por los niveles de productividad cuestionaba la viabilidad de su principal actividad: la producción de maíz.¹³⁰ El razonamiento de la clase política al respecto, expresado por Patrocinio González en un momento de euforia modernizadora del país, resulta sintomático. Decía el gobernador: “siendo nuestra economía esencialmente agropecuaria en el contexto actual, los mercados internacionales nos obligan a cambiar de manera rápida y acelerada y entender que, a partir de este próximo ciclo agrícola, tenemos todos la obligación de ser mucho más eficientes de lo que tradicionalmente hemos podido ser...”.¹³¹ Este discurso oficial –apropiado sólo parcialmente por los campesinos– implicaba para la región una reestructuración productiva que tenía dos senderos: la diversificación hacia otros cultivos (lo cual se mantiene como propuesta de gobierno) o el incremento de los niveles productivos buscando ser competitivos.

Estos argumentos justificaban otro de los programas clave del sexenio para hacer llegar recursos al medio rural, el Programa de Apoyo al Campo (Procampo) que se instrumentó al final del sexenio como una estrategia para que los productores rurales en el país avanzaran en el logro de mejores condiciones de competitividad, en virtud de que la apertura comercial que se avecinaba los obligaría a competir con los agricultores de los países

¹³⁰ Jorge López, 1995 y Daniel Villafuerte y María del Carmen García, 1996, en su momento analizaron ese desventajoso acuerdo y sus implicaciones para los productores chiapanecos. En general, en ellos se preveían consecuencias difíciles para los productores de maíz que producían para el mercado.

¹³¹ *Diario de Chiapas*, 10 de febrero de 1992, Tuxtla Gutiérrez, p.5.

socios. Este programa consistía en un subsidio de \$ 650.00 que se otorgaría a los agricultores en razón del número de hectáreas cultivadas por espacio de quince años. Este programa que al principio se vio con buenos ojos por parte de los productores, tuvo un pobre impacto pues al año siguiente de su implantación y por efecto de la devaluación que enfrentó el país a finales de 1994, según algunas estimaciones el monto real del apoyo se redujo en 60 por ciento, y al desdibujarse el sentido original del programa, para los campesinos de la región este recurso vino a significar solamente un recurso alimentario del cual echar mano temporalmente.¹³²

En relación con el conjunto de iniciativas que impulsaba el régimen hacia el medio rural, existían dos visiones no necesariamente contrapuestas de cómo y por dónde orientar el proceso de modernización, visiones que se correspondían con los dos principales grupos de poder local: la de los antiguos propietarios de tierras que veían que las propuestas fundamentales del modelo les beneficiaban, en el sentido de dar por terminado el reparto agrario; y la del grupo de Jiménez que, como fuerza todavía hegemónica en el priísmo local y al ostentar la representación campesina en el Congreso de la Unión, aceptó las bondades del proyecto salinista. Existía un proceso de modernización económica en marcha, al que estaban emplazados a adscribirse o tomar posición todas las fuerzas sociales y grupos de poder, y cada cual lo hacía desde su particular situación e interés, sin importar que en ese proceso los más afectados fueran los campesinos.

Algunas de las características de esta nueva fase modernizadora, aún en curso, son las siguientes: se apoya a los campesinos siempre y cuando acepten las iniciativas definidas por el discurso de la eficiencia; las empresas de capital privado que funcionan como opciones de comercialización, participan de manera privilegiada en el proceso, pues cuentan con subvenciones gubernamentales. Para la reconversión productiva se determinó la introducción de cultivos con supuesto valor comercial; así, en estos años se impulsó la producción de palma “chate” que fracasó. También se orientó a los productores a la siembra de jitomate, cacahuete, sandía y árboles frutales, bajo una estrategia de diversificación. El Estado dejó así de participar directamente en el proceso productivo (incluso la asistencia técnica) y su lugar fue ocupado por un conjunto de entidades privadas

¹³² Algunos de los rasgos que adoptó la política hacia el campo chiapaneco en estos años, los podemos ver en Daniel Villafuerte y María del Carmen García, 1998.

que en razón de una necesidad específica (agroquímicos, semillas, créditos, asesoría) se vincularon al productor.

Con el objetivo de incrementar la productividad se promovió la adopción de paquetes de alta tecnología (Pronamat, Promap) consistentes fundamentalmente en otorgar semillas mejoradas a los productores, generadas por la desaparecida Pronase. No obstante, la pobre cobertura de estos programas y su eficacia dudosa provocó, en los últimos años, voluntaria o involuntariamente, un auge inusitado de semillas híbridas de sello trasnacional (Asgrow, Pioneer, Ceres), expendidas por casas comerciales locales. En los hechos, la subordinación de los productores a las exigencias de los paquetes tecnológicos y, por tanto, a las empresas expendedoras de semillas era cada vez mayor.

Cuadro 6. Estructura de la producción agrícola de la región Frailesca.

Cultivo tradicional	1991/92		1995-96		2002/03	
	Sup. (Has)	Vol. (Ton)	Sup. (Has)	Vol. (Ton)	Sup. (Has)	Vol. (Ton)
Maíz	118,412	185,267	164,024	430,299	157,774	428,149
Frijol	18,584	10,661	17,009	13,587	16,295	12,584
Café	17,783	13,106	17,242		19,441	11,275

Cultivos alternativos

Cacahuete	192	162	1,613	2,903	750	2,045
Sorgo	221	633	770	2,866	2,103	5,480
Chile verde	51	358	3	27	14	66
Arroz	5	0	157	735	110	40
Melón	6	43	5	110	0	0
Sandía	39	401	104	2,130	184	3,228
Jitomate	0	0	128	n.d.	75	4,167
Mango	0	0	8	120	175	1,402
Naranja	0	0	10	50	55	470
Papaya	0	0	0	0	116	2,991
Limón	0	0	0	0	34	250

Fuente: Anuario Estadístico de Chiapas, 1992, 1996, 2003. INEGI.

No obstante el impulso de diversos programas tendientes a concretar un cambio de mentalidad productiva, la producción de maíz sigue siendo fundamental en la región y, de acuerdo con nuestros datos, en los últimos diez años se ha consolidado tanto en superficie cultivada como en términos de la productividad, pese al estancamiento que han observado los precios en razón de que estos se fijan de acuerdo al mercado libre. El incremento de los niveles productivos, si bien pudiera deberse a los incentivos que se han otorgado a los

productores vía los programas, como Procampo al principio o de la Alianza para el Campo, después. Así, los campesinos le siguen apostando al maíz como un elemento de la identidad productiva regional forjada por años.

En la idea de generar una mentalidad empresarial entre los campesinos, el gobierno del estado viene impulsando como una de sus políticas hacia la región la reconversión hacia cultivos alternativos, como es la producción de frutales, hortalizas y otros productos con valor comercial. La condición de región monoprodutora fomentada por años resulta, sin embargo, muy difícil de romper, aunado a los problemas que implica la comercialización de productos perecederos como los que se promueven (ver cuadro 6). Pese a ello, en los últimos diez años se viene generando una tendencia a la diversificación de la estructura productiva en la región promovida con subsidios vía los Fondos de Solidaridad para la Producción.

Adicionalmente a la política de prioridad dada al capital privado y el anuncio entre los productores del desmantelamiento del aparato institucional para el apoyo a la producción y la comercialización de maíz, a partir de 1995 se refuerza en la región la presencia de las harineras Maseca y Minsa, empresas que se propusieron la compra de importantes volúmenes de la producción regional. Para lograr su objetivo, plantearon canalizar apoyos financieros y tecnológicos a quienes aceptaran participar en su esquema de comercialización mediante el llamado “club del maíz”, agrupaciones que, desde la perspectiva de Maseca, permitiría atender las necesidades de crédito y mercado de la producción regional. Así, con el retiro de Conasupo de la comercialización del grano, la presencia de estas empresas se constituye en la principal opción de compra en el escenario local.

Evidentemente, no todos los productores podían participar de este modelo que estaba pensado para los más rentables, pues una de las condiciones exigidas era no tener adeudos con la banca oficial u otra institución de financiamiento. Además, debían de comprometerse a aplicar el paquete tecnológico definido por Maseca bajo criterios empresariales. Ello no quiere decir que los productores no buscaran adecuar estos esquemas a sus intereses y necesidades, o manejarlos de acuerdo con sus recursos políticos, organizativos y culturales. A pesar del desconocimiento y la duda frente a los novedosos esquemas de financiamiento y comercialización, en términos generales los campesinos aceptaron participar del modelo,

aunque con reticencias, por no existir otras opciones de comercialización claras en puerta.¹³³

Bajo estos elementos se impulsaba en la región el “proyecto patrocinista” de modernización centrado una vez más en criterios económicos y eficientistas, apoyándose y orientando su acción hacia aquel sector de productores con mayores posibilidades de participar en un esquema que priorizaba los criterios del mercado, modelo que desde este enfoque ha buscado insertar a la región en una perspectiva de desarrollo. Este proyecto se vería parcialmente suspendido por la dinámica social y política que vivió la entidad en los años posteriores a enero de 1994.

¹³³ Para ver las actitudes de los productores de maíz de La Frailesca frente a la estrategia desarrollada por Maseca, véase el trabajo de Enrique Contreras, *et al.* 1999.

IV. MOVIMIENTO SOCIAL Y ACTORES POLÍTICOS EN LA COYUNTURA ZAPATISTA

A principios de la década de 1990, diferentes actores económicos y políticos en la entidad buscaban adscribirse y participar en el programa modernizador que impulsaba el salinismo. Los proyectos e iniciativas que la clase política venía desarrollando, buscaban insertar al país en la lógica de la modernización capitalista de acuerdo con las exigencias del capital transnacional. Patrocinio González, antes de ser llamado a colaborar en el gabinete salinista, había sentado las bases para que los sectores productivos más dinámicos en la entidad, en particular los grupos empresariales asentados en las regiones económicamente más dinámicas, participaran de ese proyecto. La euforia de los actores económicos y productivos por definir las formas y mecanismos de insertar la economía chiapaneca en las exigencias del mercado, era en aquel momento, lo dominante.

Bajo un discurso ideológico apabullante en el que se cuestionaba la experiencia histórica de la construcción económica y social de los últimos cincuenta años en el país, la élite gobernante buscaba convencer a la sociedad y a sus organizaciones de la conveniencia de participar en el esfuerzo modernizador. Bajo el discurso dominante, la perspectiva y única posibilidad que teníamos los mexicanos era participar del programa del “liberalismo social”, concepto acuñado por Salinas para concretar, entre otros propósitos, el señuelo de insertar al país en el primer mundo en la perspectiva de la firma del Tratado de Libre Comercio que se negociaba con Estados Unidos y Canadá. En el medio rural mexicano, el ejido y la comunidad se convirtieron en blanco de la crítica por parte de funcionarios gubernamentales, intelectuales y empresarios, atribuyéndole la responsabilidad del atraso prevaleciente en el campo, lo que conducía a la conclusión de su necesaria transformación.

Este proyecto se vio, sin embargo, abruptamente interrumpido (o al menos severamente cuestionado) por el alzamiento indígena con el que despertó el país en enero de 1994. Súbitamente cambiaba la situación de ofensiva que había caracterizado al proyecto económico y político que impulsaban las élites y se le ponía entre la espada y la pared. Con ello se abría un compás de espera en función del tratamiento que durante los años que siguieron, diversos agentes institucionales darían a la situación de efervescencia social generada por el conflicto. En ese impasse, la entidad tuvo cinco gobernadores quienes tuvieron que sortear las diversas expresiones de descontento social que en las diferentes

regiones de Chiapas acompañaron a la rebelión zapatista. La coyuntura implicaba que prácticamente todos los actores políticos se posicionaran en razón de la dinámica del conflicto y sus exigencias. No obstante la primera etapa de desconcierto, y mientras se definían las formas para canalizar el descontento social, el proyecto modernizador que se había concebido años atrás no se detuvo y avanzó en su concreción a partir de un conjunto de iniciativas políticas que, en las diferentes regiones, se continuaron impulsando en el marco del conflicto.

En este capítulo analizaremos las implicaciones que tuvo la rebelión zapatista en la reconstitución de diversas expresiones del movimiento popular en la entidad y en particular en la región Frailesca, coyuntura en la que se volvieron a plantear las demandas históricas de los campesinos frailescanos como fueron: acceso a la tierra; la democratización de los espacios de gestión local y mejores condiciones para la comercialización de la producción regional. Reconoceremos algunas de las formas que adoptó la política de contención de los movimientos populares que impulsaba el Estado en el contexto de las movilizaciones sociales y posterior a éstas, en el marco del proyecto de reformas de carácter neoliberal para concretar la integración de la economía nacional a las corrientes mundiales de comercio.

4.1. Los actores sociales y su lucha por la inclusión

El primero de enero de 1994 estalla en los Altos y la Selva de Chiapas, la rebelión zapatista. La situación del estado después de la desastrosa gestión patrociniada era “caldo de cultivo” para una rebelión a gran escala pese a, o precisamente por, la política de mano dura que los políticos modernizadores de la entidad le imprimieron al gobierno. La región de La Frailesca parecía al inicio de la rebelión bajo control, por la fuerza que en ella seguían manteniendo los grupos leales al sistema quienes participaban plenamente del proyecto modernizador en boga. No obstante, las fuerzas sociales que desataron los indígenas insurrectos en los meses posteriores al alzamiento en términos de movilizaciones, demandas, protestas, alianzas, negociaciones, realineamientos y respuestas de contrainsurgencia fueron de lo más amplio, trastocando las anteriores inercias en que se movían los actores sociales y políticos en las diversas regiones de la entidad.

Aunque se han hecho muchos análisis en torno al significado del movimiento zapatista y sin pretender hacer un recuento sistemático de éstos, para los fines de este trabajo es

importante plantearnos algunas reflexiones básicas en relación con su significado y la repercusión que tuvo en el conjunto de la sociedad.¹³⁴ ¿Por qué el alzamiento logró activar tan amplias fuerzas sociales y generar las más variadas formas de protesta por demandas tan diversas en todos los espacios regionales? ¿De qué manera el alzamiento zapatista vino a transformar el escenario socio político de La Frailesca, región que a decir de muchos observadores y analistas, nunca formó parte de la llamada zona de conflicto? ¿Cómo se posicionaron los actores políticos que en la región habían venido garantizando la tranquilidad social y la concreción de la política de Estado mediante el control corporativo de la población?

Entre las principales explicaciones de las causas de la rebelión, es que ésta se sustentó en hondas raíces que pasan por el carácter de las relaciones sociales y de poder que en términos históricos establecieron las clases dominantes con el conjunto de la sociedad y en particular con los indígenas desde tiempos coloniales, pero también en los dos siglos posteriores de construcción del Estado-país. De este modo, lo que estaba en juego era el rechazo a una estructura de relaciones sociales y de poder discriminatoria, construida sobre la base de la concentración de la propiedad territorial, sistemáticamente cuestionada por los diferentes ciclos del movimiento social a lo largo del último siglo. Estaba también presente el cuestionamiento a una forma de ejercicio del poder sustentada en relaciones jerárquicas que permeaban no solamente la dinámica de las relaciones sociales regionales sino la lógica misma del funcionamiento del Estado en la entidad.

Así, la insurrección indígena que inicialmente se quiso presentar como un movimiento aislado, sin base social y perfectamente focalizado, pronto generó en torno a ella un amplio respaldo social que le daba la legitimidad necesaria al hacer suya la justeza de las demandas planteadas. Desde la etapa inicial del alzamiento, se gestó en Chiapas una efervescencia social amplia que tomó forma en el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC), en donde coincidieron tanto organizaciones con una tradición oficialista como aquellas que se habían caracterizado por una posición independiente. Participaban también una diversidad de grupos campesinos con objetivos amplios que iban desde lo propiamente productivo hasta reivindicaciones culturales y de género.

¹³⁴ Entre muchos de los trabajos que en su momento se generaron buscando explicar las causas de la rebelión zapatista ver: Juan González Esponda y Elizabeth Polito, 1995 y Rubén Jiménez Ricárdez, 1996, entre otros.

El influjo que la insurrección zapatista tuvo en el movimiento social en la entidad durante 1994, se mantuvo prácticamente a lo largo de casi seis años, periodo en que se produjo una amplia gama de luchas y formas de participación por parte de diversos actores en los más disímiles contextos geográficos y espacios sociales. ¿Qué transformaciones se estaban sucediendo al interior de la *civil society* que le llevó a mantener sistemáticamente una actitud de rechazo a las respuestas de la élite gobernante en la entidad? ¿Cuál era la lógica de la respuesta institucional a las demandas expresadas por el movimiento? y finalmente, ¿Cuál es el balance que podemos reconocer en términos de transformaciones sociales después de este ciclo de protesta? Quizá uno de los resultados que globalmente podamos establecer, es la disposición de los actores a presionar para la apertura del sistema político tanto nacional como local y su adscripción en los procesos democráticos en los que diversos movimientos populares en el país se habían insertado desde la década anterior y que el régimen, mediante diversos pactos políticos, se vio obligado a concretar.¹³⁵

Buscando destrabar el sistema político autoritario que había caracterizado a la entidad, a mediados de 1995 Chiapas era un verdadero polvorín. Bajo las acusaciones de un gran fraude perpetrado por el régimen en el proceso electoral de 1994 en el que se impuso como gobernador a Eduardo Robledo Rincón, el gobierno reconocía haber perdido la votación en 40 de los 111 municipios en el estado. Paralelamente 55 municipios habían sido tomados por el movimiento popular y se habían instalado, ya fuera por designación del Congreso o por plebiscito, 37 consejos municipales vinculados a la Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco (AEDEPECH) y al PRD, teniéndose prevista la participación por parte del movimiento democrático en el proceso electoral de octubre de ese mismo año para elegir presidentes municipales y diputados locales.¹³⁶ En el contexto de lucha electoral de los años 1994 y 1995 en Chiapas, resulta por demás obvio insistir en que la situación de efervescencia social del momento pronto “contaminó” los procesos político-electorales de todos los municipios de la entidad en el que la participación de diversos actores sociales, muchas veces confrontados, buscaban sacar ventaja de la coyuntura para orientar e impulsar un proyecto favorable a las respectivas visiones y posicionamientos mediante diversas vías de acción y modalidades regionales de organización.

¹³⁵ Para reconocer el impacto de los movimientos sociales en la transformación del sistema político mexicano, *cfr.* Jorge Cadena, 2001, p.113.

¹³⁶ Sobre la insurgencia municipalista en Chiapas a mediados de los noventa, *cfr.* Alejandro Luévano, 1995.

Para el caso de la región Frailesca, el movimiento democrático en este periodo combinó la lucha político-electoral buscando participar del poder municipal, con la tarea de conquistar las viejas demandas como el acceso a la tierra y por mejores precios para el maíz, al mismo tiempo que aparecían nuevas reivindicaciones como la creación de nuevos municipios a partir de los ya existentes. El impulso democratizador que se produjo en la década de 1990, fundamentalmente por el derecho a disentir respecto a las formas tradicionales y hegemónicas, llevó a nuevas formas de agrupación y expresión política tanto en los espacios urbanos como rurales, lo que se tradujo en un fortalecimiento de las expresiones de disidencia y a formas de organización social autogestiva, como un recurso novedoso para el logro de sus demandas.

Y aunque en la primera mitad de la década de 1990, las expresiones más importantes de la política local aparecían hegemonizadas por los grupos de poder tradicional que normalmente se habían expresado mediante las diversas formas del priísmo, a principios de dicha década la región también empieza a abrirse de manera muy lenta a otras opciones políticas, en parte por el desgaste al que fue sometido el germanismo como opción política y de poder en la región desde finales del decenio de 1980, y por el carácter arcaico de las prácticas políticas que mantenían grupos caciquiles en los municipios de la región.

Los cambios políticos que se empezaron a vivir en Chiapas y en el país, tuvieron su impacto en la región desde principios de la década de 1990, lo que produce la estructuración lenta de nuevas opciones políticas diferentes a la oficial. Esta tendencia se vio reforzada en 1994, tras la secuela de movilizaciones y protestas bajo el influjo de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Realizaremos un reconocimiento de la manera en que diversos actores de La Frailesca participaron de este proceso de movilizaciones, buscando destrabar el sistema de relaciones sociales y políticas definido por una historia de cacicazgos y por las formas de operar del sistema corporativo. Los protagonistas de esta fase de movilizaciones buscaban también el reconocimiento de viejos derechos y reivindicaciones sistemáticamente replanteadas como las demandas de tierra y democracia y su inclusión en las nuevas orientaciones del modelo económico que de tiempo atrás se venía impulsando y que al parecer había decidido no considerarlos parte de él. Esta lucha por el reconocimiento y la inclusión adoptó al menos las dinámicas de movilización que analizaremos enseguida.

4.1.1. El movimiento civil municipalista

En el contexto del movimiento zapatista y de la coyuntura electoral de 1994, en Chiapas y en el país se crean las condiciones para una importante disputa en relación con los espacios políticos legales y, por tanto, para una serie de realineamientos de las fuerzas políticas y los grupos sociales en la entidad. Frente a la cerrazón que caracterizó a los grupos de poder tradicionalmente vinculados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), diversos actores políticos en la región empezaron a considerar su adhesión a otras opciones políticas y desde ellas luchar por acceder al poder local. La opción más viable a ser recuperada por la población la representaba el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que en los años anteriores había cuestionado las formas de operar del sistema político por los fraudes e imposiciones, además de cuestionar la orientación y las definiciones fundamentales del modelo de país que el salinismo impulsaba, como la cancelación del reparto agrario, la reestructuración de diversas instituciones vinculadas a la producción agropecuaria y la liberalización económica.

La inserción del PRD en la región fue por demás lenta. Todavía en el proceso político electoral de 1991, los partidos opositores mantenían una presencia marginal y más bien testimonial, como lo expresa la preferencia electoral de ese año (ver cuadro 7). Sin embargo, tres años después, en el contexto de la efervescencia política que vivió la entidad, el PRD se convirtió en una importante opción para acceder al gobierno en el ámbito local por parte de diversos grupos y organizaciones de la sociedad civil. Ello marcaba no sólo las nuevas condiciones de competencia bajo las que se habrían de desarrollar las contiendas políticas en los años siguientes, sino también un importante campo de disputa que, como hemos señalado en otros capítulos, ahora era recuperado por parte del complejo movimiento social que se reproducía de diferentes formas en las diversas regiones de Chiapas.

El fortalecimiento del PRD como opción política en la región implicó movilizaciones y confrontaciones no tanto entre las opciones políticas partidarias, sino más bien, entre un movimiento popular amplio y diversificado que se enfrentaba a la estructura de poder local en la región por añejas reivindicaciones entre las que destacaba la democratización de la vida política. Para ello resultó fundamental el movimiento electoral en torno a la

candidatura de Amado Avendaño para la gubernatura en agosto de 1994, quien al ser respaldado por el EZLN, sensibilizó a diversos sectores sociales y políticos de los diferentes rumbos de la entidad de la necesidad de luchar por sus derechos. La efervescencia política por la conquista de espacios de poder por parte de la sociedad civil se hizo evidente durante todo ese año, periodo en que se destituyeron en serie Ayuntamientos priistas y por la presión social, el Congreso del estado procedía a nombrar consejos municipales. La lucha en torno a los ayuntamientos se prolongó hasta diciembre de 1995, año en que desarrolló un nuevo proceso electoral para la renovación de las presidencias municipales, y aunque a última hora el zapatismo decidió no participar en el proceso, la coyuntura política permitió mostrar el amplio rechazo hacia los grupos de poder tradicional en los diversos municipios, dinámica que en la mayoría de los casos no estuvo exenta de represión y asesinatos a luchadores sociales.

Es así como en la región al influjo del movimiento democratizador que generó la candidatura de Avendaño, diversos grupos de La Frailesca participaron del ambiente de protesta y cuestionamiento a los grupos de poder y sus representantes políticos. En las coyunturas electorales de 1994 y 1995, la combinación de la lucha social por la tierra, con el movimiento político por los espacios de poder municipal, trajo como consecuencia el exacerbamiento de enconos y viejas rivalidades entre los actores en conflicto. De este modo, se fortalecía entre la población de La Frailesca una visión que buscaba democratizar la vida política local la cual era respaldada por los partidos de oposición y en particular por el Partido de la Revolución Democrática, situación que estaba acorde con los nuevos tiempos de competencia política que se habían iniciado seis años antes en el contexto nacional. La participación en los procesos políticos evidenciaba una toma de posición por parte de la sociedad civil frailescana, pero también un reacomodo de los grupos de poder local, donde la tradicional filiación al partido oficial mostraba que éste ya no satisfacía las expectativas y necesidades de amplios sectores sociales.

Los rasgos corporativistas que caracterizaron por años a la sociedad frailecana no se abandonaron. El corporativismo es definido de acuerdo con Schmitter como un sistema de representación de intereses y identificado en el hecho de que las unidades constitutivas (asociaciones, organizaciones gremiales) se establecen de manera no competitiva y jerárquica, al mismo tiempo que son reconocidas o autorizadas por el Estado para mantener

de manera deliberada el monopolio representativo y el control sobre la selección de los dirigentes. En Chiapas parecía así estar emergiendo un nuevo sistema de representación de intereses definido por el pluralismo en el que las unidades constitutivas se organizaban en categorías diversas, múltiples y competitivas en las que su estructuración o selección de sus dirigentes no necesariamente pasaba por la autorización, control o reconocimiento por parte del Estado.¹³⁷

Cuadro 7. Resultados electorales en los municipios de La Frailesca entre 1991 y 1994.

Municipio	1991 (Ayuntamientos)			1994 (Gobernador)		
	Padrón	PRI	PRD	Padrón	PRI	PRD
Villaflores	31,036	14,611	1,084	40,024	9,737	9,271
Villacorzo	23,029	11,481	0	30,489	6,392	6,847
La Concordia	12,779	9,999	0	18,515	4,578	3,434
Ángel Albino Corzo	8,146	7,540	0	11,840	3,314	2,230
Total regional	74,990	36,161	1,084	100,868	24,021	21,782

Fuente: Consejo Estatal Electoral, Chiapas.

De particular importancia resultó el proceso político electoral de 1995, dado que en los cuatro municipios de la región el nivel de la disputa evidenciaba un alto grado de confrontación entre los grupos en pugna, y un desgaste del corporativismo y otras formas de control. En el municipio de Ángel Albino Corzo, la confrontación era alimentada por las viejas formas de dominación y control de los trabajadores, lo cual se expresó en la lucha por destrabar las relaciones de poder imperantes, articuladas en torno a los fincas cafetaleras Prusia y Liquidámbur, que los campesinos veían como la expresión del viejo y opresivo sistema local de relaciones. En este municipio, en el marco de la disputa por la presidencia municipal, entre septiembre y diciembre de 1995, fue asesinado el candidato perredista Antelmo Roblero. Además se manifestaron amenazas de muerte en contra de diversos luchadores sociales. Como respuesta a estos hechos, al día siguiente secuestran al

¹³⁷ Para un mayor reconocimiento de los conceptos de corporativismo y pluralismo en las sociedades modernas, véase Schmitter, 1992, p. 25-29.

candidato priísta Ausel Sánchez Pérez encontrándose su cuerpo sin vida cuarenta y seis días después.

En el municipio de Villacorzo, cuya presidencia municipal había sido ganada por el PRD en diciembre de 1995, su candidato Ausencio González Díaz sólo pudo gobernar seis meses, pues para el mes de julio del siguiente año era asesinado. De hecho la disputa por el poder municipal en Villacorzo había empezado desde principios de 1995, cuando un amplio movimiento civil decidió destituir al presidente municipal Efraín Coutiño Velazco, bajo los cargos de ser una persona prepotente, inepta y corrupta, nombrando un Consejo Municipal que sería presidido por Robertoni Pereyra Balcazar. En un emotivo acto realizado en marzo, donde el perredista Horacio Culebro Borrayas en su calidad de diputado local del PRD tomaba la protesta al Consejo y que contó con la presencia de Rubisel Ruiz Gamboa dirigente regional de OCIV, éste último se refirió a la reunión como “un magno evento que hacía temblar a los caciques y a los priístas de este lugar”. Decía Rubisel: *“Hemos ganado la primer batalla, de aquí para adelante este municipio tendrá que ir avanzando para liberar a los demás pueblos como Villaflores, como Jaltenango, como La Concordia, de las garras de los caciques de horca y cuchillo”*.

En realidad, el acta de destitución del presidente municipal de Villacorzo Coutiño Velazco se hacía sin considerar la participación de los ejidos más grandes del municipio como El Parral y Buenavista, lo que sugiere que en su mayoría las autoridades ejidales en ese momento apoyaban a las autoridades constituidas. No obstante, por presión social para destituir a las autoridades municipales, y después de muchos jaloneos y fintas de toma de protesta por parte del Congreso Local, en abril se acepta el reconocimiento del consejo municipal ahí nombrado.¹³⁸

La disputa por el poder municipal se daba con especial encono en el municipio de Villacorzo, aunque no se limitaba a éste. La alineación de las fuerzas sociales imbricaba a grupos y espacios sociales que resultaban cuestionados por representar, en el presente, a un pasado de atraso y de opresión. La combinación de estos espacios de lucha trastocaba los sacrosantos intereses de los grupos de poder que habían logrado sobrevivir y mantenerse bajo el cobijo de las instituciones chiapanecas pero que, en esta circunstancia, veían en

¹³⁸ En relación con este proceso político ver Carpetas municipales Villacorzo, 1995. Archivo histórico del Congreso del Estado.

peligro la continuación de su hegemonía. Por ello, en enero de 1998, los caciques asesinan –a la vieja usanza– a Rubisel Ruiz Gamboa, líder de la Organización Campesina de Villacorzo (OCIV) y de la Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco (AEDPCH), quien en reiteradas ocasiones había venido recibiendo amenazas de muerte.

De lamentables consecuencias fueron los saldos en términos de vidas humanas por los asesinatos de candidatos, autoridades electas y líderes políticos que se sucedieron entre 1995 y 1998, ello debido a que la disputa política y los actores que la protagonizaron, a la par que plantearon la exigencia de democratización de los espacios de poder político, por la vía de los hechos reivindicaron también la solución de viejas demandas agrarias, lo que contribuía a afectar directamente la estructura del poder local.

En el municipio de Villaflores, aunque no se llegaron a presentar los niveles de confrontación que se vivieron en los otros municipios, si se expresó en la coyuntura una cerrada disputa por la presidencia municipal entre los grupos contendientes. El que en este municipio no se presentara la confrontación con el nivel de encono de los otros municipios, se debió tal vez a que la demanda agraria, pese a que se mantenía, no figuraba como elemento coadyuvante de la disputa social. Por lo demás, las mismas organizaciones que habían mantenido una tradición oficialista hicieron suya esta demanda en el interior de las instancias de negociación, como el CEOIC, lo que sin duda contribuyó a disminuir el nivel de la confrontación. No obstante, también en este municipio se iniciaba una importante disputa por el gobierno municipal que confrontaba al movimiento con la histórica corriente germanista, quien seguía manteniendo la hegemonía política en el municipio.

En el ámbito regional los niveles de confrontación política que se desarrollaron entre 1994 y 1995, mostraron dos procesos paralelos. Por un lado, que los grupos hegemónicos de poder cerraban filas en torno al PRI, pero también que en la sociedad local se desarrollaba, de manera silenciosa, un cambio de opción política que se iba traduciendo en un paulatino fortalecimiento del PRD. El fortalecimiento de la diversidad política en los diferentes municipios de la región era una realidad, lo que se tradujo en un desdibujamiento de las formas corporativas de control que el partido oficial mantuvo durante años al interior de los ejidos. La inclinación electoral hacia otras fuerzas políticas por parte de la sociedad frailescana se constituyó, a partir de entonces, como un hecho irreversible lo que se demostró en los siguientes procesos electorales en la región (ver cuadro 8).

Cuadro 8. Resultados electorales para presidentes municipales en La Frailesca, Chiapas.

Municipio	1995			1998		
	PRI	PAN	PRD	PRI	PAN	PRD
Villaflores	7,041	994	5,864	8,141	1,019	5,714
Villacorzo	6,804	0	7,353	8,670	504	6,314
La Concordia	4,251	0	3,056	5,076	0	1,879
Ángel Albino Corzo	2,575	43	2,274	3,929	0	2,254
Total regional	20,671	1,037	13,267	25,816	1,523	16,161

Fuente: Consejo Estatal Electoral, Chiapas.

Hoy en día no existe un ejido que no esté dividido o seriamente confrontado en torno a estas opciones políticas nacionales, lo cual resta, a veces, su capacidad de movilización como grupo ejidal. Ello implica una redefinición de las formas de integración y cohesión social que se daban en términos económicos y políticos en torno al ejido, el cual también se ve cuestionado por las diversas iniciativas de la política gubernamental tendientes a su fragmentación. Si anteriormente la disputa por el poder al interior de la sociedad regional se daba entre actores sociales que se identificaban por una posición en la estructura social, hoy en día se incorpora el ingrediente partidista que desdibuja, aunque no elimina las posiciones de clase. En adelante, la vida social en la región deberá acostumbrarse a que las posturas políticas se diriman mediante una confrontación abierta entre formaciones partidistas al interior de los ejidos.

En síntesis, en relación con la movilización municipalista de mediados de la década de 1990, podemos decir que las luchas por el poder local que se expresaron prácticamente en todos los municipios de la entidad, ya fueran como reclamo para descentralizar la vida comunitaria, o bien, para nombrar a nuevas autoridades municipales, mostraron el agotamiento del modelo de dominación y la irrupción de una fase autonomista en relación con el ejercicio del poder local. Los procesos político-electorales, expresaron la disputa que se desarrollaba entre diferentes grupos y facciones por el control de posiciones (ayuntamientos, diputaciones) y otros espacios de poder, —como las organizaciones

sociales– y que tenían como protagonistas a los grupos de poder tradicional así como a grupos emergentes, cuya principal divisa era la ruptura con las formas de organización corporativa.

4.1.2. La demanda agraria y el viejo sistema de relaciones

La dinámica de la movilización social en La Frailesca entre 1995 y 1997 tuvo en la lucha agraria uno de sus ejes fundamentales, lo que evidenciaba que la demanda agraria en Chiapas estaba lejos de resolverse. Entre 1994 y 1997 las diversas organizaciones campesinas, la mayoría de ellas participantes en el CEOIC, llegaron a posesionarse de alrededor de 1000 predios en prácticamente todas las regiones del estado. Esta lucha expresaba, una vez más, la histórica demanda que ha sido el “nudo gordiano” de la conflictividad en el estado. En el marco de la efervescencia social posterior a la irrupción zapatista, esta demanda fue enarbolada tanto por las organizaciones campesinas tradicionales, ya sea oficiales o independientes, como por nuevas expresiones de organización que surgieron al calor de la movilización.

Mas allá del importante impacto que tuvieron las tomas de las fincas propiedad de extranjeros, la prioridad que mantenía la demanda agraria se estableció desde las primeras reuniones del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas, instancia de coordinación en las que participaron organizaciones independientes de la región como fueron la OCIV, así como organizaciones tradicionales leales al oficialismo como la Coalición de Organizaciones Productivas del Estado de Chiapas (COPDECH) por la vía de la CNC y la organización Solidaridad Campesino Magisterial (SOCAMA), que se mantuvieron en las mesas de diálogo que posteriormente desarrollaron las organizaciones con el gobierno.

En el contexto de efervescencia social y de agitación política, la demanda de tierra por parte de diversas organizaciones campesinas vuelve a plantearse en la región, buscando hacerse efectiva con la toma de algunos ranchos de los municipios de Villaflores y Villacorzo. Pero en esta fase, la disputa más importante por la tierra, dado su nivel de radicalidad, se desarrolló en los municipios vecinos de La Concordia y Ángel Albino Corzo, con las tomas de los complejos agroindustriales cafetaleros de las fincas Prusia y Liquidámbur, encabezadas por organizaciones que habían surgido al calor de la coyuntura

zapatista, como la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV), organización en la que participaban campesinos, ex-baldíos y ex-trabajadores de las fincas cafetaleras del municipio de Jaltenango.

En agosto de 1994, 300 campesinos se habían posesionado del complejo industrial cafetalero Liquidámbar, de aproximadamente 600 hectáreas, propiedad del alemán Hans Lauren Hudrel. Entre sus principales demandas estaban la liberación de sus líderes del ejido Piedra Blanca y el Palmar, Municipio de La Concordia, así como la entrega de tierras a los ejidos Nueva Palestina, Francisco I. Madero, Libertad El Pajal, Salvador Urbina, Piedra Blanca, El Palmar y 20 de Noviembre. A principios de diciembre se produjo un enfrentamiento a balazos entre campesinos de la Unión Campesino Popular Francisco Villa (UCPFV) y trabajadores de la finca Prusia luego de un intento de recuperarla por parte de éstos empleados, encabezados por el propietario cafetalero Folken Von Knop, refriega que dejó un saldo de al menos un muerto y tres trabajadores agrícolas heridos.

La toma masiva de las fincas Prusia, Liquidámbar, así como las de Sayula y La Chicharra, realizadas por la Unión Campesino Popular Francisco Villa entre mayo de 1994 y diciembre de 1995, mostraba de hecho la persistencia en Chiapas del “régimen feudal con peones acasillados y tienda de raya” como en su momento fue denunciado.¹³⁹ De hecho la zona de Jaltenango y La Concordia seguía manteniendo, en parte, las viejas formas de la estructura agraria centrada en la finca cafetalera, figura típica de los años previos al reparto agrario.

Así, la respuesta del gobierno del Estado con relación a la invasión de las fincas cafetaleras de la zona de Jaltenango y La Concordia fue el recurso del desalojo, quedando las propiedades normalmente a resguardo de la policía de seguridad pública. Este fue el caso del enfrentamiento que se produjo en diciembre de 1995 cuando los campesinos se posesionaron de los predios El Palenque y Los Gatos, en el municipio de Ángel Albino Corzo. La otra estrategia del gobierno para disuadir las tomas de propiedades fue la de enfrentar a grupos de campesinos como lo reconocía la denuncia de la UCPFV en el sentido de la manipulación que se hacía por parte del gobierno de campesinos miembros de la OCRI para desalojarlos de los predios que tenían en su poder en los municipios de La Concordia y Jaltenango.

¹³⁹ Al respecto ver diario La Jornada, 28 de Noviembre de 1995.

Pero la demanda de tierras en los otros municipios de La Frailesca a principios de los noventa, previa a los años de efervescencia social de mediados de la década, estaba lejos de estar enterrada, sino que se mantenía como algo plenamente vivo como lo muestran los siguientes datos. En el ejido Nuevo México, municipio de Villaflores, la policía judicial detuvo, en junio de 1992, a Maytener López Gómez y a Adolfo Gordillo Méndez, integrantes del comisariado ejidal y a otros campesinos más, acusados de despojo, invasión y daños en propiedad ajena al haberse posesionado del predio Rastrojón de ese mismo municipio, propiedad de Miguel Maza Hernández. En esos mismos días, en la colonia Revolución Mexicana (Villacorzo), las autoridades en acuerdo con caciques del lugar, quienes habían sido afectados con 1,300 hectáreas de tierras con la ampliación del ejido, detuvieron a Adrián Nucamendi Díaz, dirigente de este movimiento acusándolo de daños a la ecología, robo y despojo.¹⁴⁰

Muchos de estos conflictos fueron canalizados por las organizaciones campesinas en el marco de las negociaciones con el gobierno después de 1996. En el caso de La Frailesca, los principales protagonistas eran los sectores menos favorecidos de la sociedad rural que vieron en la amplia movilización social la posibilidad de resolver la vieja demanda agraria. Otros, mientras tanto, vieron la posibilidad de hacerse de un patrimonio en una coyuntura que quizá no volvería a presentarse por mucho tiempo. La participación de los campesinos en un organismo común –el CEOIC– fue la base para la instrumentación y negociación de una propuesta de solución a la demanda agraria por parte del gobierno federal. Así, se crea la Mesa Agraria por parte del CEOIC y el gobierno, instancia por medio de la cual se buscó dar respuesta a la demanda campesina, por la vía de compra de los predios invadidos en el marco de las movilizaciones.¹⁴¹

Las organizaciones campesinas, que para el caso de Valles Centrales y La Frailesca recibieron más recursos para la compra de tierras, fueron la CNC y Socama, ambas de carácter oficialista, por ser las que históricamente habían tenido presencia y control social entre los campesinos en esta zona. No obstante, también la OCIV, en su carácter de organización independiente, se consolidó al calor de las compras de tierras que se realizaron en la región después de 1994. La forma en que las organizaciones y el gobierno

¹⁴⁰ Información del Archivo Agrario Nacional y de las Cartas Municipales del Archivo Histórico del Congreso del Estado.

¹⁴¹ Ver Villafuerte y otros, 1999.

manejaron los recursos para la compra de tierra no está muy clara, pero en términos generales se reconoce que sirvieron para fortalecer las clientelas políticas de las organizaciones, oficiales e independientes.

De ahí que consideremos que el conflicto político abierto con la irrupción del zapatismo, sin duda, vino a alentar y fortalecer el movimiento popular en la región, que se mostró como un despertar de conciencias para algunos y en un acicate para otros. La demanda de tierra también se expresó en los municipios donde anteriormente hubo un reparto agrario, como en Villaflores y Villacorzo pero sin mostrar los niveles de antagonismo que expresó particularmente el municipio de Jaltenango (Ángel Albino Corzo) en donde el gobierno y los finqueros dieron a los campesinos demandantes un trato por demás avasallante fundamentado en el derecho que, de acuerdo a sus propios argumentos, les asistía a los propietarios para garantizar el usufructo y posesión de sus fincas.

En el municipio de Ángel Albino Corzo se mantuvieron las demandas y conflictos en demanda de tierra los dos años siguientes, pese a la propuesta de declaratoria oficial de dar por terminado en Chiapas el conflicto agrario. En febrero de 1997 campesinos de este municipio dirigidos por la UCPFV se posesionaron de las fincas Los Alpes y Buenos Aires, propiedad de la familia Orantes Balbuena, predios que ya habían invadidos anteriormente, pero que fueron desalojados. En el mes de julio, campesinos de la comunidad Nueva Palestina, del mismo municipio intentaron tomar nuevamente las tierras de la finca Liquidámbar, y una vez más se les repelió a balazos por guardias blancas. A raíz de ello, el gobierno llevó a cabo un operativo policiaco-militar donde capturaron a 15 campesinos. Pese a la situación de efervescencia social, se mantenía la lógica del desalojo frente a lo cual los campesinos insistían en recuperar dichas propiedades.

En esta circunstancia, los campesinos de la Unión Campesino Popular Francisco Villa demandaron la destitución del Procurador de Justicia del Estado, a quien responsabilizan por la situación de ingobernabilidad y la falta de justicia en Chiapas. Como muy bien lo estableció un artículo periodístico aparecido en aquel momento: lo que estaba en juego en aquella confrontación que desarrollaban los campesinos chiapanecos era la cuestión de la tierra y el poder, ambos íntimamente relacionados e interdependientes, los que en su

conjugación impedían destrabar las intrincadas relaciones sociales bajo las cuales operaba el sistema económico y político de la entidad.¹⁴²

Como estos mecanismos no lograron disminuir la presión de los campesinos, los finqueros se hicieron justicia por su propia mano. Así, por ejemplo, a finales de 1997, la UCPFV denunciaba que el gobierno del estado y caciques de la región, a través de otra organización campesina, como la Organización Campesina Revolucionaria Independiente (OCRI), intentaron desalojar a los villistas del predio Buenos Aires en el municipio de La Concordia, así como de la ranchería El Ceñido del municipio de Jaltenango. Esta misma organización posteriormente reconoció que, a mediados de ese año, más de cien campesinos del ejido Nueva Palestina pertenecientes a la UCPFV firmaron, bajo presión del Comisariado Ejidal, un acta donde abandonaban la organización campesina, pero que continuarían luchando por la tierra que les habían robado finqueros y caciques.

En el ambiente de movilización social que se vivió en Chiapas, el gobierno del estado buscó garantizar, por la vía del desalojo y con la ley en la mano, la integridad de los complejos cafetaleros y demás predios invadidos en la región. La respuesta del Estado hacia el movimiento social agrario, buscando desarticularlo, fue en dos sentidos: hacerlo participar del esquema de concertación aplicado para la regularización de la tenencia de la tierra, o atenerse a la aplicación de la ley agraria y del “estado de derecho”. Por una parte, se ofrecía la solución a la demanda de tierra mediante la operación de los fideicomisos agrarios para la adquisición de predios vía compra y, por la otra, se buscaba dividir o enfrentar a los grupos demandantes. Las organizaciones que se vieron particularmente beneficiadas de los recursos de los fideicomisos fueron, principalmente, aquellas que mantenían una filiación oficialista como la Coalición de Organizaciones Productivas y Solidaridad Campesino Magisterial, mediante las cuales se realizó la entrega de una importante cantidad de tierra a los campesinos demandantes.

La iniciativa de comprar la tierra a propietarios, que desde la década de los ochenta ponían en práctica los gobernantes en materia agraria, vuelve a aparecer en el marco de la movilización social que se sucede después de 1994 como vía para solucionar la demanda de tierras, pese a la reforma legal de algunos años antes que declaraba el fin del reparto agrario. Esto es así por que, en los hechos, la presión sobre la tierra se había generalizado

¹⁴² Cfr. Julio Moguel, *et al*, Chiapas: la tierra y el poder, en: *La Jornada del Campo*. Año 3 Núm. 34. 28 de Marzo de

nuevamente, frente a lo cual el gobierno federal estaba obligado a dar una respuesta. Para poder garantizar el control sobre la demanda de tierra y sobre las invasiones, el gobierno interino de Javier López Moreno crea en el marco de las negociaciones para pacificar la entidad, el Fideicomiso de Tierra que no era más que una bolsa de recursos para pagar o indemnizar predios de los que las organizaciones campesinas se habían posesionado. De estos recursos participaron tanto organizaciones oficiales como independientes, que eran consideradas dialogantes con el gobierno.

Para junio de 1997, la Secretaría de Desarrollo Agrario afirmaba haber entregado 1,499 constancias de fideicomisos agrarios que avalaban 8 000 hectáreas para beneficiarios pertenecientes a la Coalición de Organizaciones Productivas del Estado de Chiapas (COPDECH), la Organización Campesina Obrero Popular de Chiapas (OCOPECH) y grupos independientes de Villacorzo, Villaflores, Acala, Copainalá y otros. Para diciembre de ese año, el mismo funcionario afirmaba que el rezago agrario en la entidad había concluido (con la firma de los acuerdos agrarios) y que, por lo tanto, ya no se comprarían más tierras. A nivel estatal los acuerdos agrarios beneficiaron a 1,247 grupos campesinos con una extensión de 246 mil hectáreas para 59 mil familias. Estos acuerdos, se informaba, habían avanzado en un 80 %.

Como resultado de esta fase de movilización y en el marco de los acuerdos agrarios, entre 1994 y 1998, se atendieron en la entidad 2 mil 100 asuntos con organizaciones campesinas y grupos sin organización que beneficiaron a 60 000 demandantes, a partir de lo cual se acordó la adquisición, por parte del gobierno, de 243 000 hectáreas que se habrían de entregar a los campesinos. Los sucesivos repartos y diversidad de formas de acceso a la tierra señalaban que a fines de la década de 1990 la tierra en Chiapas poseída por el sector social (unos 200 000 ejidatarios y comuneros), era de alrededor de tres millones de hectáreas.

En el caso de La Frailesca se entregaron, en el marco del programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, 78 títulos de terrenos nacionales a 38 campesinos de Villacorzo, 13 de Villaflores, 20 de La Concordia y 7 de Ángel Albino Corzo. Con ello se declaraba resuelto el problema de la tierra, no obstante que la demanda campesina no terminaría en los años siguientes, aunque ya no tendría la cobertura política que adquirió

como parte del alzamiento. Los fideicomisos agrarios, que se constituyeron en el marco de los acuerdos que firmaron el gobierno y las organizaciones campesinas, fueron la vía que adoptó el gobierno para entregar y satisfacer la demanda campesina de tierra en el contexto del alzamiento zapatista. Con ello quedaba en entredicho –aunque no cambiaba en el fondo– el espíritu de la Ley Agraria recién aprobada, en el sentido de que ya no había tierra que repartir. En adelante, los esfuerzos del gobierno federal se encaminaron a titular la tierra de los ejidos, bajo el argumento de dar certidumbre a la propiedad agraria.

La diferencia en los niveles de antagonismo mostrado por la lucha agraria entre ambas zonas de La Frailesca así como en las respuestas diferenciales, consideramos se debía a los antecedentes del reparto agrario que se dieron en la década de los treinta y los cuarenta en particular en el municipio de Villaflores (ver cuadro 1). La disputa agraria que se desarrolló en la coyuntura más reciente tuvo, sin embargo, diferentes elementos que ayudan a entender el nudo de relaciones sociales que seguía definiendo a la región. En primer lugar, los enconos y resentimientos que a partir de la demanda agraria se generaron entre los diversos actores sociales, con la consecuente secuela de desalojos, encarcelamientos y asesinatos, en los que generalmente las organizaciones campesinas llevaron la peor parte. Un segundo elemento era la disposición de muchos propietarios a vender su tierra dados los niveles que adquirió la presión campesina, además de la evidente voluntad compradora del gobierno, como había sucedido en años anteriores. La radicalidad adquirida por la demanda agraria en esos años y la exigencia de los ganaderos y finqueros de poner fin a las tomas de tierra, sin embargo, no ponía en entredicho el proyecto que la élite gobernante tenía reservado para Chiapas y que, con o sin conflicto, tenía la firme intención de concretar, a pesar de las acciones, formas de organización y demandas que expresaban diversos grupos tradicionalmente excluidos como veremos con las movilizaciones desarrolladas por los productores de maíz.

4.1.3. Nueva fase del movimiento maicero

La situación de efervescencia política que se vivía en el estado en el marco de la coyuntura zapatista, sentó las bases para que también en el imaginario de los productores se construyera la necesidad de una nueva fase del movimiento maicero por mejores precios en

la región de Valles Centrales de Chiapas. Las movilizaciones por mejores condiciones para la producción en la región en esta nueva etapa tuvieron sus antecedentes en una serie de acciones que cuestionaban la forma de operar por parte de las instituciones del gobierno. Entre estas acciones se puede reconocer la toma, a mediados de julio de 1994, de las instalaciones de la delegación estatal de la SARH en Tuxtla Gutiérrez por parte de campesinos provenientes de La Frailesca, Centro y Altos de Chiapas pertenecientes a la COPDECH para exigir la entrega de recursos del PROCAMPO.

En abril de ese año, ejidatarios de seis municipios de la región de Valles Centrales agrupados en la Unión de Ejidos y Comunidades de Chiapas y adheridos a la CNC, ocuparon dos bodegas rurales de la Conasupo y bloquearon parcialmente la carretera Tuxtla Gutiérrez-Acala en demanda de un incremento al precio del maíz. A los pocos días, campesinos de esta misma Unión de Ejidos tomaron otras bodegas e iniciaron un bloqueo intermitente en la carretera internacional que comunica a las zonas de los Altos, Norte y Centro de Chiapas, advirtiéndole al gobierno que si en las siguientes 36 horas no tenían respuesta a su exigencia de elevar el precio de garantía del maíz de 600 a 2 mil nuevos pesos la tonelada, las acciones continuarían con mayor intensidad. Sin haber conseguido respuesta a sus demandas, pues solamente lograron un mínimo incremento al precio del maíz, los campesinos mantuvieron la presión y para disuadirlos, en el mes de julio es encarcelado el líder maicero Noé López Corzo, acusado de ataques a las vías de comunicación y despojo.

En el mes de agosto se produjo nuevamente la presión de los campesinos vinculados a la CNC de los municipios de Acala y Venustiano Carranza ante las instituciones del gobierno bloqueando el tramo carretero de Comitán a Tuxtla Gutiérrez, en esta ocasión demandando la entrega de los créditos del Programa de Apoyo al Campo (PROCAMPO). La respuesta del gobierno fue el desalojo mediante un operativo con policías de Seguridad Pública y Judicial del estado, apoyadas por el Ejército Mexicano y la promesa de que los recursos al campo fluirían con oportunidad en cuanto se dispusiera de ellos.

Sin haber logrado la satisfacción de sus demandas, para 1996 el movimiento por mejores condiciones para la producción se expresaba ahora en los municipios de La Frailesca, movimiento en el que participaron buena parte de los ejidos de toda la zona maicera mediante sus comisariados ejidales. El descontento se inició cuando a principios de

octubre la paraestatal Conasupo informaba que el precio de garantía del maíz desaparecía y que, en adelante, estos se fijarían de acuerdo con los criterios acordados en las negociaciones comerciales en el marco del TLC. Ante esta situación centenares de campesinos de 72 ejidos y rancherías pertenecientes a siete municipios se apoderaron de Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA) y de la Distribuidora Conasupo (Diconsa), y se pronunciaron por el alza al precio del maíz y la baja del precio de los insumos.

Por la nula respuesta del gobierno a la presión campesina, se incorporan nuevamente al movimiento por mejores precios para el maíz, productores de los municipios de Venustiano Carranza quienes, el 10 de noviembre, al realizar un plantón en el ejido Laja Tendida, son desalojados por la fuerza pública, acción en la que murieron tres campesinos y hubo un gran número de intoxicados. Ello dio lugar a la conformación del Consejo Estatal de Productores de Maíz de Chiapas quienes anunciaron que reiniciarían las movilizaciones para exigir un aumento en el precio de garantía del maíz, solicitarían el apoyo del EZLN en su lucha por el aumento del grano y exigirían castigo a los responsables del desalojo violento perpetrado por el gobierno.

Esta nueva fase de movilizaciones y presión efectivamente se desarrolló entre el 12 y el 20 de noviembre, pero ahora se concentraba en la zona de La Frailesca en donde campesinos bloquearon el acceso a las ciudades de Villaflores y Villacorzo. En estas acciones participaron los comisariados ejidales en calidad de representantes de sus ejidos, ahora ya sin la hegemonía (por lo menos directa) del germanismo que fue visto con desconfianza por los líderes de este nuevo movimiento, pues sus dirigentes consideraron necesario reivindicar su autonomía con respecto a los diversos partidos políticos y construir vías de organización alternativas. La actitud de presentar a este movimiento maicero como un proceso en el que la dirección del mismo aparecía en manos de los comisariados ejidales quienes de manera plural y colectiva definían el ritmo de las acciones y los momentos de la negociación, permitió al movimiento adquirir una gran legitimidad y lograr una amplia participación social, a pesar de que los grupos de poder económico intentaron desvirtuarlo al ser señalados por parte de empresarios de Nestlé, del grupo Buenaventura y la prensa local, como los responsables de que la producción regional se desechara al no poderla comercializar.

La actitud asumida por los comisariados buscaba que al movimiento no se le identificara con líderes políticos o partidos –como había sucedido diez años antes–, además de que la demanda de un mejor precio para el maíz se reconociera como más genuina por parte de la sociedad chiapaneca. Estas precauciones se debían, en parte, a que los campesinos eran concientes de que sería muy difícil cambiar la política del gobierno hacia el campo, pues recién firmado el TLC mantenía su postura de que fueran los criterios de mercado los que regularan las actividades del sector. En la memoria de la gente, se valoraba también que habían sido las pugnas entre diferentes grupos dentro del oficialismo lo que llevó a la derrota del movimiento diez años atrás. Eso provocó que en esta nueva oleada del movimiento maicero se considerara necesario reivindicar su autonomía con respecto a las diversas opciones políticas. Por ello, el movimiento le apostó al respaldo social como la vía para avanzar hacia una solución favorable de su demanda. Y en efecto, el gobierno del estado representado en ese momento por Ruiz Ferro, estaba decidido a no atender, una vez más, las demandas de los productores y, por supuesto, tampoco a resolverlas favorablemente, no obstante que su comisión negociadora estaba integrada por algunos funcionarios otrora militantes de partidos de izquierda como Uriel Jarquín, ex-militante del extinto PMS, quien ahora se desempeñaba como Subsecretario de Gobierno de Chiapas y amenazaba con desalojar los bloqueos de carreteras de no llegarse a un acuerdo.¹⁴³

La postura firme del movimiento obligó al gobierno a dialogar y presentar una propuesta de apoyo al precio del grano, además de la aplicación de un conjunto de apoyos a la producción en el marco del Programa de Alianza para el Campo y el Programa de Empleo Temporal,¹⁴⁴ cuya propuesta consistía en realizar pequeñas obras en los ejidos, para lo cual el gobierno se comprometía a pagar un salario a los campesinos que participaran en dichos actividades. Por lo demás, los recursos para llevar adelante este programa ya estaban, programados y etiquetados, por lo que solamente tuvieron el objetivo de mitigar la presión campesina pues de ninguna manera lograban recuperar los costos de producción del maíz.

¹⁴³ Esta posición era respaldada por Jorge Enrique Hernández Aguilar, Procurador de Justicia de Chiapas, quien diez años antes había sido encarcelado por encabezar un movimiento con la misma demanda y que ahora se ufana en aplicar el “estado de derecho” a quienes lo violentaban.

¹⁴⁴ El programa Alianza para el Campo lanzado por Ernesto Zedillo a principios de 1994 se constituyó en el programa normativo a partir del cual se organizaron los apoyos a las regiones con potencial productivo.

Como resultado de esta movilización y del parcial logro de sus demandas, los campesinos toman conciencia de la necesidad de la organización, sin lograr revertir en lo fundamental la decisión de que los precios internos del maíz fueran fijados bajo los criterios del mercado (léase las cotizaciones de la bolsa de Chicago). En los hechos, el principal resultado de esta movilización fue el reconocimiento de los productores de la necesidad de construir una organización más permanente que fuera capaz de responder a las diversas necesidades de comercialización y financiamiento de la producción de maíz en los ejidos. Esa organización resultó ser la Unión de Productores de Maíz (Upromaíz), de la cual hablaremos mas adelante. La convicción de los dirigentes después de las movilizaciones era que, si bien no se había logrado un triunfo total en el sentido de haber mejorado el precio del grano, el movimiento no había sido derrotado, pues al menos algunas concesiones sí se habían obtenido, y lo más importante era que se había logrado la confluencia de los productores en una organización amplia y plural que reivindicaba la autonomía frente a los partidos y el gobierno.¹⁴⁵

Buscando evaluar el desenlace que tuvo la lucha de los maiceros, tendríamos que reconocer que en ese periodo la actitud asumida por el gobierno en relación con los planteamientos de las organizaciones de productores en todo el país, se había caracterizado por la negativa a dar respuesta a sus demandas de inclusión. Las posibilidades que tenían las organizaciones de productores de ser escuchadas eran muy pocas en el marco de los acuerdos comerciales establecidos por parte del gobierno mexicano. En la región, sin embargo, el surgimiento de Upromaíz como organización también venía a cuestionar las formas tradicionales de organización y control de la sociedad rural regional y, al expresar una perspectiva autogestiva frente a las organizaciones oficialistas, a los partidos políticos y el Estado, se manifestaba la posibilidad de empezar a construir una nueva forma de organización, nuevas prácticas políticas y por tanto de madurar un proyecto en el plano económico-productivo con perspectiva social. Existían, sin embargo, grandes retos a enfrentar para poder madurar una propuesta alternativa que superara los lastres de clientelismo, corporativismo y cooptación que han caracterizado la relación Estado-campesinos en la entidad y que están arraigados en la cultura política local, aspectos sobre

¹⁴⁵ Entrevista a Nabor Estrada Moreno, Presidente de Upromaíz, 10 de Febrero de 2001.

los que realizaremos una evaluación de conjunto al analizar los alcances de la movilización social que se produjo en la región en los años del auge del movimiento zapatista.

4.1.4. Un balance de las movilizaciones

Una valoración del significado e implicaciones de las movilizaciones que se desarrollaron en La Frailesca entre 1994 y 1997 en el contexto del amplio movimiento popular desarrollado en Chiapas lo tendríamos que realizar en dos ámbitos: en primer lugar en relación con las posibilidades que tuvo la sociedad civil para consolidarse como una fuerza social capaz de conquistar demandas históricas enfrentando y contribuyendo a transformar las relaciones sociales y de poder imperantes en La Frailesca reflejo de una estructura social y territorial construida y recreada históricamente. En segundo lugar y como elemento coadyuvante de la configuración de las relaciones de fuerza regionales anteriores a las movilizaciones de este periodo, tendríamos que analizar hasta dónde se transformó la relación corporativa que todavía al iniciarse la década de 1990 era evidente se ejercía mediante las organizaciones pertenecientes al partido de Estado -en particular por parte de la CNC regional-, y analizar también si ésta relación fue sustituida por formas democráticas de participación y gestión.

En torno al primer aspecto, no hay duda que tanto las movilizaciones agrarias como la disputa que se desarrollaba por parte de estos mismos actores por el acceso al gobierno municipal, confrontaban de manera directa la estructura de poder prevaleciente en La Frailesca. Estas luchas enfrentaban a los grupos de propietarios y herederos del viejo sistema de finca que seguían defendiendo el acceso patrimonial a la tierra frente a los nuevos actores demandantes, en muchos casos hijos o nietos de los agraristas de principios de siglo o del movimiento campesino de los setenta y ochenta. En la defensa de esos intereses, el Estado enfrentó la demanda social mediante un juego doble con base en la aceptación o no de la legalidad y el Estado de derecho. A las organizaciones que se posesionaron de tierras por la vía de la invasión, normalmente se les enfrentó por la vía del desalojo y la persecución, acciones que en ocasiones eran realizadas por los mismos propietarios pero con el respaldo de la Policía de Seguridad Pública y el Ejército Mexicano. En estos casos la propiedad de las fincas siguió siendo resguardada para sus propietarios por ser empresas de algún modo insertas en el mercado, no obstante que en su momento se

denunciaran las condiciones de explotación prevalecientes típicas de principios de siglo. En el caso de las organizaciones que optaron por canalizar la demanda agraria por la vía de las mesas de concertación y los fideicomisos agrarios, la parcial solución a estas demandas permitió no sólo paliar la necesidad de algunos grupos; también que algunos propietarios, así como los líderes de organizaciones, hicieran jugosos negocios.

En ambos casos sin embargo, el Estado se mantuvo como “garante” de la estructura territorial y de la legalidad, pues aunque formalmente no era ya posible afectar propiedades, por la presión campesina entregó tierra a los grupos demandantes mediante el subterfugio de la compra, con lo que no solamente se daba respuesta a estos grupos sino también a los propietarios que veían en la presión campesina una amenaza permanente. Así, la política de compra de tierra aunque puso en cuestión la estructura de poder territorial, no impidió que las fincas afectadas siguieran en manos de sus propietarios (extranjeros), mientras la tierra entregada a los campesinos por la vía de los fideicomisos agrarios, a final de cuentas, buscó fortalecer las formas clientelares bajo las cuales las organizaciones plantearon sus demandas.

La combinación que hicieron los actores de la sociedad civil de la demanda agraria con la lucha por el acceso a los espacios de poder local, como lo fue la lucha por los municipios, propició que se pusiera en cuestión otro ámbito de ejercicio del poder tradicionalmente dominado por los grupos de interés vinculados a los caciques y ganaderos de la región. Es en este ámbito en el que se puede reconocer la ruptura que la sociedad civil y sus actores venían desarrollando en relación con las formas de corporativismo regional y sus representantes ligados al partido de Estado, pero también a los grupos de poder local. No es casual, pues, que para 1994 haya existido un vuelco en la orientación del voto ciudadano en relación con el proceso electoral de 1991, lo cual muestra la importancia del factor político en la desestructuración de las relaciones corporativas tradicionales.

¿Cómo se produjo esta recomposición de los actores, de tal manera que en un corto tiempo produjo un profundo vuelco en las definiciones políticas? Sin duda, un elemento importante fue el detonante que significó el alzamiento zapatista y la demanda de democratización política que encabezaron diversas organizaciones de la sociedad civil en Chapas. Pero la diversidad de expresiones que adoptó el movimiento popular en la región no hubiera sido posible sin las disposiciones que se fueron generando en las redes de

interacción que se han configurado localmente y que recuperan las relaciones construidas no sólo en las coyunturas políticas o históricas sino también las que se recrean desde la cotidianidad y que forman parte de esa realidad sumergida como sistema de acción a la que hacen alusión posturas recientes acerca de los movimientos sociales.¹⁴⁶

No cabe duda que en este periodo se avanzó en construir por parte de los actores nuevas formas de expresión del movimiento popular, donde lo político fue un espacio privilegiado que logró condensar las expresiones de lucha democrática de varias décadas. El cuestionamiento a las formas de ejercer el poder, la reivindicación de la autonomía por parte de algunas organizaciones y la preocupación por llegar a acuerdos con otras expresiones de lucha social en el estado, incluso con el EZLN, son elementos distintivos que aquí desarrollaron los sujetos sociales movilizados. Es decir que en esta etapa, como dice Harvey, una de las características del movimiento tendió a ser definido no tanto por demandas económico corporativas, sino por sus prácticas políticas, demostrándose que la lucha de los campesinos era por la obtención de derechos democráticos.¹⁴⁷

En relación con los criterios señalados por Harvey, y buscando responder al peso que tuvieron las demandas económico corporativas, podemos señalar que el movimiento social tuvo como característica fundamental la reivindicación de su independencia política y orgánica con respecto al Estado y los líderes políticos vinculados al oficialismo. Ello no quiere decir que las diversas expresiones organizativas, así como las acciones sociales desarrolladas, se plantearan desde una perspectiva antisistémica o de ruptura. Al contrario, el común denominador de los planteamientos y demandas expresadas por las organizaciones muestra, más bien, la decisión de participar y ser tomados en cuenta por un sistema económico y social que en el nivel local se reproducía bajo formas autoritario corporativas y que en el plano nacional venía cerrando posibilidades a los campesinos de medio y bajo nivel productivo que mantenían la decisión de participar en la lógica de mercado, pero que bajo los criterios de apertura del mercado nacional impuesta por las autoridades, resultaban difíciles de remontar.

¹⁴⁶ La concepción de los movimientos sociales como sistemas de acción, en el sentido de que cuentan con estructuras que conectan orientaciones y propósitos es de Alberto Melucci, 1999, p. 37-40. Arturo Escobar, *Op. cit.* p.73, por su parte, señala que es desde las redes de movimiento en esa realidad sumergida, desde donde se pueden crear espacios para la producción de significados.

Podemos decir entonces que las demandas y formas de presión del movimiento social a mediados de la década de 1990, aunque eran similares a las expresadas en las movilizaciones anteriores, fueron muy diferentes dadas las condiciones sociopolíticas distintas, pues el sistema de relaciones experimentaba un proceso acelerado de transformación, retroalimentado por las más diversas formas de protesta por parte de grupos sociales, urbanos y rurales. En nuestra opinión, esto venía anunciando una recomposición de los actores sociales y políticos, no obstante se siguieran reproduciendo muchas de las viejas prácticas políticas, tales como el clientelismo y el corporativismo, mediante la administración de los recursos provenientes de los programas de apoyo al campo.¹⁴⁸

Por el tipo de movimiento social que se expresó en la Frailesca en esta etapa, poco ayuda a su caracterización la visión dualista que ubica a las expresiones de la acción y los movimientos sociales ya sea en la perspectiva simbólico-expresiva que definiría a los movimientos étnico culturales o de género, o bien los orientados a satisfacer necesidades materiales puntuales propuestos por actores (campesinos, grupos marginales) que buscan ampliar sus derechos ciudadanos.¹⁴⁹ Creemos más bien que en la región en este periodo se produjo una combinación de sentidos en la medida en que lo que caracterizó la acción social fue poner en el centro el valor de la democracia y hacer valer los derechos ciudadanos que bajo diferentes argucias y formas a la sociedad local le habían sido negados por parte de los grupos de interés.

La diversidad de acciones desarrolladas entre 1994 y 1997 por parte del movimiento popular en la región, expresaba la demanda de inclusión en el sistema de relaciones sociales y políticas por de parte de diversos grupos, exigencia que habían venido planteando desde años atrás y que se veían siempre postergada por el carácter autoritario que durante varios años mantuvieron las relaciones políticas apoyadas en el corporativismo y clientelismo que impusieron el Estado y diversos líderes. Esta demanda de inclusión era evidente también en las acciones sociales desarrolladas por demandas materiales, toda vez que los productores

¹⁴⁷ Dice Neil Harvey, 2000, p. 37, "la orientación de estos movimientos es inevitablemente 'institucionalista', es decir, tienen que comprometerse con el sistema político si quieren ver satisfechas sus exigencias, pero a la vez combaten los términos de la representación política".

¹⁴⁸ Tal es el caso del uso de los recursos canalizados por Procampo o de la Alianza para el campo, programas administrados por SAGAR.

movilizados, con la aplicación del proyecto de modernización neoliberal, veían amenazadas sus expectativas de reproducción social que los excluía. Así, el movimiento popular de La Frailesca en esta etapa, mostró un importante potencial de modificación institucional al reclamar y buscar espacios de participación democrática institucionalizada, perspectiva de futuro que se rescataba de las experiencias sociales construidas en los intersticios vinculadas a la vida cotidiana.

Con base en los elementos anteriormente señalados y el reconocimiento de las etapas que ha expresado el movimiento social en la región, podemos caracterizarlo, de acuerdo con Melucci, como “la demanda de inclusión en un sistema institucionalizado que podía presentarse como radical, pero que no implicaba antagonismo hacia la lógica del sistema sino más bien un impulso redistributivo”.¹⁴⁹ Este impulso redistributivo sería no sólo en cuanto a las posibilidades de insertarse de manera incluyente en los procesos de apertura de la economía que impulsa el modelo económico actual, sino también en los espacios de la vida política y social que podían construir localmente y tenían a su alcance.

La posibilidad de remontar las prácticas clientelares y corporativas no es algo garantizado por el sólo hecho de reivindicar la independencia política con respecto al Estado; así como de los líderes y organizaciones bajo las cuales éstas se han recreado y reproducido. Existe una cultura política construida por años de la cual han participado los diversos actores sociales y políticos en el país, que solamente es posible remontar en una perspectiva alternativa de construcción de largo plazo mediante el desarrollo de prácticas democráticas de participación. Esta definición de los actores daría realmente a los movimientos sociales, el carácter novedoso que a menudo se señala que han adquirido con el advenimiento de la sociedad informatizada y global.

Es una realidad, sin embargo, que los procesos globales inciden en la presentación y el desenlace de los movimientos sociales en el plano local. Como dice Moncayo (1999), las definiciones globales expresadas y concretadas por diversos organismos multilaterales condicionando la política económica a desarrollar al interior de los países y que expresa las relaciones de fuerza en el plano global, parecieran ser un elemento infranqueable para los

¹⁴⁹ Con respecto a la caracterización de los actores nuevos y viejos, hemos señalado ya lo ocioso de esta discusión. Ver en este mismo trabajo, el apartado 1.1.3.

¹⁵⁰ Según Alberto Melucci, 1994, p. 22, “las teorías del mercado político o del comportamiento estratégico nos enseñan que muchos conflictos contemporáneos, a veces incluso violentos, son expresión de categorías sociales excluidas que reclaman acceso a las formas de representación social”.

movimientos campesinos que se han desarrollado en el país en los últimos años, al margen de la escala en que estos se presenten. Diversas organizaciones que se piensan bajo un modelo de desarrollo alternativo observan incluso que la solución y el planteamiento de las demandas no deben quedarse en el plano local o nacional, sino que tiene que plantearse en foros globales para que tenga resonancia. Trascender a este nivel por parte de las organizaciones campesinas implicará la construcción de acercamientos y alianzas con organizaciones locales o nacionales que tienen la perspectiva global como de hecho ha empezado a suceder con algunos grupos.

Un cuestionamiento sistemático al modelo de desarrollo, mas allá del señalamiento de su carácter lesivo a la tradición y prácticas productivas, es algo que el movimiento campesino regional no ha desarrollado. Frente a ello, el impulso del modelo neoliberal del cual participan las élites locales de poder, viene buscando imponerse por todos los medios. En ese proceso participan el capital empresarial, los comerciantes, los ganaderos y el gobierno, que buscan abrirse espacios dentro del modelo de desarrollo que bajo las exigencias globales se viene aplicando en la región. Sin embargo, la sociedad local que no comparte este proyecto, o que se ve golpeada por estas políticas viene definiendo escenarios alternativos, buscando democratizar los espacios de la vida pública y social que tiene a su alcance, como son las presidencias municipales y las comisarías ejidales o generando la construcción de espacios alternativos de organización. Pero el comportamiento de los actores no puede ser blanco o negro sino que éstos construyen acuerdos y alianzas políticas en razón de objetivos concretos, y es en este espacio de confrontación donde se refleja la conformación y comportamiento de los grupos de poder y se perfila el sentido que tiene la búsqueda de un nuevo tipo de relaciones políticas por parte de la sociedad local. Pero veamos ahora cómo se movieron en la coyuntura zapatista los actores sociales en el plano de las relaciones políticas así como las alianzas y acuerdos que tendieron a construir en razón de sus historiales y propuestas.

4.2. Las viejas prácticas políticas y la recomposición de los actores

Hemos venido insistiendo en señalar que uno de los rasgos que definieron las prácticas políticas de los campesinos frailescanos durante mas de cuarenta años fue su subordinación y supeditación a las iniciativas del Estado, lo cual se constituía como la vía más adecuada

para acceder a los recursos que, desde una perspectiva paternalista, canalizaba el gobierno a las regiones productoras de granos; mantenían viva la esperanza de la dotación agraria, demanda que era aceptada como posible por el régimen; a cambio de ello, los campesinos y sus líderes le guardaban fidelidad al sistema político, al partido en el poder y a las organizaciones sectoriales que lo sostenían.

Para mediados de los noventa esta forma de relación política dejó de operar por lo menos parcialmente como resultado de las acciones desarrolladas por parte de diversos actores sociales que cuestionaron el clientelismo y el corporativismo, así como por las presiones para avanzar en los procesos de democratización de la sociedad regional. Paralelamente se empiezan a ensayar nuevas formas de relación política sobre la base del acuerdo entre los actores que ponían en práctica diversos proyectos e iniciativas que tenían como antecedente la participación en los procesos de movilización social de 1995-97. Dichas movilizaciones dieron lugar al surgimiento de nuevas opciones de organización social y política que en los años posteriores buscaron implantarse o diversificarse en la región. Además, en el marco de estas acciones, los actores políticos locales buscaron posicionarse en relación con las demandas expresadas por parte de la sociedad civil chiapaneca, lo que coadyuvó en el reposicionamiento o reafirmación de acuerdos y alianzas.

La participación en las movilizaciones sociales y la construcción de propuestas organizativas por parte de los campesinos frailescanos, podría llevarnos a pensar que se iniciaba, paralelamente, un cambio en las viejas prácticas caudillistas y clientelares, y su sustitución por formas democráticas de gestión y de organización. Ello, sin embargo, no resultaba tan sencillo si consideramos que detrás del proceso de recomposición de las viejas formas de participación e intermediación política, existía, como resultado de la desestructuración de las viejas lealtades, una cerrada disputa por el poder entre los actores que lleva a mantener y reproducir, bajo la nueva situación, prácticas políticas que poco se diferencian de las anteriores como la intolerancia, el clientelismo, la subordinación y el corporativismo, alimentadas en cierto sentido por el lugar central que sigue teniendo el Estado en la definición de proyectos con los que se busca dinamizar la economía y las actividades productivas en la región. A continuación señalaremos algunos rasgos que

definen el comportamiento y las prácticas de los actores y muestran hasta que punto éstas se han transformado.

4.2.1. El germanismo frente al conflicto chiapaneco

Hemos reconocido que la corriente de Germán Jiménez desde sus orígenes se mantuvo vinculada a los grupos políticos y de poder en la entidad, buscando en las diferentes coyunturas políticas trascender las limitadas posibilidades que brinda el espacio regional frailescano e incidir en la política estatal. Por lo demás, el control político de la región estaba asegurado, no obstante el auge que electoralmente tuvieron los grupos de la sociedad civil unidos al zapatismo y las expresiones, cada vez mayores, de rechazo a las formas de control y participación política que representaba este grupo de poder dentro del PRI. En este apartado analizaremos la actitud que en el marco de la disputa política que se abrió en Chiapas con la aparición del zapatismo, tuvo la corriente liderada por Jiménez, quien fue rescatado por Patrocinio González del ostracismo al que se le había sometido, y que en un conflicto de la envergadura como el planteado por el alzamiento indígena, todos los actores sociales y políticos en la entidad se posicionaron frente a éste movimiento y los procesos que desencadenó.

La nominación de Robledo Rincón como candidato a gobernador por el PRI, era algo anunciado desde los tiempos de Patrocinio González, lo cual se concretó en un acto masivo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a principios del mes de abril de ese fatídico 1994. Frente a un Estado desgarrado socialmente y un régimen político cuestionado, el candidato del PRI estaba urgido de legitimidad. Para ello buscó apoyarse, no solamente en los grupos de poder más recalcitrantes de la entidad como los ganaderos aglutinados en la Confederación de Pequeños Propietarios, sino también en personalidades con algún reconocimiento dentro de los intelectuales y la izquierda chiapaneca. De este modo, era natural que la corriente de Jiménez aceptara la necesidad de otorgar su respaldo a quien en ese momento asumía el papel de representante de los grupos de poder más autoritarios.

Para 1994 y una vez habiendo terminado su periodo como diputado federal, Jiménez no desarrollaba actividad política ni de gestión importante. Pero gracias al conflicto armado, Robledo Rincón decide habilitarlo políticamente pues consideraba que con ello podría detener la influencia del zapatismo en la región. De esta manera quedaba una vez más

sellada la amistad de Germán Jiménez con Robledo, quien a su vez era amigo de Colosio. Bajo esta perspectiva, había que apostarle a la opción política que el régimen maduraba para Chiapas; Jiménez tenía asegurado su futuro político como líder incuestionable de La Frailesca por seis años más. La buena estrella sin embargo se apagó con la caída de Robledo y en adelante habría que esperar otros tiempos pues con Ruiz Ferro, sustituto de Robledo, no existían buenas migas.

El proceso político electoral para la gubernatura de Chiapas estuvo en todo momento cargado de rispidez y acusaciones entre el candidato de la sociedad civil Amado Avendaño y el oficialista quien, a pesar del discurso concertador con que se manejó buscando allegarse el apoyo de la sociedad, no logró atraer la simpatía de los electores. El respaldo social adquirido por parte del candidato apoyado por el zapatismo y el PRD en prácticamente todas las regiones de Chiapas, adquirió visos de peligro para el régimen. Así, después de más de tres meses de campaña y de recibir adhesiones por parte del movimiento popular, en el mes de julio, Avendaño es objeto de un atentado en el tramo carretero Pijijiapan–Tuxtla Gutiérrez cuando se disponía a participar en un acto político en el que también estaría presente el candidato oficial, atentado del que salió ileso no obstante que tres de los integrantes de la comitiva fallecieron. Algunas versiones periodísticas encabezadas por el periódico Tiempo, en su momento señalaron a Germán Jiménez como el autor intelectual de dicho atentado.¹⁵¹

Después de unas cuestionadas elecciones en las que, a pesar de todo, se reconoció a la candidatura de Amado Avendaño el 35 % de la votación, el candidato declarado triunfador se dispone a tomar posesión a finales de ese año en un ambiente de gran tensión entre las fuerzas sociales y políticas en pugna. No obstante, la imposición del candidato oficial se consuma y entre los integrantes del gabinete propuesto por Robledo se encontraba el periodista Jorge Enrique Hernández Aguilar, a quien se postulaba para que encabezara la controvertida Procuraduría de Justicia del Estado, como un reconocimiento a la fidelidad del grupo priísta al régimen y los servicios prestados para el triunfo del candidato oficialista.

Debido al reconocimiento fraudulento del proceso y por el rechazo que desde un principio tuvo Robledo como nuevo gobernador, éste solamente se mantuvo en el gobierno

durante tres meses, pues para marzo de 1995 ya presentaba su renuncia invitando a su oponente Avendaño a que dejara atrás su interés por el poder y su personalismo, nombrándose de nueva cuenta un gobernador interino, Julio Cesar Ruiz Ferro, del que se señaló que era un perfecto desconocido en Chiapas. No obstante la renuncia de Robledo al gobierno, el equipo que integró para acompañarlo fue sostenido por Ruiz Ferro, destacando entre ellos las controvertidas personalidades de Eraclio Zepeda y Hernández Aguilar, señalándose en particular a este último de señaló de encabezar los desalojos de predios y fincas tomados por los campesinos.

El papel de comparsa que jugaron estos funcionarios a lo largo de los siguientes dos años fue evidente. La situación política y la descomposición del tejido social en la entidad era una situación que se profundizaba como resultado de la actitud displicente de las autoridades para dar una salida al conflicto. Por las diferentes regiones de Chiapas aparecían grupos paramilitares que enfrentaban de manera abierta al movimiento de la sociedad civil y al zapatismo con la connivencia de los gobernantes en turno. Al frente de la PJE se encontraba Hernández Aguilar a quien también se señaló como el responsable de armar a grupos paramilitares en Chiapas, todo esto hasta el desenlace de los trágicos acontecimientos de Acteal en diciembre de 1997.

Y mientras esto sucedía en los bordes del conflicto chiapaneco, el priísmo local se disponía a recuperar el respaldo de la sociedad frailescana en ocasión del proceso electoral federal de 1997, para la elección de diputados. Albores Guillén, quien siempre había querido ser gobernador de Chiapas, se presentaba como un candidato fuerte para reconstruir la presencia del priísmo en la región fuertemente diezmada por el movimiento social de los dos años anteriores. Y efectivamente, después de un periodo de intensa movilización, desgaste y parcial solución a sus demandas, la aparente recuperación del partido oficial parecía un hecho. A partir de ese año se observa un repunte electoral del partido gubernamental, no obstante que ello se siguió dando en el contexto de una intensa disputa entre los actores políticos.

Lo importante a reflexionar aquí es entonces ¿cómo es que el grupo de poder regional representado por Germán Jiménez se movió y logró sortear el auge que tuvo el movimiento popular en la región –analizado en los apartados anteriores–, a pesar del cuestionamiento de

¹⁵¹ Periódico La Jornada, 29 de Septiembre de 2000. “Complot, el carreterazo que sufrió Amado Avendaño en

las formas y prácticas corporativas desarrolladas por el movimiento en ésta etapa? Además, ¿cuál es el significado de las expresiones caciquiles como la representada por Jiménez, en un contexto en el que se presume, se avanza en el país en la superación de tales prácticas y se apuesta por la instalación de un régimen democrático y pluralista en la entidad?. Sin duda el papel de los caciques no es algo propio de las sociedades rurales, o que se exprese en una etapa previa al advenimiento del capitalismo comercial e industrial, sino que como bien lo señala De la Peña, éstos persisten hasta la época contemporánea, mantienen su poder y desarrollan importantes tareas de intermediación, no obstante la aparente consolidación de las instituciones liberales de los últimos años.¹⁵² Podríamos decir incluso que en el caso de La Frailesca, la dinámica de intermediación desarrollada por Jiménez fue la base para que a partir de finales de los setenta y los ochenta se consolidara la inserción en la región un importante dinamismo comercial apoyado en la producción agropecuaria local.

Lo anterior no quiere decir que en el contexto de una importante disputa por el poder en donde estaba en juego la pérdida del gobierno en el estado y de muchos de sus privilegios, este grupo no recuperara mecanismos caciquiles para eliminar a los opositores, al mismo tiempo que seguía sosteniendo un discurso populista que buscaba acrecentar los escasos márgenes de legitimidad entre la población. Las relaciones políticas pragmáticas sostenidas con funcionarios, le seguía garantizando la posibilidad de negociar recursos y canonjías para el beneficio de seguidores e incondicionales. De las habilidades de Jiménez para acceder a recursos y repartirlos entre sus seguidores hablan integrantes de la COPDECH, para quienes su líder normalmente sabía a quien acercarse para acceder a prebendas o con quien negociar.¹⁵³ Cuando era previsible que los halagos o festejos no resultaran funcionales, se ponían en juego otras estrategias como la amenaza o la presión política.

Además, en el contexto de la movilización social planteada por las organizaciones campesinas de Chiapas mediante el CEOIC a principios de 1994, la CNC se incorporó a este proceso buscando canalizar también las demandas de algunos grupos por tierra, agrupación que después se vio favorecida en las negociaciones de la mesa agraria. También la CNC y en particular la COPDECH encabezó a finales de 1995 diversas movilizaciones

1994”.

¹⁵² Con respecto a la pervivencia de los caciques, *cfr* al respecto Guillermo de la Peña, 1993, p. 31.

¹⁵³ Entrevista a integrante de COPDECH, Tuxtla Gutiérrez, 17 de Abril de 2001.

campesinas buscando destrabar el otorgamiento de los recursos de Procampo. De este modo durante el periodo de auge del movimiento democrático en Chiapas, la CNC no estuvo pasiva en relación con las demandas campesinas sino que, por el contrario, buscó canalizar y expresar la problemática que aquejaba a los productores en la región. No haber actuado de esta manera hubiera significado un mayor costo político, en términos del desgaste y cuestionamiento que en las diferentes regiones de Chiapas venía teniendo la organización. Sin embargo, por la disputa por el poder político que vivió la entidad y en la cual participaron todos los actores, su posicionamiento estuvo marcado por el interés de consolidar una perspectiva acorde con la visión oficialista que nunca abandonó.

4.2.2. Nuevo mapa de las organizaciones sociales y productivas

Como resultado de la movilización social en La Frailesca emergen nuevas expresiones de organización social que buscaron tomar distancia de las tradicionales formas organizativas que de manera clara hasta 1993 había sido hegemonizada por la CNC y de manera tangencial por Socama en la región, aunque con historiales y liderazgos diferentes, ambas vinculadas al partido oficial. En la coyuntura de 1994 estas organizaciones se hicieron presentes en la constitución del CEOIC junto a otras organizaciones campesinas, validando en parte la justeza de las demandas planteadas por el EZLN, así como sus propuestas acerca de la manera en que desde la sociedad movilizada debería enfrentarse la emergencia política en Chiapas. Muy pronto sin embargo quedó de manifiesto al interior del CEOIC la postura de estas organizaciones en el sentido de respaldar las propuestas gubernamentales y de favorecer a los candidatos oficiales, llevando a la fragmentación del máximo organismo de coordinación surgido al calor del alzamiento zapatista.

Las movilizaciones sociales por la concreción de demandas políticas y agrarias sin embargo no se detuvieron con la división del CEOIC y a finales de año las posiciones que históricamente habían reivindicado la independencia del movimiento campesino constituyen la AEDPCH que tuvo el propósito de respaldar socialmente la candidatura de Avendaño. Para el caso de La Frailesca, en el marco de la ADPECH o planteando la alianza con el PRD, los campesinos en la región avanzaron en la construcción de nuevas organizaciones sociales que reivindicaban la democratización de los espacios políticos de decisión a nivel local a la vez que replanteaban, actualizándolas, las viejas demandas

agrarias. Es el caso de la OCIV y la UCPFV, organizaciones que por lo general mantuvieron una posición de desconfianza y se enfrentaron con los grupos de poder al replantear como sus ejes de movilización los aspectos más sensibles de la lucha social en la región: la afectación de ranchos y propiedades por la vía de la toma directa y la lucha por la democratización de los espacios de poder local, los municipios.

Estas organizaciones venían de hecho a expresar con su lucha las necesidades y problemas fundamentales de la estructura de poder regional. Por esta razón fueron sistemáticamente acosadas por parte de los caciques y propietarios, medios de comunicación y por el aparato judicial del Estado. Frente a la estigmatización que enfrentaron estas organizaciones como violentas, el riesgo que mantenían era la de una existencia efímera pues no se puede olvidar que su aparición fue el resultado de una coyuntura, circunstancia que permitió expresar las demandas y necesidades que se habían mantenido soterradas y que para su solución el gobierno combinaba la mediatización con el desgaste del movimiento.

Por lo que toca al proceso de lucha municipalista que estas organizaciones emprendieron bajo los colores del PRD, es importante señalar que si bien el movimiento cuestionó el control tradicional ejercido por los grupos de poder político, el acceso a los espacios locales de poder no necesariamente significó la implantación de formas democráticas de gestión. En el caso de Villacorzo, la OCIV, bajo cuyo concurso el PRD ganó la presidencia municipal, pronto se marginó del gobierno perredista al sostener una perspectiva más social del proceso de cambio, amén de las contradicciones que tenían con los grupos tradicionales afines al priísmo. Esto llevó a un debilitamiento de las nuevas autoridades locales que posteriormente se tradujo en el sacrificio del presidente municipal. No obstante la disputa por los gobiernos municipales entre grupos diversos de posturas políticas distintas en La Frailesca, esta disputa se reproduce también en los ejidos, como lo veremos más adelante.

En el plano de las demandas productivas y como resultado de las movilizaciones, también se generaron procesos de organización regional más o menos estables, lo que en este plano venía a terminar con la hegemonía de la CNC como único interlocutor válido frente al gobierno en la región. Así, después del movimiento maicero de 1996, emerge en el escenario regional frailescano un nuevo proceso de organización vinculados al maíz que se

concretó con la formación de la Unión de Productores de Maíz, definida por la participación de los comisariados de diferentes ejidos y municipios que en los momentos álgidos del movimiento le dieron dirección. Esta organización en el marco de las movilizaciones por el poder político regional, aparecía como un espacio plural que reivindicaba la independencia frente al gobierno de Julio César Ruiz Ferro, por lo que vino a enriquecer el espectro de organizaciones productivas que antes era hegemonizado por la Coalición de Organizaciones Productivas del estado de Chiapas (Copdech) filial de la CNC y dirigida por Germán Jiménez.

Cuadro 9. Organizaciones campesinas en La Frailesca a finales de 1996.

Organización	Origen	Carácter	Propuestas o demandas	Forma de lucha
Copdech	Movimiento maicero de 1986	Oficialista	Acceso a recursos de Procampo. Financiamiento de proyectos	Movilización y negociación
Socama	Movimiento maicero de 1986	Oficialista	Acceso a recursos de Procampo. Financiamiento de proyectos.	Prioridad en la negociación
OCIV	Resistencia civil 1994	Independiente	Democratización del poder. Acceso a recursos. Tierra	Movilización y negociación
UCPFV	Resistencia civil 1995	Independiente	Democratización del poder. Acceso a recursos. Tierra	Movilización presión
Upromaíz	Movimiento maicero de 1996	Plural	Mejor precio para el maíz. Acceso a la comercialización	Movilización y negociación

Fuente: Cuadro construido con base en información de campo.

El surgimiento de Upromaíz en 1996, como una organización con posiciones de independencia y autonomía respecto a las corrientes tradicionales del prisma en la región, era el reflejo de un proceso en el que se amalgamaban un conjunto de situaciones, en las que tuvieron mucho que ver los procesos de ruptura que se vivieron de manera abierta o silenciosa al interior de la CNC antes, durante y después de la situación álgida del movimiento social y político que vivió la entidad a mediados de los noventa. En sus inicios, es decir, a partir de 1997, Upromaíz era un espacio plural en donde confluían dirigentes de todas las visiones políticas partidistas que, todavía en ese momento, se podían considerar

como emergentes en la región. Su posterior consolidación como proceso organizativo implicaba el debilitamiento de las formas tradicionales de control que mediante diversas prácticas corporativas habían desarrollado los actores políticos. Ello se traducía, necesariamente, en la liquidación o al menos la puesta en cuestión de las prácticas definidas y recreadas por una cultura política impulsada por varias décadas de hegemonía del priísmo.

Al respecto resulta interesante reflexionar acerca de las condiciones subjetivas, que hicieron emerger en La Frailesca una propuesta de organización regional que buscaba atender el proceso productivo, en un momento en que la aplicación de la política neoliberal había hecho inviable este planteamiento para otras organizaciones productivas en el país, particularmente para las organizaciones que durante la década de los ochenta se agruparon en Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA).

La aspiración inicial de los dirigentes fue que esta agrupación de maiceros aglutinara a los catorce municipios que habían participado en el movimiento, entre los cuales destacaron Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo, Chiapilla, además de Villaflores y Villacorzo. Sin embargo, una vez concluidas las movilizaciones, el proyecto de organización se fue acomodando a las posiciones y visiones que mantenían sus dirigentes respecto a una propuesta de organización más duradera. No obstante, la iniciativa de organización fue abrazada principalmente por ejidos de los municipios de Villaflores y Villacorzo, pese a que se habían incorporado tardíamente a las movilizaciones por mejores precios para el maíz.

A partir de la reconsideración de la movilización social en La Frailesca entre 1994 y 1997 y de las organizaciones sociales en las que devino, podemos afirmar sin duda que estas vinieron a enriquecer la expresión plural de los procesos organizativos en la región, no solamente en el plano de lo político sino también en el de las organizaciones sociales que coadyuvaron a romper (o al menos a cuestionar) el discurso y las prácticas tradicionales del corporativismo de los viejos líderes de la CNC. Lo anterior expresaba la posibilidad de un nuevo rejuego político entre las mismas organizaciones y grupos con posturas diferentes. También creaba las condiciones para convenir las alianzas y acuerdos necesarios para el acceso a los espacios de poder, de las formas de relación que a futuro éstas tendrían que mantener con el Estado.

Así, a las organizaciones campesinas de corte oficialista como la COPDECH y Socama, se vinieron a sumar nuevas expresiones de organización campesina como resultado de la lucha social, la mayoría de ellas vinculadas a proyectos políticos, sobre todo al PRD, en virtud de la combinación que hicieron de sus demandas sociales con la lucha política. Entre las más importantes estarían la UCPFV como la expresión mas acabada de la lucha contra los emporios cafetaleros, la OCIV que se distinguió por la lucha en contra de las expresiones del poder caciquil, y Upromaíz, organización de carácter plural que logró aglutinar a los campesinos en la lucha por la producción. En torno a estos procesos organizativos fue que a mediados de la década de los noventa pudo expresarse la sociedad civil frailescana planteando la visión de sociedad a la que aspiraba, en medio del conflicto planteado por el zapatismo y el proyecto neoliberal de las élites.

4.2.3. Organizaciones campesinas y alianzas

Realizaremos, finalmente, un rápido recuento de las posturas adoptadas por las organizaciones campesinas, los liderazgos y las alianzas que han debido establecer en el marco de las disputas que a diferentes niveles adquiere la lucha por el poder en los espacios sociales y políticos en la entidad, a la luz del proceso de recomposición organizativa que ya hemos señalado. Interesa señalar hasta qué punto el abanico de organizaciones configurado en La Frailesca ha buscado estructurar una nueva visión con respecto a la manera de construir las relaciones políticas locales poniendo de relevancia algunas de las posiciones y prácticas políticas que han venido configurando las organizaciones después de 1997, etapa que se reconoce como un momento de relativo receso de la movilización social. Para ello abordaremos esta exposición en dos vertientes: la primera, desde las posiciones que han asumido las organizaciones vinculadas a la tradición oficialista, en particular de la corriente germanista que se expresa mediante la COPDECH; la segunda estaría representada por las organizaciones que surgieron al calor del movimiento zapatista en Chiapas: la UCPFV, la OCIV y Upromaíz. Comencemos por estas últimas.

La Unión Campesino Popular Francisco Villa, así como la Organización Campesina Independiente de Villacorzo, surgieron en un ambiente de confrontación con el régimen de propiedad predominante hasta ese momento en la región, y por tanto contra el sistema de relaciones políticas inherente a él. Por el carácter de su lucha y en el ambiente político

electoral en Chiapas, pronto establecieron acuerdos políticos con el PRD para disputar espacios de poder en torno a las presidencias municipales y darle mayor consistencia a su movimiento. Es de reconocer sin embargo que estas organizaciones no nacieron para la lucha electoral, sino que buscaban ante todo destrabar el cerrado sistema de relaciones que imperaban en los municipios en donde incidieron; el recurso electoral no era mas que un elemento adicional a sus preocupaciones que, en su percepción, les ayudaría a contar con aliados y condiciones favorables en su lucha contra las formas de poder tradicional.

Desde una perspectiva política estas organizaciones no encajaban en la estrategia económica y política gubernamental o estaban en la mira no sólo del aparato institucional sino también de los caciques y grupos de poder local. Junto a la estrategia de resolver parcialmente sus demandas se ensayaba el acoso y la represión por parte del gobierno. En el caso de la OCIV, las diferencias con los gobiernos municipales perredistas ganados, pronto llevaron a la organización a comprender que su espacio estaba por el lado de construir y extender la organización social. Como muchas organizaciones campesinas, sin embargo, estaba marcada por el caudillismo, situación que la llevó a perder a su principal dirigente al ponerlo en la mira de sus enemigos. Con ello, la organización fundada por Rubisel Ruiz se adentró en una situación de incertidumbre y desmoralización que a la postre la llevó a no estar en condiciones de consolidar su proyecto político, pese a la posterior decisión de relativizar la confrontación frente a la necesaria negociación con el gobierno. Después del asesinato de su principal líder, la convicción de buscar ganar espacios políticos sigue manifestándose como una necesidad entre sus actuales dirigentes.

En el caso de la Unión de Productores de Maíz y su relación con la política, según algunos de sus integrantes, esta organización surgió bajo el auspicio del senador Pablo Salazar Mendiguchía, quien ya desde 1996 en su calidad de senador tejía relaciones y acuerdos en la perspectiva de convertirse en candidato para la gubernatura de Chiapas. Este antecedente obligaba a los principales líderes de la organización a mantener una postura de deslinde político respecto a los gobiernos interinos de Ruiz Ferro y Albores Guillén quienes, a pesar de ello, durante sus breves administraciones intentaron ganarse el apoyo de los campesinos y cooptar la organización para su causa. En efecto, por espacio de tres años y debido a la orientación de autonomía que definió la organización con respecto al gobierno del Estado, Upromaíz estuvo permanentemente asediada por las administraciones de los

gobiernos interinos, quienes buscaron subordinarla a sus iniciativas políticas mediante la “compra o soborno” de dirigentes.

Lo anterior contribuyó a la defección temprana de algunos de sus dirigentes, quienes, con el apoyo del gobierno y en acuerdo con él, organizaron grupos afines a los gobernantes en turno y canalizaron algunos apoyos y recursos a sus productores agremiados, particularmente la distribución de los recursos de Procampo. Ello no impidió que por impulso de algunos de los líderes y ascesores, Upromaíz se mantuviera y concibiera como parte de la base social bajo la cual Pablo Salazar anunciaría en Villaflores, a finales de 1999, su ruptura con el priísmo “ante miles de chiapanecos”, según se anunció.

En los hechos, Upromaíz ha tenido durante estos últimos años diversos problemas para proyectarse como una organización; las pugnas y diferencias políticas entre sus dirigentes la han llevado a una dinámica de fraccionamiento permanente. La estrategia de “apropiación del proceso productivo”, retomada tardíamente y en un contexto de pérdida de importancia de la producción maicera, era una dura prueba de fuego para esta organización que, por momentos, parecía ver reducido su proyecto solamente a la entrega de los escasos recursos de Procampo. No obstante, en aras de mantener adherentes, mantiene una cerrada disputa con las otras organizaciones de filiación priísta como la Coalición de Organizaciones Productivas del estado de Chiapas (Copdech), que dirige Germán Jiménez, por el acceso a los créditos, canales de comercialización y recursos para proyectos productivos. Esta confrontación tiene como telón de fondo el control de los ejidos y la adhesión de los productores a sus iniciativas y proyectos.

Por lo que toca a las organizaciones campesinas oficialistas, la COPDECH se ha constituido a finales de los noventa como la organización social que hereda la tradición corporativa de la CNC local, así como la experiencia de vinculación con las instituciones, funcionarios y programas de gobierno. Es la organización que sirve al germanismo de plataforma no solamente para plantear las exigencias y demandas campesinas vinculadas a la producción y en torno a estas buscar la adhesión de los grupos que siguen siendo leales a la tradición oficialista; también desde esta organización sus líderes inciden en el control del aparato político regional representado por la CNC y el PRI. La principal debilidad de esta organización, que al mismo tiempo constituye su fortaleza, depende de cómo se vea, es la enorme dependencia que tiene con respecto a su histórico líder: Germán Jiménez.

No obstante el caudillismo y prácticas caciquiles que ejerce su líder en la región, señaladas y reconocidas por campesinos, organizaciones, líderes y funcionarios, esta organización y la corriente política a la que se adscribe, siguen mostrando altos niveles de eficiencia no solamente en la gestión de proyectos y demandas para los campesinos incorporados a sus filas, sino que también han garantizado eficacia para moverse en la política estatal y regional garantizando su permanencia, fuerza y control de espacios políticos y de representación fundamentales, entre ellos la presidencia municipal de Villaflores. El peso de esta corriente en la política estatal la ha llevado a disputar para sí recientemente, al interior del partido oficial, la titularidad de la representación de la CNC e influye de manera importante en las definiciones del PRI frente al gobierno de Pablo Salazar.

En el marco de los posicionamientos políticos que se han operado al interior de las posiciones oficialistas, se ha especulado incluso acerca de acuerdos políticos del germanismo para con el gobierno pablita para garantizar la gobernabilidad en la entidad, al menos en la primera etapa de su gestión.¹⁵⁴ En pago a estos favores, diversos funcionarios del gobierno de Salazar, bajo el argumento de representar un gobierno incluyente que no mira colores ni posiciones políticas, se muestran solícitos a facilitar, canalizar y gestionar apoyos y recursos a demandas y proyectos productivos propuestos por COPDECH en beneficio de los grupos de campesinos adheridos a la organización.

La posibilidad de consolidación de las organizaciones como procesos autogestivos pasa, entonces, por la ruptura de la cultura política de clientelismo y el paternalismo que durante años vivió la región con particular fuerza y que, en las condiciones actuales de empobrecimiento y exclusión, se ve alimentada por la política de repartir migajas por parte del gobierno. Ello es posible debido que la sociedad regional ha venido construyendo un proceso de modernización en lo político, lo que ha significado la conformación de una sociedad más democrática y participativa. El proceso de democratización de la sociedad regional ha significado la desestructuración de los viejos sistemas caciquiles y de poder y la emergencia de nuevas formas de relación política entre los habitantes. Así, las formas de ejercicio del poder y las nuevas relaciones políticas que han surgido, como resultado de la existencia de diversos conflictos en el sistema de relaciones, han contribuido a crear

¹⁵⁴ Ver Gaspar Morquecho, 2002.

espacios de participación democrática y ciudadana, no obstante los lastres de la vieja cultura política con los que se debe convivir.

Para finalizar este apartado y una vez analizadas las características que definieron al movimiento popular de la región en este periodo, las respuestas de los grupos de poder local, así como las acciones desarrolladas por la élite política para enfrentar el proceso de lucha y organización desplegados por parte del movimiento en el marco del proyecto económico de orientación neoliberal que siguieron abanderando desde el Estado, podemos señalar que este periodo fue de gran importancia para los actores sociales y políticos de la región, que a la luz del movimiento popular que se desarrolló en el marco de la coyuntura zapatista, pudo desplegar diversas acciones confrontando al sistema político al tiempo que demandaba el reconocimiento de derechos fundamentales como el de la participación y la democracia. Después de 1997 se entra en un *impasse* pues, como dice Gunder Frank, los movimientos se expresan de manera cíclica y los resultados de las etapas de movilización quedan no sólo por las conquistas alcanzadas sino también por la experiencia acumulada por parte de los actores.

V. PROYECTO EMPRESARIAL Y CONTENCIÓN SOCIAL: LAS PRIORIDADES DE LA POLÍTICA ESTATAL

Después de las movilizaciones protagonizadas por los maiceros a fines de 1996, el movimiento social entra en una etapa defensiva. La estrategia gubernamental apoyada en las organizaciones campesinas oficiales se centraba en finiquitar los reclamos agrarios en las mesas de diálogo. Por su parte, las organizaciones que al interior del CEOIC se caracterizaron por tener una posición independiente, entre las cuales regionalmente se encontraban la OCIV y la UCPFV, fueron obligadas a aceptar las condiciones del gobierno y firmar el finiquito agrario. Quedaba sin embargo un abanico de organizaciones campesinas con diferentes posturas y proyectos que tenían el reto de enfrentar la estrategia de desarrollo que el Estado venía impulsando hacia el campo y que ya se había mostrado abiertamente anticampesina.

El desenlace de las movilizaciones campesinas mostraba un evidente deterioro en la relación entre el gobierno y la sociedad regional, lo que definió una doble actitud de la élite política priísta en Chiapas en los años que siguieron. Una de ellas estuvo orientada a superar el desgaste sufrido por el partido gubernamental y recuperar los espacios perdidos en lo político entre los actores sociales y políticos en la región. Era pues importante presentar una imagen diferente para impedir que nuevos grupos de población siguieran viendo a los partidos opositores y a las organizaciones sociales que habían surgido de este proceso, como una alternativa. La otra actitud estuvo definida por el trato que dieron los gobernantes en turno a las organizaciones campesinas que surgieron como resultado de la movilización social, la cual se orientó a aislarlas, desarticularlas y cooptar a los dirigentes que tradicionalmente habían estado vinculados al corporativismo priísta y que en el marco de las movilizaciones sociales plantearon una línea de independencia frente al gobierno del Estado.

Estas iniciativas de carácter político se impulsaban por parte de los diversos gobiernos interinos al mismo tiempo que se continuaba poniendo en marcha el proyecto económico privatizador delineado en el ámbito federal. Este proyecto consistía en dar primacía al impulso de una política empresarial junto con la iniciativa de suprimir las expresiones que quedaran del viejo Estado paternalista y en particular del aparato institucional en que se

apoyó el desarrollo agropecuario en la región. Así, dos planteamientos o posturas han caracterizado esta etapa que podemos definir como de consolidación del proyecto neoliberal: una, la prioridad dada al capital empresarial para su implantación en la región, preferentemente de aquellas empresas que pudieran dinamizar o modernizar las actividades productivas sobre las que se basaba la economía regional, y dos, hacer efectiva la base jurídica del nuevo régimen de propiedad de la tierra por la vía de concretar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede) y la entrega en propiedad de las parcelas del ejido.

Se trataba pues de terminar con la presencia de las empresas propiedad del Estado que durante años organizaron la vida económico-productiva como fueron Conasupo, Banrural, Fertimex, entre otras, y su sustitución por nuevos actores económicos que operarían bajo los criterios de la eficiencia que demandaba el mercado. De igual forma se buscó transformar la institución del ejido que, durante toda una dilatada etapa, se rigió bajo preceptos que impidieron la libre circulación y compraventa del recurso tierra, pero con la iniciativa de reforma a la ley agraria, en adelante aparentemente no tendría problemas para su plena implantación. La Frailesca resultaba ser entonces escenario propicio para el desarrollo de una amplia operación de carácter “quirúrgico”, que pretendía desestructurar de raíz los males que ocasionara la centralidad del intervencionismo estatal apoyado en las relaciones corporativas que definieron su relación con la sociedad frailescana.

Con base en el reconocimiento de los resultados del movimiento social y popular en la región consideramos importante, por tanto, hacernos las siguientes cuestionamientos: ¿En que consistía en el ámbito local y regional el proyecto gubernamental de corte empresarial del que venimos hablando? ¿Cómo se posicionaron las organizaciones campesinas surgidas del movimiento popular y democrático de 1994-96 y los ejidos mismos frente a este proyecto? ¿Qué tan preparadas estaban las organizaciones sociales para enfrentar las nuevas estrategias de manipulación y control que impulsaría la élite política gubernamental? y finalmente, ¿Sobre la base de qué planteamientos y propuestas las organizaciones campesinas de la segunda mitad de los noventa podrían plantearse una estrategia de negociación que les permitiera constituirse en un referente alternativo frente al proyecto empresarial dominante? A esta discusión enfocaremos la segunda este capítulo, no sin antes precisar los principales rasgos que definen el proyecto empresarial.

5.1. El proyecto empresarial y el nuevo papel del Estado

La presencia de iniciativas de carácter empresarial vinculadas a la orientación productiva regional no es nueva, pues ya desde el siglo XIX La Frailesca era considerada un espacio privilegiado para la implantación del capital agro-exportador. Lo nuevo en la actual etapa era la euforia con la que desde principios de la década de 1990 y en el contexto de las actuales exigencias del capitalismo trasnacional, se hacía presente una política integral para la región en la que participaban de manera coordinada y cooperante el Estado y diversos actores que aquí podemos definir como empresariales, en la que por lo general se excluye a los actores sociales con menos recursos y orientados a producir para la subsistencia.

Para concretar tal proyecto, el Estado mexicano mantuvo firme su postura de avanzar en la transformación de la forma social de tenencia de la tierra que durante años permitió la integración económica y social de la vida rural, el ejido, mediante el planteamiento de dar seguridad al nuevo sistema de propiedad de la tierra por medio del Programa para la Certificación de los Derechos Ejidales (el Procede), así como en mantener invariable el proceso de liberalización de la importación de granos pactado en el acuerdo comercial. Así, la importante participación de amplios sectores de la sociedad civil en las movilizaciones desarrolladas, demandando tierra y mejores precios a la producción agropecuaria, buscaba que sus protagonistas fueran tomados en cuenta en la perspectiva de la construcción de un proyecto incluyente para los campesinos de la región; sin embargo, esto no fue impedimento para el impulso de la política de desestructuración del viejo modelo productivo y para abrirle paso a uno nuevo basado en criterios eficientistas que bajo el argumento de buscar la participación de las fuerzas y grupos sociales, daba paso a un modelo en el que la voz cantante la llevaría el capital empresarial.

5.1.1. La desarticulación de los ejidos y el Procede

La modificación a la ley agraria implicó la posibilidad de iniciar un proceso de mercantilización de la tierra de los ejidos y, amparado en la reforma, el gobierno inicia el programa de titulación de parcelas ejidales. En la segunda mitad de la década de los noventa, la dinámica agraria en la región se movió en dos vertientes, definidas por la situación de conflicto que vivía la entidad y el proyecto neoliberal de mercantilización de la

propiedad social. En efecto, en los años posteriores a la reforma del artículo 27 constitucional, los campesinos de La Frailesca, presionados por la situación de endeudamiento y cartera vencida arrastrada desde la década de 1980, fueron aceptando la posibilidad de participar en el programa de certificación ejidal. Pese a la duda e incertidumbre existente en los ejidos, la presión y campaña de convencimiento de “las bondades” del Procede hizo que poco a poco los ejidos se adscribieran al programa, sobre todo en la segunda mitad de la década de 1990.

El alzamiento zapatista vino a poner un dique a la iniciativa liberal de parcelación de tierra. En los ejidos de La Frailesca, de hecho, existía reticencia a participar por el desconocimiento de los alcances y bondades del programa. En algunos ejidos, incluso, se planteaba –como medida de presión– que sólo entrando al Procede sería posible acceder a nuevos créditos. Pese al trabajo de convencimiento realizado por diferentes dependencias oficiales, a fines de la década de 1990, de 2,072 ejidos y comunidades en la entidad, sólo en 151 ejidos (es decir el 7%) se habían extendido los certificados correspondientes. En el caso de La Frailesca, la presión ejercida por parte del gobierno para que participaran en el programa de la tierra, mediante el discurso de ser “la única vía de garantizar la propiedad de la parcela”, fue un argumento que ganó terreno en la mentalidad de los viejos campesinos agraristas, que por espacio de por lo menos ocho años defendieron el rechazo a la iniciativa.

Si a mediados de la década de 1990 la aceptación del Procede en los ejidos no rebasaba el 15% de aceptación, para finales de la década la mayoría de éstos, sobre todo los más urbanizados, había aceptado recibir sus certificados agrarios. Pese a las reticencias y dudas que el programa generaba, los funcionarios y promotores agrarios apostaron a que, como resultado de las presiones y del discurso institucional, sería posible romper el consenso social sobre el carácter comunitario de la propiedad ejidal. Sin embargo, aun en los ejidos proclives a la titulación –como en el caso de Jesús M. Garza– donde por acuerdo de asamblea se decidió a finales de 1999, participar en el Procede y recibir los certificados parcelarios, la duda entre las autoridades ejidales y los campesinos acerca de lo correcto o no de la decisión, persistía una vez adoptada ésta.

En la opinión de Rafael Borges, ex-comisariado ejidal de La Garza, expresada en una asamblea, se puede reconocer la indefinición y poca claridad sobre la decisión adoptada y

reprochada a las autoridades en su calidad de dirigentes del ejido en ese momento. Según el señor Borges había sido un error haber entregado los documentos para gestionar lo del Procede ante las autoridades agrarias, porque con ello se estaban echando la soga al cuello. Ante esta opinión, un campesino, le reclama que él pudo haberlo impedido pues era la autoridad y nada hizo.¹⁵⁵

En realidad, las presiones institucionales para incorporarse al Procede eran muchas porque, junto a los condicionamientos de los apoyos institucionales, coexistía el discurso de la posibilidad de acceso a un patrimonio propio, todo lo cual explica la decisión finalmente adoptada. En palabras de Ceín Guillen, dirigente perredista del ejido La Garza: “A lo del Procede, aquí la asamblea decidió entrarle porque eso te garantiza la propiedad de la tierra. Claro, hubo algunos que no estuvieron de acuerdo, cuando se discutía en la asamblea, se pensaba en los adeudos que se tenían con Banrural (cartera vencida) y que al adquirir el certificado parcelario eso se cancelaba. La otra razón es que el certificado parcelario te daba la posibilidad de acceder a los recursos de Procampo”.¹⁵⁶

Una consecuencia adicional de la aplicación del programa y la entrega de los certificados parcelarios fue la convicción de que con el documento del Procede se harían innecesarias las autoridades ejidales, así como asistir a las asambleas para participar en la toma de acuerdos colectivos, visión que empezó a calar en las opiniones de algunos campesinos en el marco de la dinámica de las disputas internas en las que se veían involucrados en los ejidos. De acuerdo con esta opinión y bajo este supuesto, el hueco que dejarían las autoridades, sería llenado por los grupos o fracciones (quienes normalmente tienen una filiación política) a las que los campesinos se adscriben. Esta sería una consecuencia irreversible, que de continuarse profundizaría una dinámica de fragmentación en los ejidos de la región.

Esta forma de fragmentación se vio reforzada por la política de desarrollo organizacional permitida por la ley agraria y promovida por bancos y empresas, exigidas como condición para poder canalizar apoyos ó financiamientos por parte de las instituciones del Estado, y que ha dado lugar a la formación de pequeños grupos y organizaciones al interior de los ejidos (como son Grupos de Trabajo, Sociedades de

¹⁵⁵ Diálogo en la asamblea general del ejido Jesús M. Garza. Villaflores. 12 de abril de 2001.

¹⁵⁶ Entrevista al señor Ceín Guillén. Ejido Jesús M. Garza. 8 de mayo de 2001.

Producción Rural, entre otros), conformados generalmente por grupos emparentados o familiares para gestionar proyectos productivos. De esta forma se tiende a privatizar los espacios de socialidad que se mantenían alrededor de la figura del ejido y a fortalecer la relación entre los productores sobre bases puramente mercantiles.

Así, ante la aplicación y aceptación del Procede por parte de los campesinos y la entrega de certificados de propiedad que les permite vender o hipotecar su parcela, aunado a la fragmentación del ejido con la propagación de nuevas formas de organización más funcionales para el desarrollo de la lógica empresarial, la posibilidad de constituir y mantener los lazos de cohesión social y los valores comunitarios dependerá de la manera en que los actores sociales recuperen la experiencia histórica de lucha para el acceso a la tierra y de la creación de la figura del ejido, lo que permitió construir una identidad campesina. Esta identidad campesina o ejidataria que todavía se mantiene entre los habitantes de La Frailesca, resulta fuertemente cuestionada hoy, no sólo por las reformas impulsadas a la ley agraria a final del siglo XX, sino también por la concepción que acompaña la política de desarrollo hacia el campo orientada hacia formas de vida y organización acordes a un modelo de desarrollo centrado en la mentalidad empresarial y de los criterios puramente mercantiles en los que se sustenta el actual modelo económico.

5.1.2. La centralidad de la empresa trasnacional

En el esquema de desarrollo que se impulsa bajo el actual modelo económico, el capital regional viene operando bajo diferentes modalidades tiende a adquirir una clara posición hegemónica en los procesos económicos y subordina en torno a él a diversos actores económico productivos. Bajo la herencia que dejó una región mono-productora de maíz, en el proyecto económico en boga, empresas como Nestlé y Maseca mantienen una posición de primer orden en el ordenamiento del espacio económico regional. La primer empresa, después de una larga presencia en la región, ha impulsado en el periodo reciente, un proceso de modernización del acopio, mediante la instalación de un sistema de termos para el enfriamiento de la leche. Por su parte la empresa Maseca, privatizada como Molinos Azteca de Chiapas y perteneciente al Grupo Industrial Maseca, S.A (GIMSA), se implantó desde 1995 en las cercanías de la ciudad de Ocozocuahtla y en los cinco años posteriores ha

tendido a consolidar su participación en el proceso de la comercialización del maíz de la región.

Estaría, por otro lado, el desarrollo empresarial que durante la década de 1990 consolidó la empresa Buenaventura, una granja de procesamiento de pollo y cerdos con un alto grado de integración vertical, la cual, además de competir con importantes empresas avícolas del centro del país, mantiene una importante participación en la distribución de pollo y huevo en Chiapas y el sureste. Se le reconoce como una empresa que ha sido capaz de incursionar en los mercados internacionales, exportando pollo y cerdo enlatado a diversos países de Europa y Asia. Además, el hecho de que garantice empleos permanentes a más de 3 000 trabajadores, hace que a menudo sea digna de elogios por parte de los políticos en turno como el ejemplo a seguir. Haber sido concebida y desarrollada por la familia Macías, uno de los apellidos que en otro momento encabezaron un grupo de poder político ligado a los terratenientes en La Frailesca, es el mejor ejemplo de cómo los grupos de interés en la región se vienen transformando en los últimos años.

Con el retiro de la Conasupo, antigua empresa paraestatal orientada al abasto y la comercialización, nuevas empresas han venido ocupando los espacios dejados por ésta y participando directamente en los procesos de compraventa del maíz. Esta misma empresa en su proceso de retiro ha sido coadyuvante para que se fortalezca la participación de Maseca, Minsa y las granjas del grupo Buenaventura como opciones de compra de la producción local de granos. Se destaca el interés de estas empresas por acopiar la producción regional, las cuales, de acuerdo con sus objetivos y proyectos, invariablemente dicen poder garantizar el mercado. En los hechos, Conasupo viene allanándole el camino a Maseca para su inserción en este espacio territorial, con costos mínimos para la empresa, pues con la infraestructura de acopio de la paraestatal puesta a su servicio, se garantiza su participación y control de la producción regional.

Así, por la dinámica de monopolio que establecen empresas como Nestlé, Minsa y Maseca, mantienen una posición hegemónica en relación con los procesos económicos de la región. Maseca, en su interés por implantarse localmente, ha impulsado desde 1995 diversos esquemas de vinculación con los productores, entre los que destacan los llamados

“Clubes del maíz”, desarrollados al principio del proceso de su inserción en la región.¹⁵⁷ Estos clubes fueron concebidos como un espacio de coordinación en el que participaban diversas entidades –oficiales o privadas– especializadas en proporcionar los insumos necesarios para el desarrollo del proceso productivo (crédito, comercialización, asesoría técnica), de acuerdo con el esquema propuesto. Ello le significaba a Maseca tener un papel central en la comercialización del grano y, por tanto, en la definición del paquete tecnológico que, en un marco de crisis de financiamiento a la producción, deben impulsar los productores. En sus inicios, el impulso de este esquema fue visto con desconfianza por parte de los productores, quienes sólo entregaban a la empresa una parte de la producción, mientras simultáneamente seguían vendiendo otra parte a Conasupo, lo cual dio como resultado que, bajo el esquema del club del maíz, la empresa no viera cumplir su expectativa de acopiar las 150 000 toneladas anuales calculadas en sus objetivos. Ante esta situación, Maseca ensayó otros esquemas de inserción en la región como la compra directa del grano a ejidos, o bien garantizando a los comisariados ejidales el recurso para la compra de maíz. Ello le implicaba, sin embargo, promover una capacitación de tipo gerencial entre comisariados y dirigentes de organizaciones, o bien apoyarse en los despachos de prestadores de servicios técnicos que en los últimos años se han incrementado exponencialmente en la región.

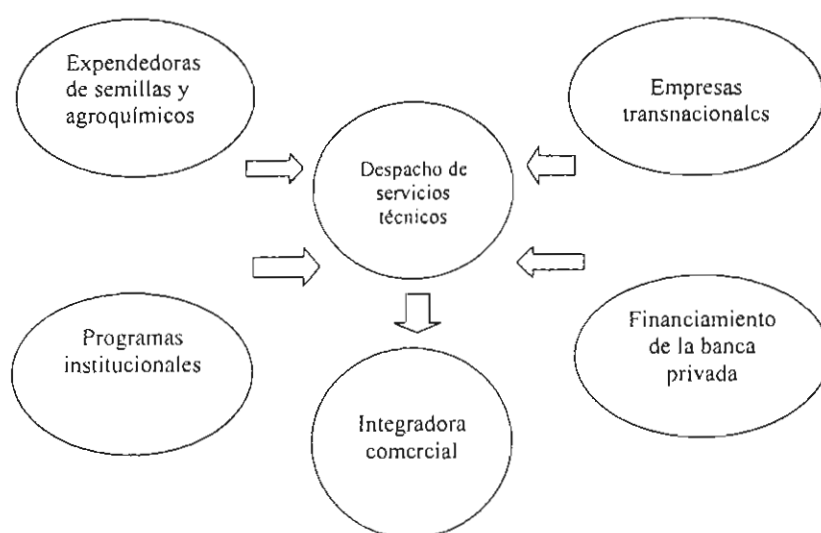
Queda claro entonces que el posicionamiento de Maseca en la región fue posible por el impulso que el mismo Estado le dio, en el marco de la paulatina desincorporación y retiro de Conasupo de la comercialización del grano. Esta cobertura de la trasnacional se produjo en dos sentidos; por un lado, al facilitar los espacios y bodegas propiedad de la paraestatal para que la empresa realizara sus adquisiciones por cuenta propia. Lo anterior obligó a los productores a comercializar con la harinera bajo las condiciones y modalidades que ésta definía, porque además el Estado bonificaba por medio de la Secretaría de Hacienda, a la empresa y no a los productores, un recurso adicional de acuerdo con los volúmenes de maíz acopiados.

¹⁵⁷ El programa de inserción de Maseca proyectaba acopiar, en el primer año, 70 000 toneladas de maíz, hasta llegar a 150 000 al quinto año. En declaraciones posteriores, la empresa manifestaba haber superado con creces las metas de captación. *Cfr* Alvaro Martínez, 1997, p.76.

5.1.3. Los nuevos agentes del cambio técnico

El capital trasnacional ha adquirido lugar destacado en la región desde principios de los noventa en el marco del modelo neoliberal, mediante las empresas de semillas patentadas o de las expendedoras de agroquímicos, los que se anuncian por toda la región mediante diversas marcas comerciales. De acuerdo con lo señalado por Castro, las casas expendedoras de agroquímicos han convertido al Centro de Chiapas, y en particular a La Frailesca, en la imagen misma del imperio trasnacional al difundir todo tipo de marcas y nombres de semillas ligadas a las empresas trasnacionales.¹⁵⁸ Así, con la finalidad de participar y mantenerse en el mercado, los productores tienden a reconocer y dominar con facilidad los nombres de las semillas patentadas por la Pioneer, Cargill y otras empresas y a olvidarse de la semilla certificada que en los años ochenta desarrolló el INIFAP, a la que ahora se desecha por no garantizar los niveles de productividad buscados. Los principales impulsores de esta mentalidad son los técnicos pertenecientes a los despachos de servicios contratados por el gobierno o por las mismas empresas.

Figura 4. Esquema de operación del modelo neoliberal en la producción de maíz



¹⁵⁸ Sobre el papel que tienden a tener las empresas trasnacionales de semillas en Chiapas y en el mundo ver el artículo de Gustavo Castro, 2001.

Resulta importante aquí hacer una rápida exposición acerca del surgimiento de los despachos de servicios técnicos y del papel que éstos han jugado en el marco de la iniciativa que desarrolla el capital empresarial para organizar y dinamizar las actividades productivas en la región. Con la supresión del aparato institucional que se empezó a concretar desde finales de la década de los ochenta y que implicó la liquidación, a principios de la década, de la mayor parte del personal adscrito al Distrito de Desarrollo Rural de SAGARPA, de Banrural y de Anagsa entre otras, el Estado mediante el FIRA se propuso como objetivo la conformación de bufetes o despachos que deberían tener como propósito principal brindar asistencia técnica a los productores, los que en adelante deberían operar bajo criterios mercantiles, es decir, cobrar por sus servicios.

Inicialmente, los despachos desarrollaron actividades orientadas a proporcionar asistencia técnica, principalmente a productores que tenían capacidad de pago como los ganaderos. Sin embargo, a medida que los despachos se han venido consolidando como la principal figura para la prestación de servicios, fueron diversificando sus actividades así como la fuente de sus ingresos al ser contratados por parte de la banca comercial para administrar y verificar la correcta aplicación de los financiamientos a la producción regional por parte de las casas promotoras y expendedoras de semilla certificada como Asgrow, Ceres y Pioneer, las que han sido cuestionadas por la posibilidad de introducción de semillas transgénicas a la región; los despachos de servicios técnicos también son empleados por las mismas dependencias del gobierno vinculadas al sector agropecuario para diseñar y validar proyectos a ser financiados en el marco del programa de la Alianza para el Campo.

A principios de 1998, el mismo Estado por medio de Conasupo, empresa paraestatal en vías de privatización, demandaba a los comisariados ejidales la contratación de los servicios técnicos para que pudieran desarrollar de manera eficiente la transferencia de las bodegas rurales, así como su inserción y participación en la dinámica y exigencias que les planteaba el mercado, particularmente para operar la comercialización y los financiamientos. En el nuevo esquema de desarrollo empresarial, por tanto, los despachos vienen a jugar el papel de mediadores entre los productores y las empresas que mantienen el control del proceso productivo bajo el concepto global del *agrobussines*. Son también los encargados de difundir entre la sociedad rural los criterios mercantiles y de productividad

bajo los cuales se tiene que regir la región en relación con el mercado global, en el que las empresas tienen un papel central.

5.1.4. La flexibilidad como paradigma

La otra empresa mediante la cual se puede reconocer la hegemonía empresarial en la región es Nestlé. Su temprana implantación e importante presencia —como ya ha quedado claro— es debido a la centralidad que históricamente ha tenido la ganadería como actividad económica en la entidad; ésta es, de hecho, la actividad que actualmente es considerada la más rentable en el contexto de crisis y a la cual orientan sus esfuerzos productores de diferentes condiciones socioeconómicas.¹⁵⁹ Podría decirse, incluso, que la ganadería subordina, para sus fines, la producción de maíz y los subproductos que ésta genera. Probablemente el que la producción de maíz no se abandone, es debido a que, junto a la cosecha del grano, está la obtención de esquilmos para la alimentación del ganado.

¿Cuáles son las razones por las cuales la ganadería sigue manteniendo relevancia junto a la producción de maíz en la región? En primer lugar, la actividad ganadera resulta ser, de hecho, la heredera natural de las formas de concentración de la propiedad territorial. Por tanto, tener ganado es también una cuestión de prestigio, además, históricamente éste ha sido un sector que, en diferentes circunstancias, ha sido subsidiado y protegido por parte de la política gubernamental y ha recibido protección del régimen de propiedad de la tierra. Como ya hemos mostrado en capítulos anteriores, un importante número de ganaderos mantiene como actividad central la producción de becerros al destete, para luego enviarlos a repasto a otras regiones del país, o bien, se genera ganado terminado que luego se comercializa en los frigoríficos del sureste o centro del país. No obstante, esta actividad es predominantemente de doble propósito, en la que la obtención de leche resulta ser fundamental.

A partir de los recorridos en campo, entre los productores de los ejidos se puede reconocer la actitud de buscar reconvertir sus tierras hacia la ganadería, o la de reafirmarse en la actividad quienes ya la practicaban. Por su parte, los productores más capitalizados,

¹⁵⁹ Algunas investigaciones han mostrado que la ganadería bovina de doble propósito, en la región, muestra una alta heterogeneidad socioeconómica y tecnológica, reflejada en los diferentes niveles de intensidad de uso del suelo y orientación productiva. Véase al respecto el trabajo de Heriberto Gómez y José Nahed (s/f).

buscan ampliar sus explotaciones, incluso mediante la compra de tierra a otros ejidatarios. La ganadería es pues, entendida socialmente, como un recurso del que se puede disponer, más aun cuando se observa una permanente caída de la rentabilidad del maíz. Ello se explica, en parte, porque la ganadería es una actividad que, con menor esfuerzo y gasto, garantiza al productor un ingreso permanente, más o menos seguro.

Esta ha sido la actividad en la que participan productores de diferentes condiciones socioeconómicas. Desde los ganaderos que se han tecnificado, cambiando las formas de ganadería extensiva por formas intensivas de explotación, hasta la pequeña ganadería campesina o ejidal, integrados todos a los circuitos económicos y culturales que definen la actividad. De este modo, la ganadería como alternativa económica, y en particular la producción de leche, se ha fortalecido en los últimos años por el proceso de modernización que ha impulsado Nestlé, fundamentalmente en relación con efficientar el proceso de acopio.

La Nestlé se instala en la región desde la década de 1960, con objeto de abastecer a la planta procesadora de leche ubicada en Chiapa de Corzo. El carácter monopólico de la empresa se refleja en que capta el noventa por ciento de la producción, lo que se explica por su antigüedad como opción de mercado en la región y el tipo de relación que establece con los productores. Originalmente, la captación del lácteo era en los mismos ranchos o ejidos. Posteriormente, la empresa convence a los productores de que la leche fuera entregada a pie de carretera, de donde sería recogida por sus camiones recolectores. Ello implicaba, sin embargo, poca eficiencia y pérdidas en el tratamiento del producto; por ello, a principios de la década de 1990, se inicia un proceso de instalación de “termos de enfriamiento” en lugares estratégicos de la región para la entrega del producto.

La mayor inserción y penetración de la trasnacional, en los últimos años, ha implicado la flexibilización de la relación entre empresa y productores, la que normalmente se realiza bajo los intereses de la misma. Ello debido a que esta relación se rige mediante contratos específicos que implican algunas restricciones para los productores individuales,¹⁶⁰ condiciones que a menudo son asumidas y promovidas por las mismas agrupaciones constituidas en torno a los termos. Según algunos productores, por ejemplo, cuando los

¹⁶⁰ Entre las principales restricciones que impone Nestlé a los productores son: no poder dejar de entregar su producto a la sociedad organizada en torno a un termo (SPR), so pena de quedar excluido del grupo. Para un reconocimiento de las formas modernas de inserción de Nestlé en la región, véase Adolfo Álvarez *et al*, 1998.

tanques de recolección existentes en los ejidos se saturan, o no llegan las pipas de la empresa a recoger el producto, ésta no se hace responsable por su posible descomposición.

Lo importante a destacar aquí en relación con la instalación de los termos de enfriamiento en los ejidos y ranchos de la región, por parte de la empresa Nestlé es que esta iniciativa muestra un proceso de reorganización del capital en el ámbito territorial, que busca eficientar el proceso de acopio del lácteo. Lo mismo puede decirse de las modalidades bajo las cuales la empresa Maseca ha buscado participar del control de la producción regional de maíz. Esta redefinición de las formas de inserción del capital, en la región, conlleva importantes cambios en las formas en que el mercado accede a la producción local, lo que tiene implicaciones en la generación de nuevas formas de organización de los productores, *ad hoc* con las necesidades de estas empresas. Es, por tanto, a instancias de estas empresas que se han desarrollado nuevos esquemas de organización, los que por su parte han modificando –al menos parcialmente– la tradición organizativa anterior, en la que se consideraba al ejido como la base para la gestión económica y social en la región.

Las formas de organización y cooperación que en los años recientes han impulsado las empresas, tienen como propósito dar respuesta a las necesidades y problemas que, desde la perspectiva de éstas, aquejan los procesos productivos en sus aspectos tecnológicos, organizativos financieros y gerenciales, buscando con su participación eficientarlos. A este proceso contribuyen también las dependencias gubernamentales, las cuales no sólo promueven los esquemas de asociación empresa-productores, sino que además la infraestructura creada por el Estado, en su retiro y desmantelamiento, está siendo puesta al servicio de la primacía empresarial. Mientras esto sucede en el plano regional, en el ámbito local de los ejidos se impulsa la concepción dominante del régimen actual en torno al carácter jurídico que en adelante debe tener la propiedad de la tierra y su usufructo, lo que viene a fortalecer la visión y el discurso a favor de la perspectiva empresarial.

Frente a la situación de crisis y la baja rentabilidad del maíz en el contexto de la aplicación del Tratado de Libre Comercio, los productores han ensayado dos momentos de movilización social para presionar por un aumento en los precios, teniendo como interlocutor al gobierno en turno para plantear sus demandas y lograr un mejor nivel de vida. Los saldos que dejaron las movilizaciones de los maiceros fueron, en términos de sus

resultados reales, negativos o muy pobres. Los diversos intentos por mejorar el precio del grano chocaron con la inflexibilidad de la política institucional empeñada en concretar los compromisos que el Estado ha firmado con los países socios, buscando mantener las políticas de precios, y crear condiciones para liberalizar en los plazos convenidos la importación de granos básicos sensibles como fueron tipificados el maíz y el frijol.

5.2. Las organizaciones campesinas frente al proyecto empresarial

El reto de las organizaciones campesinas que aparecieron en la región como resultado de las movilizaciones de 1995-97, fue el de cómo sostenerse y consolidarse como opciones de organización social en los años posteriores, no solamente frente al acoso de que eran objeto por parte de los grupos de poder económico y político que cuestionaban sus estrategias de lucha, sus demandas y alianzas, sino también la estrategia de los gobiernos interinos del periodo de buscar la cooptación de líderes y la subordinación política mediante prebendas a las organizaciones. Otra dimensión del reto que se les presentaba a las organizaciones era la de cómo posicionarse frente a la estrategia de concreción del modelo neoliberal que venía buscando concretar el Estado y otros agentes empresariales mediante las diversas estrategias que antes hemos intentado precisar.

Nos parece que esta dimensión del problema no fue suficientemente valorado por los líderes y organizaciones del movimiento quienes en lo fundamental centraron sus esfuerzos en enfrentar la estructura de poder local y la cerrazón que seguía manteniendo en términos de las exigencias del derecho a la tierra y de democracia que expresaba la sociedad civil frailescana; y si acaso lo plantearon no fue posible vincularlo y expresarlo mediante estrategias concretas de acción. Ni siquiera Upromaíz que encabezó un movimiento opuesto a una de las expresiones de la política neoliberal, se planteó de manera expresa una estrategia amplia y de largo plazo en contra del modelo.

No obstante, frente a la situación de lucha social bajo la que se daba la aplicación del modelo económico, las organizaciones campesinas y los ejidos se debatían en la contradicción en torno a qué actitud que deberían adoptar ante las diversas iniciativas puestas en práctica por la política neoliberal. Las expresiones de rechazo que expresaron las movilizaciones campesinas a favor de mejores precios para la producción regional, no fueron suficientes al no dar paso éstas a la configuración de una estrategia de largo plazo

que enfrentara al modelo por la vía de construir propuestas alternativas en diferentes ámbitos, incluyendo aquí una dimensión cultural. ¿Por que no se avanzó en este sentido por parte de las organizaciones y los sujetos políticos regionales? Una explicación parcial pudiera estar en la expresión apabullante que tuvo la aplicación del modelo, que impidió que las expresiones de lucha social maduraran un proyecto social alternativo de largo plazo. Nuestra valoración, es que las respuestas han sido pobres y en los últimos años las organizaciones sociales se han enfrascado en una dinámica de desgaste y división alimentada por los procesos políticos en que se han visto inmersas y por los intereses que expresan sus líderes, dinámica que tiende a reproducirse al interior de los ejidos como lo veremos en esta sección.

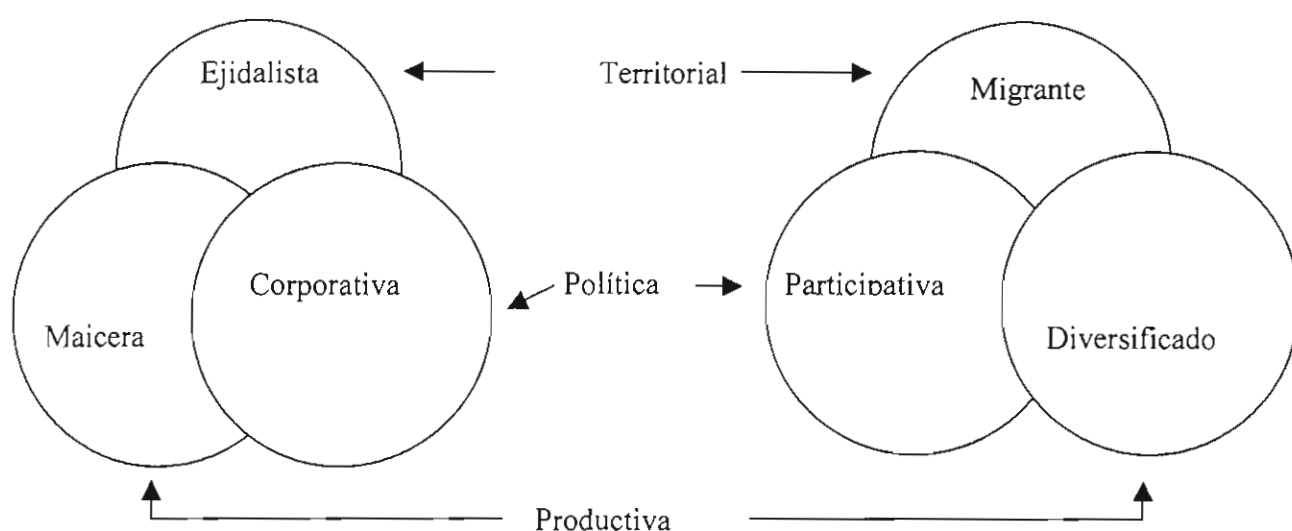
5.2.1. Política estatal y fragmentación comunitaria

En el capítulo anterior hemos podido reconocer cómo las contiendas municipales se convirtieron en un importante espacio de confrontación que vino a desconfigurar la dinámica del control que el partido del Estado mantenía en el conjunto de la estructura social y política regional, siendo uno de los factores más importantes para que en la coyuntura de luchas desarrolladas por la sociedad civil en Chiapas se avanzara en desarticular las relaciones corporativas que tradicionalmente habían imperado en la región. Pero la lucha política por el poder local no se expresaba solamente en torno a los ayuntamientos, sino también en los ejidos, sobre todo los más urbanizados en los que había importantes pugnas por el control de las decisiones. A la postre, estos conflictos han contribuido al proceso de pluralización del espacio político frailescano. Algunos de estos ejidos, como fueron los casos de El Parral y Jesús M. Garza, buscaron sumarse a la iniciativa remunicipalizadora que impulsó el gobierno de Albores Guillén, a fines de 1998, para independizarse y tener un manejo propio de su hacienda y recursos. Fueron, sin embargo, otro tipo de criterios, vinculados al contexto político, los que definieron la aspiración de muchas localidades de convertirse en nuevos municipios.

En los últimos años se puede reconocer que han tendido a romperse las formas corporativas de organización y control social, y producirse un ambiente de democracia en la participación y toma de decisiones; este proceso de democratización ha implicado desajustes que pasan por la eclosión de formas de conflicto en los espacios comunitarios

—como el ejido—, en los que hasta hace poco se había recreado la convivencia social y la expresión de visiones e intereses comunes, dando lugar a la configuración de nuevas identidades productivas, políticas e incluso territoriales.

Figura 5. Reconfiguración de identidades sociales en La Frailesca



La socialidad en estos espacios comunitarios y la defensa de proyectos comunes se ven cuestionadas, no solamente por la dinámica de los conflictos e intereses que mueven a los diferentes grupos en pugna, sino por el impulso de una política de organización y fomento productivo que se apoya en pequeños grupos al interior de los ejidos. Si los anteriores impulsos modernizadores se apoyaron en el ejido como espacio social y económico, esta nueva oleada lo hace ya no sobre los núcleos ejidales, sino con productores individuales, o bien, con entidades colectivas más flexibles (grupos de trabajo, sociedades de producción rural) en torno a las que se agrupan pocos productores. Es a estas agrupaciones a las que se les canaliza crédito o apoyos específicos. Esto introduce cambios importantes en la vida productiva, al interior de los ejidos y en las formas de organización y acción colectiva conocida en la región.

Como forma de expresión del proceso señalado hoy en día, se ha generalizado una dinámica de conflicto en los espacios intracomunitarios que a menudo deviene en formas de intolerancia social, conflictos que muchas veces reproducen la disputa que se mantiene localmente en los municipios. En el caso de los núcleos ejidales y poblados, los disensos entre los grupos en pugna normalmente son por el control de los recursos materiales y los espacios de gestión y representación comunitaria. En esas desaveniencias normalmente está en juego la lucha política por el acceso a las formas de representación social (presidencias municipales, comisariados ejidales, organizaciones productivas) y la determinación de la orientación que eventualmente puedan tener las políticas de gobierno, bajo el cobijo de organizaciones partidistas.

Estas contiendas existen en la actualidad y se reproducen en prácticamente todos los ejidos, las que normalmente estallan por el desacuerdo en el nombramiento de las autoridades ejidales y que, además, son conflictos alimentados muchas veces por los procesos de alineamiento político que se viven en la región. Señalaremos las formas de expresión que estos tienen con los procesos más amplios, tomando los casos de tres de los ejidos representativos de la región.

El ejido Jesús M. Garza es uno de los más grandes y urbanizados de La Fraileasca. Ha sido, por tanto, destinatario de muchos de los programas de fomento productivo impulsados desde las instituciones de gobierno, en diferentes momentos y circunstancias de la política agropecuaria. Esta condición le ha permitido consolidarse como un poblado con la infraestructura y los servicios suficientes como para pelear a Villaflores su independencia como municipio libre, aspiración que por lo menos en el reciente proceso de remunicipalización le fue negada. De este ejido han surgido muchos de los líderes campesinos regionales vinculados al priísmo que, en diferentes momentos, disputaron posiciones políticas importantes, ya sea en la representación municipal, o bien dentro de las organizaciones corporativas, encargadas por años de administrar la distribución de los recursos oficiales a los campesinos.

Hasta 1994, en este ejido las posiciones oficialistas fueron hegemónicas y las pugnas y contradicciones existentes entre los grupos se resolvían al interior del aparato corporativo. A partir de 1995, se produjeron una gama de realineamientos políticos, alimentados por la dinámica del movimiento social que se desarrolló en la región, en el que una de sus

vertientes fue la disputa por el control del municipio. Por las características del ejido, en términos de la infraestructura urbana que posee y los recursos que maneja, la elección de su comisariado ejidal se convierte en una verdadera contienda por el control del mismo, pues, de hecho, a partir de la fuerza que logre tiene en parte allanado el camino hacia el gobierno del municipio.

Estas disputas, que en el caso del ejido mencionado, hasta el momento se han resuelto en un espacio de civilidad, han generado diversos posicionamientos políticos en un espacio que hasta hace apenas unos años era coto exclusivo de las posturas oficialistas, reflejo de la pluralidad y competencia que hoy define a toda la región. No obstante que en la actualidad la corriente germanista siga manteniéndose como mayoritaria, el crecimiento acelerado de esta pluralidad al interior del ejido se debe, en parte, a los señalamientos y críticas que diversos dirigentes han hecho en diferentes momentos, a las prácticas y formas de relación política desarrolladas por los dirigentes tradicionales del priísmo, tanto localmente como a otros niveles.

Pero los conflictos entre los actores intracomunitarios no sólo existen en los ejidos con mayor nivel de desarrollo e infraestructura, sino también en ejidos más pequeños como es el caso del ejido Francisco Villa, el cual posee un importante historial en la lucha agraria en el municipio de Villaflores. En los últimos años, este ejido también se ha visto atravesado por las redefiniciones y realineamientos políticos, entre quienes se inclinaron por apoyar la candidatura de Pablo Salazar (respaldados por las posiciones asumidas regionalmente por Upromaíz) y quienes se opusieron a ella, a quienes llaman “los guayaberos”, políticamente afines a Copdech y, por tanto, al germanismo.

Pese a mantener diferentes visiones políticas, los conflictos entre los grupos, en el ejido, hasta ahora se han resuelto en un ambiente de tolerancia. Adolfo, dirigente histórico de la colonia Pancho Villa, habla de los alineamientos al interior del ejido y los vínculos que estos tienen con la política regional: *“Al grupo de los guayabos los respetamos, Mundo duró como comisariado seis años, es el líder de los guayabos. Ellos saben cómo luchamos nosotros. El comisariado actual no sabe, porque ellos llegaron cuando ya estaba servida la mesa. Teníamos una lucha de veinticinco años para ganar la presidencia del comisariado. Pero éste, a los tres meses se fue con los guayabos, los apoya Germán Jiménez, el fue en contra de Pablo (Salazar). Cuando la campaña de Pablo busqué pedirle una firma para lo*

*de la carretera. No quiso darla. (Pero)... ellos son unas cincuenta gentes. Nosotros somos mayoría”.*¹⁶¹

En San Pedro Buenavista, uno de los ejidos históricos de la región, la dinámica de división y conflicto a su interior ha llegado a tener altos niveles de confrontación, y en la actualidad la comunidad se encuentra fuertemente polarizada en torno a los grupos en pugna. Aquí, las contradicciones intracomunitarias se iniciaron en la etapa posterior a la contienda por el control del municipio que perredistas y priístas desarrollaron a partir de 1995, antes de la cual el ejido estaba cohesionado en torno al PRI y sus autoridades municipales. En el marco del conflicto político municipal y estatal, y teniendo como base las diferencias y disputas entre ex-comisariados –que eran al mismo tiempo líderes de la comunidad–, a partir de 1997 se inicia una enconada lucha entre dos grupos en pugna. Por la dinámica misma del conflicto y las disputas político electorales de la segunda mitad de la década, en los años posteriores ambos grupos terminaron profundamente polarizados en torno a sus respectivas filiaciones partidistas, pugnas que normalmente se dan acompañadas con acusaciones de corrupción entre ellos. Dice Adelín, un campesino del lugar afín al grupo perredista: *“Cuando estábamos nosotros, ellos querían sacar un crédito ganadero. Don Chus era un líder corrupto, él era presidente de la ganadera. Siendo comisariado Don Roque, le pidió los documentos del ejido. Querían que les prestáramos la carpeta básica y los planos del ejido para que sacara un crédito de ochocientos mil pesos. Don Roque le dijo que lo iba a consultar con su directiva. Pero en la directiva no estuvimos de acuerdo y le dijimos: ¿cómo vas a endeudar al ejido? Ese fue su gran pleito porque no le quisimos dar. No estuvimos de acuerdo. No le dimos. Cómo hubiera quedado el ejido. Chus le echó la culpa a Don Roque: ¡eres tú el que no quieres!”.*¹⁶²

Adelín participa del grupo que en la actualidad mantiene el control de la casa del comisariado ejidal, sin embargo el grupo contrario también tiene su comisariado que, al no poder ser nombrado en la casa oficial, fue elegido en el parque del pueblo. Detrás de esta lucha por el poder, en realidad se esconde una disputa por el control de los recursos fundamentales (materiales y simbólicos) de la comunidad. En este ejido, los recursos en juego van desde las bodegas –que antes estaban supeditadas a las determinaciones

¹⁶¹ Entrevista al señor Adolfo Velázquez. Ejido Francisco Villa. 14 de mayo de 2001.

¹⁶² Entrevista al señor Adelín Vázquez. Ejido San Pedro Buenavista. 18 de mayo de 2001.

gubernamentales— hasta el control del comité de festejos. El control del comisariado posibilita, además, el dominio de las concesiones a cerveceras y refresqueras, que significan recursos que entran al ejido por los diversos festejos o ferias que se realizan durante el año.

La disputa entre los grupos en pugna, para legitimar a sus respectivos comisariados, aparece en las entrevistas realizadas a representantes de ambos grupos. Don Adolfo, quien funge como comisariado del grupo de priístas nombrado en el parque de la colonia San Pedro Buenavista, nos dice: *“Nosotros nos regimos por la ley, por eso queremos que el cambio de comisariado ejidal se haga con base a una votación de ejidatarios. Ellos para legitimarse metieron documentos en la procuraduría, pero falsificaron nuestras firmas, han hecho muchas trampas. Cuando se me eligió como Comisariado vinieron las autoridades y un notario, pero ellos dijeron que yo había renunciado como comisariado y mostraron un documento con nombre y firma. Fue así como hicieron que se entregara la comisaría y recibiera Manuel Nandayapa”*.¹⁶³

Si bien los conflictos en los ejidos no son nuevos, como lo hemos reconocido a lo largo de este documento, la diferencia es que ahora éstos se producen en el contexto de un proceso democratizador que, en lo político, invita a recrear la libertad del individuo en la toma de decisiones, mediante las filiaciones políticas partidistas, y en lo económico, en los nuevos espacios de organización productiva impulsadas o avaladas por la política que se impulsa en torno al modelo liberal. Si en un contexto de lucha por la tierra, el conflicto tenía una expresión de clase, en las actuales circunstancias ésta parece desdibujarse en torno a las posiciones partidistas o la posibilidad del control de ciertos espacios de decisión y gestión.

La existencia de esta dinámica de conflictos a nivel local e intracomunitario ha sido parte del reacomodo de las fuerzas que, en el contexto de una sociedad en transformación, no encuentran el centro que las articule y dé coherencia a las formas de organización y convivencia social que se están construyendo. La posibilidad de que a futuro las acciones colectivas o individuales emprendidas por parte de los actores resulten exitosas, dependerá de cómo éstos se reconozcan en su actuar social o político y sean capaces de construir espacios de tolerancia frente al otro.

¹⁶³ Entrevista al señor Adolfo García. Ejido San Pedro Buenavista. 20 de mayo de 2001.

5.2.2. La lucha por el precio del maíz: ¿Un sinsentido?

Durante la última movilización de productores de maíz realizada en Chiapas, todavía existía la confianza de que era posible lograr que el gobierno incidiera en la modificación de las condiciones del precio pagado al productor. Después de esta movilización las organizaciones que todavía en 1996 se plantearon la posibilidad de arrancar por esta vía un mejor precio a la producción de maíz, en la práctica de la gestión institucional de recursos, han ido adoptando un discurso productivista, haciéndose eco del planteamiento de que mediante la presión y la movilización han podido conseguir muy poco. Esto queda evidenciado en la posición expresada por Nabor Estrada, presidente de Upromaíz en un acto que la organización realizó en Villaflores, el cual ponía en marcha el Programa de maíz de alta productividad –según se dijo– con recursos federales, estatales y de los productores: *“El proyecto de la organización consta de tres partes: hacer bien la producción, participar en la comercialización, incursionar en la industrialización. La industrialización es parte de nuestra lucha: buscamos que se pongan dos harineras, una en Villaflores y otra en Villacorzo y Fondo Acción Banamex está dispuesto a apoyar con créditos. Como organización nos hemos dedicado a buscar una alternativa al respecto y esta alternativa es luchar por hacer producir más nuestras tierras. Sabemos bien que actualmente es la Bolsa de Chicago quien define los precios del maíz y que nuestros gobiernos no han sabido hacer nada al respecto, pero también sabemos que con el apoyo de ustedes podremos salir adelante* (se refería a instituciones y casas comerciales ahí asistentes).¹⁶⁴

Este discurso si bien planteaba la propuesta de participar en la apropiación del proceso productivo por la organización, evidenciaba también el desencanto con las movilizaciones para lograr mejores precios, al mismo tiempo que la confianza –o la necesidad– de disponer de recursos vía las instituciones de financiamiento privado. En el mismo sentido era la opinión de Martín Ruiz Clemente, Presidente del Consejo de Vigilancia de Upromaíz, en relación con las experiencias de la lucha de los maiceros y las opciones que la organización tenía enfrente. Decía Ruiz Clemente: *“Hoy estamos escribiendo la nueva*

*historia y queremos que nuestros hijos escriban otras páginas. La lucha que dimos por el aumento al precio del maíz no fue en vano. Este evento busca definir nuevas formas para elevar el ingreso de los productores. Es claro que es la única alternativa que tenemos(...) porque precios de garantía ya no va a haber, tampoco precios de indiferencia".*¹⁶⁴

En esa ocasión, la organización terminaba un recorrido por diferentes municipios, en los cuales había realizado eventos demostrativos para diferentes SPR de la organización. De acuerdo con su propuesta innovadora, hablar de nuevas tecnologías no se trataba sólo de más maquinaria, sino de nuevas formas de producir –entre las que se encontraba la producción de abono mediante la cría de lombrices– así como de nuevas formas para participar del crédito de acuerdo con condiciones y necesidades de los productores. Estas eran, sin embargo, las condiciones que les planteaba el asesor financiero del Fondo Acción Banamex para quien “el camino al alto rendimiento pasa por ser competitivos, es decir, la de invertir, pero de una forma más integral, en la que los productores estén organizados, pero con visión empresarial y cuidando el medio ambiente”. Para el logro de tales objetivos, se consideraba fundamental la participación de los representantes de las empresas vendedoras de agroquímicos como Asgrow, Ceres, Pioneer y otras, con las que se alcanzarían rendimientos superiores a las 10 toneladas por hectárea, así como emplear productos para combatir las plagas del maíz. La centralidad de las empresas trasnacionales de semillas en el proceso innovador convertida en necesidad para los productores resulta aquí evidente.

Bajo esta concepción, se puede reconocer la coincidencia de los líderes de la organización con las instituciones del sector agropecuario, para quienes “no se puede estar luchando todo el tiempo contra el precio, sino que se tiene que pensar en la productividad y la eficiencia”. Como bien se había señalado ya anteriormente, esta organización se encontraba en proceso de construir un nuevo esquema de funcionamiento, pues al mismo tiempo que buscaba mantener mecanismos de relación con el Estado, quería articular sus iniciativas con las propuestas y espacios que le ofrecía el capital privado.¹⁶⁵ Se ponía, por tanto, énfasis en la necesidad de modificar las formas de producción, aparentemente

¹⁶⁴ Palabras de Nabor Estrada Moreno, presidente de Consejo de Administración de Upromaíz, febrero de 2001.

¹⁶⁵ Palabras de Martín Ruiz Clemente, presidente del Consejo de Vigilancia, febrero de 2001.

¹⁶⁶ Al respecto ver el trabajo de Leonel Aguilar, 1998, p. 172.

abandonando la disposición mostrada en otros momentos para luchar por el mejoramiento de los precios. Estas visiones se ven reforzadas por el discurso gubernamental, de acuerdo con el cual, es importante el impulso de una política diferenciada en relación con las dos condiciones en las que se mueve la agricultura chiapaneca: la vinculada al mercado y la de subsistencia. Desde esta perspectiva, el fracaso de los programas gubernamentales se debe a que se han impulsado con un alto grado de generalización, razón por la cual han incidido poco en el desarrollo del sector.

Existe una actitud diferencial entre las principales organizaciones maiceras de La Frailesca que se traduce en estrategias diferentes en razón de la composición social de sus agremiados. Mientras organizaciones como Copdech y Socama orientan buena parte de sus esfuerzos a gestionar los recursos para garantizar la sobrevivencia campesina, Upromaíz se preocupa por generar y difundir nuevas tecnologías con criterios sustentables dando atención al impulso de parcelas demostrativas en la zona mecanizada o de alto potencial. Para el impulso de estos proyectos diversificados y por exigencias del modelo centran sus esfuerzos de gestión en por lo menos tres vertientes: la gestión de proyectos productivos, la gestión de Fideicomisos (para la comercialización y la industrialización) y los recursos de Alianza para el Campo. Los fideicomisos y los recursos de la Alianza son tanto para la zona de maíz mecanizado como la de “espeque”.¹⁶⁷

En general, en esta etapa, existe la visión entre los campesinos frailescanos de que la movilización y la presión no son la vía para acceder a un mayor nivel de ingreso de los productores. Esto se refleja en las posturas asumidas por Copdech, en septiembre de 1999, en un foro regional realizado por esa organización para discutir alternativas frente a los problemas de la producción maicera en la región, evento que se redujo a recibir las quejas que expresaban los campesinos participantes, sin lograr madurar mas alternativas que un conjunto de demandas que se habrían de presentar, posteriormente, a las autoridades.

Una perspectiva de más largo plazo, al parecer, ninguna de las organizaciones maiceras la tuvo en ese momento. De acuerdo con Robertoni Camacho, campesino del ejido Flores Magón, Upromaíz es la organización que está impulsando la estrategia más adecuada en relación con la producción de maíz, pues, en sus palabras, de lo que se trata es de: *“...olvidarse de estar peleando cada año por el precio del maíz y preocuparse por generar*

¹⁶⁷ Se refiere a las zonas de ladera que mantienen tecnologías tradicionales de siembra como el uso de barreta.

*tecnología para mejorar la producción... esto nos permitirá dejar lo tradicional que es el espeque y llegar a lo transicional... Por eso Upromaíz trata de cambiar la cultura de la gente, porque la cultura de la gente está maleada”.*¹⁶⁸

Cuál es entonces el papel que les toca jugar a las organizaciones sociales de productores en un contexto en el que, como expresiones del movimiento social, han venido pugnando por superar las viejas formas de corporativismo político que definieron al antiguo régimen, pero que al mismo tiempo, se encuentran supeditadas a las normas y exigencias que impone la política de mercado bajo cuya lógica se organizan los procesos y actividades económicas en la región.

En nuestra opinión se ha venido construyendo una nueva forma de relación funcional corporativa y de representación de intereses vinculada a los intereses del capital en la que existe un mayor nivel de autonomía por parte de las organizaciones sociales en las que es posible que éstas puedan definir las modalidades de interacción con los agentes económicos y el Estado. De este modo, y siguiendo a Lehmbruch se estaría construyendo una suerte de “corporativismo libre” o neocorporativismo en el que la relación de lealtad de las organizaciones y sus miembros al gobierno dejó de ser central para constituirse una suerte de relación funcional definida por formas de participación en organismos consultivos, comités administrativos o consejos económico-sociales en los que la política de ingresos es la cuestión nodal.¹⁶⁹

5.2.3. Los campesinos como “empresarios”

En el proceso de modernización actual, las innovaciones tecnológicas que se incorporan a la dinámica productiva corren a cargo de los despachos de servicios (que se han multiplicado en la región) y que operan bajo criterios mercantiles. Desde el actual discurso eficientista, en el nuevo esquema de desarrollo, deben ser los mismos productores quienes contraten directamente a los despachos de servicios, pero ante los problemas de rentabilidad que tienen los productores, no están en condiciones de contratar nada. Al final, terminan siendo las instancias proveedoras de los recursos financieros (fideicomisos

¹⁶⁸ Entrevista con el señor Robertoni Camacho. Marzo de 2001. Villaflores.

¹⁶⁹ Ver al respecto los trabajos de Lehmbruch, en Schmitter, Phillippe, Wolfgang Streeck y Gerhard Lehmbruch, (Coords.), 1992, p. 25 y 67.

gubernamentales, banca privada) las que hacen uso de estos servicios, mostrando cómo debería funcionar el “nuevo modelo” de asistencia técnica.

La intención de transformar el pensamiento campesino hacia otro de corte empresarial por parte del discurso gubernamental y los problemas para su plena concreción, se pueden reconocer en las reflexiones de Freddy Núñez Ramírez, presidente de la Asociación de Productores de Semilla Certificada, una empresa campesina productora de semilla ubicada en el ejido San Pedro Buenavista. Núñez, como muchos, tiene un discurso ambivalente en relación con la propuesta de adoptar una perspectiva empresarial. Dice: *“... de que queramos nosotros pensar como empresarios no se puede, seguimos con la misma mentalidad de siempre, que va cambiando poco a poco. Decía el presidente Fox que ahora tenemos que vernos como microempresarios... si apenas queremos salir de ese encajonamiento que es el ejido, porque si va uno con una persona de la iniciativa privada y le dice uno que es ejidatario, le dicen, no quiero nada con ustedes porque son pura política, puro tapacamino”*.¹⁷⁰

No obstante las limitaciones y condiciones desventajosas con que opera esta empresa campesina, compite con las semilleras transnacionales como Asgrow, Ceres, Cargill y Pioneer. Esta agrupación mantiene su preocupación y esfuerzos de buscar incidir en la región, produciendo y promoviendo las variedades de semilla generadas en la década de 1980 por INIFAP, a pesar de su menor rendimiento y precios, lo que busca seguir haciendo pese a la fuerte penetración que en los últimos años mantienen las transnacionales, las que mediante expertos y promotores generalmente adscritos a los despachos técnicos se han encargado de difundir entre los campesinos de la región lo ocioso que resulta sembrar con maíces criollos o con semillas que no sean las patentadas por ellas.

Algunas organizaciones sociales de productores como Upromaíz, que nacieron con la idea de participar en las diferentes fases del proceso productivo, buscaron desarrollar esquemas de comercialización alternativos, como la realización de operaciones directas con compradores de Centroamérica o del centro del país. Para ello, procuraron desarrollar estructuras administrativo-contables y técnicas a su interior que se encargaran de ejercer los créditos que recibían, así como la supervisión de la asistencia técnica entre sus agremiados. Sin embargo, por lo costoso de estas operaciones, a menudo las organizaciones no

¹⁷⁰ Entrevista con el señor Freddy Núñez Ramírez, 23 de mayo de 2001, Ejido San Pedro Buenavista.

descartaban realizar negocios con Maseca, que tendía a presentarse como el comprador más seguro en la región.

Upromaíz viene participando en un esquema de comercialización que garantiza a la empresa Maseca mantener un importante nivel de acopio de producción pues al mismo tiempo participan junto con otras organizaciones en una integradora de comercialización a cuyos miembros la Secretaría de Hacienda le garantiza un subsidio de acuerdo a los volúmenes adquiridos. Estos subsidios normalmente no llegan a los productores sino que van a caer a manos de las empresas. Para participar en este esquema y por la necesidad de mantener los niveles productivos demandados, las organizaciones como Upromaíz, se ven obligadas a convenir con las casas expendedoras de semillas híbridas la difusión y entrega del paquete tecnológico que en parte es subsidiado por el gobierno mediante el programa “kilo por kilo” de la Alianza para el Campo.

La apuesta gubernamental para el fomento de la producción es la participación del capital trasnacional y de las empresas semilleras para lograr el objetivo de elevar la productividad sin que necesariamente se logre abaratar los costos. Para la comercialización la alternativa es Maseca, quien mantiene la amenaza de no comprar a los productores el maíz por la posibilidad de comprarlo mas barato en el extranjero, aunque de hecho año con año adquiere importantes cantidades de los Estados Unidos. De este modo, si los productores quieren seguir produciendo maíz, tienen que participar de este esquema. Si no están dispuestos, la alternativa es, de acuerdo con las propuestas de las mismas instituciones gubernamentales, que se orienten por cultivos que les resulten más rentables.

Dado el nulo financiamiento estatal para el fomento productivo, la alternativa más a la mano era la del financiamiento privado mediante los recursos a que se accede por la vía del Banco Azteca o del llamado Fondo Acción Banamex.¹⁷¹ El acceso a estas fuentes de financiamiento es, básicamente, para aquellos productores tipificados como eficientes o para organizaciones que cuentan con un importante “soporte operativo”, es decir, técnico y administrativo-contable. En el esquema que promueve la banca comercial para el financiamiento de las organizaciones en la región, se plantea capacitar a directivos, asistentes administrativos, así como a los productores directos mediante eventos que les

¹⁷¹ Fondo Acción Banamex opera desde 1995 en estados como Oaxaca, Guerrero y Puebla. En Chiapas empezó a trabajar en el 2000, lo cual hace solamente con organizaciones que consideren viables previo estudio.

permitan allegarse tecnologías, además de darles una visión más amplia de tipo empresarial.

De acuerdo con los criterios de los asesores financieros de Fondo Acción, el cultivo de maíz en Chiapas es rentable y, por tanto, es negocio, siempre y cuando se logre elevar la producción mediante innovaciones como la “labranza de conservación”, la “no quema”, además de lograr la participación del esquema gerencial que promueven. El formato mediante el cual hacen llegar el apoyo a los productores directos es mediante las Sociedades de Producción Rural (SPR), forma de organización al interior de los ejidos con un objetivo meramente económico. De este modo, Fondo Acción Banamex le pagó a “la empresa soporte” —es decir, al aparato administrativo contable de la organización—, una cantidad fija por cada SPR que controle, además de los recursos que les destina a estas asociaciones para el fomento de la producción. En Chiapas este fondo destina recursos a por lo menos 14 organizaciones de productores y no considera que sea “a fondo perdido” sino que éstos habrán de regresar en términos de desarrollo.¹⁷²

El financiamiento que Fondo Acción Banamex proporcionó a las organizaciones, las condicionaba a regirse por un modelo eficientista de comercialización que considera la participación en esquemas integradores, para ofertar grandes volúmenes a las empresas compradoras, que normalmente son Maseca, Minsa, u otros compradores. Por lo demás, las organizaciones no tienen más alternativa que aceptar el lento abandono de Conasupo, que viene planteando transferir a los ejidos sus bodegas y reconocer que la perspectiva es participar de la cadena de comercialización que representan las empresas harineras.

El esquema de comercialización de maíz que impulsó el capital privado de manera coordinada, frente al retiro de Conasupo, busca llegar hasta los niveles locales involucrando la estructura ejidal y si esto por alguna razón no fuera posible, a grupos que se constituyen para tal fin al interior de los ejidos. El comisariado del ejido Francisco Villa, señor Gustavo Pereyra, narra la forma en que diferentes agrupaciones participan de las iniciativas dominantes para la comercialización y el financiamiento, así como la situación de desconcierto y los obstáculos que enfrenta el campesino productor para participar de las iniciativas que impulsan los diversos agentes.

¹⁷² Fondo Acción Banamex, como institución financiera, maneja un recurso que llama “de capacitación técnica”, con el cual buscan equipar a las organizaciones, además de ofrecerles capacitación y desarrollo de recursos humanos mediante cursos de gestión empresarial.

Dice el comisariado: “Estamos en contacto con una integradora para la comercialización. El presidente de la Unión de Productores de Maíz de la CNC nos dijo el año pasado que podíamos disponer de 200 mil pesos para organizar la compra de maíz; que yo organizara un grupo de por lo menos 20 socios y se me daba el recurso. Ese dinero debería servir para el acopio, es decir, comprar báscula, hacer recibos, comprar papelería, controlar la calidad. Yo le dije, ¿cómo voy a administrar la compra de maíz en la comunidad si no administro ni lo de mi familia?. Pues ahí está el dinero, es cosa de que se organicen y lo soliciten. ¿Y para pagarle a los productores su maíz? Ah, para eso tu tienes que moverte; ahí está Maseca, Minsa o cualquier otro comprador que te puede apoyar”.¹⁷³

El comisariado termina su narración señalando que nunca les informó a los productores la posibilidad de conseguir ese recurso para administrar la comercialización del maíz del ejido, pues, además del desconocimiento de cómo administrar las compras, había que dedicar tiempo para conseguir compradores y tratar con ellos, lo cual resultaba imposible con el nivel de escolaridad de los integrantes, que es de segundo o tercero de primaria en promedio. De este modo, podemos percibir la actitud con la que muchos campesinos maiceros se relacionan con el mercado adoptando, como se señala en el trabajo de Contreras, una relación subordinada en relación con la aplicación del modelo económico en la región, participando de una integración pasiva al mercado nacional y adaptándose cada vez más a la opción de comercialización representada por Maseca.¹⁷⁴

5.2.4. El reto de construir un proyecto alternativo

Al finalizar el periodo de movilizaciones, en 1997, los campesinos de la región Frailesca se esforzaron en desarrollar un proceso social de reorganización que se reflejaba en diversas formas de construcción de la participación y de organización democrática, vinculadas a las demandas que enarbolaron en lo político, lo productivo o lo agrario. Estos esfuerzos de organización por parte de la sociedad frailescana no siempre resultaron exitosos. A los rescoldos de corporativismo y clientelismo que se seguían impulsando expresados en prácticas políticas heredadas de las anteriores formas de relación Estado campesinos, o que seguían formando parte de la cultura política local en la que se recreaban los actores, se

¹⁷³ Entrevista a Gustavo Pereyra. Ejido Francisco Villa. Marzo de 2001.

¹⁷⁴ Ver Enrique Contreras, *et al.*, 1999.

sumaban actitudes de protagonismo o exclusivismo de los “nuevos” dirigentes que orientaban los procesos organizativos.

Las recurrentes prácticas clientelares desarrolladas por las nuevas organizaciones, pero ahora para disputar los exiguos recursos que canaliza el Estado, son las mismas con las que, a menudo, se sigue reconociendo el comportamiento de los actores sociales y políticos, tanto de campesinos como de sus organizaciones y dirigentes, actitudes explicadas y justificadas, muchas veces, por la necesidad de responder a la situación de estrangulamiento económico a la que los ha llevado la aplicación de una política económica discriminatoria hacia el sector rural.

Cabría preguntarse entonces si con la aparición de Upromaíz tendieron a superarse los lastres de caudillismo y clientelismo que generalmente definieron la participación campesina de la región en las organizaciones oficialistas como la CNC y por tanto de la relación con el Estado, o bien, si la nueva organización estaba preparada para enfrentar los retos que se le plantearon, en particular los intentos de cooptación y desarticulación que desarrollaría posteriormente el gobierno del estado u otros actores que tenían en perspectiva consolidarse como una opción para los procesos políticos futuros. Este cuestionamiento vale también para las organizaciones campesinas como la OCIV y la UCPFV quienes habían orientado sus esfuerzos en la disputa por la tierra y por el acceso al poder municipal. Es por tanto importante analizar la dinámica a la que se enfrentaron las organizaciones a partir de 1997, año en que las movilizaciones de los campesinos amainaron y que, en apariencia, el gobierno volvió a tomar control de la dinámica social en la región

Veámos primero la dinámica que mantuvieron las organizaciones con un perfil económico productivo. Copdech surge formalmente en enero de 1993 y sus adherentes han permanecido leales a su principal líder Germán Jiménez, primero en la Organización Frailescana de Defensa y Producción (1978), después en la Asociación Agrícola Local de Villaflores (1982).¹⁷⁵ Es, por lo demás, la organización que históricamente ha reivindicado su adhesión y militancia activa en el PRI. Upromaíz, por su parte, tiene un historial más corto que se empieza a configurar a raíz del movimiento maicero de 1996. Pese a que en este movimiento participaron campesinos de varios municipios de la región de Valles

¹⁷⁵ Esta fue la plataforma para constituir, en 1985, la Unión Estatal de Productores de Maíz del estado de Chiapas, perteneciente a la CNC, organización que formalmente encabezó el movimiento maicero de la década de 1980.

Centrales (como Venustiano Carranza y Acala), al constituirse la organización, su sede y principales liderazgos quedaron ubicados en los municipios de la zona de La Frailesca, destacando como líderes del movimiento algunos comisariados o ex comisariados ejidales, quienes, en su mayoría, gozaban de prestigio y reconocimiento en sus respectivos ejidos.¹⁷⁶

Desde estas dos agrupaciones, en los últimos cinco años surgió un abanico de organizaciones orientadas a atender las necesidades de la producción maicera y bajo esa preocupación disputan o buscan representar una porción de campesinos (Figura 6). La mayoría de ellas tiene su sede en el municipio de Villaflores, lo cual muestra un evidente proceso de fragmentación de la representación en la región. ¿Cómo se explican estos procesos de desintegración organizativa en tan poco tiempo? La conformación de éste amplio espectro de organizaciones tiene como base dos elementos: por un lado, el desgaste que ha venido teniendo la CNC como alternativa para articular las demandas y representación de los campesinos; por otro, con el surgimiento de Upromaíz en el escenario organizativo local, quien a debido sortear todo un conjunto de situaciones propias de la necesidad de consolidar un proyecto que no nace con la tutela y respaldo oficial.

De hecho, la integración de Upromaíz fue el resultado de una movilización social amplia donde destacaron numerosos líderes, principalmente comisariados o ex comisariados, algunos de los cuales muy pronto no se sintieron representados en la organización, y la abandonaron en razón de que sus expectativas políticas y de poder no se vieron satisfechas. Los primeros en dejar Upromaíz fueron los líderes que representaban a los ejidos del municipio de Carranza. Poco tiempo después, en 1997, un dirigente originario de Jesús M. Garza, líder del grupo que posteriormente constituyó Campesinos Unidos (Cuprocen) de filiación priísta, también abandona la organización. En los años posteriores, otros dirigentes vinculados a la vieja estructura del PRI fueron expulsados o se separaron bajo acusaciones de corrupción. Surge así, en 1998, la organización Productores de Maíz de La Frailesca y Centro del estado de Chiapas (Promafcch), así como la Alianza de Organizaciones Sociales y Productivas del Estado de Chiapas (ADOSPCH), ambas de filiación priísta.

¹⁷⁶ Es el caso de Nabor Estrada Moreno que había sido presidente del Comisariado en el ejido Villaflores o Roque Salgado con el mismo cargo en San Pedro Buenavista, Villacorzo.

El proceso de fragmentación no se detuvo y después de 1999 surgieron dos nuevas organizaciones de maiceros en La Frailesca entre las cuales están Productores Asociados de Chiapas (Apach) y Upromaíz de Villacorzo, por inconformidad con los liderazgos, atomización que parece no tener fin. Estas organizaciones en su mayoría, sin embargo, buscan mantener entre los productores una “clientela” cautiva al interior de los ejidos y compiten por ella a partir de ofrecerse como la mejor vía para acceder a los recursos que ofrece la Alianza para el campo. Dada la tradición corporativa, todas ellas mantuvieron relación con dependencias y programas gubernamentales para operar recursos. Todas han realizado el esfuerzo por construir un soporte administrativo propio (cuadro 10), por medio del cual se proponen ser dignas de confianza por parte de las agencias de financiamiento o, en su caso, administrar los recursos oficiales como los del programa Alianza para el Campo.¹⁷⁷

Cuadro 10. Organizaciones de productores atendidas por el Programa Alianza para el Campo en La Frailesca, 2001.

Organización y año de inicio	Cobertura regional	Formas de decisión	Proyecto o demanda prioritaria	Alianzas políticas	Soporte administrativo
Copdech, A.C. 1995	Regional	Centralizada	Acceso a recursos de gobierno	PRI-CNC	Área de proyectos
Upromaíz, A.C. 1997	Regional	Colegiada	Producción sustentable, comercialización	PRD	Despacho
Cuprocen, A.C. 1998	Regional	Centralizada	Acceso a recursos de gobierno	PRI-CNC	Incipiente
Promafch, A.C. 1999	Municipal	Centralizada	Acceso a recursos de gobierno	PRI-CNC	Incipiente
Apach, A.C. 2001	Municipal	Colegiada	Comercialización	ANEC	Despacho
Upromaíz de Villacorzo 2001	Municipal	Centralizada	Acceso a recursos	PRD	Incipiente

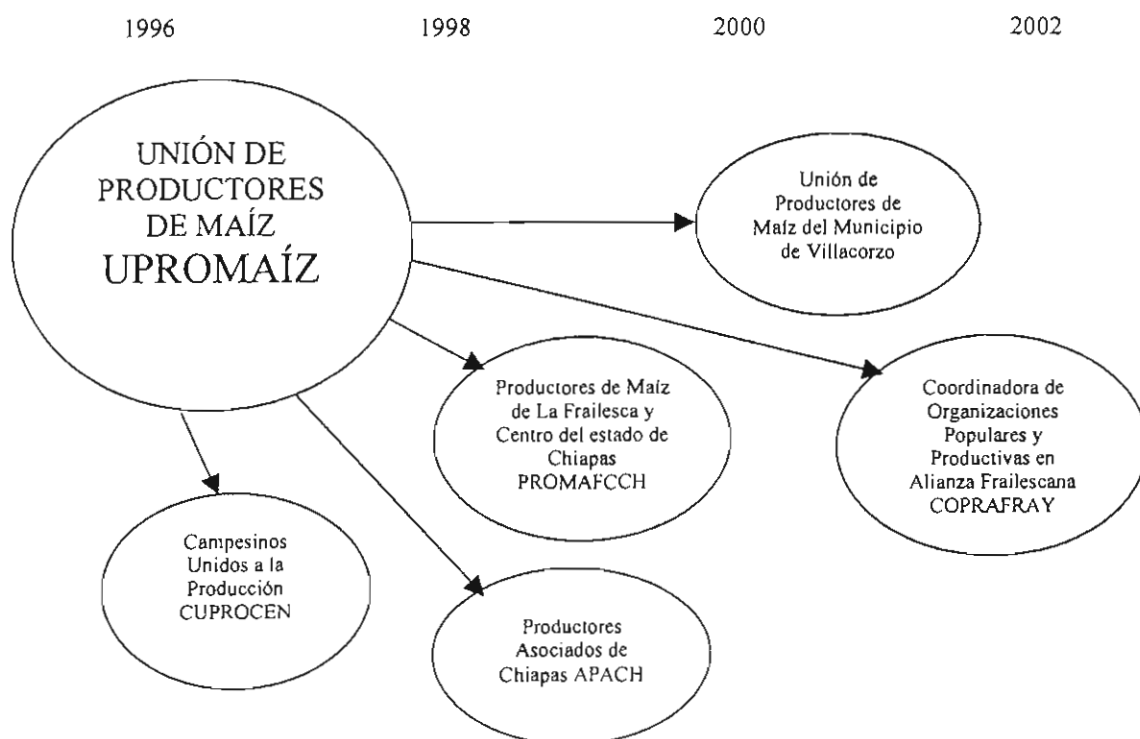
Fuente: Cuadro construido por el autor con base en información de campo.

En la formación de estas agrupaciones, sobre todo en su primera fase, jugaron un importante papel la labor divisionista desarrollada por los gobiernos interinos después de 1997, pero también el desgaste de las formas de organización corporativa de la CNC, la

¹⁷⁷ Al cierre de este documento (diciembre de 2002) tenemos noticias de nuevos procesos de fragmentación de Upromaíz con la formación de la Coalición de Productores Frailescanos (Coprofray), por parte de Martín Ruiz

competencia de los liderazgos emergentes ligados al oficialismo, así como la abierta definición política de los principales dirigentes de Upromaíz a favor de la candidatura de Pablo Salazar al gobierno de Chiapas. De este modo, las divisiones en esta última organización, disfrazadas de deserciones y expulsiones entre 1998 y 2000, estuvieron a la orden del día. A reserva de un estudio específico acerca de las causas de la dispersión organizativa que se generó desde Upromaíz, nos parece que un elemento determinante, es la postura de independencia frente a los gobiernos interinos, que en un principio fue adoptada por la organización. Esta toma de posición no fue lo suficientemente asimilada ni por los productores, ni por la mayoría de sus dirigentes, imponiéndose en la mayoría de los casos posturas exclusivistas que impidieron la consolidación de liderazgos y propuestas de largo plazo, que le dieran mayor cohesión a un proyecto de organización unitario.

Figura 6. Proceso de fragmentación de la Upromaíz 1997-2002



Otra vertiente del proceso de organización campesina en la región, en esta etapa, es la abiertamente vinculada a proyectos políticos de izquierda o que se reconocieron como parte de la sociedad civil, los cuales tienen una implantación más localizada y, por tanto, una cobertura menor. Entre estos procesos estarían los que surgieron vinculados a la lucha agraria durante 1995-97 en la región de Cuxtepeques, como los casos de la OCIV y la UCPFV y que, en los años posteriores a ese movimiento, prácticamente desaparecieron, ya fuera por la parcial solución a sus demandas o por la abierta represión de que fueron objeto. En el caso de la OCIV, aun antes de la muerte del dirigente Rubisel Ruíz y en el marco de las negociaciones de la AEDPCH con el gobierno para resolver los problemas agrarios durante 1997, la organización había ido adoptando una línea institucional y negociadora con las dependencias gubernamentales, abandonado un tanto el discurso radical y de confrontación que la había caracterizado.¹⁷⁸

Con la muerte de Rubisel la organización entró en una etapa de redefiniciones en relación con el carácter de la organización, sus objetivos, y de su dirigencia. En estas redefiniciones pesaba el sentido caudillista con el que se construyó la OCIV, pues a falta del líder que inspiraba la organización, se busca profundizar en la participación democrática para la toma de decisiones, lo cual de ninguna manera es garantía de que se consolide a futuro, aunque sus nuevos dirigentes tienen claro que como organización deberá mantener los vínculos con la sociedad civil. En el caso de UCPFV, sin caer en los vicios de caudillismo que caracterizaron a la OCIV en la etapa posterior a la declaratoria del fin del problema agrario, la organización ha tenido que enfrentar el hostigamiento sistemático por parte de policías, guardias blancas, así como de las autoridades priístas del municipio de Ángel Albino Corzo quienes han buscado desalojarlos de los predios que tienen bajo su poder. Aunque la UCPFV se mantiene como organización, al igual que la OCIV, el impacto social de éstas a finales de la década de los noventa ya no es el mismo que tuvo en sus inicios cuando, en un clima social muy confrontado, lograron cimbrar la estructura de poder en la parte sur-oriental de la región Frailesca.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Al respecto de las opciones y posibilidades de OCIV, *cfr.* Dolores Camacho, 2003, p. 183

¹⁷⁹ En la región existen otras expresiones organizativas directamente vinculada al Partido de la Revolución Democrática (PRD), como son los casos de Organización Campesina del Valle de Cuxtepeques (OCAVAC) en el municipio de La Concordia y la Convergencia de Productores Agrícolas en Villaflores.

Pasada la sorpresa y el trago amargo de la etapa de movilizaciones desarrolladas, la élite gubernamental y los grupos de interés recuperaron el entusiasmo en el impulso del proyecto neoliberal de transformación regional promoviendo la plena implantación del capital trasnacional. Lo hacen desestructurando y redefiniendo el quehacer del aparato institucional o lo que queda de él generalmente a favor de una política empresarial, logrando la desarticulación temporal de las expresiones más radicales del movimiento, corrompiendo liderazgos y fragmentando las formas de organización de las que se dotó el movimiento social para plantear sus demandas y necesidades y, en suma, incentivando entre los diferentes actores sociales la aceptación y la adopción de la vía de desarrollo propuesta como la única viable y posible.

El reto para las organizaciones campesinas era enorme. La estrategia que se expone como la única posible para enfrentar la crisis es la que plantea el capital. La dinámica de división y fragmentación en los ejidos parecía llevar a la plena individualización de las decisiones lo cual es respaldado por el proceso de entregar en propiedad las parcelas ejidales y la estrategia de impulsar apoyos crediticios bajo nuevas figuras organizativas a pequeños grupos al interior de los ejidos. Las organizaciones de productores que en algún momento emergieron como alternativa, son parte de este proceso de fragmentación. Así, los criterios de la propiedad y la ganancia tienden a ganar terreno en la sociedad frailescana donde los criterios del mercado es lo dominante.

La conformación y permanencia de las organizaciones campesinas que surgieron como referentes alternativos de lucha y resistencia, y que en su momento pudieron darle forma al descontento social y cristalizar diversos acuerdos de movilización, en el periodo posterior a su formación, han mostrado que son formas inestables que están sometidas a diversas presiones e intereses; que se mueven y reconfiguran, e incluso desaparecen, en función de las condiciones que les impone la dinámica social y política en la que existen. Las formas organizativas que en ese momento surgieron, al enfrentarse a las presiones y exigencias del poder, vivieron una acelerada recomposición. Estas organizaciones no podían ser permanentes, pues sus objetivos iniciales, sus métodos de lucha e incluso sus estructuras de dirección, pronto debieron enfrentar importantes redefiniciones. No hay pues organizaciones que sean de una vez y para siempre. La misma CNC, con toda su carga

histórica y fuerza social corporativa, en un periodo de redefiniciones como la actual, es obligada a replantear permanentemente sus estrategias de acción.

Al final de la década, las organizaciones sociales gozaban de mayores márgenes de autonomía frente al Estado, aunque éste no cejaba en su propósito de mantener su respaldo político por la vía del establecimiento de canchallas para los líderes que buscaban el compromiso de su subordinación, recreando con ello, una vez más, los elementos que han definido la vieja cultura política. En algunos casos esta subordinación era aceptada dando lugar a nuevas formas de corporativismo; cuando no era posible, las organizaciones y sus líderes eran objeto de persecución y aislamiento, sobre todo en el caso de las organizaciones que habían pugnado por la construcción de nuevas prácticas y acumulado una historia de lucha en contra de caciques y los grupos de interés.

El hecho de que una organización deje de ser el referente de lucha en un momento determinado o que incluso desaparezca como resultado del cambio de condiciones, no quiere decir que desaparezcan las redes sociales que dan vida a los movimientos o que deje de existir el sujeto social que los hace posible. La configuración del sujeto se produce en el diario acontecer a partir de las necesidades y conflictos sociales en torno a los cuales se plantean propuestas y replantean modalidades de acción, las que pueden derivar o encarnar en organizaciones sociales, en acciones coyunturales y en la construcción de opciones de transformación y cambio.

CONCLUSIONES

En el desarrollo de este trabajo, hemos buscado caracterizar la orientación y sentido que en los últimos veinte años adoptó la acción social en La Frailesca, a partir de su expresión conflictual como movimientos sociales, poniendo particular énfasis en el periodo de concreción del modelo neoliberal. Esta discusión la hemos desarrollado a partir del reconocimiento de las particularidades socio-históricas que definen a la región, en términos de su estructura social y productiva, las relaciones sociales y de poder locales, así como de las prácticas sociales y culturales desarrolladas por los actores sociales, los que en su diario ejercicio dan lugar a la construcción de identidades.

El reto que nos planteamos en esta investigación fue caracterizar el movimiento social aquí expresado y reconocer en el intrincado proceso histórico que define a la región, la configuración y persistencia de un sujeto social que, recuperando y recreándose en la memoria de las luchas y conflictos en la región, nos permitiera establecer ese hilo conductor que hilvane y explique las contradicciones históricas que han definido a esta sociedad, así como las perspectivas de su transformación, a partir de reconocer las opciones de futuro que se desprenden de los proyectos políticos y de las construcciones culturales en disputa.

De entrada nos negamos a encasillar al movimiento social expresado en la región en la discusión que de manera dicotómica, los ubica como nuevos o viejos en razón de si adquieren o no connotaciones éticas o culturales. Los movimientos sociales normalmente se producen cuestionando las decisiones que se toman en sociedades específicas definidas por la existencia de contradicciones y conflictos a su interior. Nos parece por tanto que un movimiento social, en sí mismo, al cuestionar las relaciones y prácticas sociales, es decir el modelo de sociedad que las sustentan, puede en mayor o menor grado poner en práctica un proyecto cultural alternativo cuya concreción no resulta nada sencilla, toda vez que su dinámica y desenlace no se produce al margen del sistema de relaciones. En el caso del movimiento popular expresado en la región Frailesca, es evidente que la esencia de este proyecto lo constituyen el replanteamiento de sus derechos agrarios expresado de manera recurrente así como la aspiración para un ejercicio político democrático abierto y libre que en diversas coyunturas expresaron diversos sectores de la sociedad civil.

Pese a las diversas expresiones de inconformidad en las que se continuó exigiendo el derecho a un pedazo de tierra por parte de los campesinos o la demanda de democratización de los espacios de poder político detentados por la élite local (propietarios y comerciantes), que al expresarse de manera reiterada por los sujetos sociales, podremos decir que estas formas de acción colectiva se constituyeron en la vía más importante para lograr la recomposición de las relaciones sociales y políticas que durante años caracterizaron la región. Otra vertiente de transformación es la que se produjo en la economía regional, la cual se apoyó en la relación corporativa que mantuvieron los ejidos con el Estado, por la vía de las organizaciones campesinas oficialistas fortalecidas mediante los diversos programas de fomento productivo, lo que constituyó la base política del modelo de desarrollo estatista que se impuso en la región.

El potencial productivo de la zona y los excedentes que generaba, llevaron a constituir un campesino tipo, productor de granos básicos estrechamente vinculado al mercado y por tanto al modelo de desarrollo capitalista que se promovía en el país. Estos campesinos fueron sin duda los beneficiarios del temprano reparto agrario que se produjo en la región, así como los más entusiastas impulsores de los programas de fomento productivo. Pero junto a esta conformación identitaria, estaba la expresada por otro tipo de campesino que reconocía la persistencia de formas de poder y apropiación territorial detentados por los herederos de la élite terrateniente, los que impedían la concreción de relaciones no excluyentes que la sociedad local reclamaba mediante diversas formas de movimiento social. Estas formas de acción social y los posicionamientos políticos que implicaban como vías alternas a la vez que complementarias para resolver las necesidades, permitieron la conformación de identidades sociales colectivas que se negociaban cotidianamente en función de las valoraciones de las correlaciones de fuerza hechas por los sujetos.

Uno de los rasgos que definen al movimiento social que en diferentes coyunturas aquí se ha expresado, es que a pesar de que en muchos sentidos la confrontación adquirió una dimensión clasista determinada por el sentido preponderante que en diferentes momentos ha tenido la lucha de los campesinos por la tierra, el cuestionamiento que diversos actores han hecho de las formas autoritarias bajo las que se ha ejercido el poder político y territorial, lleva al movimiento a adquirir un carácter popular que lucha por concretar diversos derechos sociales y democráticos.

Si quisiéramos establecer los elementos de continuidad que se reconocen entre el movimiento agrario de los años treinta y el movimiento campesino de los setenta, e incluso de los noventa, podríamos decir que la lucha por la tierra y por la desestructuración del poder terrateniente, es uno de los ejes que permitió darle continuidad a las luchas históricas de los campesinos frailescanos a lo largo de casi un siglo.

Pero junto a la lucha agraria, es necesario reconocer, en las diversas movilizaciones sociales, la persistencia de demandas democráticas que se expresaron como un sistemático cuestionamiento a los grupos de poder local y sus formas de ejercerlo. Intentando encontrar el hilo de su continuidad histórica podemos decir que ambas dimensiones definieron en lo fundamental, antes y durante la concreción de las propuestas de política neoliberal en la región y antes y durante los años álgidos de la coyuntura zapatista, el carácter y sentido de las diversas expresiones del movimiento social frailescano. Era por tanto un movimiento popular que combinaba las demandas agrarias y las de la ciudadanía. Estas dos exigencias, expresaban los nudos y necesidades fundamentales de la sociedad local y hacían que en lo político cotidiano, se construyeran relaciones y posicionamientos entre los actores y las clases fundamentales. Esas exigencias aparecían una y otra vez en los momentos de inconformidad social al permanecer en la conciencia colectiva como necesidades no resueltas. Éstas, al ser planteadas por el sujeto social y al concretarse en diversas formas de movilización, cimbraban de hecho la estructura social, así como la estructura política y jurídica que la respaldaban.

El persistente movimiento agrario, después de varios años, logró la recomposición del régimen de propiedad heredado y reconstruido por los políticos liberales del siglo XIX. Esta conquista, junto a las políticas y programas de fomento productivo impulsados por el Estado mexicano a mediados del siglo recién terminado, permitieron no solamente resolver las condiciones de la reproducción social y campesina en la región, sino también coadyuvar en la perspectiva de su legitimación, toda vez que el Estado buscó mantener con los campesinos una relación basada en la subordinación a sus definiciones políticas. La vía para lograr lo anterior implicó la construcción de diversas formas de lealtad campesina para con los gobernantes en turno, las organizaciones corporativas y las expresiones de liderazgo que de ellas emanaban, así como de prácticas sociales y culturales que la reproducían, tales

como el clientelismo y el favoritismo, recreadas en los más diversos espacios sociales y comunitarios.

No obstante, frente a estas formas de supeditación de la acción social a un Estado que parecía omnipresente, aparecían una y otra vez expresiones de inconformidad de diversos grupos al interior de la sociedad regional, cuestionando las formas de poder prevalecientes y las prácticas que le daban sustento. Se reconstituía así, un sujeto social e histórico que era recuperado generalmente por los grupos campesinos pero también por sectores urbanos, que replanteaba las viejas demandas reconocidas en la lucha por la democratización del sistema de relaciones y la conquista de derechos que le habían sido escamoteados por el sistema político local; que se construía y recreaba a imagen y semejanza del sistema de relaciones políticas en el país. Es por ello que el movimiento campesino y social de la región, ya sea en los años del corporativismo estatista ó en los del neoliberalismo a ultranza, formaba parte, sin duda, del amplio movimiento popular que en todo el país pugnaba por la democratización de las asfixiantes relaciones sociales y políticas que caracterizaron a la sociedad mexicana.

A pesar de ello, los grupos de poder constituidos sobre la base de la propiedad territorial no desaparecieron del todo, sino más bien, se adaptaron a las exigencias que les demandaban las diversas iniciativas modernizadoras que se impulsaban, orientándose cada vez mas hacia actividades vinculadas al comercio, la usura y los servicios. El carácter de las relaciones políticas seguía estando definido por el verticalismo con el que se tomaban las decisiones y la concepción patrimonialista bajo la cual se detentaban los espacios de decisión y se participaba en las organizaciones corporativas de representación.

Las modalidades bajo las cuales se habían construido las relaciones políticas sustentadas en prácticas como el corporativismo, la supeditación y el clientelismo, conformaron una cultura que garantizó la permanencia de un sistema de lealtades políticas que a la vuelta del tiempo ha sido muy complicado romper. Si bien los diversos movimientos sociales que se desarrollaron durante todo este periodo, al expresar sus demandas, a menudo buscaron poner en práctica propuestas culturales alternativas, centradas en la democratización de las relaciones sociales y en el impulso de formas de autogestión, la fuerza de las viejas prácticas clientelares y de compadrazgo en que sustentaban la cultura política local, volvían a hacerse presentes en las diversas coyunturas y acontecimientos.

La fuerza con la que el Estado impulsó durante años diversos programas de fomento productivo, así como la dosificación de la demanda agraria, mostraron que la disputa fundamental, por un largo periodo, era entre quienes respaldaban la estrategia gubernamental de legitimación y contención de las demandas sociales, que a la postre se traducían en el fortalecimiento de las formas corporativas de gestión, y el planteamiento de quienes seguían reconociendo la persistencia de sus viejas demandas expresadas en la necesidad de tierra y democracia. Estas exigencias eran sustentadas en la permanencia de formas patrimoniales de concentración y posesión territorial, así como de las relaciones sociales y políticas que las respaldaban.

A la mitad de la década de los ochenta, con el advenimiento de la crisis, La Frailesca era clara destinataria de un nuevo modelo productivo que se impulsaba en todo el país. La modalidad discrecional bajo la que el régimen priísta inició la aplicación de las propuestas de política neoliberal, la percepción que se generó en los campesinos frailescanos junto a las disposiciones políticas y subjetivas que se fueron construyendo, crearon las condiciones para que se generara una importante movilización que involucró a campesinos de diversas condiciones sociales. La respuesta del Estado al movimiento campesino maicero, más allá del contexto de disputa política entre dos grupos de poder en que se dio, no era más que una muestra del modelo de relación con la sociedad que en adelante defendería el Estado y la advertencia de que las condiciones de negociación habían cambiado. Se iniciaba en La Frailesca el fin de la alianza histórica con los grupos campesinos que por años le habían sido fieles. Este movimiento, pese a estar dirigido por grupos y corrientes oficialistas, ponía en práctica una política cultural alternativa consistente en una ruptura con el sistema de lealtades y subordinaciones que había caracterizado la relación Estado- campesinos.

En esta perspectiva rupturista, el movimiento maicero coincidía con las movilizaciones agrarias y por el pleno reconocimiento de sus derechos desarrolladas en los años anteriores; sin embargo, esta postura muy pronto fue replanteada, al imponerse a la postre formas de negociación cupulares que ponían a salvo los intereses y proyectos políticos de sus líderes. No obstante, las disputas y conflictos entre diferentes grupos de interés que definieron al movimiento maicero de 1985-86, sentaron las bases del proceso de ruptura de la relación corporativa que, durante por lo menos cuarenta años, diversos grupos campesinos habían mantenido con el Estado. A este proceso contribuyó el deterioro de las condiciones para la

reproducción generado por la crisis, situación en la que se montaron los líderes oficialistas para enarbolar la demanda de aumento a los precios del maíz.

Al iniciarse la década de los noventa, la democratización de las relaciones políticas bajo la forma de un juego abierto (en la concepción de la democracia liberal), seguía siendo letra muerta. La mayoría de edad como ciudadanos y la concreción de derechos plenos seguía sin aplicarse, pues las posibilidades de acceso a los espacios políticos de decisión y las formas de participación, seguían siendo definidas y controladas por los caciques vinculados al viejo sistema de poder, pese a los aires de recomposición política que con el auge del neocardenismo se empezaban a respirar en la región.

No obstante, en esa circunstancia ya se venían manifestando posturas diferenciadas al interior de la elite política local, en la que diversos actores cuestionaban las prácticas autoritarias en las que se sostenían los grupos de poder. Así, la desarticulación de las relaciones verticales, en parte sostenidas por las prácticas corporativas y cleintelares, no fue inmediata; muchas de esas prácticas aún siguen configurando la cultura política de los actores, aun después de las movilizaciones políticas de los años recientes, corroborando así que los cambios culturales son los que se dan de manera más lenta. Sin embargo, el sistemático cuestionamiento al que fueron sometidas por parte del movimiento social, buscando poner en práctica una contracultura de participación y decisiones desde abajo, la que se refleja en la disputa por los espacios de decisión y gestión local (como son los ayuntamientos y los comisariados ejidales), sin duda contribuyó para que se iniciara el proceso de reconstitución de las relaciones políticas.

Entre los principales factores, que como resultado de los conflictos y disputas de finales de la década anterior coadyuvaron a este proceso de recomposición política, podemos mencionar los siguientes: el desenlace del movimiento maicero que muchos de los participantes leyeron como un fracaso en su conducción; las pugnas entre grupos campesinos afines a las posiciones oficialistas, quienes disputaban el control de los puestos políticos a nivel de los ejidos; la pobre atención de que fue objeto la región al final de la década de los ochenta, como resultado de los escasos o nulos recursos destinados al fomento productivo; la aparición de posiciones políticas alternativas que, acicateadas por el auge del movimiento popular y democrático nucleado en torno al neocardenismo, buscaban ganar espacios en los gobiernos municipales y confrontaban las posturas excluyentes del

priísmo local; y, finalmente, el proceso de desmantelamiento del entramado institucional sobre el que durante años se sustentó la política productivista de la región y que en cierto sentido era la base de un manejo corrupto de los recursos en el que participaban funcionarios, líderes políticos y campesinos.

Esta disposición subjetiva observada de manera sistemática al interior de la sociedad frailescana, particularmente durante el periodo de la liberalización económica, orientada al cuestionamiento del sistema político de carácter autoritario, no necesariamente implicaba la recuperación de una postura antisistémica por parte de los actores, en relación con el modelo de país y al proyecto de región que en lo económico se venía imponiendo. En este aspecto los actores mas bien buscaron en una situación de gran debilidad, que se les tomara en cuenta.

El cuestionamiento lento pero sistemático a las formas corporativas de organización y representación, se produjo como un proceso desde abajo más que como una ruptura desde las élites. Para principios de los noventa, la hegemonía de las posiciones oficialistas y el pobre señalamiento a los elementos constitutivos del programa neoliberal por parte de los actores políticos, mostraban la adscripción de La Frailesca al modelo de desarrollo y su aceptación, como la única vía posible para salir de la crisis. Frente a la situación de anomia a la que se había conducido a las organizaciones campesinas, según las palabras de Sergio Zermeno, las organizaciones parecían aceptar como válidas las propuestas que les ofrecía el modelo de desarrollo que se implantaba.

La alianza con sectores empresariales y grupos de poder proclives a la modernización para transformar la región desde una perspectiva capitalista, era una iniciativa política que se empezó a poner en marcha desde el inicio de la administración garridista. Estas orientaciones estaban a tono con los programas de desregulación y reconversión productiva, que se habían adoptado para el conjunto de la economía en el país, y que serían ratificadas con las decisiones del gobierno salinista, al concretarse la apertura comercial y la reforma rural al final de su sexenio. Así, el programa proempresarial para la región no se detendría en los años de turbulencia que siguieron al levantamiento zapatista y que de una manera u otra alcanzaron a La Frailesca, aunque a menudo los grupos de poder local lo nieguen.

El movimiento democrático y popular de 1995-96 de La Frailesca, bien puede aparecer como un reflejo de la efervescencia política que vivía el resto de la entidad, pero es dable

reconocer en él rasgos particulares en razón de las peculiaridades sociales e históricas de la región. Existía ya una sociedad civil, más madura que avanzaba en destrabar las viejas formas de representación y se aprestaba a participar en la construcción de un modelo de sociedad más abierto. Convergía con el movimiento de la sociedad civil chiapaneca en cuanto a superar el carácter vertical y autoritario del sistema de relaciones sociales y políticas en la entidad, pero se alejaba de éste en razón de que los actores se propusieron, además, avanzar en la ruptura de las relaciones corporativas alimentadas por el Estado durante años, contribuyendo con ello a deconstruir las prácticas políticas que alimentaron la subordinación hacia las iniciativas del Estado.

No habría que olvidar que los grupos de poder tradicional herederos del viejo sistema de finca, representados por ganaderos y comerciantes, venían definiendo posiciones nuevas como resultado de la participación y formación de muchos de sus representantes en espacios universitarios quienes, en muchos sentidos, abrazaban las nuevas propuestas de modernización, no obstante que la sociedad local siguiera en lo fundamental adscrita a las condiciones de la vida rural. Los campesinos y otros actores sociales como las mujeres también se habían transformado y tendían a negociar identidades nuevas como resultado del cambio de condiciones económicas y sociales en el país y del ambiente social y político que se configuraba también localmente.

De este modo, el movimiento social en La Frailesca participó con fuerza en la búsqueda de la democratización de las relaciones políticas. El acceso de la sociedad regional a los espacios políticos y de gestión mediante opciones distintas a la oficial, replanteaba también la añeja demanda de acceso a la tierra, hecho que mostró, en si mismo el alto grado de confrontación entre los actores participantes. Por ello resultó importante el movimiento que se generó por demandas productivas desde los ejidos, con una postura de independencia frente a las organizaciones oficialistas, mostrando con ello un cuestionamiento a las formas corporativas de canalizar y resolver las demandas sociales desarrolladas en el pasado.

La influencia del zapatismo para relanzar el movimiento popular y democrático en la Frailesca, replanteando y actualizando viejas demandas, fue fundamental. En esta circunstancia aparecían muchos de los elementos de identidad que definen al sujeto social, entre los que podemos recuperar, el forjado en las históricas luchas agrarias que conformaron, mal que bien, una mentalidad campesino-ejidalista contrapuesta a la finquera,

que daba cohesión al movimiento en los momentos álgidos de lucha y a la identidad regional maicera construida desde principios de siglo, y aún antes, recreada durante los años de auge productivista más recientes.

Aparecen también como protagonistas importantes, jóvenes, mujeres o profesionistas que si bien seguían siendo portadores de una identidad campesina centrada en la vida rural, aportaban al movimiento la visión y experiencia que les dejaba su formación en otros ámbitos, su condición de trabajadores en zonas urbanas, o el nuevo rol que como resultado de la crisis han tenido que jugar las mujeres para garantizar la reproducción de la familia formando parte de diversas redes y construyendo opciones de participación. Pero además, el tipo de campesino que se movilizó en los años noventa como resultado de la crisis, no es un campesino que haya centrado en la actividad agrícola la forma de su reproducción, sino que ésta ha buscado ampliarse a otras actividades vinculadas al comercio o a la prestación de servicios, a menudo más allá del lugar de origen.

La sociedad regional al finalizar la década de los noventa había cambiado en muchos sentidos y buscaba abrir los espacios que le permitieran canalizar y desarrollar nuevas formas de expresión. Así, el movimiento campesino y social de La Frailesca al mismo tiempo que adoptaba posiciones rupturistas en relación con el sistema, pugnaba por su inclusión en él; sus demandas denotaban expresiones clasistas, pero las alianzas que se conformaban eran de carácter plural y diversas; se pugnaba por el acceso a los espacios de poder y se buscaba la conquista de derechos ciudadanos; al mismo tiempo que se actuaba desde la estructura de gestión corporativa, se construía la participación desde las redes locales de interacción; eran movimientos que se buscaban ser tomados en cuenta y acceder al ámbito institucional, al mismo tiempo que se esforzaban por mantener márgenes de autonomía frente al poder. En síntesis, a la vez que se luchaba por demandas que entraban dentro del cálculo racional de acceso a ciertos recursos, se ponía en práctica una política cultural y se construían identidades definidas por las prácticas sociales alternativas que se ponían en juego.

Quizá el resultado más importante de las diversas expresiones de este periodo de lucha social en la región haya sido la evidente pluralidad social y política que se expresó después de 1997, lo que permitió la implantación de un juego político abierto en los procesos electivos. En el plano social, esto vino a terminar, en definitiva, con la relación unívoca y

corporativa que había mantenido el Estado con las organizaciones campesinas y los ejidos. Cabe analizar, sin embargo, si con las nuevas organizaciones que surgieron se han eliminado las prácticas corporativas y clientelares, o si, en su defecto, solamente se reprodujeron los pequeños cacicazgos o feudos que definieron a la CNC y a las viejas organizaciones campesinas. Aunque así fuera, lo cierto es que en el plano social, la relación Estado-campesinos no sigue siendo la misma pues hoy las organizaciones se ven obligadas a negociar, a establecer alianzas y a competir entre sí por el acceso a los recursos.

Pese a la existencia, en este periodo, de un importante movimiento cívico en la región, la política neoliberal nunca fue cuestionada sino que, por el contrario, en plena efervescencia social, ésta avanzaba en su concreción. Tampoco se cuestionó el sistema de mercado abierto, base de la nueva política de precios. Por el contrario, los actores sociales reivindicaban su inclusión en las decisiones que les afectaban, así fuera bajo la plena aplicación del modelo de democracia liberal, representativa y electiva, que hasta antes del proceso electoral de 1994 había sido inexistente. El movimiento de los productores más bien demandaba su participación en la nueva estrategia de desarrollo que se impulsaba; el cual, por las características de su aplicación (falta de créditos, precios, desarticulación institucional), venía excluyéndolos, aunado a las exigencias de los derechos políticos y sociales que también eran reclamados.

En el plano económico, por tanto, el movimiento social fue incapaz de madurar un planteamiento alternativo. Ello permitió a los agentes impulsores del modelo, avanzar en la concreción de diversas iniciativas. La política neoliberal encontró las puertas abiertas después de 1977, periodo en el que se lograron aparentemente mayores niveles de gobernabilidad en la entidad, pues al mismo tiempo que el gobierno lograba resolver la mayor parte de las demandas planteadas por las organizaciones de la sociedad civil bajo formas aparentemente legales, establecía un acceso más equitativo a los espacios de poder local. Con ello, también se creaban las condiciones para la aceptación del modelo de desarrollo de mercado y en particular para la concreción del proceso de privatización de las parcelas ejidales.

En el nuevo modelo de sociedad que se impulsa desde el poder en la región, el capital empresarial adquiere particular relevancia, comandado por diversas firmas trasnacionales que desde hace algunos años operan en procesos agroindustriales o bien en la distribución

de semillas. A esta visión se adscribe un importante sector de la elite, que con algunos representantes, ha participado en las diferentes administraciones gubernamentales durante el actual periodo de la política neoliberal, definiendo las modalidades bajo las que debe concretarse las orientaciones del nuevo modelo productivo en la región.

Así, los campesinos y ejidos que durante años se orientaron a la producción de maíz y tuvieron su peso específico en la medida en que coadyuvaron a la producción de granos para el mercado interno, bajo el actual modelo están siendo permanentemente amenazados, porque su actividad es sistemáticamente cuestionada. Hoy en día es la agroindustria preferentemente la trasnacional la que establece la lógica bajo la que se habrá de producir al señalar y condicionar los paquetes tecnológicos que se deben aplicar. A ello contribuye la acción institucional que impone a las organizaciones de productores esquemas de comercialización bajo las condiciones de precios que define el mercado desregulado.

El modelo, por lo demás, mantiene y genera una sensación de incertidumbre entre los actores sociales, no por el hecho de presentarse como la única opción posible, sino sobretudo por la incapacidad que a lo largo de veinte años los actores han mostrado para revertir la política económica definida e impulsada, de manera unilateral, por parte del capital empresarial y el Estado. Tales son los saldos del movimiento campesino que en diferentes momentos pugnó por mejorar las condiciones de precios de la producción regional, pero se topó con la inflexibilidad de la política gubernamental. Incluso da la impresión de que los saldos organizativos de ésta fase de movilización han sido cooptados por los impulsores del modelo neoliberal que se viene imponiendo sin problema alguno. Su concreción se ve auspiciado por la existencia de una basta red de intereses compartidos por los líderes de las organizaciones, la acción institucional y las empresas agroindustriales.

Después de la fase de lucha y resistencia de 1995-97 contra las estructuras de poder en la región, y ante la fuerza y los avances en la concreción del modelo neoliberal, diversas organizaciones entraron en un proceso de división y desgaste. Algunas de ellas, para sobrevivir, han tenido que insertarse y participar de las políticas y aceptar muchas de las propuestas que les plantea el modelo de desarrollo por la vía de las instituciones gubernamentales. De esta forma se proponen acceder a recursos y ganar espacios en los procesos dominados por el capital y las empresas.

En términos sociales la aplicación del modelo se viene traduciendo en una dinámica de exclusión y polarización social y ha significado el deterioro productivo y de las condiciones de vida de la población, en el que las formas tradicionales de producción no encuentran alternativa. Frente a ello, la respuesta de la sociedad regional no se limita a las proyectos y propuestas que desarrollan algunas de sus expresiones organizativas, ya sea económicas o políticas, o los sectores depauperados en su actitud ambivalente de rechazo o inserción en el modelo.

El proyecto que se presenta como hegemónico y que a menudo desalienta la posibilidad de respuestas alternativas, ha conllevado importantes costos sociales y desencanto entre los actores. Las formas de conflicto social que en los últimos años ha conocido la región en las que se ha puesto en cuestión la estructura agraria y las formas de ejercicio del poder, ha implicado una recomposición de las relaciones sociales que definían a la sociedad regional y la conquista de espacios ciudadanos. Hoy sin embargo ha emergido una nueva forma de poder que avalado por las elites políticas nacionales y sustentado en las propuestas de inserción en una economía global, viene imponiéndose como modelo de vida en el plano económico, político y cultural.

La construcción de un proyecto alternativo que considere las necesidades sociales implicará el que se puedan gestar dinámicas de poder alternativas frente al poder hegemónico. La respuesta de los actores sociales se viene produciendo en la dinámica de la vida social misma en las que se incuban respuestas que a menudo adoptan la forma de movimientos populares. Ello implicará ir madurando una propuesta alternativa a la que nos presenta el modelo económico, que cuestione la inviabilidad de las propuestas dominantes que se empiezan a mostrar como socialmente ineficaces.

BIBLIOGRAFÍA

Aguilar Anzueto, Leonel, 1998, Los procesos de organización social y la producción de maíz en los municipios de Villaflores y Villacorzo, Chiapas, Tesis de Maestría, Universidad Autónoma Chapingo, México.

Alvarado M., Arturo, 1996, "Entre la reforma y la rebelión: las transformaciones del campo mexicano en el salinismo", en: *Agricultura y actores sociales en la construcción de espacios regionales*, CNRS-Colegio de México-ORSTOM, México.

Álvarez, Adolfo, *et. al.*, 1988, "Reorganización del sistema lechero bajo la inducción de la Nestlé. El caso de La Frailesca, Chiapas", en: Felipe Torres. (Coord.), *El sector agropecuario mexicano después del colapso económico*, 1998, Plaza y Valdez Editores, México.

Benjamin, Thomas Louis, 1995, *El camino a Leviatán. Chiapas y el Estado mexicano, 1891-1947*, Colección regiones, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México.

Blanco, María de las Mercedes, 1980, Estudio de un proceso regional: El caso de La Frailesca, Chiapas, Tesis de licenciatura, Universidad Iberoamericana, México.

Cadena Roa, Jorge, 1991, "Notas para el estudio de los movimientos sociales y los conflictos en México", en: *El estudio de los movimientos sociales: teoría y método*, Muro y Canto Chac (Coords.), El Colegio de Michoacán-UAM-X, México.

Cadena Roa, Jorge, 1999, "Acción colectiva y creación de alternativas", en: *Chiapas 7*, Era-Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México.

Cadena Roa, Jorge, 2001, "State Pacts, Elites, and Social Movements in México's Transition to Democracy", en: Goldstone, Jack A. (Edit.), *States, Partie, and Social Movements*, Cambridge University Press.

Calva, José Luis, 1989, *La nueva crisis agrícola 1982-1987*, Editorial Fontamara, México.

Calderón, Fernando, 1995, *Los movimientos sociales y la política. La década de los ochenta en Latinoamérica*. Siglo XXI editores-UNAM, México.

Calderón, Fernando y Mario R. **Dos Santos**, 1991, *Hacia un nuevo orden estatal en América Latina. Veinte tesis sociopolíticas y un corolario*, CLACSO, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile.

Camacho Velásquez, Dolores, 2003, Organizaciones campesinas en La Frailesca, Chiapas: nuevas formas de organización y de análisis, Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Camacho, Dolores y Arturo **Lomelí**, 2000, *Francisco José Grajales Godoy: a caballo hacia la modernidad*, Coneculta, Gobierno del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez.

Canabal, Beatriz, *et. al.*, 1994, “El movimiento campesino en Chiapas y la coyuntura del 94”, en: *Cuadernos agrarios*, Num. 8-9, Nueva época, México.

Cartón de Grammont, Hubert, 1995, “Nuevos actores y formas de representación social en el campo”, en: *El impacto social de las políticas de ajuste en el campo mexicano*, Jean-Francoise Prud’home (Coord.). ILET-Plaza y Valdés editores, México.

Carrasco Licea, Rosalba y Francisco **Hernández** Puente, 1989, “Los recursos al campo”, Balance Económico, *Perfil de La Jornada*, México.

Casahonda, José, 1999, *50 años de revolución en Chiapas*, Rodrigo Núñez editores, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Castillo, María Teresa, 1988, El movimiento de la Unión de Productores de Maíz de Chiapas, Tesis de Maestría, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.

Castro Soto, Gustavo, 2001, El maíz transnacional contra la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas, *Chiapas al día* No. 258, CIEPAC, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Contreras, Enrique, *et. al.*, 1999. “Entre la explotación y la exclusión: la producción de alimentos básicos en Chiapas y Oaxaca”, en: Luz María Espinosa Cortés, (Coord.), *Sector agropecuario y alternativas comunitarias de seguridad alimentaria y nutrición en México*, Plaza y Valdez editores-UAM, México,

De la Peña, T. Moisés, 1957, *Chiapas económico*, Tomo III, Departamento de Prensa y Turismo, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

De la Peña, Guillermo, 1993, "Poder local, poder regional: perspectivas socioantropológicas", en: *Poder local, poder regional*, Padua, Jorge y Alain Vanneph (Comps.), El Colegio de México/CEMCA, México.

Foucault, Michael. 1985, *¿Cómo se ejerce el poder?*, Revista Siempre, México.

Escalante, María de la Paloma, 1995, "Cambio y políticas modernizadoras en Chiapas", en: Guillén, Diana, (Coord.), *Chiapas: Una modernidad inconclusa*, Instituto Mora, México.

Escobar, Arturo, Sonia E. **Álvarez** y Evelina **Dagnino**, 2001, *Política cultural y Cultura política: una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*. Claudia Montilla (Trad.) Taurus-ICANH, (s/l)

Escobar, Arturo, 1992, Culture, Economics, and Politics in Latin American Social Movements, Theory and Research, en: *The Making of Social Movements in Latin America, Identity, Strategy and Democracy*, Escobar, A. y S. Álvarez (Edits.), USA.

Estefanía, Joaquín, 2000, *Contra el pensamiento único*, Punto de lectura, España.

Fernández, Luis M. y María **Tarrio**, 1983, *Ganadería y Estructura Agraria en Chiapas*, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.

Fernández Reyes, Otto, 1994, "Agenda agraria mexicana: el eslabón débil de la refundación capitalista", en *El Cotidiano* No. 61, Revista de la realidad mexicana actual; México.

Foweraker, Joe, 1989, "Los movimientos populares y la transformación del sistema político mexicano", en: *Revista Mexicana de Sociología*, Año LI, Núm. 4, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

Foweraker, Joe, 1995, *Theorizing social movements*, Pluto Press, Colorado, USA.

Foweraker, Joe, y Ann. L. **Craig**, 1990. *Popular movements and Political change in México*. The Center of U.S.- Mexican Studies, University of California, San Diego.

García de León, Antonio, 1978, *Diagnóstico antropológico de la región de La Frailesca*, Secretaría de Recursos Hidráulicos, Mimeo.

García de León, Antonio, 1985, *Resistencia y Utopía. Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia*, Tomo II, Ediciones Era, México.

García de León, Antonio, 1995, "Chiapas: los saldos de un año de rebeldía", *Perfil de la Jornada*, México.

García de León, Antonio, 2002, *Fronteras interiores. Chiapas: una modernidad particular*, Editorial Océano, México.

Garretón, Manuel Antonio, 2001, *Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina*, Serie Políticas sociales, CEPAL-ECLAC-ONU, Santiago de Chile.

Gledhill, John, 1998, *La dialéctica región-centro-nación al fin de siglo: poderes regionales, poderes transnacionales y la transformación del Estado*. Ponencia en el Colmich, Departamento de Antropología Social, Universidad de Manchester, Manchester.

Gómez, Heriberto y José Nahed, (s/f), La ganadería bovina de doble propósito en la región Frailesca, Chiapas: clasificación y diagnóstico, El Colegio de la Frontera Sur, Mimeo.

González Casanova, Pablo. 1995. "Lo particular y lo universal a fines del siglo XXI", en: *Sociológica, Actores, clases y movimientos sociales I*. Año 10 Número 27. Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, México.

González Esponda, Juan, 1980, *Chiapas. Alianza campesina 10 de Abril: un intento de organización independiente*, Mimeo.

González Esponda, Juan, 1989, "Alianza campesina 10 de Abril", en: *Movimiento campesino chiapaneco 1974-1984*, Volumen II, Tesis de licenciatura, Área de Ciencias Sociales, UNACH, San Cristóbal de Las Casas.

González Esponda, Juan, y Elizabeth Pólito, 1994, "Notas para comprender el origen de la rebelión zapatista" en: *Chiapas I*. Era. México.

Guido, Rafael y Otto Fernández, 1989, "El juicio al sujeto: un análisis de los movimientos sociales en América Latina", en: *Revista Mexicana de Sociología* Año LI, Núm. 4, IIS-UNAM, México.

- Guillén**, Diana, 1998 *Chiapas: 1973-1993. Mediaciones, política e institucionalidad*. Instituto Mora, México.
- Gunder Frank**, André y Marta **Fuentes**, 1989, "Diez tesis acerca de los movimientos sociales" en *Revista Mexicana de Sociología*, Año LI, Núm. 4, México.
- Harvey**, Neil, 1990, "Peasant Strategies and Corporatism in Chiapas", en: *Popular Movements and Political Change in México*, Joe Foweraker & AnnL. Craig (Edits.), University of California, San Diego, California.
- Harvey**, Neil, 2000, *La rebelión de Chiapas. La lucha por la tierra y la democracia*. Ediciones Era, México.
- Heilbroner**, Robert L., 1989, *Naturaleza y lógica del capitalismo*, Siglo XXI editores, 1ª. Edición en español, México.
- Hernández**, Luis, 1992, "Las convulsiones rurales", en Moguel *et. al.*, *Autonomía y nuevos sujetos sociales en el desarrollo rural*, Siglo XXI-CEHAM. México.
- Hernández Sarmiento**, Oel, 1998, Políticas de financiamiento a la producción de maíz en Chiapas, Tesis de Maestría, Universidad Autónoma Chapingo, México
- Hirsch**, Joachim, 1996, *Globalización, capital y Estado*, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México.
- Holloway**, John, 1992, *La reforma del estado: capital global y Estado nacional*, Mimeo.
- Ibáñez Aguirre**, José Antonio, *et. al.*, 1998, *Transformaciones mundiales, crisis y deudas. La inserción de México en las corrientes económicas globales*, Instituto de Análisis y Propuestas Sociales, México.
- Jeannot**, Fernando, 1990, *La modernización del Estado Empresario en América Latina. Hacia una teoría del sector público*, Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, México.
- Jiménez Ricárdez**, Rubén, 1995, "Las razones de la sublevación", en: *Chiapas 3*, Era México.

Jiménez Solares, Carlos, 2000, "Reflexiones en torno al modelo neoliberal (Una construcción desde el ámbito de lo político), en: *Revista Textual*, Num. 36, (Nueva Época), Universidad Autónoma Chapingo, México.

Krischke, Paolo J., 1993, "Actores sociales y consolidación democrática en América Latina: estrategias, identidades y cultura cívica", En: *Fermentum, Revista Venezolana de Sociología y Antropología*, No. Especial 6 y 7, Mérida, Venezuela.

Laraña, Enrique, 1999, "La reconstrucción del concepto de movimiento social", en: *La construcción de los movimientos sociales*, Alianza Editorial, Madrid.

Lechner, Norbert, 1996, "La (problemática) invocación de la sociedad civil", en: *Seminario: Sociedad civil, movimientos sociales y democracia*, (s/e) (s/l)

Lehmbruch, Gerhard, 1992, "Introducción: el neocorporativismo en perspectiva comparada", en: Schmitter, Phillippe, Wolfgang Streeck y Gerhard Lehmbruch, (Coords.), *Neocorporativismo I y II. Más allá del Estado y el mercado*. Alianza editorial, México.

Lerner, Bertha, 1996, *América Latina: los debates en política social, desigualdad y pobreza*, Grupo editorial Porrúa, México.

Leyva Solano Xochitl y Willibald Sonnleitner, 2002, "¿Qué es el neozapatismo?", en: *Revista Sociedad No 17*, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, México.

López Arévalo, Jorge, 1995, *El sector agrícola de Chiapas frente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte*, Universidad Autónoma de Chiapas.

López Monjardín, Adriana, 1991, "Movimientos políticos, movimientos sociales", en: *El estudio de los movimientos sociales: teoría y método*, Muro y Canto Chac (Coords.), El Colegio de Michoacán-Universidad Autónoma Metropolitana X, México.

Lucchini, Cristina, et. al., 2001, *Los procesos de estructuración capitalista. Desde la primera Guerra Mundial a los inicios del siglo XXI*, Editorial Biblos. Buenos Aires.

Luévano Pérez, Alejandro, 1995, "La lucha por los municipios en Chiapas", *La jornada del campo*, Año 3, Núm. 36, México.

Marion Singer, Marie Odile, 1984, *El movimiento campesino en Chiapas, 1983*, Colección investigadores, Centro de estudios históricos del agrarismo en México, México

Martínez Quezada, Alvaro, 1994, "Reforma agraria y movimientos campesinos en el Estado de Chiapas", *Cuadernos de Centros Regionales*, Universidad Autónoma Chapingo.

Martínez Quezada, Alvaro, 1997, "Agroindustria y organización de productores en La Frailesca", *Memoria de la VII semana de investigación científica*, Universidad Autónoma de Chiapas.

Martínez, Q., Alvaro, 2001, "Cultura, Territorio e Identidades sociales en La Frailesca", en *Memoria 157 Revista de política y cultura*, México.

Mc Michael, Philippe, 1999, "Política alimentaria global", (Traducción de Diego, Q.), en. *Cuadernos Agrarios Nos. 17-18. Globalización y sociedades rurales*, Nueva Época.

Melucci, Alberto, 1988, *Los movimientos sociales y la democratización de la vida cotidiana*, en: Imágenes desconocidas, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.

Melucci, Alberto, 1994, "¿Qué hay de nuevo en los 'nuevos movimientos sociales'?", en: Laraña E. y J. Gusfield, *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*, Madrid.

Melucci, Alberto 1998, "La experiencia individual y los temas globales en una sociedad planetaria", en: *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural*. Pedro Ibarra y Benjamín Tijerina, (Edits.), Editorial Trotta, Valladolid.

Melucci, Alberto, 1999, *Movimiento social, vida cotidiana y democracia*, El Colegio de México.

Méndez, José Luis, 1994, "La reforma del Estado en México: alcances y límites", en *Gestión y política pública*, Vol. III, Núm. 1, Centro de Investigación y Docencia Económica, México.

Moguel, Julio et al., 1995, "Chiapas: la tierra y el poder", *La jornada del campo*, Año 3, Núm. 34, México.

- Moncayo S.**, Héctor-León, 1999, Los movimientos sociales entre la condicionalidad y la globalización, Revista Nueva Alianza, Caracas.
- Montes**, Pedro, 1996, *El desorden neoliberal*, Editorial Trota, Madrid, España.
- Offe**, Claus, 1990, *Contradicciones en el Estado de Bienestar*, Alianza Editorial, Madrid.
- Morquecho**, Gaspar, 2002, “Pablo Salazar y otros actores sociales a un año de gobierno en Chiapas”, en *Memoria 157, Revista de Política y Cultura*, México
- Paniagua**, Alicia, 1985, “Chiapas en el contexto centroamericano”. *Cuadernos políticos 11*, Ediciones Era, México.
- Ramírez Miranda**, César, 1992, “Liberalización comercial y producción campesina: una lucha por el territorio”, en *Cuadernos agrarios 4. Agricultura y TLC*, Enero- Abril, Nueva época, México.
- Reyes Ramos**, María Eugenia, 1992, *El reparto de tierras y la política agraria en Chiapas 1914 –1988*, Universidad Nacional Autónoma de México, México.
- Reyes Ramos**, María Eugenia, y Alvaro F. **López**, 1994, “Una década de programas agrarios en Chiapas”, *Cuadernos agrarios 8-9, Nueva Época*, México.
- Vázquez Gómez**, Jorge, 1997, “Producción de maíz en Chiapas; problemas, perspectivas y retos”, en: *Tercera reunión científica forestal y agropecuaria de Chiapas*, SAGAR, Tuxtla Gutiérrez.
- Sánchez Albarrán.**, Armando, 1993, “Perspectivas del campesinado en México y de sus organizaciones: ¿un neocorporativismo?”, en: *Debate sobre las reformas al agro mexicano*, David Chacón y Francis Mestries (Coords.), UAM-A, México.
- Schmitter**, Phillippe, 1992, “¿Continúa el siglo del corporativismo?”, en: Schmitter, Phillippe, Wolfgang Streeck y Gerhard Lembruch, *Neocorporativismo I y II. Más allá del Estado y el mercado*. Alianza editorial, México.
- Shulvoski**, Anatoli 1980, *México en la encrucijada de su historia*, Ediciones de Cultura Popular, México.
- Spenser**, Daniela, 1988, *El partido socialista chiapaneco. Rescate y reconstrucción de su historia*, CIESAS, Ediciones de la Casa Chata, México.

Steffen Riedemann, Cristina, 1997, "La evolución de las organizaciones ejidales de productores en los años noventa". En: *Financiamiento rural, Cuadernos agrarios 15*, Enero-Junio, Nueva época, México.

Touraine, Alain, 1984. *Le Retour de l'acteur. Essai de sociologie*. Ediciones FAYARD, Paris.

Touraine, Alain, 1997. *¿Podremos vivir juntos?, El destino del hombre en la aldea global*. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

Villafuerte, Daniel y Maricarmen **García**, 1996, "Las sombrías perspectivas para los productores de maíz en Chiapas", en: *Anuario de la UNICACH*, Tuxtla Gutiérrez.

Villafuerte, Daniel y Maricarmen **García**, 1998, "Chiapas en la encrucijada neoliberal", en: *Espacios disputados: Transformaciones rurales en Chiapas*, Reyes, M.E., Moguel, R., y Vander Haar, G. (Coords.) UAM-X-El Colegio de la Frontera Sur, México.

Villafuerte, Solís Daniel y otros, 1999, *La tierra en Chiapas, viejos problemas nuevos*. Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas- Plaza y Valdez editores. México

Wallerstain, Immanuel, 1990, "1968, Revolución en el sistema-mundo, tesis e interrogantes", en: *El juicio al sujeto*, FLACSO, México.

Wallerstain. Immanuel, 1998, *El moderno sistema mundial. La segunda era de gran expansión de la economía mundo capitalista 1730 -1850*, Tomo III, Siglo XXI editores, México.

Weber, Max, 1999, "Sociología de la dominación", Cap. IX, en: *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*, Fondo de Cultura Económica, México.

Wolf, Eric R. 2004, "Figurar el poder", en *Memoria, Revista mensual de política y cultura*, Num. 183, CEMOS, México.

Zermeño, Sergio, 1989, "El regreso del líder, crisis, neoliberalismo y desorden", en: *Revista Mexicana de Sociología*, Año LI, Núm. 4. Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México

Zermeño, Sergio, 1997, "Epílogo: una prospectiva para la acción social en México", en *Movimientos sociales e identidades colectivas México en la década de los noventa*, La Jornada Ediciones-UNAM, México

ENTREVISTAS:

Periodista Jorge Enrique Hernández Aguilar, entrevista colectiva en el marco del Modulo Organización Social y movimiento campesino de la Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad de Chapingo. Tuxtla Gutiérrez, 5 de Marzo de 1993.

Sr. Xicotencatl Córdova, Rancho Alto Buenavista, Villacorzo, 15 de octubre de 1997.

Sr. Francisco Nucamendi, Cronista del Ejido Jesús M. Garza. 18 de abril de 1999.

Sr. Milton Fernández, líder campesino del Ejido Jesús M. Garza, 2 de mayo de 1999.

Sr. Nabor Estrada Moreno, Presidente de la Unión de Productores de Maíz, 10 de febrero de 2001.

Sr. Robertson Camacho, representante del Ejido Flores Magón ante Upromaíz, 12 de Marzo de 2001.

Sr. Gustavo Pereyra, Presidente del Comisariado del ejido Francisco Villa, Villaflores, 17 de Febrero de 2001.

Sr. Manuel Nandayapa Madariaga, Comisariado del ejido San Pedro Buenavista (Electo en la Casa Ejidal), 14 de octubre de 2000.

Sr. Alfredo Corzo Corzo, Miembro de la Mesa Directiva de la COPDECH, Tuxtla Gutiérrez, 17 de Abril de 2001.

Ing. Leonel Aguilar Anzueto, profesor de la Facultad de Agronomía de la UNACH y ex director de Desarrollo Agropecuario del Ayuntamiento de Villaflores, 10 de Octubre de 2000, 20 de febrero de 2001.

Lic. César Chávez, Asesor Jurídico de Upromaíz, 25 Enero de 2001, 19 de Marzo de 2001.

Sr. Amaury Scsma González, Presidente de Cuprocen, A. C. , Villaflores, 19 de Mayo de 2001.

Sr. Cein Guillen, Dirigente del PRD del Ejido Jesús M. Garza. Villaflores, 19 de Mayo de 2001.

Sr. Adelín Vázquez Espinosa, dirigente del PRD en el Ejido San Pedro Buenavista, Villacorzo, 20 de abril de 2001.

Sr. Adolfo García Estrada, Presidente del Comisariado del Ejido San Pedro Buenavista (Electo en el Parque central del poblado), 26 de Mayo de 2001.

Sr. Adolfo Velásquez, representante de Upromaíz en la Colonia Francisco Villa, 27 de Mayo de 2001.

Sr. Eneas Brindis, dirigente de Apach y Ex-comisariado ejidal de Calzada Larga, Villaflores, 19 de mayo de 2001.

Sr. Freddy Núñez Ramírez, Presidente de la Asociación de productores de semilla certificada, del Ejido San Pedro Buenavista, 26 de mayo de 2001.

ASAMBLEAS

Evento de Upromaíz con la participación de instituciones oficiales, de financiamiento y semilleras para la presentación del programa de “Transferencia de tecnología de alta productividad”, Villaflores, 26 de Febrero de 2001.

Asamblea del Ejido Jesús M. Garza, Villaflores, 25 de Febrero de 2001, 3 de Marzo de 2001, 15 de abril de 2001.

Asamblea del Ejido Joaquín Miguel Gutiérrez con dirigentes de Upromaíz, 10 de Octubre de 2000.

Asamblea Constitutiva de la Asociación de Productores Agremiados del Estado de Chiapas, 8 de Marzo de 2001.

Asamblea del Ejido San Pedro Buenavista. Fracción del ejido a favor del comisariado Manuel Nandayapa Madariaga, 13 de Abril de 2001.

Curso Taller impartido por personal de Fondo Acción Banamex, dirigido a técnicos y dirigentes de organizaciones de La Frailesca, 20 de Marzo de 2001.

Asamblea de la CNC para la elección del Comité regional en Villaflores, 20 de agosto de 2001.

NOTAS HEMEROGRAFICAS:

Diario de Chiapas, 9 de abril de 1987.

Diario de Chiapas, 8 de enero de 1988.

Diario de Chiapas, 9 de enero de 1990.

Diario de Chiapas, 10 de febrero de 1992.

Diario de Chiapas, 27 de noviembre de 1992.

Cuarto poder, 11 de abril de 1987.

La Jornada, 9 de mayo de 1999

La Jornada, 29 de septiembre de 2000.

Semanario Este Sur 65, 6-12 de Noviembre de 1995

Semanario Este Sur, 223, 22 – 28 de marzo de 1999

ARCHIVOS:

Archivo histórico del Congreso del Estado. Carpetas Municipales. Villaflores. Diciembre de 1964, Junio de 1976, Mayo de 1980, Febrero de 1981, Octubre de 1990.

Archivo Histórico de la Reforma Agraria, Archivo Agrario Nacional, Documentos de los Ejido Francisco Villa, y Ejido Roblada Grande de Villaflores y Manuel Ávila Camacho de Villacorzo

INFORMES DE GOBIERNO

VI Informe de Gobierno Efraín Aranda Osorio, 1958, Tuxtla Gutiérrez.

VI Informe de Gobierno, Samuel León Brindis, 1964, Tuxtla Gutiérrez.

VI Informe de Gobierno, José Castillo Tielmans, 1970, Tuxtla Gutiérrez.

V Informe de Gobierno, Manuel Velasco Suárez, 1975, Tuxtla Gutiérrez.

V Informe de Gobierno, 1981, Juan Sabines Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez.

CENSOS

Censo de Agrícola y Ganadero y Ejidal, 1950.

Censo de Agrícola y Ganadero y Ejidal, 1960.

Censo de Agrícola y Ganadero y Ejidal, 1970.

Anuario Estadístico de Chiapas, 1992

Anuario Estadístico de Chiapas, 1996

Anuario Estadístico de Chiapas, 2002

ÍNDICE DE CUADROS, MAPAS Y FIGURAS

Cuadros:

Cuadro 1	Proceso de estructuración del sistema ejidal en La Frailesca por periodos	75
Cuadro 2	Orientación de la política de desarrollo agrícola en Valles Centrales 1950-1980	83
Cuadro 3	Producción de maíz y ganado en La Frailesca en los años de la modernización estatista	86
Cuadro 4	Distribución de la tenencia de la tierra en La Frailesca Chiapas	97
Cuadro 5	Principales conflictos agrarios en La Frailesca 1982-1990	132
Cuadro 6	Estructura de la producción agrícola de la región Frailesca.	157
Cuadro 7	Resultados electorales de los municipios de La Frailesca entre 1991 y 1994	167
Cuadro 8	Resultados electorales para presidentes municipales en La Frailesca 1995, 1998	170
Cuadro 9	Organizaciones campesinas en La Frailesca a finales de 1996	195
Cuadro 10	Organizaciones de productores atendidas por el programa Alianza para el Campo, 2001	232

Mapas:

Mapa 1	Ubicación de la región Frailesca en el estado de Chiapas	71
Mapa 2	Principales localidades de La Frailesca, Chiapas	129

Figuras:

Figura 1	Vertientes analíticas	11
Figura 2	Dimensiones conceptuales	13
Figura 3	Procesos de organización campesino-maicera vinculadas al germanismo	144
Figura 4	Esquema de operación del modelo neoliberal en la producción de maíz	210
Figura 5	Reconfiguración de identidades sociales en La Frailesca	217
Figura 6	Proceso de fragmentación de la Upromaíz, 1997-2002	233

Glosario de términos

Aditoch	Asociación de Deudores de la Banca en Chiapas
ADOSPCH	Alianza de Organizaciones Sociales y Productivas del Estado de Chiapas
AEDPCH	Asamblea Estatal del Pueblo Chiapaneco
ANAGSA	Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A.
ANEC	Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras
ANDSA	Almacenes Nacionales de Depósito S.A.
Apach	Productores Asociados de Chiapas
Banamex	Banco Nacional de México
Banrural	Banco de Crédito Rural
CAM	Consejo Agrarista Mexicano
CEOIC	Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas
CFE	Comisión Federal de Electricidad
CIOAC	Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
CNC	Confederación Nacional Campesina
CNPA	Coordinadora Nacional Plan de Ayala
Codecoa	Convenio de Concertación Agraria
COPDECH	Coalición de Organizaciones Productivas del Estado de Chiapas
Coprafray	Coalición de Productores Frailescanos
Cuprocen	Campesinos Unidos a la Producción
Diconsa	Distribuidora Conasupo, S.A.
EZLN	Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Fertimex	Fertilizantes Mexicanos
FDN	Frente Democrático Nacional
Fira	Fideicomisos Instituidos para el Desarrollo de la Agricultura y la Agroindustria
FNCR	Frente Nacional Contra la Represión
Fosolpro	Fondos de Solidaridad para la Producción
GTs	Grupos de Trabajo

INIA	Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
INIFAP	Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
NCPE	Nuevo Centro de Población Ejidal
Ocavac	Organización Campesina del Valle de los Cuxtepeques
OCIV	Organización Campesina de Villacorzo
OCOPECH	Organización Campesina Obrero Popular del Estado de Chiapas
OCRJ	Organización Campesina Revolucionaria Independiente
PAN	Partido Acción Nacional
PRI	Partido Revolucionario Institucional
PRD	Partido de la Revolución Democrática
PMS	Partido Mexicano Socialista
Procampo	Programa de Apoyo al Campo
Procede	Programa de Certificación de Derechos Ejidales
Promafch	Productores de Maíz de La Frailesca y Centro del Estado de Chiapas
Pronamat	Programa Nacional de Maíz de Alta Tecnología
Promap	Programa de mejoramiento y apoyo a la producción
Sagarpa	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SAM	Sistema Alimentario Mexicano
Sagar	Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural
SDR	Secretaría de Desarrollo Rural
SRA	Secretaría de la Reforma Agraria
SARH	Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
SPRs	Sociedades de Producción Rural
Socama	Solidaridad Campesino Magisterial
TLCAN	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UCPFV	Unión Campesino Popular Francisco Villa
UNORCA	Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas
Upromaíz	Unión de Productores de Maíz